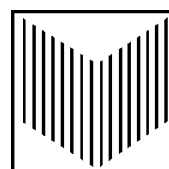


Günther Maihold (ed.)
Venezuela en retrospectiva.
Los pasos hacia el régimen chavista



BIBLIOTHECA IBERO-AMERICANA

Publicaciones del Instituto Ibero-Americano
Fundación Patrimonio Cultural Prusiano
Vol. 118

BIBLIOTHECA IBERO-AMERICANA

Günther Maihold (ed.)

Venezuela en retrospectiva

Los pasos hacia el régimen chavista

Iberoamericana · Vervuert

2007

Bibliografic information published by Die Deutsche Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliografie; detailed bibliografic data are available on the Internet at <http://dnb.ddb.de>

© Iberoamericana 2007

Amor de Dios, 1

E-28014 Madrid

info@iberoamericanalibros.com

www.ibero-americana.net

© Vervuert Verlag 2007

Wielandstr. 40

D-60318 Frankfurt am Main

info@iberoamericanalibros.com

www.ibero-americana.net

ISBN 978-84-8489-336-3

ISBN 978-3-86527-356-7

Diseño de la cubierta: Michael Ackermann

Ilustración de la cubierta: ???

© ???

Composición: Anneliese Seibt, Instituto Ibero-Americano, Berlín

Este libro está impreso íntegramente en papel ecológico blanqueado sin cloro

Impreso en España

CONTENIDO

Günther Maihold

Presentación.

Venezuela y el desarrollo del proyecto chavista 7

1. La crisis del sistema político venezolano

John Peeler

Elementos estructurales de la desestabilización de una
democracia consolidada: la desconsolidación en

Venezuela 21

Ricardo Combellas

El Proceso Constituyente y la Constitución de 1999 47

Thais Maingon

Síntomas de la crisis y la deslegitimación del sistema de
partidos en Venezuela

77

Günther Maihold

¿Por qué no aprenden las elites políticas? El caso de

Venezuela 113

2. El surgimiento de Hugo Chávez y la oposición

Friedrich Welsch/María del Pilar Camprubí

Las victorias electorales de Chávez y sus bases políticas 133

Andreas Boeckh/Patricia Graf

El comandante en su laberinto: el ideario bolivariano de

Hugo Chávez 151

Margarita López Maya

Las insurrecciones de la oposición en 2002 en
Venezuela: causas y desafíos 179

Steve Ellner

La transformación del movimiento sindical y la sociedad
civil en Venezuela: ¿revolución o paralelismo? 203

Javier Corrales

El subsidio a la oposición: las ventajas para el
oficialismo 225

Miriam Kornblith

Elecciones y referendos en Venezuela: “¿Quién le teme
al soberano?” 241

Akilah Jenga/Russell Crandall

El colapso de la revolución bolivariana: el deterioro del
régimen de Chávez y sus implicaciones para la
democracia venezolana (1998-2002) 275

Pedro Díaz Blum

Perspectivas y condiciones para una solución pacífica de
la crisis en Venezuela 283

3. El populismo y la reacción internacional

Marianne Braig

¿La *longue durée* del populismo o el populismo como
sombra de la democracia? 291

Nikolaus Werz/Simone Winkens

El populismo de Chávez y el rol de los medios 297

Demetrio Boersner

Dimensión internacional de la crisis venezolana 313

Sobre los autores 345

Günther Maihold

Presentación.

Venezuela y el desarrollo del proyecto chavista

El 3 de diciembre de 2006 culminó en Venezuela de nuevo una fase electoral con la (re)elección de su presidente con el 62,8% de los votos. No había dudas de que el actual presidente Hugo Chávez fuera reelecto. Cuando su gobierno, fortalecido por el alza de los precios petroleros, se presentó de nuevo al juicio de los electores venezolanos, éste pudo esperar un amplio apoyo de la población. En parte esta situación es consecuencia de la política de apoyos sociales desarrollada por Chávez, pero también de la crisis sin fin de las muy variadas fuerzas de la oposición política.

Sin embargo, muchos problemas del pasado siguen sin solución: desatendidos probablemente desde 1958, año del derrocamiento del último dictador, Marcos Pérez Jiménez. Evidentemente, el usual relevo entre los dos grandes partidos políticos (Acción Democrática, AD y el Comité de Organización Política Electoral Independiente, COPEI, demócratacristiano) no pudo aliviar los problemas económicos y sociales del país ni detener la marginación de las capas de población más desfavorecidas, que casi no han participado en el doble auge del petróleo (multiplicación de su precio por ocho desde comienzos de los años 70 y el aumento de la extracción a actualmente más de 3 millones de barriles diarios). Esas capas fueron prácticamente excluidas de los privilegios clientelares de los que gozaron los seguidores destacados de ambos partidos tradicionales. Simultáneamente, los ingresos provenientes del petróleo fueron reinvertidos de forma insuficiente en el desarrollo del resto de la economía venezolana: incluso hoy, el 50% de los ingresos del Estado y el 80% del ingreso por concepto de exportaciones proviene del petróleo.

El abismo entre la población marginada y los actores políticos se extiende sin cesar, lamentablemente nada inusual en América Latina. Ese sector pobre de la población y parte de la capa media, para la que los partidos tradicionales han fracasado, eligieron como presidente en

1998 al político populista carismático Hugo Chávez, confirmándolo en su cargo en julio de 2000 con una mayoría del 56%. El enfrentamiento con las “élites corruptas” de los partidos tradicionales, ahora en la oposición, se ha hecho elemento central del discurso continuo del régimen chavista; asimismo las acciones y medidas de inspiración populista a favor de los “pobres” empeoraron la situación presupuestaria y financiera del Estado, a pesar de los ingresos que sigue generando el petróleo. Decisiones de personal tomadas por el propio Chávez, que abarcaron a su vez el sector de la administración y la empresa petrolera estatal PDVSA, hicieron aumentar la inseguridad para la toma de decisiones e incluso creó en los sectores medios –que en su mayoría se identifican con los partidos tradicionales–, el temor de perder el poder y la confiscación de sus propiedades. Sus contraataques hicieron por su parte aumentar la polarización y se descargaron en un intento de derribar a Chávez en abril de 2002 y un paro general de dos meses de diciembre de 2002 a febrero de 2003, que tampoco pudo doblegar al Gobierno. El paro general tuvo, sin embargo, como consecuencia una drástica disminución del crecimiento económico (2002: -8,6%), de manera que lo que restaba del año 2003 incluso hubo un crecimiento negativo del -12%. Simultáneamente, el control de divisas introducido en enero 2003 por temor a la fuga de capitales y que, según informaciones del Gobierno iba regir hasta fines de 2004, se sigue manteniendo más allá de la fecha inicial y ha llevado a la paralización de las actividades del sector privado, tan desdeñado por Chávez.

1. El proceso bolivariano y sus antecedentes

Desde la toma de poder de Hugo Chávez Frías en el año 1998 y el inicio del “Proceso Revolucionario Bolivariano” contra las instituciones políticas, económicas y sociales de Venezuela, el país no se ha estabilizado sino que ha caído siempre de nuevo en el remolino de una dinámica propia interna y externa que va mas allá de las propias fronteras. No obstante, sería erróneo abordar el examen de los problemas del país únicamente a partir del mandato de Chávez. Después de la consolidación de la democracia venezolana –sobre la base del pacto de Punto Fijo de 1958 hasta fines de los años setenta– entró en una dinámica de desestabilización que tuvo sus raíces sobre todo en el fracaso

de los partidos tradicionales (Acción Democrática y COPEI) en solucionar tanto la crisis económica que se propagaba más y más como los problemas sociales del país.

La pérdida de legitimación que sufrieron las elites políticas a través de décadas de corrupción, clientelismo y la marginación de grandes segmentos de la población del paternalismo distributivo fue la causa para el fracaso de la democracia pluralista en Venezuela. La transformación del sistema de partidos del bipartidismo al multipartidismo en los años noventa y el éxito de la alianza electoral Polo Patriótico, a la cual pertenece también el partido Movimiento Quinta República (MVR) de Hugo Chávez, se encuentran al final de este proceso.

El muy difuso concepto de una revolución bolivariana de Hugo Chávez rompió con los procedimientos de la tradicional democracia representativa, abriendo los espacios para la así llamada democracia participativa, que encontró su primer expresión en la Constitución de 1999. Este proceso recobró la confianza de una gran parte de la desencantada población, por cierto basado en un estilo político populista y a veces agitador muy típico de América Latina y una forma de liderazgo extremadamente personalizada y conflictiva. Esto, además, le permitió adquirir rápidamente un alto grado de celebridad internacional y ser considerado, sobre todo ante los ojos de América del Norte, como un *enfant terrible* sudamericano.

2. El nuevo modelo de la democracia venezolana

La dudosa puesta en práctica de esta variante bolivariana de democracia y los limitados resultados en relación con los acuciantes problemas económicos y sociales de Venezuela, han dado motivo para críticas por parte de ciertos grupos a la “revolución bolivariana” en América Latina, Europa y EE.UU., mientras que otros grupos se han convertido en fervientes defensores del modelo “anti-globalizador” de Hugo Chávez. No solamente la persona sino también la política práctica de Chávez polarizan los públicos en el espacio nacional e internacional.

Desde la reforma constitucional instaurada por el presidente se ha ido desarrollando una posición del ejecutivo, excesivamente fuerte incluso para un sistema presidencial, lo que implica una enorme limitación de la separación de poderes. Esto se hizo evidente por la fre-

cuenta promulgación de leyes por decreto, como ocurrió por ejemplo con la así llamada “Ley Habilitante”. De ahí que en la discusión interna venezolana se plantee con frecuencia la pregunta si es que aquí sólo se trata de sustituir una dominación de elite por otra, esta vez, por una legitimada directamente por el “pueblo”.

Si nos dirigimos al lado político opuesto –los partidos de oposición venezolanos–, el panorama no se presenta necesariamente mucho más prometedor: desacreditados ante una gran parte de la población en vista de su deficiente capacidad de aprendizaje y a causa del pasado reciente, los partidos tradicionales resultaron ser poco constructivos desde la toma del mando del presidente Chávez y carecen de unidad programática y operativa. Más bien, parecían insistir en el rápido retorno a las condiciones oligárquicas del anterior *status quo* social, sobre cuya base había funcionado para ellos por largo tiempo la democracia.

Desde esta perspectiva se plantea la pregunta central, si el régimen de Chávez corresponde con los típicos problemas de América Latina o si se trata de un sistema *sui generis* no comparable con otras experiencias en el sub-continente. Así pueden identificarse en Venezuela problemas estructurales que se asemejan en mucho a los defectos conocidos de otros países: sistemas de partidos frágiles y desacreditados por su corporativismo, así como la falta de actores políticos, ofrecieron en una serie de países puntos de partida para perfiles políticos populistas que debilitan a las instituciones e impiden por su parte una profundización de la democracia indispensable para su consolidación. Así, la idea de enfrentar el antiguo orden y la influencia de las antiguas elites mediante el desplazamiento del espacio de articulación de intereses sociales fuera del marco político institucional de toma de decisiones, determina únicamente un mayor debilitamiento de los mecanismos institucionales para la canalización de las diferencias sociales.

La política reformista neoliberal propagada por la crisis de deudas de los años ochenta y el Consenso de Washington condujeron reiteradamente, tras la ausencia de éxitos, a regresar al viejo concepto del estado fuerte que interviene en todo como regulador. Las esperanzas de la población de una mejora económica y social se han visto con frecuencia insatisfechas, la insatisfacción y la falta de confianza en las instituciones políticas a largo plazo ponen en peligro el funcionamien-

to de una democracia, lo cual es quizás el deseo de algunos grupos sociales.

3. Los pilares del sistema chavista

Tomando en perspectiva el desarrollo futuro de Venezuela hay que señalar que los altos niveles de apasionamiento y la emotividad en la discusión política interna a la altura del referéndum presidencial del año 2004 y la concomitante polarización de dimensiones hasta ahora no conocidas entre los partidos se ha ido amainando, aunque pueda resucitar más rápido de lo que se pueda esperar en el momento actual. La nueva, quinta constitución venezolana – pese a toda crítica por errores de procedimiento y tomando en cuenta la baja participación electoral – obtuvo en el año megaelectoral 2000 la aprobación de una mayoría de la población. Hugo Chávez como presidente electo de manera legítima sigue siendo el motor y el cerebro de un proyecto político que se está basando en dos pilares centrales: el apoyo duro de un porcentaje considerable de la población (alrededor del 35% del electorado) y los ingresos petroleros que han (re)abierto las posibilidades para esquemas paternalistas y clientelistas de distribución, ahora para otro segmento de la población venezolana.

Sin embargo, la continuidad del gobierno de Chávez también reposa sobre las limitantes de la oposición. Los partidos venezolanos de oposición siguen con limitadas perspectivas, aunque hayan encontrado en Manuel Rosales, el gobernador del estado de Zulia un candidato único. Pero el involucramiento de la oposición en el intento de golpe de estado de abril de 2002 y también en el “Paro Nacional” de diciembre del mismo año con todas las consecuencias económicas que tuvo para el país, sigue pendiendo sobre ellos. Mientras el único denominador común de la oposición sea el lema “fuera Chávez”, será limitada su capacidad de acción y la población con todo derecho puede cuestionar la madurez de las fuerzas opositoras. A lo mejor vuelve a relucir aquí la deficiente capacidad de aprendizaje, se podría decir incluso una desorientación política, si los representantes de la oposición no encuentran las bases para un nuevo comienzo lejos de las prácticas y estilos del pasado y en un nuevo acercamiento a la población que han ido perdiendo sobre el tiempo.

En este contexto, la atención se fija también en el papel de los medios, que estuvieron implicados de manera decisiva en los mencionados acontecimientos, lo cual vuelve a poner de relieve la cuestión del así llamado cuarto poder. Que los medios traten de sustituir a la oposición ha demostrado ser una estrategia igualmente cortoplacista, como los intentos y actos del gobierno de Chávez por silenciar las voces de crítica que se articulan desde los medios como el caso de RCTV. El posible enredo de gobiernos extranjeros ahora no ha de ser discutido en detalle.

Los sucesos de abril de 2002 con las proclamas de Pedro Carmona como presidente después del derrocamiento temporal de Hugo Chávez de su cargo, han dejado claro que esta vía de acceso al poder no resulta aceptable para la población. La defensa del orden constitucional por parte de la población contra el “Carmonazo” también hizo ver que el país necesita nuevas bases para el quehacer político que descansen sobre una revaloración de la democracia más allá de los esquemas puntofijistas.

Con la decisión del Consejo Nacional Electoral de llevar a cabo a finales de noviembre de 2003 las consultas populares para diversos referendos revocatorios –propuestos tanto por representantes de los partidos de gobierno así como por la oposición– se dio un paso importante hacia la finalización de las luchas políticas de trinchera. Sin embargo, una ruptura de la espiral de agitación todavía no era factible hasta después del referéndum del 15 de agosto de 2004 que fortaleció la postura de Chávez. Con una participación del 69% del electorado, se contaron, según los resultados (por cierto impugnados por la oposición) del Consejo Nacional Electoral (CNE) un 59,1% en favor del “No” (en contra de la destitución de Chávez) y un 40,64% a favor del “Sí” (a favor de la destitución de Chávez).

Sin embargo, a pesar de una tranquilización de los conflictos internos del país el indispensable diálogo constructivo entre los grupos políticos no se ha dado, más bien se practica una suerte de “polarización congelada”, en reconocimiento realista de que en su mayoría los venezolanos están cansados de la situación de empate político y de la constante agitación de ambas partes. La presencia de actitudes maximalistas de ambas partes en conflicto está adormecida sin que se haya avanzado sustancialmente en la solución de los complejos problemas de Venezuela.

Los resultados de las elecciones parlamentarias del 4 de diciembre del 2005 que dieron a la alianza chavista el control absoluto en el parlamento nacional, demostraron también el cansancio de los electores: el abstencionismo subió al 75% del electorado, elemento que la misma oposición interpretó como consecuencia de su llamado al boicot y el retiro de sus listas de candidatos. Sin embargo, encuestas antes de las elecciones habían señalado que Chávez podía contar con una aprobación de 2/3 de los electores, dato que puede haber influido también en el retiro de los candidatos opositores que por su parte reclamaron la intransparencia y la falta de equidad en el proceso electoral. El éxito del casi un 90% de los votos a favor de la alianza gubernamental cerró las posibilidades de que el diálogo entre las fuerzas políticas pudiera trasladarse de la calle y desde la hiper-personalización de vuelta hacia los representantes electos del pueblo en el parlamento, que quedó en absoluto control de los partidos cercanos al gobierno.

4. La influencia y la repercusión internacionales

El futuro desarrollo de la democracia venezolana hay que verla también en el contexto de los países vecinos y de la región latinoamericana en su conjunto. Venezuela está inmersa voluntaria o involuntariamente en el conflicto colombiano que no solamente alcanza los territorios limítrofes de Venezuela. Las compras de armas que el gobierno venezolano realizó, aduciendo su interés de modernizar su equipamiento militar e iniciar la organización de un sistema de milicias en lo interno, ha hecho surgir preocupaciones de una carrera armamentística en la región. Aunque estas valoraciones aparezcan exageradas, no hay que perder de vista el papel expansivo de Venezuela como país líder en el Tratado Comercial de los Pueblos (TCP) en cooperación con Bolivia y Cuba y su nuevo papel en el MERCOSUR están cambiando los pesos relativos en la región. La salida de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y su ingreso al MERCOSUR están dando una dinámica adicional a una presencia de alto perfil en América Latina y en la política internacional poco antes visto en la historia venezolana. Los compromisos de ayuda internacional del gobierno de Chávez (desde de la deuda argentina en un volumen de 3,2 mil millones de dólares hasta la ayuda para el gobierno boliviano de Evo Morales) han cambiado el mapa de Sudamérica. Venezuela con sus fondos

petroleros impulsó iniciativas de infraestructura en la región, la construcción de redes de comunicación y conexiones eléctricas de gas natural con la finalidad de empujar un modelo de desarrollo que haga la región independiente de los intereses de EE.UU. Con el afán de combatir el “virus neoliberal” Chávez ha tejido una red de alianzas en la región y a nivel internacional que pone el petróleo como arma estratégica en el centro de las nuevas coaliciones. Así el país ha desarrollado una presencia en América Latina y en la política internacional poco antes visto en la historia venezolana.

Sin embargo, la relación con EE.UU. mantiene su carácter ambiguo: por un lado los dos gobiernos se están enfrentando en una guerra ideológica de raíz, por el otro lado los negocios de petróleo siguen funcionando sin mayores problemas. EE.UU., que cubre el 13% de su consumo de petróleo con importaciones de ese país, ha mantenido una relación comercial sin mayores contratiempos con Venezuela. Por lo tanto Venezuela ocupa, después de Arabia Saudita, México y Canadá, el cuarto lugar entre los proveedores de petróleo más importantes para los EE.UU. Aparte del negocio del petróleo Washington ve en el gobierno chavista una fuerza de desestabilización en la región, especialmente después de que Chávez decidió profundizar su relación con Cuba y el régimen de Castro. El contrato entre los gobiernos para canjear el abasto del petróleo por servicios de asistencia médica, educativa y de los órganos de seguridad, que está llevando según estimaciones unos 20.000 cubanos a Venezuela, encuentra el rechazo abierto del gobierno de George Bush Jr. Aunado a las compras de armamento que Washington trató de bloquear para aquellos contratos sobre aparatos que tuvieran componentes provenientes de EE.UU., el gobierno estadounidense está viendo con creciente malestar el involucramiento de Hugo Chávez en elecciones de otros países como fue el caso de Bolivia y Perú y sigue siendo el de Nicaragua. La ampliación de la influencia chavista en América –no solamente en base a la “petro-diplomacia”– en parte es consecuencia de una cierto *disengagement* de EE.UU. para con la región sudamericana debido a compromisos en otras partes del mundo, una ausencia política que Washington pensaba sustituida por la presencia de Brasil que siempre guardó una política exterior de no entrar en contradicciones abiertas con el gobierno estadounidense.

Solamente con respecto al proyecto ALCA (Área de Libre Comercio para las Américas), la iniciativa de una zona de libre comercio para las Américas que Washington quería ver cumplida hasta finales del año 2005, el gobierno de Lula bloqueó las negociaciones de manera que hoy en día ni siquiera se está hablando de un arreglo *ALCA-light*. La Cumbre de las Américas de diciembre 2005 en Mar de Plata/Argentina descubrió la existencia de una alianza importante sudamericana (con la excepción de Chile) por seguir frenando este proyecto, el cual por lo pronto se encuentra fuera de las discusiones.

La estrategia de Washington frente al gobierno de Hugo Chávez y viceversa sigue siendo de confrontación, lo cual implica de cierta manera también el bloqueo para otras instancias como la OEA (Organización de Estados Americanos) que en el pasado había sido de ayuda en la crisis de Venezuela. Así la Carta Democrática Interamericana aprobada en Lima el 11 de septiembre de 2001 de esta organización fue tomada en serio por los Estados miembros de la OEA. Para el Consejo Permanente de la OEA fue una importante base de referencia para condenar el intento de derribar a Chávez en abril de 2002. Los actores del Sistema Interamericano tuvieron en varias oportunidades posibilidades por tender puentes en el conflicto interno venezolano. El entonces secretario general de la OEA César Gaviria, el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), el Centro Carter, el Grupo de Amigos de Venezuela (España, Portugal, Brasil, Chile, México y EE.UU.) lograron, luego de arduos esfuerzos, que el 29 de mayo de 2003 se firmara el acuerdo entre el Gobierno y la oposición; acuerdo que representa la base política de la solución a la que se aspira a través del referéndum y/o nuevas elecciones. Estos actores podrían por lo tanto hacer referencia a ello para intervenir, en caso de que surjan nuevas dificultades en esa senda. Sin embargo, el gobierno de Venezuela no deja pasar oportunidad sin criticar la actuación del nuevo secretario general de la OEA José Miguel Insulza de Chile, cuando invoca la supervisión de la democracia (también en el caso de Venezuela) como parte de la cooperación interamericana.

Más allá del espacio interamericano también en el ámbito subregional la 17ª Cumbre del Grupo de Río, celebrada en Cuzco, saludó el 23/24 de mayo de 2003 el acuerdo logrado entre el Gobierno y la oposición, pero sin ofrecer medidas de apoyo propios. La Unión Europea (UE) sigue atentamente el desarrollo de la crisis interna en Venezuela,

no sólo a través de los dos miembros europeos del Grupo de Amigos, a saber, España y Portugal. En varias declaraciones p.ej. en la fase de máxima polarización emitió declaraciones los días 5 de junio y 10 de septiembre de 2003, declarando su apoyo para la realización de un referéndum, incluida la posibilidad de enviar a observadores electorales. Importante es que la parte venezolana aceptara también esta oferta como instrumento para lograr la mayor transparencia posible en los procesos de votación, fortaleciendo y asegurando así la legitimación democrática y aceptación de los resultados del referéndum y de las elecciones parlamentarias. De acuerdo con la práctica en otros países latinoamericanos, también la UE envió observadores electorales propios a las elecciones presidenciales del 3 de diciembre de 2006. Sin embargo, más allá del espacio comunitario algunos estados miembros de la UE han desarrollado iniciativas propias en la relación con Venezuela. Así, España después de las elecciones del 14 de marzo de 2004, al realizarse el cambio de gobierno de José María Aznar al socialista José Luis Rodríguez Zapatero, ha tratado de reorientar su política exterior frente a Venezuela. El nuevo gobierno español hasta llegó a firmar un contrato de venta de material militar a Venezuela, lo cual le valió fuertes críticas desde Washington. Aunque las relaciones entre Madrid y Caracas no son las más cercanas, los dos gobiernos han logrado un nivel de entendimiento que no ha sido factible desarrollar con otros estados miembros de la UE, a pesar de su marcado interés de poder profundizar las relaciones económicas por la alta capacidad de compra del país petrolero.

Tanto a nivel nacional como internacional Venezuela en los años pasados ha alcanzado un nivel de cambios importantes. Estos pasos hacia la consolidación del régimen chavista fueron posibles por varios elementos conocidos y no conocidos antes: la creciente ocupación del aparato gubernamental y administrativo por personal militar, una petrolización de amplias partes de la política nacional, la participación de nuevos actores sociales (antes excluidos) y un nuevo auge del personalismo y del presidencialismo. El (re)cambio hacia un estilo y modelo de desarrollo estatista acompañado por la (re)nacionalización de PdVSA son elementos para la consolidación del régimen chavista que hoy en día habrá que analizar en aquellos trabajos que enfocarán más el rendimiento del quehacer político de Chávez. En el presente libro se presta más atención a los pasos que definieron la consolidación de este

nuevo régimen que ha cambiado profundamente el propio país y su entorno internacional.

5. La aportación de este volumen

El presente volumen trata de ofrecer al lector aportaciones al análisis con alguna distancia de los momentos de mayor agitación política y polarización entre los diferentes grupos de la sociedad venezolana. En retrospectiva, que no solamente interpreta la historia desde la actualidad, los diferentes autores tratan de aportar elementos analíticos para acercarse a un diagnóstico del devenir político de Venezuela. Sin embargo, también estos trabajos están impregnados de las confrontaciones y de las heridas que el surgimiento de Hugo Chávez le propinó a la sociedad venezolana. El seminario en el Instituto Ibero-Americano/Patrimonio Cultural Prusiano de Berlín/RFA, que dio origen a este volumen, igualmente estuvo marcado de confrontaciones pero también de discusiones en un ambiente intelectual germano-venezolano. Especial agradecimiento merece en este contexto el apoyo de la Fundación Fritz Thyssen que permitió con su financiamiento la realización de un encuentro que trata de ubicar desde diferentes ángulos la realidad venezolana de hoy en una retrospectiva analítica. Debido al tiempo transcurrido hasta la edición de este volumen, las aportaciones no reflejan la actualidad venezolana, sino que se ubican en su mayoría más bien en la reflexión de los momentos políticos del referéndum revocatorio de 2004.

1. La crisis del sistema político venezolano

John Peeler

Elementos estructurales de la desestabilización de una democracia consolidada: la desconsolidación en Venezuela

1. Introducción

Juan Linz y Alfred Stepan (1996: 15) apuntan esta definición de la consolidación de la democracia:

[...] un régimen político en que la democracia como sistema complejo de instituciones, reglas, e incentivos y desincentivos estructurados se ha desarrollado –dicho en una frase–, “el único juego en el pueblo”.

Quieren decir con ello que en términos del comportamiento, de las actitudes y de la constitución, no hay ningún incentivo importante de ir más allá de la democracia. La democracia constituye la única arena para la lucha política.

Larry Diamond (1999: 65) trata la consolidación como:

[...] el proceso de lograr la legitimación amplia y profunda, así como todos actores significados, tanto a nivel de la élite como al de las masas, creen que el régimen democrático es lo más apropiado para su sociedad; mejor que cualquier alternativa realista que se pudiera imaginar. Competidores políticos tienen que llegar a pensar la democracia (y las leyes, los procedimientos, y las instituciones que especifica) como “el único juego en el pueblo”, la única estructura para gobernar la sociedad y hacer avanzar sus propios intereses. A nivel de las masas, tiene que haber un amplio consenso de normas y de comportamientos –que cruza las clivajes de clase, etnia, nacionalidad, y otros– sobre la legitimidad del sistema constitucional, a pesar de lo inadecuado de su desempeño en cualquier momento.

Aunque son similares en muchos aspectos, estas dos definiciones son distintas en dos puntos importantes. Primero, Linz y Stepan tratan la consolidación como una condición o estado de existencia, mientras Diamond la trata como un proceso. Segundo, Diamond trata la legitimación como el núcleo de la consolidación, mientras Linz y Stepan enfatizan más en la aceptación de la democracia que en su legitimación.

Si pensamos la consolidación aplicada a cualquier tipo de régimen, y no sólo a la democracia, queda claro que el elemento clave de la definición de Diamond, el proceso de la legitimación, resulta ser un obstáculo difícil de superar. Un régimen que persiste un período de tiempo y que no soporta desafíos importantes fuera de sus canales normales, puede ser considerado como consolidado, aun si carece de alguna medida de la legitimidad, porque viene a ser “el único juego”. Así, las monarquías francesas de Luis XIV y XV lograron la consolidación, en tanto que en el período de Luis XVI fue perdiendo la consolidación (o sea, fue desconsolidándose). La Tercera República de Francia, aunque careció de legitimidad entre importantes sectores, logró la consolidación en el sentido de que fue “el único juego”.

La concepción de Diamond acerca de la consolidación como proceso cobra sentido. Los sistemas políticos son en esencia dinámicos: aun cuando sean estables, están cambiando a consecuencia de las acciones de los humanos que los componen. Así, consolidarse sería un proceso de progresiva eliminación de los modos de accionar político fuera de las instituciones y canales normales o aceptados por el régimen.

Así planteamos que, en el contexto específico de la democracia, la consolidación es un proceso de eliminación de amenazas de insurrección e intervención militar, para que sólo a través de las elecciones y los gobiernos constitucionales sea posible la acción política. Se trata de un proceso por medio del cual los intentos de insurrección o de intervención militar son progresivamente eliminados o marginados, hasta que la arena política consista en su casi totalidad de procesos constitucionales y democráticos. Aunque la consolidación sea un proceso, no consideramos que tenga éxito sin la persistencia de este patrón por un tiempo significativo. Podríamos exigir, por ejemplo, que el patrón del proceso político democrático sin insurrecciones o intervenciones importantes debe continuar por al menos tres mandatos gubernamentales, y debe incluir al menos dos transiciones entre el partido o coalición gobernante y su oposición.

Juan Linz (1978) trató los fenómenos de la **crisis**, la **quiebra**, y la **reequilibrio** de los regímenes democráticos. Una crisis ocurre cuando un régimen democrático se aproxima a la quiebra. Partidos de oposición “antisistémicos” ganan fuerza y actúan de modo desleal hacia las instituciones del régimen, mientras los partidos del centro,

comprometidos con el régimen, pierden la capacidad o voluntad para gobernar (Linz 1978: 27). La quiebra ocurre cuando el poder pasa de las manos de los defensores de las instituciones democráticas a la oposición desleal (Linz 1978: 75-76). En algunos casos la crisis e incluso la quiebra puede dar paso a una reequilibración de la democracia, tal vez en una forma aún más legítima, eficaz y efectiva que antes (Linz 1978: 87).

El caso venezolano muestra muchos de los elementos del esquema de Linz. Queda claro que el régimen democrático venezolano entró en crisis en 1989 con los disturbios públicos y un creciente desprestigio de los partidos y las élites tradicionales. Hubo una oposición antisistémica y desleal, agrupada alrededor de Hugo Chávez después del intento de golpe de febrero de 1992. Hubo una suerte de quiebra con la elección de Chávez en 1998, y la adopción de la nueva constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Sin embargo, al revisar los detalles del proceso, parece que en Venezuela no hubo propiamente una quiebra, ni tampoco una reequilibración. Lo que sí hay es una crisis prolongada del régimen, una transformación del régimen, y una sociedad política profundamente dividida.

Por eso propongo el concepto de la **desconsolidación** de la democracia. Tomando en cuenta el concepto de la consolidación planteado arriba, la desconsolidación sería el resurgimiento de la insurrección y la intervención militar como modos de acción política importantes fuera de los canales institucionales de la democracia.

Lo que pasó en Venezuela a partir de 1989 fue precisamente el resurgimiento de la insurrección y la intervención militar como opciones fuera de los canales regulares de la política democrática. La legitimidad del sistema democrático vigente iba agotándose desde principios de los años 80, como consecuencia del declive económico y el deterioro de las condiciones sociales durante esa década. El desencanto con el *status quo* se manifestó en el crecimiento de la abstención electoral, el rechazo creciente de los partidos y las élites políticas puesto en evidencia en los sondeos de la opinión pública, y, todavía encubierto antes del 1992, la conspiración dentro de las Fuerzas Armadas, liderada por Hugo Chávez Frías bajo el nombre Movimiento Bolivariano Revolucionario 2000. Ahora podemos entender que un régimen democrático en apariencia consolidado en 1988 estaba gestando una crisis que fue dada a luz por el choque del ‘gran viraje’ de Carlos Andrés

Pérez en 1989. Pero no era propiamente una crisis de la democracia, sino del sistema puntofijista de la democracia, frente a nuevos conceptos más radicales de la democracia. El régimen puntofijista entró en crisis en 1989, y en quiebra con la elección de Chávez en 1998. La democracia venezolana queda ya desconsolidada por la falta de consenso sobre los elementos de una nueva democracia.

En lo que sigue revisaremos más detalladamente el curso de la crisis de la democracia venezolana. Para concluir, volveremos al nivel teórico.

2. La democracia venezolana, 1958-1998

La historia de la consolidación de la democracia en Venezuela es bien conocida por lo que nos limitaremos y resumirla en breves palabras. (Peeler 1985; 1992; López Maya/Gómez Calcaño/Maingon 1989; Karl 1987; Hillman 1994; Derham 2002). Después del fracaso del experimento democrático llamado el Trienio (1945-1948) y la dictadura de Marcos Pérez Jiménez (1948-1958) hubo un golpe militar apoyado por movilizaciones populares lideradas por los principales partidos políticos (Acción Democrática [AD], COPEI [Comité de Organización Político Electoral Independiente], Unión Republicana Democrática [URD], y Partido Comunista [PC]). Los tres primeros partidos forjaron el llamado “Pacto del Punto Fijo” para asegurar la estabilidad durante la transición a la democracia. El pacto comprometió a los partidos a garantizar la probidad de las elecciones, respetar los resultados, integrar una coalición de gobierno, llevar a cabo un programa mínimo de gobierno, y formar una nueva constitución.

El primer gobierno democrático de Rómulo Betancourt (AD, 1959-1964) fijó las bases del régimen democrático (incluyendo la Constitución de 1961) con la cooperación de COPEI y URD, y enfrentando la oposición del PC (excluido del Pacto), la resistencia de algunas facciones militares, y el surgimiento de insurgencias por grupos comunistas y no-comunistas inspirados por el éxito de la Revolución Cubana. Hacia el fin del tercer mandato democrático (Rafael Caldera, COPEI, 1969-1974) todas estas fuentes de oposición al régimen democrático habían sido conjuradas.

El sistema de partidos durante los años 60 se encontraba en proceso de formación (Myers 1986). AD y COPEI desarrollaron organiza-

ciones cada vez más eficaces, profundamente imbricadas en las organizaciones de la sociedad civil (especialmente las de trabajadores, de empresarios, o de campesinos), y recibieron crecientes porcentajes del voto. A pesar del sistema de representación proporcional que gobernaba las elecciones legislativas, otros partidos nunca pudieron amenazar la dominancia adeco/copeyana, ni en comicios legislativos, y menos en los presidenciales. Sin embargo, desde la elección de 1958 hasta la de 1968, hubieron candidaturas presidenciales antisistémicas importantes, tales como la del Almirante Wolfgang Larrazábal en 1958 y 1963, que obtuvieron grandes minorías del electorado, votantes que muchas veces provenían de los sectores más marginados de la sociedad. Es decir que el sistema de partidos iba consolidándose sin absorber a la gran mayoría de los más pobres (Myers 1986: 124; Molina/Pérez 1998; Hidalgo Trenado 1998).

La elección de Carlos Andrés Pérez en 1973 marcó el final de las amenazas de insurrección e intervención militar contra el sistema democrático venezolano. El sistema de partidos empezó una época de institucionalización muy fuerte. Así podemos decir que el sistema democrático venezolano empezó su proceso de consolidación en 1973. Por primera vez los dos partidos dominantes recibieron juntos más del 80% de los votos para presidente, y tres cuartos del voto legislativo. Este patrón continuaría por quince años, o tres elecciones nacionales, hasta 1988. Hacia 1988, el régimen democrático ya quedó consolidado de acuerdo con la definición arriba dada.

El sistema formado por la Constitución de 1961 tuvo características muy importantes e, inicialmente, positivas. Primero, la concentración de todas las elecciones (presidencial, cuerpos legislativos nacionales, estatales, y locales) en una fecha cada cinco años hizo más probable que el candidato presidencial victorioso pudiera contar con un congreso favorable a él, y también que las corrientes políticas nacionales estuviesen reflejadas en los estados y municipios. Dentro de la lógica de la democracia mayoritaria, el calendario electoral permitió al electorado hablar con una sola voz cada cinco años, constituyendo así un gobierno con mandato claro y maximizando las capacidades para llevarlo a cabo.

Segundo, los presidentes así elegidos fueron dotados con potestades amplias para dominar todos los aspectos del proceso político (Karl 1997; Crisp 2000; Kelley 1986). Los poderes incluyeron la designa-

ción de gobernadores de estados, y el uso de decretos (con el consentimiento del Congreso) en vez de leyes que requerían la aprobación por el Congreso. El sistema venezolano era aún más presidencialista que el promedio latinoamericano. El presidencialismo extremo ha sido una característica del sistema político venezolano desde mucho antes del establecimiento de la democracia.

Tercero, el presidencialismo cambió los efectos predecibles del sistema electoral de la representación proporcional (RP). Este sistema normalmente desembocaría en un sistema multipartidista, sin partidos mayoritarios. Pero en el caso venezolano, la importancia trascendental de la presidencia impuso una dinámica mayoritaria aun en las elecciones legislativas bajo las reglas de RP. Siempre había muchos partidos representados en el Congreso, pero AD y COPEI obtenían juntos la gran mayoría, y muchas veces incluso uno de ellos solo tenía la mayoría.

La década de los ochenta marca el principio de una larga crisis económica y social que tuvo el efecto a largo plazo de minar la legitimidad del sistema democrático en general, y del sistema de partidos en particular. Tanto las encuestas de opinión pública como las tasas de abstención electoral indicaban una progresiva enajenación entre grandes capas de la población, un desencanto dirigido particularmente hacia los dirigentes de los grandes partidos AD y COPEI. Sin embargo, fue recién después de 1988 que estos partidos perdieron su dominancia electoral (Coppedge 1994; Crisp 2000; López Maya/Gómez Calcaño/Maingon 1989).

Una respuesta importante por parte de las élites políticas dominantes a las críticas hechas después de 1980, fue la formación, de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE) en 1984 realizada por el presidente Jaime Lusinchi. Hacia fines del mandato de Lusinchi, esta comisión hizo una serie de recomendaciones con el propósito de revitalizar el sistema democrático. Siguiendo el argumento que la democracia venezolana estaba demasiado centralizada bajo el control de los dos partidos grandes y de los presidentes de esos partidos, el COPRE recomendó medidas importantes para la descentralización electoral y gubernamental, entre otras, la elección de gobernadores y alcaldes, la separación de elecciones locales y estatales de las elecciones nacionales, el uso de elecciones uninominales (en vez de la RP con listas cerradas, bajo control de las cúpulas partidarias) para

elegir una parte importante del congreso y otros cuerpos legislativos, y la delegación de importantes poderes administrativos a los gobernadores y alcaldes (Carrera Damas 1988; Gómez Calcaño/López Maya 1990; Grindle 2000; Crisp 2000; García-Guadilla 2002b; Sabatini 2003).

Como era de esperar, tanto las élites de AD y COPEI, como el presidente Lusinchi, resistieron la implementación de las recomendaciones de la COPRE, pero tanto Carlos Andrés Pérez como Eduardo Fernández, candidatos de AD y COPEI en 1988, se comprometieron a llevar a cabo los cambios recomendados. Y así fue hecho por el ganador, Pérez. El propósito de las reformas era hacer la democracia venezolana menos centralizada y mayoritaria, y más pluralista (Escobar-Lemmon 2003). Empezando con las primeras elecciones de gobernadores y alcaldes en 1989, se podía ver un declive progresivo de la posición de AD y COPEI, y un surgimiento de nuevos partidos tales como *Causa R* (de la izquierda independiente), además de avances importantes de partidos ya establecidos, como el Movimiento al Socialismo (MAS). Hacia las elecciones nacionales de 1993, y regionales de 1994, la dominancia bipartidista de antaño se había perdido completamente.

El derrumbe del sistema de partidos no fue efecto sólo de la COPRE, sino aún más directamente del llamado “gran viraje” de Carlos Andrés Pérez. Pérez, el presidente durante el gran auge petrolero de los años 70, daba a entender en su campaña como candidato de AD, que podía recuperar la prosperidad de aquellos años por medio de políticas netamente populistas. Sin embargo, a pocas semanas de asumir el poder, anunció de repente que el país se encontraba en quiebra, y que era imprescindible un programa radical de corte neoliberal. Este gran viraje fue hecho sin habersele consultado al pueblo. Parece que este gran político pensaba, equivocadamente, que contaba con el apoyo del pueblo gracias a su autoridad personal; que su elección no fue un mandato para seguir la línea prometida, sino un mandato de tipo “delegativo” para hacer todo lo que consideraba necesario (O'Donnell 1994; Crisp/Levine 1998; Plaza 2001; Corrales 2002; Weyland 2002).

La reacción popular no tardó. Después del anuncio inesperado del paquete de reformas y ajuste económico, a fines de febrero las calles de Caracas fueron el escenario de masivos desórdenes y destrucción, con un saldo todavía incierto de muertes, muchas a manos de las fuer-

zas policiales y militares. La gran mayoría de los manifestantes eran de clases más humildes, habitantes de las barriadas en los cerros alrededor de la ciudad. Este evento traumático fue pronto bautizado con el nombre del “Caracazo”. Aunque el gobierno de Pérez intentó responder al descontento por la implementación de las recomendaciones de la COPRE, y a pesar de un mejoramiento macroeconómico en los años siguientes, el ambiente político después del Caracazo estaba marcado por un rechazo casi universal hacia el presidente Pérez; incluso AD lo abandonó. Hubo muchas demandas para su renuncia, y se iniciaron intentos para enjuiciarlo y así forzar su destitución (Kornblith 1989; 1995).

Su posición resultó aún más precaria en el curso de 1992, por causa de dos intentos fallidos de golpes militares. El más importante ocurrió en febrero, liderado por el Teniente Coronel Hugo Chávez Frías, con un cuerpo de conspiradores de rangos militares medianos y bajos. (En noviembre, hubo un segundo intento, con oficiales de más alto rango, que también fracasó.) Chávez y sus colaboradores habían desarrollado el llamado Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, desde el año 1982, en el seno del ejército con simpatizantes también en otras fuerzas armadas. Inspirado por una mezcla ecléctica de socialismo, populismo, y nacionalismo, tuvo lazos significativos con elementos de la izquierda guerrillera venezolana, que no habían aceptado la incorporación al sistema democrático después de su derrota militar en los años 60. Chávez también fue inspirado por los gobiernos militares y populistas de Velasco Alvarado en el Perú, y de Torrijos en Panamá (Sonntag/Maingon 1992; Blanco 2002; Norden 1998; 2001; McCoy 1999).

Aprovechando la oportunidad de aparecer brevemente en cadena nacional para llamar a sus aliados a rendirse, Chávez se convirtió instantáneamente en héroe al admitir que había fracasado “por ahora”. Condenado a prisión, siguió conspirando, y fue perdonado por el presidente Rafael Caldera en 1994. Después continuó la construcción de su movimiento político, ya llamado el Movimiento V República.

Caldera había sido uno de los primeros en pronunciarse en favor del intento golpista de Chávez. Cuando perdió en los comicios para la candidatura de COPEI en 1993, se salió del partido del que fue fundador, para formar una nueva coalición, Convergencia, con la que ganó la elección con menos del 30% del voto, mientras los candidatos de

AD, COPEI, y Causa R recibieron cada uno entre los 22 y 23%. El antiguo sistema de partidos estaba definitivamente resquebrajado, y un nuevo sistema aún no se había formado. AD, y en menor grado COPEI, continuaron como fuerzas importantes en el Congreso y en los estados, pero nunca más dominaron como antes. El período de Caldera fue marcado por una serie de intentos fracasados de solucionar los problemas económicos, y finalmente se tuvo que aceptar un paquete del Fondo Monetario Internacional que contribuyó al desencanto popular (Canache/Kulisheck 1998; Canache 2002; Coronil 2000; García-Guadilla 2002b; Gómez Calcaño/Patruyo 2000; Hellinger 1996; Peeler 1999).

3. La República Bolivariana

Fue en este contexto que Hugo Chávez, como el candidato más identificado con el cambio político, económico, y social, fue electo presidente de la República en diciembre de 1998, con el 56% de los votos contra el empresario y candidato independiente Henrique Salas Römer. Podría decirse que el período entero, desde su inicio en 1998, hasta ahora, ha sido una larga lucha para definir el futuro rumbo del sistema político venezolano. Desde 1993 quedó claro que el antiguo sistema democrático había sido desconsolidado, pero los intereses políticos y económicos que apoyaban el antiguo sistema todavía quedaban vivos. En 1998, por ejemplo, los partidos tradicionales en el congreso, anticipando la posible dominancia de Chávez en las elecciones presidenciales, fijaron una fecha distinta (en noviembre) para las elecciones para los cuerpos legislativos. Así pudieron separarse parcialmente de la influencia popular de Chávez, con el resultado que, a pesar de su mayoría al nivel presidencial, Chávez enfrentó una amplia mayoría opositora en el congreso electo en 1998 (Coppedge 2002: 95; Lander/López Maya 1999; McCoy 1999; Dávila 2001).

El compromiso principal de Chávez como candidato era llevar a cabo elecciones para una asamblea constituyente con el fin de acabar con el sistema “moribundo” y establecer la “Quinta República” auténticamente popular, en vez de la democracia representativa del antiguo sistema corrupto. Especialmente, quiso deshacerse para siempre de la llamada “partidocracia”, la dominación por parte de los partidos tradicionales no solamente en las elecciones y las instituciones guberna-

mentales, sino en las organizaciones de la sociedad civil (Gott 2000; Arenas/Gómez Calcaño 2000a; Coronil 2000; Ellner 2000; 2001; García Márquez 2000; López Maya/Lander 2000; Müller Rojas 2001).

Con estos propósitos convocó casi inmediatamente a un referéndum para convocar a elecciones para una Asamblea Constituyente. Esta convocatoria fue aprobada el 25 de abril de 1999. Chávez decretó una regla electoral del voto en bloque, o sea, el elector debería votar tantas veces como escaños disponibles había en la circunscripción, regla de fuerte tendencia mayoritaria. En un contexto donde Chávez obtuvo el apoyo mayoritario, las fuerzas chavistas dominaron completamente la elección de la Asamblea Constituyente el 25 de julio: de 131 delegados electos, 6 fueron opositores, y 3 curules reservados para los indígenas. Los restantes 122 delegados eran oficialistas (Coppedge 2002; Ellner 2001).

La constitución desarrollada por la Asamblea Constituyente inevitablemente reflejaba el pensamiento de Chávez y sus asesores. Estableció una ruptura definitiva con el orden constitucional existente (Marta Sosa 2002). En conceptos esto significa que el cambio planteado cambió de la democracia representativa de la Constitución de 1961, a la democracia “participativa y protagónica” de la Constitución de 1999. Este cambio fue particularmente notable en el uso extenso del referéndum en la nueva constitución, incluso para revocar el mandato de cualquier funcionario público después de la mitad del período del mandato. Al mismo tiempo le otorgó al Presidente extensos poderes para mandar por decreto, para disolver a la Asamblea, y para convocar los referendos, con el efecto neto de un sistema aún más presidencialista que el antiguo (Kelly 2002).

La nueva constitución no especificó los sistemas electorales, y la Asamblea Constituyente impuso una ley provisional para gobernar las elecciones del 2000. La elección del presidente fue mantenida bajo el sistema de mayoría relativa en una sola ronda, y del mismo modo las elecciones de cuerpos legislativos estarían regidos por un sistema mixto (estilo alemán), parecido al usado por primera vez en las elecciones legislativas de 1998. Pero mientras en 1998 la mitad de los escaños fueron ganados por la representación proporcional, para el 2000 el 60% de escaños fueron ganados por mayoría relativa en distritos de un miembro, con el restante 40% ganados por la representación proporcional. Como señalan Molina Vega/Pérez Baralt (2002: 149-150), este

sistema favoreció desproporcionadamente a los chavistas como primera minoría, dándoles una mayoría absoluta del 61% basado en una votación del 49% para la nueva Asamblea Nacional.

Aunque la nueva carta fue muy específica al enfatizar en el carácter federal del estado venezolano, ni la Asamblea ni el Presidente han llevado al cabo las medidas necesarias para hacer real la autonomía de los estados y municipios. Efectivamente, a pesar de la elección de gobernadores y alcaldes, el poder efectivo queda en las manos del presidente, aún más que en el antiguo sistema. Así, el efecto neto de la implementación de la nueva constitución ha sido contrario al sentido de las reformas propiciadas por la COPRE (Álvarez 2002, Marta Sosa 2002).

Otro elemento importante de la constitución de 1999 fue una redefinición del papel de las Fuerzas Armadas. Rebautizada con el nombre de la Fuerza Armada de Venezuela, el estamento militar fue dotado con un nuevo estado civil. Los militares activos recibieron el derecho a votar (derecho prohibido en la carta anterior), y como corresponde a los ciudadanos activos, tuvieron también el deber de deliberar, e incluso desobedecer las órdenes ilegales, o de autoridades ilegítimas. En la carta de 1961, las Fuerzas Armadas fueron definidas como no-deliberantes. Obviamente, este cambio importante fue un reflejo directo de la experiencia de Chávez, y del profundo militarismo (o sea, la convicción de que los militares encarnan las mejores virtudes de la nación) del MVR (Norden 2003; Müller Rojas 2001; Sierra 2002).

Aprobada la nueva constitución por voto popular en diciembre de 1999, la nueva Asamblea Nacional y otros cuerpos legislativos fueron elegidos en julio del 2000; al mismo tiempo hubo una nueva elección presidencial para la relegitimización de su autoridad bajo la nueva carta. Para ese entonces Chávez ya había dominado el escenario político por más de los dos años y medio, y mantenía todavía una posición muy fuerte, tanto en las instituciones nuevas, como en la opinión pública. Como el tribuno del cambio, ya había tenido la oportunidad para llevar a cabo muchas de sus ideas (Álvarez 2002; Blanco 2002; Ellner 2001; López Maya 2003).

Han sido escasos los resultados de las iniciativas políticas de Chávez más allá de la nueva Constitución Bolivariana (Ellner/Hellinger 2003; Ellner 2003b; Lander/López Maya 2002; Blanco 2002; Müller Rojas 2001; Francés/Machado Allison 2002). La política económica

no fue ni un rechazo total del neoliberalismo, ni un abrazo del consenso de Washington. Por un lado el gobierno ejerció una fuerte disciplina fiscal al principio, frente a los precios débiles del petróleo, y abiertamente buscaba las inversiones privadas del exterior. En cuanto a la industria petrolera, el gobierno insistió en mantener el control estatal, pero evitó cualquier intento de politizar a la gerencia, hasta 2002, cuando trató cambios en la junta directiva que provocaron la resistencia por parte de la mayoría del personal de la corporación Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) (Buxton 2003; Álvarez 2003; Mommer 2003; Lander/López Maya 2002).

Por otro lado, el gobierno intentó dos iniciativas con propósito de beneficiar a los más pobres rurales y urbanos. La primera iniciativa fue una ley de reforma agraria (la primera desde principios de los años 60) diseñada para tomar tierras privadas mal usadas y darlas a campesinos sin tierra. Pero el Estado mantendría el control sobre el uso de las tierras así redistribuidas. Sin embargo, pocas tierras han sido hasta el momento redistribuidas (Machado Allison 2002; Blanco 2002). La segunda iniciativa fue la promoción de la organización comunal de la población marginada de las ciudades. Una clave para este propósito han sido los Círculos Bolivarianos, concebidos como comités de cada barrio para prestar atención a las necesidades de la población, organizando a la gente para enfrentar estos problemas. En la práctica, los Círculos han funcionado como agentes políticos de base del régimen; incluso han sido acusados de dar abrigo a grupos armados partidarios del régimen (Arenas/Gómez Calcaño 2000b; Roberts 2003; López Maya 2003).

Hacia el principio de 2001, el poder político de Chávez se había desgastado. Las condiciones económicas continuaron deteriorándose, hasta el punto que mucha gente de la clase media, que había votado por Chávez en las múltiples ocasiones de 1998 a 1999, se sentía desilusionada (Canache 2002; León 2002; Márquez 2003). Los trabajadores organizados resistieron los intentos del régimen de solicitar apoyo contra la cúpula de líderes principalmente ligados a AD. Cuando el gobierno impuso elecciones generales a la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) en diciembre del 2000, la gran mayoría de trabajadores se abstuvo, y de los que votaron, la mayor parte confirmó el liderazgo y rechazó a los candidatos del gobierno (Ellner 2003a).

Así fracasó el intento de establecer la hegemonía política del gobierno sobre la CTV (Blanco 2002: cap. 6).

La campaña contra el liderazgo de la CTV fue parte de una lucha cada vez más cruenta entre los partidarios del gobierno y una oposición resurgente. Por un lado, la tendencia de Chávez por una retórica polarizante fue impulsada a raíz de la creciente disposición de la oposición a la confrontación. Por el otro lado, la retórica de Chávez, y la táctica política del oficialismo de despreciar a los opositores como oligarcas, escuálidos, o golpistas, hizo más exaltada a la oposición y empujó a algunos partidarios del gobierno (en especial, el Movimiento al Socialismo [MAS], la Causa R, y Patria para Todos) a pasarse a la oposición (Blanco 2002; Caballero 2002; Ellner/Rosen 2002).

La oposición iba formándose basada en partidos tradicionales y organizaciones antiguas de la sociedad civil que habían estado marginados por sus sucesivas derrotas desde 1993, y las victorias contundentes de Chávez. Pero tanto la CTV como la mayor organización de empresarios (FEDECAMARAS) quedaron vivas, y AD y COPEI, los grandes partidos tradicionales, habían perdido mucho, pero subsistieron como organizaciones; AD en particular retuvo un apoyo popular no despreciable. También emergieron otros partidos tales como Primera Justicia, y organizaciones de sociedad civil tales como Queremos Elegir.

Esta oposición heterogénea empezó en 2002 a montar manifestaciones populares contra Chávez, exigiendo su renuncia y la convocatoria a nuevas elecciones, a pesar de la amplia mayoría que apoyaba a Chávez, su mayoría en la Asamblea Nacional, y su mandato hasta 2006. Chávez, por su parte, convocó repetidamente a sus partidarios a manifestaciones en la capital para enfrentar las demandas opositoristas. Aunque Chávez iba perdiendo mucho apoyo de la clase media, aún tenía muchos adeptos en las clases populares, disponibles para la movilización. La ciudad de Caracas quedó dividida en el este opositorista, de clases predominantemente media y alta, y el oeste oficialista, de clase popular.

A principios del año 2002, además del apoyo popular significativo, Chávez contaba con un amplio apoyo militar, reflejo de su propia carrera militar, y del número significativo de oficiales que compartieron su rechazo al antiguo sistema partidocrático. Esta base político-militar le permitió enfrentar las demandas de la oposición como con-

trarrevolucionarias, rechazando cualquier negociación. Pudo contestar cada manifestación opositora con otra oficialista, y así mantener empatado el conflicto político.

El 11 de abril 2002, cuando una manifestación opositora masiva se aproximó al palacio presidencial de Miraflores exigiendo la renuncia de Chávez, francotiradores en los techos adyacentes dispararon, dejando un saldo de 15 a 20 muertos y cerca de 100 heridos. La oposición sospechó que los francotiradores habían sido agentes del oficialismo, acusación desmentida por el gobierno. Hasta la fecha no se ha hecho ningún informe adecuado acerca de la masacre. De todos modos, el primer resultado fue que los altos comandantes militares solicitaran la renuncia de Chávez, anunciaran que él había renunciado, y establecieran un gobierno provisional presidido por Pedro Carmona, ex-presidente de FEDECAMARAS. Carmona anunció varios decretos de corte de extrema derecha, y un gabinete también de la extrema derecha, sin participación de sectores opositores del centro, como la CTV o los partidos AD o COPEI. Mientras los elementos excluidos de la oposición hicieron saber sus objeciones, elementos populares partidarios del presidente Chávez ocuparon las calles del Centro, exigiendo el regreso de Chávez. Mientras el gobierno de Estados Unidos parecía satisfecho con el derrocamiento de Chávez (a pesar de la política anunciada de apoyar a los gobiernos constitucionales y democráticos) casi todos los gobiernos democráticos de América Latina condenaron lo que pareció un golpe. El balance dentro de las Fuerzas Armadas entonces cambió, Carmona fue destituido en su turno, y Chávez fue liberado y retornó de nuevo a Miraflores el 13 de abril (Francés/Machado Allison 2002; Ellner/Rosen 2002; Beasley-Murray 2002).

Aunque la oposición quedó frustrada con el desenlace de los eventos de abril, y el campo de Chávez se sintió triunfante, los sucesos de abril marcó la intensificación de la campaña opositora contra Chávez. Las mayores organizaciones económicas, la CTV y FEDECAMARAS, buscaron urgentemente la renuncia inmediata de Chávez; estuvieron dispuestas a usar cualquier medida para lograr este fin, sin preocuparse por lo constitucional. En otro sentido, los principales partidos políticos (AD, COPEI, Primera Justicia, MAS, la Causa R) constituyeron una Coordinadora Democrática para ejercer presión y llamar lo más antes posible a elecciones.

Chávez tildó al primer grupo como los golpistas de abril, movilizó a sus numerosos seguidores, y desafió a sus enemigos, los llamados “escuálidos”. Al segundo grupo le dijo que había sido electo por mandato hasta 2006, y de acuerdo con la Constitución, no es posible tener un referendo para revocar el cargo hasta pasada la mitad del mandato, o sea, en agosto de 2003. Aunque los partidarios de la salida electoral no estuvieron dispuestos a esperar hasta julio del año siguiente, después del fracaso de varios intentos para adelantar el referéndum, tuvieron que aceptar un plan para un voto revocatorio en una fecha —todavía no fijada— después de julio de 2003.

Los opositores que buscaban la renuncia inmediata recibieron apoyo crítico a mediados de octubre, cuando varios oficiales militares se declararon en desobediencia legítima, bajo una provisión constitucional que permite al personal militar desobedecer a los comandantes (e incluso al presidente) si ejercen su autoridad de modo ilegal. Este grupo desobediente incluía a los generales involucrados en el intento por forzar la renuncia de Chávez en abril, y creció gradualmente hasta más de 100 para fines del año. Los militares disidentes ocuparon la Plaza Francia del barrio próspero de Altamira, en el Este de Caracas, e inmediatamente vinieron miles de opositores civiles para apoyarlos. La plaza resultó un sitio de mitin político permanente, y punto de partida para toda una serie de marchas hacia el centro de la ciudad, el palacio de Miraflores, la Asamblea Nacional, y el Consejo Nacional Electoral. Estos militares fueron muy directos en exigir la renuncia inmediata, y en abogar por una huelga o paro nacional que debía continuar hasta la misma renuncia de Chávez. No obstaculizaban la campaña por el referendo, pero tampoco lo apoyaban. Hacia enero de 2003, este movimiento para una renuncia inmediata quedó frustrado, y fue efectivamente suspendido a favor de la opción por un referéndum constitucional revocatorio.

Los intentos opositores de guiar el conflicto por cauces de negociación y elección recibieron apoyo importante del Secretario General de la Organización de Estados Americanos, Cesar Gaviria, quien, con apoyo de las Naciones Unidas y del Centro Carter, propició la convocatoria de una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno (aun el mismo nombre tuvo que negociarse), dedicado a la búsqueda de una salida negociada. Pero la tendencia a la radicalización por ambos lados repetidamente impidió el diálogo.

El 30 de mayo de 2003, el gobierno y la oposición firmaron un pacto para allanar la vía hacia el revocatorio. Los siguientes meses fueron todavía de mucha controversia, pero también se veía progreso. El nuevo Consejo Supremo Electoral fue finalmente constituido. El Tribunal Supremo de Justicia mandó que las firmas recogidas antes de la fecha de la mitad del mandato del presidente no eran válidas para exigir el revocatorio. La oposición aceptó esta decisión y montó otra campaña para recoger las firmas para la elección revocatoria el 15 de agosto de 2004.

Ambos lados siguieron una lógica de buscar la victoria completa. La victoria de Chávez lo enfrentó a una oposición irreconciliable de las clases medias y altas, con el capital y las capacidades personales necesarios para la recuperación del país. Una victoria de la oposición la habría enfrentado a la mayoría de los pobres de la nación, ya movilizada políticamente, y poco dispuesta a aceptar de nuevo su subordinación.

4. Análisis

El antiguo sistema democrático de Venezuela privilegió los intereses bien organizados y con recursos materiales, o sea, la capacidad para participar efectivamente en la competencia para afectar la distribución de recursos. Así, a pesar de las intenciones de usar los recursos petroleros para enfrentar los grandes problemas sociales de la pobreza, en la práctica los pobres nunca tuvieron la capacidad, material u organizativa para hacer demandas efectivas en el proceso político (Karl 1997). En este sentido, el fracaso de Venezuela no fue sólo un fracaso de élites (Bonilla 1970), sino un fracaso del sistema mismo de la democracia pluralista, o la poliarquía.

La desconsolidación del régimen democrático venezolano es resultado de este fracaso, que abrió el paso al modelo alternativo de la democracia popular como planteado por Hugo Chávez. Irónicamente, la retórica polarizante de Chávez, que empuja a muchos de sus partidarios de clase media hacia la oposición, abrió el paso para el resurgimiento de la oposición como fuerza masiva, precisamente en el momento cuando él tuvo el poder hegemónico.

El régimen democrático venezolano, establecido en 1958, estabilizado durante los setentas y consolidado hacia 1988, se desconsolidó

como consecuencia de la incapacidad de los líderes y las instituciones para enfrentar y manejar los grandes problemas económicos y sociales de los ochentas. Claro está que esta crisis de régimen fue en gran parte, como dijo Frank Bonilla ya en 1970, un fracaso de élites. Terry Karl (1997; Peeler 1999; Álvarez *et al.* 2000) también enfatizó en que las élites sí tuvieron amplias posibilidades para llevar a cabo políticas que hubieran podido enfrentar mejor los problemas citados. Hubo, sin duda, falta de imaginación, de disciplina, y de compromiso con la justicia social, en el seno de la élite político-económica que mandaba en Venezuela en la época de la democracia. Los líderes de ambos partidos tradicionales, y de las grandes organizaciones de la vida económica, siguieron con la política normal, compartiendo las ganancias, y dejando crecer las tensiones sociales y económicas. La población pobre y la clase media (o sea la gran mayoría de venezolanos) no percibieron ningún beneficio, y sí vieron mucha corrupción en la cúpula. Así, en un nivel el fracaso fue de las élites.

En otro nivel, el fracaso fue de las instituciones. La forma de la democracia establecida después de 1958 era, al fin y al cabo, incapaz de enfrentar con éxito los retos de la justicia social de una sociedad profundamente desigual. Esta incapacidad resultó aguda en la época larga de declive económico después de 1982. El sistema democrático privilegió los sectores con más recursos económicos y más organización, características que no muestran los sectores más pobres. Así éstos no han podido exigir una porción apropiada de los recursos distribuidos por el estado (Álvarez 2002; 2003).

Otro problema institucional trata de las fuerzas armadas. La constitución de 1961 los definió como profesional y no deliberante. El mecanismo adoptado para asegurar que los oficiales tuvieran un compromiso con la democracia era que el Congreso aprobara las promociones a coronel y general. En la práctica, fue preciso para los oficiales establecer lazos políticos o con AD, o con COPEI, para allanar el camino al ascenso. Este sistema era efectivo en la prevención de cualquier tendencia al intervencionismo militar contra el régimen democrático, pero había bastante recelo entre los oficiales, entre otros Hugo Chávez, el cual, llegando al poder y promover una nueva constitución, transformó de raíz el papel de la renombrada Fuerza Armada Nacional (FAN). Por un lado, los militares activos recibieron el derecho a votar, y la condición de militar fue definida para incluir la obligación de

hacer determinaciones políticas, incluso la determinación si las órdenes de los superiores fueran legítimas o no, y la obligación a la desobediencia a órdenes ilegítimas. Por el otro lado, la autoridad del presidente, como comandante en jefe, fue reforzada al excluir al parlamento de las decisiones sobre las promociones militares; estas decisiones quedaban así del todo en las manos del presidente (Norden 2003; Sierra 2002; Sanoja Hernández 2002).

La lucha actual, desde la elección de Chávez en 1998, muestra rasgos interesantes en cuanto al problema de la democracia. Queda claro, aun en medio de una lucha cruenta para forzar la salida del mandatario elegido, que la mayor parte de venezolanos todavía mantienen un compromiso con la democracia. Casi nadie quiere una dictadura. Pero queda claro también que hay muy distintos criterios acerca de la democracia. Mientras la gran mayoría de los opositores buscan la restauración de una democracia liberal, parecida al régimen derrotado por Chávez, lo que plantea Chávez y sus partidarios es una democracia más bien radical y participativa. Exigen una democracia radicalmente igualitaria en cuanto a los recursos materiales y la influencia política, y participativa en el sentido de que los ciudadanos tomen parte en las decisiones políticas, y no solamente en la elección de los funcionarios públicos. La desconsolidación de la democracia tiene sus raíces en el desafío planteado a la democracia puntofijista por la llamada democracia participativa o popular.

La Venezuela de estos tiempos ejemplifica las contradicciones de estos dos modelos de la democracia, y así señala los retos para su reconsolidación. El modelo liberal de la democracia funcionó muy bien sobre cuatro décadas como modo de organizar el consentimiento periódico de los ciudadanos a sus gobiernos. También protegió los derechos de las minorías frente a la mayoría electoral, y frente al gobierno elegido por esa mayoría. Pero entre los derechos protegidos es el de acumular las riquezas, lo que inevitablemente permite a algunos ejercer más poder que otros en la toma de decisiones políticas. Así el modelo liberal de la democracia presupone la igualdad de todos los ciudadanos en su capacidad para articular y defender sus intereses, mientras la práctica de la libertad económica, del capitalismo mismo, produce la desigualdad, tanto económica como política. Esta es la contradicción principal de la poliarquía: bajo la bandera de la igualdad, promueve la desigualdad y el privilegio.

El modelo radical de la democracia participativa ha sido poco practicado, pero muy pensado desde la época de Jean-Jacques Rousseau. Plantea el ideal que el pueblo debe mandar, debe ser soberano, sin limitación o mediación alguna. Si la democracia liberal enfatiza los derechos de minorías y de individuos, la democracia radical enfatiza la soberanía popular. Si la democracia liberal plantea la necesidad de la representación, la democracia radical propone la participación directa del pueblo en la toma de decisiones. Pero, concretamente, no queda claro cómo puede el pueblo ejercer la soberanía sobre una nación de más de veinte millones, y cómo puede el pueblo participar directamente en las decisiones en una sociedad tan grande. La respuesta de Chávez es el uso del referéndum como última autoridad, y los Círculos Bolivarianos como arenas de participación popular. Pero tanto los referendos como los Círculos dependen en la práctica del liderazgo de Chávez, el caudillo. En la tradición venezolana del cesarismo democrático de Vallenilla Lanz, Chávez se siente como la encarnación del pueblo. Quienes lo sigan son auténticamente del pueblo. Quienes lo opongan son oligarcas escuálidos. Quien decide es él mismo. La visión de una democracia radical y participativa queda transformada en una autocracia popular.

Una reconsolidación de la democracia venezolana requiere, por un lado, un compromiso de toda la sociedad, incluso las clases medias y altas, para la reducción de la desigualdad económica y política, para que la promesa de la democracia sea realizada de modo mucho más extenso que ahora. La justicia social tiene que ser, finalmente, el centro de la política democrática. Por el otro lado, la reconsolidación también requiere el reconocimiento de los derechos y la dignidad de todos los venezolanos, incluso aquellos que están, por ahora, en la oposición. Los venezolanos de hoy tienen que hacer lo que el puntofijismo planteó pero no logró: la inclusión de toda la nación en un contexto democrático de la autoridad de la mayoría frenada por los derechos efectivos de todos. Lo que es preciso, irónicamente, es un nuevo pacto (por lo menos tácito), o una búsqueda intensa para la reconciliación nacional. El elemento imprescindible es la inclusión, por primera vez, de todos los venezolanos.

Los dos lados parecen poco dispuestos a pactos, ni tampoco a la reconciliación. Pero ningún lado es capaz de imponer su propia solución. Y aun si pudiera un lado imponerse, el resultado sería indesea-

ble. Si triunfa la oposición, habría un resurgimiento de una versión del puntofijismo resucitado, frente a una gran parte de la población todavía movilizada y comprometida con el proyecto de Chávez, y profundamente hostil al nuevo régimen. Si triunfa Chávez, habría una gran salida de capital y de gente técnicamente formada, sin que la no sería posible la reconstrucción de una sociedad moderna y próspera. Además, en la coyuntura global actual, no será posible llevar a cabo un proyecto de cambio realmente radical sin arriesgar una intervención decisiva por parte de la potencia hegemónica. Lo que quedaría para Chávez sería una suerte del caudillismo democrático (o bien la democracia delegativa) sin recursos adecuados para democratizar a la sociedad venezolana.

La óptima salida, entonces, sería una reconciliación nacional o un pacto, auténticamente democrático e inclusivo.

Bibliografía

- Álvarez, Ángel (2002): "El Estado y la Revolución 'protagónica'". En: Ramos Rollón, Marisa (ed.): *Venezuela: rupturas y continuidades del sistema político (1999-2000)*. Salamanca: Ediciones Universidad Salamanca, pp. 97-120.
- (2003). "State Reform Before and After Chávez's Election". En: Ellner, Steve/Hellinger, Daniel (eds.): *Venezuelan Politics in the Chávez Era*. Boulder: Lynne Rienner, pp. 147-160.
- Álvarez, Ángel, *et al.* (2000): "¿Qué es la democracia para los líderes venezolanos?". En: *Revista Politeia*, 25, pp. 161-186.
- Arenas, Nelly/Gómez Calcaño, Luis (2000a): *El imaginario redentor: de la Revolución de Octubre a la Quinta República Bolivariana*. Caracas: Centro de Estudios del Desarrollo/Universidad Central de Venezuela.
- (2000b): *Los círculos bolivarianos: El mito de la unidad del pueblo*. Caracas: Centro de Estudios del Desarrollo/Universidad Central de Venezuela.
- Beasley-Murray, Jon (2002): "Venezuela: 'The Revolution Will Not Be Televised'". En: *NACLA Report on the Americas*, 36, 1, pp. 16-20.
- Blanco, Carlos (2002): *Revolución y desilusión: la Venezuela de Hugo Chávez*. Madrid: Libros de la Catarata.
- Bonilla, Frank (1970): *The Failure of Elites*. Vol. 2 of *The Politics of Change in Venezuela*. Cambridge: Massachusetts Institute of Technology Press.
- Buxton, Julia (2003): "Economic Policy and the Rise of Hugo Chávez". En: Ellner, Steve/Hellinger, Daniel (eds.): *Venezuelan Politics in the Chávez Era*. Boulder: Lynne Rienner, pp. 113-130.

- Caballero, Manuel (2002): "Los actores de la crisis". En: Francés, Antonio/Machado Allison, Carlos (eds.): *Venezuela: la crisis de abril*. Caracas: Ediciones IESA, pp. 187-194.
- Canache, Damaris (2002): *Venezuela: Public Opinión and Protest in a Fragile Democracy*. Miami: North-south Center Press.
- Canache, Damaris/Kulisheck, Michael (eds.) (1998): *Reinventing Legitimacy: Democracy and Political Change in Venezuela*. Westport, CT: Greenwood.
- Carrera Damas, Germán (1988): *La necesaria reforma democrática del estado*. Caracas: Grijalbo.
- Coppedge, Michael (1994): *Strong Parties and Lame Ducks: Presidential Partyarchy and Factionalism in Venezuela*. Stanford: Stanford University Press.
- (2002): "Soberanía Popular versus democracia liberal en Venezuela". En: Ramos Rollón, Marisa (ed.): *Venezuela: rupturas y continuidades del sistema político (1999-2000)*. Salamanca: Ediciones Universidad Salamanca, pp. 69-96.
- Coronil, Fernando (2000): "Magical Illusions or Revolutionary Magic: Chávez in Historical Context". En: *NACLA Report on the Americas*, 33, 6, pp. 34-41.
- Corrales, Javier (2002): *Presidents Without Parties: The Politics of Economic Reform in Argentina and Venezuela in the 1990s*. University Park: Pennsylvania State University Press.
- Crisp, Brian (2000): *Democratic Institutional Design: The Powers and Incentives of Venezuelan Politicians and Interest Groups*. Stanford: Stanford University Press.
- Crisp, Brian/Levine, Daniel (1998): "Democratizing the Democracy? Crisis and Reform in Venezuela". En: *Journal of Interamerican Studies and World Affairs*, 40, 2, pp. 27-62.
- Dávila, Luis Ricardo (2001): "Nuevos Tiempos, Viejos Procedimientos: Elecciones y desarrollo político en Venezuela". En: *European Review of Latin American and Caribbean Studies*, 70, pp. 89-98.
- Delgado, Andy/Gómez Calcaño, Luis (2001): "Concepciones de la ciudadanía social en las constituciones venezolanas de 1947, 1961 y 1999". En: *Cuadernos del CENDES*, 18, 46, pp. 73-100 (enero-abril).
- Derham, Michael (2002): "Undemocratic Democracy: Venezuela and the Distorting of History". En: *Bulletin of Latin American Research*, 21, 2, pp. 270-289.
- Diamond, Larry (1999): *Developing Democracy: Toward Consolidation*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Ellner, Steve (2000): "Polarized Politics in Chávez's Venezuela". En: *NACLA Report on the Americas*, 33, 6, pp. 29-33.
- (2001): "The Radical Potential of Chavismo in Venezuela: The First Year and a Half in Power". En: *Latin American Perspectives*, 28, 5, pp. 5-32.
- (2003a): "Organized Labor and the Challenge of Chavismo". En: Ellner, Steve/Hellinger, Daniel (eds.): *Venezuelan Politics in the Chávez Era*. Boulder: Lynne Rienner, pp. 161-178.
- (2003b): "Venezuela imprevisible: Populismo radical y globalización". En: *Nueva Sociedad*, 183, pp. 11-26.

- Ellner, Steve/Hellinger, Daniel (eds.) (2003): *Venezuelan Politics in the Chávez Era: Class, Polarization, and Conflict*. Boulder: Lynne Rienner.
- Ellner, Steve/Rosen, Fred (2002): "The Remarkable Fall and Rise of Hugo Chávez". En: *NACLA Report on the Americas*, 36, 1, pp. 9-15.
- Escobar-Lemmon, Maria (2003): "Political Support for Decentralization: An Analysis of the Colombian and Venezuelan Legislatures". En: *American Journal of Political Science*, 47, 4, pp. 683-697.
- Francés, Antonio/Machado Allison, Carlos (eds.) (2002): *Venezuela: la crisis de abril*. Caracas: Ediciones IESA.
- García-Guadilla, María Pilar (2002a): "Actores, organizaciones y movimientos sociales en la Venezuela del 2000: logros, problemas y desafíos". En: Ramos Rollón, Marisa (ed.): *Venezuela: rupturas y continuidades del sistema político (1999-2000)*. Salamanca: Ediciones Universidad Salamanca, pp. 247-277.
- (2002b): "Democracy, Decentralization, and Clientelism: New Relationships and Old Practices". En: *Latin American Perspectives*, 29, 5, pp. 90-109.
- García Márquez, Gabriel (2000): "The Two Faces of Hugo Chávez". En: *NACLA Report on the Americas*, 33, 6, pp. 18-21.
- Gómez Calcaño, Luis/López Maya, Margarita (1990): *El Tejido de Penélope: la reforma del Estado en Venezuela (1984-1988)*. Caracas: Centro de Estudios del Desarrollo, Universidad Central de Venezuela.
- Gómez Calcaño, Luis/Patruyo, Thanali (2000): "Entre la esperanza popular y la crisis económica: transición política en Venezuela". En: *Cuadernos del Cendes*, 17, 43, pp. 199-246.
- Goodman, Louis W., et al. (eds.) (1995): *Lessons of the Venezuelan Experience*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Gott, Richard (2000): *In the Shadow of the Liberator: Hugo Chávez and the Transformation of Venezuela*. London: Verso.
- Grindle, Merilee (2000): *Audacious Reforms: Institutional Invention and Democracy in Latin America*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Hellinger, Daniel (2003): "Political Overview: The Breakdown of *Puntofijismo* and the Rise of *Chavismo*". En: Ellner, Steve/Hellinger, Daniel (eds.): *Venezuelan Politics in the Chávez Era*. Boulder: Lynne Rienner, pp. 27-54.
- Hellinger, Daniel (ed.) (1996): *Post-Bonanza Venezuela*. En: *Latin American Perspectives*, 23, 3, pp. 3-158 (Issue 90, Summer).
- Hidalgo Trenado, Manuel (1998): "Consolidación, crisis y cambio del sistema venezolano de partidos". En: *Revista Politeia*, 21, pp. 63-106.
- Hillman, Richard (1994): *Democracy for the Privileged: Crisis and Transition in Venezuela*. Boulder: Lynne Rienner.
- Karl, Terry Lynn (1987): "Petroleum and Political Pacts: The Transition to Democracy in Venezuela". En: *Latin American Research Review*, 22, pp. 63-94.
- (1997): *The Paradox of Plenty: Oil booms and Petro-States*. Berkeley: University of California Press.

- Kelley, R. Lynn (1986): "Venezuelan Constitutional Forms and Realities". En: Martz, John/Myers, David (eds.): *Venezuela: The Democratic Experience*. New York: Praeger, pp. 32-53.
- Kelly, Janet (2002): "Orígenes y consecuencias de la Constitución Bolivariana". En: Francés, Antonio/Machado Allison, Carlos (eds.): *Venezuela: la crisis de abril*. Caracas: Ediciones IESA, pp. 37-46.
- Kelly, Janet/Romero, Carlos (2002): *The United States and Venezuela: Rethinking a Relationship*. New York: Routledge.
- Kornblith, Miriam (1989): "Deuda y democracia: Los sucesos del 27 y 28 de febrero". En: *Cuadernos del CENDES*, 10, pp. 17-34.
- (1995): "Political Crisis and Constitutional Reform". En: Goodman, Louis, *et al.* (eds.): *Lessons of the Venezuelan Experience*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, pp. 334-361.
- (2002): "El Poder Electoral: ¿Parte de la solución o del problema?". En: Francés, Antonio/Machado Allison, Carlos (eds.): *Venezuela: la crisis de abril*. Caracas: Ediciones IESA, pp. 55-64.
- Lander, Luis/López Maya, Margarita (1999): "Venezuela, la victoria de Chávez: El Polo Patriótico en las elecciones de 1998". En: *Nueva Sociedad*, 160, pp. 4-19.
- (2002): "Venezuela's Oil Reform and Chavismo". En: *NACLA Report on the Americas*, 36, 1, pp. 21-23.
- León, Luis Vicente (2002): "Y las encuestas: ¿Qué dicen?". En: Francés, Antonio/Machado Allison, Carlos (eds.): *Venezuela: la crisis de abril*. Caracas: Ediciones IESA, pp. 147-158.
- Linz, Juan J. (1978): *Crisis, Breakdown, and Reequilibration*. Vol. 1 of *The Breakdown of Democratic Regimes*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Linz, Juan J./Stepan, Alfred (1996): *Problems of Democratic Transition and Consolidation*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- López Maya, Margarita (2003): "Hugo Chávez Frías: His Movement and His Presidency". En: Ellner, Steve/Hellinger, Daniel (eds.): *Venezuelan Politics in the Chávez Era*. Boulder: Lynne Rienner, pp. 73-92.
- López Maya, Margarita/Lander, Luis (2000): "Refounding the Republic: The Political Project of Chavismo". En: *NACLA Report on the Americas*, 33, 6, pp. 22-28.
- López Maya, Margarita/Gómez Calcaño, Luis/Maingon, Thaís (1989): *De Punto Fijo al Pacto Social: Desarrollo y hegemonía en Venezuela (1958-1985)*. Caracas: Fondo Editorial Acta Científica Venezolana.
- Machado Allison, Carlos (2002): "La Ley de Tierras y la crisis de abril". En: Francés, Antonio/Machado Allison, Carlos (eds.): *Venezuela: la crisis de abril*. Caracas: Ediciones IESA, pp. 81-88.
- Machado Allison, Carlos/Francés, Antonio (2002): "Reflexiones de una crisis". En: Francés, Antonio/Machado Allison, Carlos (eds.): *Venezuela: la crisis de abril*. Caracas: Ediciones IESA, pp. 9-16.
- Márquez, Patricia (2003): "The Hugo Cháveza Phenomenon: What Do 'The People' Think?". En: Ellner, Steve/Hellinger, Daniel (eds.): *Venezuelan Politics in the Chávez Era*. Boulder: Lynne Rienner, pp. 27-54.

- Marta Sosa, Joaquín (2002): "Dos constituciones cara a cara: mucha revolución y pocos cambios". En: Ramos Rollón, Marisa (ed.): *Venezuela: rupturas y continuidades del sistema político (1999-2000)*. Salamanca: Ediciones Universidad Salamanca, pp. 19-36.
- Martz, John/Myers, David (eds.) (1986): *Venezuela: The Democratic Experience*. New York: Praeger.
- McCoy, Jennifer (1999): "Chávez and the End of 'Partyarchy' in Venezuela". En: *Journal of Democracy*, 10, 3, pp. 64-77.
- Molina, José/Pérez, Carmen (1998): "Evolution of the Party System in Venezuela, 1946-1993". En: *Journal of Interamerican Studies and World Affairs*, 40, 3, pp. 1-26.
- Molina Vega, José/Pérez Baralt, Carmen (2002): "Venezuela ratifica el cambio: elecciones de 2000". En: Ramos Rollón, Marisa (ed.): *Venezuela: rupturas y continuidades del sistema político (1999-2000)*. Salamanca: Ediciones Universidad Salamanca, pp. 143-176.
- Mommer, Bernard (2003): "Subversive Oil". En: Ellner, Steve/Hellinger, Daniel (eds.): *Venezuelan Politics in the Chávez Era*. Boulder: Lynne Rienner, pp. 131-146.
- Müller Rojas, Alberto (2001): *Época de revolución en Venezuela*. Caracas: Solar Ediciones.
- Myers, David (1986): "The Venezuelan Party System: Regime Maintenance Under Stress". En: Martz, John/Myers, David (eds.): *Venezuela: The Democratic Experience*. New York: Praeger, pp. 109-147.
- Norden, Deborah (1998): "Democracy and Military Control in Venezuela". En: *Latin American Research Review*, 33, 2, pp. 143-165.
- (2001): "The Organizational Dynamics of Militaries and Military Movements: Paths to Power in Venezuela". En: Pion-Berlin, David (ed.): *Civil-Military Relations in Latin America*. Chapel Hill: University of North Carolina Press, pp. 108-134.
- (2003): "Democracy in Uniform: Chávez and the Venezuelan Armed Forces". En: Ellner, Steve/Hellinger, Daniel (eds.): *Venezuelan Politics in the Chávez Era*. Boulder: Lynne Rienner, pp. 93-112.
- O'Donnell, Guillermo (1994): "Delegative Democracy". En: *Journal of Democracy*, 5, 1, pp. 55-69.
- Peeler, John (1985): *Latin American Democracies: Colombia, Costa Rica, Venezuela*. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
- (1992): "Elite Settlements and Democratic Consolidation: Colombia, Costa Rica, and Venezuela". En: Higley, John/Gunther, Richard (eds.): *Elites and Democratic Consolidation in Latin America and Southern Europe*. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 81-112.
- (1999): "La política de élites y la política económica: La democracia en Costa Rica y Venezuela". En: *América Latina, Hoy*, 21, pp. 113-126.
- Plaza, Elena (2001): "La idea del gobernante fuerte en la historia de Venezuela". En: *Revista Politeia*, 27, pp. 7-23.

- Ramos Rollón, Marisa (ed.) (2002): *Venezuela: rupturas y continuidades del sistema político (1999-2000)*. Salamanca: Ediciones Universidad Salamanca.
- Roberts, Kenneth (2003): "Social Polarization and the Populist Resurgence in Venezuela". En: Ellner, Steve/Hellinger, Daniel (eds.): *Venezuelan Politics in the Chávez Era*. Boulder: Lynne Rienner, pp. 55-72.
- Sabatini, Christopher (2003): "Decentralization and Political Parties". En: *Journal of Democracy*, 14, 2, pp. 138-150.
- Sanoja Hernández, Jesús (2002): "Militares y políticos". En: Francés, Antonio/Machado Allison, Carlos (eds.): *Venezuela: la crisis de abril*. Caracas: Ediciones IESA, pp. 209-214.
- Sierra, Manuel Felipe (2002): "La fractura militar". En: Francés, Antonio/Machado Allison, Carlos (eds.): *Venezuela: la crisis de abril*. Caracas: Ediciones IESA, pp. 201-208.
- Sonntag, Heinz R./Maingon, Thaís (1992): *Venezuela: 4-F 1992: Un análisis socio-político*. Caracas: Editorial Nueva Sociedad.
- Weyland, Kurt (2002): *The Politics of Market Reform in Fragile Democracies*. Princeton: Princeton University Press.

Ricardo Combellas

El Proceso Constituyente y la Constitución de 1999

1. Antecedentes histórico-políticos

Si bien el proceso constituyente de 1999 tiene su hito decisivo de inicio con la elección del teniente coronel (r) Hugo Chávez Frías como presidente de la República el 6 de diciembre de 1998, sus antecedentes se remontan a los acontecimientos sangrientos que sacudieron principal aunque no únicamente a la ciudad capital (y conocido desde entonces como el “Caracazo” los días 27 y 28 de febrero del año 1989). Una frase célebre del discurso del para entonces senador vitalicio Rafael Caldera, pronunciado en el Congreso el día 1° de marzo de dicho año es sintomática de la relevancia de la fecha para el futuro inmediato del sistema político laboriosamente construido a partir del año 1958:

Venezuela ha sido una especie de país piloto. En este momento es lo que los norteamericanos llaman *show window*, “el escaparate de la democracia en América Latina”. Ese escaparate lo rompieron a puñetazos, a pedradas y a palos, los hambrientos de los barrios de Caracas ... (Caldera 1992: 24).

El “Caracazo” remeció la conciencia de la clase política al obligarla a interrogarse sobre las causas de tan perturbadora explosión social, inédita en los seis lustros de estabilidad democrática ininterrumpida. La interrogación no se circunscribió al fenómeno, pues abarcó un descarnado debate en torno al agotamiento del sistema político y su creciente incapacidad de dar respuestas satisfactorias a las expectativas y demandas de la sociedad. Entre los factores más discutidos aparecía la corrupción, estimulada por la impunidad y la ineficacia de los controles para combatirla; igualmente la llamada partidocracia, identificada con la excesiva presencia de los partidos no sólo en la vida política, sino en los intersticios de la sociedad, impidiendo el sano desarrollo de una sociedad civil con legítimas pretensiones de autonomía. A los partidos se les reprochaba al unísono su organización rígidamente

verticalista y de férreo control cupular (los llamados “cogollos”) de su dinámica decisional. Otro factor reiteradamente presente lo constituía, desde el punto de vista institucional, la incapacidad de erigir un Poder Judicial autónomo e independiente que garantizara la efectividad del Estado de Derecho; y por último, no por ello menos importante, el agrandamiento de la brecha entre ricos y pobres, la inequidad de un sistema que reproducía la pobreza y la marginalidad, tanto que algunos llegaron a denominar como neomalthusiana.

Los seis lustros de la experiencia democrática venezolana mostraban, no obstante, orgullosamente una Constitución como la de 1961, aprobada consensualmente, de excepcional duración en nuestra traumática vida constitucional, y que había logrado cobijar bajo su programa prácticamente a todas las fuerzas políticas, independientemente de su acervo ideológico, expresado todo ello en la manida frase: el reto está en aplicar el programa democrático-social de la Constitución. Incluso en un año tan reciente como 1984 se había creado una comisión sui géneris, la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (mejor conocida por su acrónimo COPRE), cuya misión se circunscribía en lo fundamental en llevar adelante el en parte diferido o no adecuadamente realizado programa constitucional.¹

Significa 1989 entonces un año de inflexión, donde comienza a discutirse incluso la posibilidad de revisar el texto fundamental de la República, a fin de si no relegitimar si airear el sistema político gracias a la modificación de algunos artículos constitucionales, y prioritariamente en dos aspectos: el sistema judicial y la inclusión de instituciones de participación popular (el referéndum). El primero bajo la percepción compartida de las graves carencias de funcionamiento del Estado de Derecho en Venezuela, y el segundo unido a la percepción de los excesos partidocráticos sobre la vida política.

1 La COPRE fue creada el 17 de diciembre de 1984 mediante la emisión del decreto 403 del presidente Jaime Lusinchi. Su primer considerando rezaba: “Considerando que la sociedad venezolana exige la adopción de medidas que aseguren el establecimiento de un Estado moderno, esencialmente democrático y eficiente, en el cual los postulados de la Constitución adquieran plena vigencia y la participación ciudadana constituya un elemento en la toma de decisiones de los Poderes Públicos” (*cfr.* COPRE 1988).

El Congreso Nacional designa el 6 de junio de 1989 una comisión bicameral con el propósito de concretar algunas enmiendas² a la Constitución. La decisión parlamentaria fue consensuada, nombrándose como presidente de la comisión (denominada Comisión Bicameral para la Revisión de la Constitución) al senador vitalicio y ex presidente de la República, Rafael Caldera.

El trabajo de la Bicameral fue sosegado y para algunos hasta parsimonioso en sus primeros tiempos de funcionamiento,³ revelando sí el paso de los días una acción incremental en el número y calidad de las propuestas, que no dejaron de crecer y que llevaron a la larga a la decisión de abandonar el procedimiento de enmienda y asumir el de reforma general de la Constitución.⁴ Para fines del año 1991 la Comisión Bicameral tenía prácticamente estructurada la agenda de la reforma, que incluía temáticas tan relevantes como los derechos humanos, la incorporación dentro del Poder Ejecutivo de la figura del primer ministro, aunque sin modificar la naturaleza presidencialista de nuestro sistema de gobierno, el defensor del pueblo, el referéndum

2 La Constitución de 1961 recogía dos procedimientos de revisión constitucional: la enmienda y la reforma general. El texto del 61 había sido enmendado en dos oportunidades (1973 y 1983). La reforma general implica un referéndum aprobatorio y culminaba en una nueva Constitución. Al instalarse la Comisión Bicameral, el 20 de junio, Caldera propuso una tercera enmienda y la consideración de 16 puntos para la discusión. El procedimiento de enmienda fue aprobado por la comisión.

3 La comisión Bicameral presentó su final al Congreso el 20 de marzo de 1992, es decir tuvo una duración de dos años y ocho meses. La calma de sus primeros meses de trabajo fue modificándose paulatinamente hasta hacerse estelar después del 4 de febrero. Injustamente fue calificada de “comisión clandestina”, “como en misa rezada” como la calificó Ramón Velásquez (la anécdota es recogida por Mendoza Angulo en artículo de prensa titulado “La hora de la reforma constitucional” publicado en el diario merideño Frontera el 10.04.1994). Un estudio retrospectivo revela que los temas que discutió y propuso la Bicameral se convirtieron en buena medida en la agenda temática fundamental de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Los parlamentarios de actuación sobresaliente en dicha comisión fueron, aparte de Caldera, Paris Montesinos, Luis Enrique Obertero, José Mendoza Angulo, Lolita Aniyar de Castro, Armando Aniyar y Pedro Pablo Aguilar (*cfr.* Congreso de la República (1992); Combellas (1993); Kornblith (1998).

4 La amplitud de los temas sugeridos, que implicaban un cambio cualitativo de la Constitución, el trámite menos engorroso del procedimiento y la conveniencia de consultar directamente al pueblo mediante el referéndum, fueron los factores que inclinaron a la Bicameral a abandonar la enmienda y proponer por consiguiente una reforma general de la Constitución.

popular, las leyes orgánicas, la rama judicial y el punto que nos concierne más directamente en este estudio: la Asamblea Nacional Constituyente (de ahora en adelante ANC).

En efecto, a partir de 1991 comienza efectivamente en el país el debate constituyente, que no cesará hasta la elección de la ANC el año 1999. ¿Por qué y cómo surge el debate constituyente? Varios factores entran en la consideración: en primer lugar, a mediados del año 91 había sido elegida la constituyente colombiana. La peculiar forma de su convocatoria fuera del marco formal establecido por la Constitución para ese entonces vigente, la definición de sus poderes y su amplia agenda temática, constituyeron foco permanente de atención para Venezuela, y más en concreto para la Bicameral; en segundo lugar, la aparición de un grupo de opinión política, el denominado Frente Patriótico,⁵ que a través de una serie de pronunciamientos altamente críticos respecto al sistema, concluía proponiendo la convocatoria de una ANC. Por supuesto que el radicalismo del Frente Patriótico no impregnó el talante reformista prevaleciente en la Bicameral, pero sí despertó un anhelo, cierto que todavía tímido, de transformación que identificaba al Congreso como un reducto de la clase política, sin ánimo real de atacar la raíz cuestionada del sistema; y por ende incapaz de adelantar los cambios exigidos por la realidad del país; y en tercer lugar, la conciencia que se hizo predominante en la comisión de la necesidad de abrir hacia el futuro compuertas de cambio no enrejadas en el *establishment* institucional. En suma, en el año 1991 se inicia el largo debate constituyente, catapultado por la fallida rebelión del 4 de febrero del año siguiente.

Los rebeldes del 4 de febrero, identificados como Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200) habían planteado en un manifiesto hecho público el 24 de junio de 1992, la revocación del mandato de los poderes públicos, gracias a la convocatoria de un referéndum que devolviera al pueblo su soberanía y autorizara a su vez la convocatoria de una ANC, “en la cual se defina a través de una nueva *Carta Magna*, el modelo de la sociedad hacia el cual deba enrumbarse la nación venezolana y en la cual no pueden participar ninguno de los

5 El Frente Patriótico constituido el año 1989 propuso la convocatoria de una constituyente a través de sendos manifiestos publicados periódicamente en la prensa nacional. Su presidente fue Juan Liscano y su coordinador general Manuel Quijada.

responsables de la destrucción de la República”.⁶ En resumen, el debate constituyente giraba el año 1992 en torno a tres posiciones claramente deslindadas entre sí. Ellas eran:

Primera posición: asumida por la Comisión Bicameral sostenía la conveniencia de reformar la Constitución de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 246 de la Constitución de 1961, donde se incluyera como institución futura de revisión constitucional la ANC.

Segunda posición: sus representantes más conspicuos fueron el Frente Patriótico y el MBR-200. Argüía la conveniencia de devolver al pueblo el ejercicio de la soberanía con la convocatoria de una constituyente originaria y radical que desplazara la clase dirigente y erigiera las bases de un nuevo sistema político.

Tercera posición: pecaríamos de injustos si no hiciéramos mención al aporte de un grupo de constitucionalistas liderados por Allan Brewer-Carías y de sectores de la sociedad civil (el prestigioso Centro Gumilla de los Jesuitas y el Centro al Servicio de la Acción Popular, CESAP), que junto al gobernador del estado Zulia, Oswaldo Álvarez Paz, propusieron una reforma puntual de la Constitución con el único cometido de contemplar y al unísono convocar la ANC.

Ninguna de las propuestas de revisión constitucional prosperó el año 1992. Se han destacado diversos elementos de explicación de su fracaso, entre otros: la amplitud y complejidad de la agenda temática; la ausencia de consenso político; el desinterés de una ciudadanía excluida de la participación y por ende ausente del debate; la división producida por temas de alta sensibilidad para sectores que sus intereses sentían como amenazados (palpable en el caso del derecho a la información veraz y la prohibición de la monopolización de los medios de

6 Cfr. Zago (1998: 183). El subrayado es de los autores. Valga la nota para destacar sucintamente la evolución de Chávez en su enfoque de la ANC: de uno insurreccional y jacobino, de lo cual dan cuenta los proyectos de decretos de febrero de 1992 (cfr. Arvelo Ramos/Catalá 1998), pasando por una concepción corporativa (por lo menos de Chávez en el año 1994 cuando propuso una constituyente integrada por una cámara obrera, una campesina, una estudiantil y una militar), hasta concluir en la concepción democrático-plebiscitaria de la que hablaremos más adelante.

comunicación social); e incluso el miedo a la imprevisibilidad del eventual referéndum constitucional.⁷ Por sobre todo, y como compendio de posturas y matices, prevaleció, no sólo el año 1992, sino incluso ya desde 1989,⁸ y proyectándose hasta el año 1998, la carencia en la clase política de una voluntad real de impulsar el cambio constitucional, sea vía reforma liderada por el Congreso, sea por la convocatoria de una ANC. Los escarceos para motivarla fueron cosméticos los años 1994 y 1995, pese a la reiterada proclama parlamentaria de llevar a feliz término la obra dejada inconclusa el año 1992 y la circunstancia de que el más representativo de sus impulsores ocupaba ahora, por segunda vez en su carrera política, la presidencia de la República.

2. La convocatoria constituyente de 1999

La contundente victoria de Hugo Chávez el 6 de diciembre de 1998 despejó el camino a la convocatoria constituyente. Chávez como candidato presidencial había jerarquizado como *issue* prioritario de su campaña electoral la ANC. Se tenía claro el objetivo, no había duda sobre el particular, no así sobre el cómo, ante la incertidumbre de un régimen proclamadamente constitucional que no contemplaba entre sus procedimientos de revisión la ANC, amén de que para esa fecha Chávez no había aclarado decisiones importantes, como la elección, número y postulación de los constituyentes, eventuales poderes, relación con los poderes constituidos y duración de la asamblea. Ciertamente que la concepción constituyente de Chávez tampoco admitía dudas: una constituyente originaria, “soberanísima” como le gustaba llamarla, no restringida ni “embozalada” por los poderes constituidos, que debían subordinarse a sus dictados. A ello se agregaba la pregunta sobre la iniciativa de convocatoria: Chávez como presidente, la inicia-

7 Esta última hipótesis la explora Arturo Peraza en su aporte aún no publicado al seminario “Procesos constituyentes, reformas constitucionales y constituciones en la historia de Venezuela II, 1901-1999”, del Doctorado en Ciencias Políticas de la UCV, titulado “Reforma constitucional, año 1992 ¿por qué fracasó?”. Es justicia de mi parte estampar aquí un reconocimiento.

8 Salvo preclaras excepciones que confirman la regla la clase política venezolana no se planteó en serio entre 1989 y 1998, cuando se precipita la victoria de Chávez, ni la reforma general de la Constitución y menos la convocatoria de una constituyente. Su actuación, si vale la justa expresión, se caracterizó por ser “gatopardiana”.

tiva popular y/o el Congreso, que de integración diversa, ahora pedía sumarse a un sentir ya mayoritario en la población.

Chávez resuelve el tema pendiente de la carpintería constituyente, fenómeno inédito en el país, dada la erección de una constituyente originaria y plenipotenciaria, dentro de un orden constitucional legítimo como lo representaba la Constitución vigente de 1961, designando oficiosamente en los primeros días de enero de 1999, como presidente electo y por tanto antes de asumir la primera magistratura nacional el 2 de febrero, una comisión *ad hoc* denominada como Comisión Presidencial Constituyente, con el objetivo de asesorar al primer mandatario en la elaboración del decreto y las bases comiciales de la ANC.⁹ El trabajo de la comisión fue arduo e intenso, dado repito, a lo inédito de la experiencia; en ella Chávez participó personalmente, oyendo y calibrando posiciones. Sumariamente los temas discutidos y resueltos fueron:

1. La naturaleza originaria de los poderes de la ANC. Se trató de un punto con amplio consenso, a excepción de la voz disidente de Jorge Olavarría,¹⁰ que implicó posteriormente su airada renuncia a la comisión.
2. La realización de un referéndum consultivo a tenor de lo establecido en el artículo 181 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política¹¹ para que el pueblo se pronunciara sobre la convocatoria de la ANC.
3. La iniciativa constituyente la asumiría directamente el presidente, descartando la colaboración del Congreso y la eventual iniciativa popular.

9 Se trató de una comisión plural que hizo un aporte decisivo al diseño de la metodología de la convocatoria constituyente. La integraron: Tulio Álvarez, Oswaldo Álvarez Paz, Ricardo Combellas, Javier Elechiguerra, Hermann Escarrá, Ernesto Mayz Vallenilla, Jorge Olavarría, Alfredo Peña, Manuel Quijada, Tarek William Saab y Ángela Zago.

10 Jorge Olavarría sostenía la conveniencia de transitar sin traumas el paso de la Constitución de 1961 a la nueva Constitución. En su momento también sostuvo la tesis de la “dictadura necesaria” ante la incapacidad del sistema político para preservar el orden.

11 La COPRE propuso a los proyectistas de la ley el referéndum consultivo. Nunca nos imaginamos que gracias a ese recurso se convocaría la ANC.

4. La ANC se integraría por alrededor de 100 miembros, electos por los estados en su mayoría, junto a un número electo en una circunscripción nacional y una representación de los pueblos indígenas, punto sobre el cual Chávez puso particular hincapié.
5. El método electoral sería personalizado, descartándose así la representación proporcional de las minorías.¹²
6. La duración de la ANC no debería exceder los 6 meses.
7. La Constitución aprobada por la ANC sería ratificada por el pueblo mediante referéndum.

Sin embargo, el punto álgido de esos días de inusitada expectativa lo constituyó la interrogante en torno a cómo respondería la Corte Suprema de Justicia, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución, al reto de la convocatoria constituyente fuera de los procedimientos pautados en la Constitución vigente de 1961, interrogante resuelta gracias a dos decisiones de la Corte el 19 de enero de 1999, que despejaron definitivamente el camino a la ANC. Los argumentos fundamentales de los fallos judiciales, fuertemente controvertidos por la doctrina constitucional patria y comparada,¹³ se pueden sintetizar así:

- El titular de la soberanía, el pueblo, la ejercita a través del sufragio en la designación de los representantes, pero también directamente en los casos en que expresamente no los haya delegado.
- Los mecanismos de reforma pautados en la Constitución limitan los poderes constituidos, como poder constituyente derivado, pero nunca al poder constituyente, dada su naturaleza originaria. Como reza el fallo de la ponencia redactada por el magistrado La Roche: “Es inmanente a su naturaleza de poder soberano, ilimitado y principalmente originario, el no estar regulado por las normas jurídicas que hayan podido derivar de los poderes constituidos, aun cuando éstos ejerzan de manera extraordinaria la función constituyente”.

12 Se ha criticado fuertemente la adopción de dicho método. En descargo de la comisión hay que señalar la matriz favorable hacia el mismo que surgía desde dentro de la sociedad civil bajo el argumento de la uninominalidad.

13 La bibliografía jurídica patria es abundante, lo que me exime de presentarla aquí. Entre los autores foráneos cabe citar a Pace (1999) y Lösing (2000).

- “El referéndum previsto en la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política es un derecho inherente a la persona humana no enumerado, cuyo ejercicio se fundamenta en el artículo 50 de la Constitución”.¹⁴ En suma, gracias al recurso referendario previsto en la legislación electoral señalada, la Corte despejó el camino a la convocatoria constituyente. En palabras de Argenis Urdaneta (2002: 25), que hago más: “Con esas decisiones, la Corte brindó un piso sólido de legitimidad, de constitucionalidad y de legalidad a la convocatoria de una consulta popular sobre la posibilidad de convocar una Asamblea Constituyente”. El 2 de febrero Chávez asume la presidencia de la República con una pose polémica y un acto trascendental: la pose polémica es el juramento ante la Constitución de 1961 que califica de “moribunda” (según el Diccionario de la Real Academia Española [DRAE]: “Que está muriendo o muy cercano a morir”), y el acto trascendental es la emisión del decreto presidencial mediante el cual se consulta al pueblo la convocatoria constituyente. La primera pregunta, donde se establecen los propósitos transformadores de la ANC, no suscita controversia, sí la segunda, dado su evidente tinte plebiscitario.¹⁵

Al unísono de la apertura por parte del presidente Chávez de un amplio abanico de consulta con los sectores representativos en lo político, económico y social de la vida nacional, que confluye en la fijación el 10 de marzo de las “Bases comiciales para el referendo consultivo sobre la convocatoria de la ANC”, cuya fecha se determina para el 25 de abril, se da inicio a una andanada de recursos de nulidad del decreto, que determinan decisiones correctoras por parte de la jurisdicción constitucional que no desnaturalizan la razón de ser de la consulta, sino que incorporan al Consejo Nacional Electoral a la decisión referendaria, gracias a la competencia que se le atribuye para examinar y modificar las bases propuestas por el Ejecutivo Nacional, lo que el máximo organismo electoral realiza parcial y matizadamente.¹⁶

14 El artículo 50 de la Constitución de 1961 consagra una cláusula abierta de derechos y garantías que se repite en el artículo 22 de la Constitución de 1999.

15 Chávez era un convencido de que la contundente victoria de diciembre de 1998 lo autorizaba para fijar unilateralmente las reglas de la constituyente.

16 Cfr. Urdaneta (2002).

En conclusión, los aspectos más relevantes de la convocatoria constituyente, normados en las Bases Comiciales son los siguientes:

- El propósito de la ANC: Como lo recoge la primera pregunta del referéndum: “transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que permita el funcionamiento efectivo de una democracia social y participativa”. En pocas palabras, una ANC transformadora con la meta trazada de adelantar un proceso profundo de cambio político, jurídico y social.
- Su integración: De conformación unicameral, integrada por 131 miembros principales (sin suplentes), elegidos de forma personalizada del siguiente modo:
 - a) 104 constituyentes en 24 circunscripciones regionales, coincidentes con los estados y el Distrito Federal, manteniendo el criterio del 1% de la población total del país. En este supuesto el elector dispone de tantos votos como constituyentes se eligen en la correspondiente circunscripción.
 - b) 24 constituyentes en una circunscripción nacional, para lo cual el elector dispone de 10 votos.
 - c) 3 constituyentes representantes de las comunidades indígenas, atendiendo a la pluralidad de culturas existentes en las distintas regiones del país.
- Validez de la convocatoria refrendaría a la ANC: Independientemente del número de sufragantes, se estableció la aprobación de la convocatoria siempre que el número de votos afirmativos fuese superior al de los votos negativos.
- Régimen de postulaciones: Abierto, rompiendo por lo menos formalmente con la mediatización político-partidista prevaleciente. Postularon la sociedad civil, los partidos y la propia iniciativa de los candidatos.
- Duración de la ANC: 180 días a partir de su instalación.
- Requisitos de elegibilidad e inelegibilidad de los constituyentes: La condición de venezolano por nacimiento y mayor de 21 años para optar a ser miembro de la ANC. Las altas magistraturas del Estado, militares activos y representantes electos en funciones no

pueden optar a la asamblea salvo que renuncien al cargo. Los constituyentes gozan de inmunidad y su dedicación es exclusiva.

- Referéndum constitucional: Se fija el referéndum de aprobación de la nueva Constitución dentro de los 30 días continuos a su sanción por la ANC. No se establece un quórum de concurrencia de los electores a la jornada refrendaría, bastando para su aprobación definitiva que el número de votos afirmativos sea superior al número de votos negativos.
- Límites de la ANC: Con el fin de conjurar las tentaciones del poder se proclaman como límites infranqueables de la ANC, los valores y principios de nuestra historia republicana (un concepto vago e indeterminado), el cumplimiento de los tratados y compromisos internacionales, así como el carácter progresivo de los derechos humanos (que supone poner a la ANC bajo el paraguas protector del sistema internacional de salvaguardia de los derechos humanos), y la garantía de la razón de ser y metodología democráticas en sus acciones y decisiones. Sobre este particular la Corte Suprema de Justicia, para evitar interpretaciones conducentes a una definición originaria y por ende plenipotenciaria de la ANC, ordenó la reformulación de la base comicial octava que resaltaba el poder originario de la ANC. Sin embargo, el punto no quedaría totalmente resuelto dada la posición unánime de Chávez y sus partidarios a favor de una constituyente originaria que haría valer sus poderes una vez instalada, en representación del poder constituyente del pueblo.

El referéndum efectuado el 25 de abril mostró una clara mayoría de electores a favor de la convocatoria constituyente, aunque los niveles de abstención se mantuvieron elevados,¹⁷ lo que revelaba la reiteración de la apatía política de un buen número de venezolanos. Lo cierto es que la campaña refrendaría no fue ni mucho menos polarizada y la promoción del sí no resultó particularmente entusiasta. Diferente resultaron las elecciones constituyentes realizadas el 25 de julio. Ciertamente que los niveles de abstención se mantuvieron altos,¹⁸ resultando reve-

17 El sí obtuvo en la primera pregunta el 87,88% de los votos y el 81,86% en la segunda pregunta. La abstención se elevó al 62,22% de los electores.

18 El 53,77% de los electores.

lador (lo que repetía el fenómeno constituyente de 1946) los resultados: una mayoría hegemónica y apabullante de los candidatos del proyecto liderado por Chávez, unidos en una coalición electoral denominada Polo Patriótico (integrada entre otros por el Movimiento V República [MVR], el Movimiento al Socialismo [MAS], el PPT [Patria para Todos] y el Partido Comunista de Venezuela), y respaldada por una estrategia electoral coherente y agresiva, que desvirtuó la personalización del sufragio gracias a la conformación del *kino*,¹⁹ fórmula de llave cerrada identificada por el símbolo de la gorra roja que facilitaba al elector la selección de los candidatos propuestos por la coalición.

Al contrario, la oposición política se presentó desarticulada: los partidos tradicionales, Acción Democrática y el Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI), no se recuperaban del trauma de la derrota y los desaciertos electorales de 1998. Se les identificaba con los males del país, las “cúpulas podridas”, como las bautizó Chávez, causantes de las frustraciones y desesperanzas de la inmensa mayoría de los venezolanos. Incluso los socialcristianos copeyanos habían llegado al extremo de decidir “suicidarse en primavera”, al renunciar su dirección nacional en pleno para “expiar sus culpas” y someterse a una constituyente partidaria; por otra parte, el amplio universo de los candidatos de la sociedad civil compitió sin unión ni espíritu de colaboración para sumar voluntades, todo lo cual facilitó el abrumador triunfo de la alianza chavista, que con alrededor del 60% de votos obtuvo una sobre representación de alrededor del 94% de las plazas en disputa.

En efecto, los 131 miembros de la ANC se distribuyeron así: 121 de los 128 constituyentes electos representaron el Polo Patriótico. Este presentó 20 candidatos en la circunscripción nacional, todos fueron electos. Las cuatro plazas restantes fueron ocupadas por 2 candidatos independientes (Allan Brewer-Carías y Jorge Olavarría), un representante identificado con Acción Democrática (Claudio Fermín) y el cuarto identificado con Proyecto Venezuela (Alberto Franceschi). Los tres restantes constituyentes no electos dentro del *kino* chavista fueron: Antonio Di Giampaolo, independiente por el estado Aragua,

19 Para los lectores extranjeros de este trabajo aclaro que el *kino* es un popular juego de lotería parecido al *lotto* alemán.

que se benefició de un conflicto interno en la coalición del Polo Patriótico en dicho estado; Antonia Muñoz, reconocida partidaria de Chávez (luego sería elegida gobernadora del estado Portuguesa apoyada por el MVR), excluida del *kino* por conflictos internos en el seno del movimiento chavista; y Virgilio Ávila Vivas, dirigente de Acción Democrática, en representación del estado Nueva Esparta. Por último, los tres representantes de las comunidades indígenas estaban plenamente identificados con el presidente, a quien reconocían como defensor y promotor de sus preteridas demandas de autonomía al Estado nacional.

3. La Asamblea Nacional Constituyente

La ANC se instaló solemnemente en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela el 3 de agosto de 1999 y finalizó su trabajo el 30 de enero del 2000. En total se reunió en 63 sesiones, en el hemisiclo de la Cámara de Diputados del Congreso de la República, el histórico Capitolio Nacional, en Caracas, con las excepciones de la sesión inaugural señalada y la de clausura que tuvo lugar en Ciudad Bolívar, la antigua Angostura, como homenaje a la Constitución de 1819, que como es sabido se promulgó allí bajo la impronta del Libertador Simón Bolívar. Las actividades de la ANC pueden dividirse en dos: los actos y decretos que en uso de sus autoproclamados poderes originarios implicaron una interferencia efectiva en el funcionamiento de los poderes establecidos, y el proceso de elaboración propiamente dicho de la nueva Constitución. Para su mejor comprensión los analizaré por separado.

3.1 La ANC y los poderes constituidos

Una vez instalada la ANC procede a elaborar su Estatuto de Funcionamiento donde claramente define sus poderes originarios, en virtud de lo cual puede limitar o decidir la cesación de las actividades de los órganos que conforman el poder público, en otras palabras, todas las instituciones legitimadas por la Constitución de 1961, desde el presidente de la República, pasando por el Congreso y la rama judicial hasta los alcaldes de las regiones más recónditas de la geografía nacional. Explícitamente el Estatuto resalta la subordinación de los poderes constituidos a los dictados de la ANC, como “depositaria de la

voluntad popular y expresión de su soberanía”, es decir como representante del poder constituyente del pueblo, y decreta el mantenimiento de la vigencia de la Constitución de 1961, a partir de cuya decisión pasó a ser efectivamente una Constitución “moribunda” en la medida en que mantendría su vigencia en todo aquello que no colidiera o contradijera las decisiones de la ANC. En resumen, la Constitución de 1961 fue sometida a una *capitis diminutio*, sólo explicable por la conveniencia de impedir la inseguridad jurídica y el vacío normativo en el país.

En consecuencia, la ANC decretó como uno de sus primeros actos, en virtud de consideraciones de emergencia nacional, la reorganización de todos los órganos del poder público, que la autorizaban para tomar las medidas de intervención, modificación o suspensión que libremente decidiera.

Dentro de los decretos, verdaderos actos constituyentes que la ANC no sometió a ningún control externo, hubo desde nombramientos y destituciones de algunos funcionarios, ratificación de otros (el presidente Chávez fue ratificado formal y solemnemente en el cargo, juramentándose de nuevo ante la ANC), suspensión de comicios locales así como autorizaciones crediticias al Gobierno, hasta la aprobación del presupuesto nacional e incluso la declaratoria de un estado de excepción ante la catástrofe natural que se ensañó contra los habitantes de estado Vargas.

De manera especial cabe destacar dos intervenciones de la ANC en los poderes constituidos, relevantes por sus consecuencias: en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial. Es de recalcar que el Poder Ejecutivo quedó incólume, a lo más se ratificaron decisiones del presidente, y a los funcionarios electos al nivel regional y local (gobernadores y alcaldes) les fue respetada su investidura, pese a la presión interventora de algunos constituyentes. En pocas palabras, la ANC no hizo *tabula rasa*, como cabría a primera vista pensarse, con la organización del Estado, cuya conducción no sufrió mayores embates, no sólo por el tradicional ejecutivismo de nuestro sistema presidencialista, sino porque efectivamente la ANC hizo un uso ponderado de sus poderes plenipotenciarios.

La cohabitación ANC-Congreso de la República es reveladora de que no se produjo ni mucho menos en Venezuela un gobierno de asamblea. Por supuesto que fue una relación hegemónica donde si

bien no se disolvió el parlamento, sí fue efectivamente disminuido en sus funciones. En efecto, a través de un “decreto de regulación de las funciones del poder legislativo”, la ANC restringió expresamente sus funciones legislativas, se redujeron drásticamente sus comisiones y se suspendieron las sesiones del plenario. Es más, la ANC decidió ejercer directamente un rol de tutelaje del Congreso, gracias a la creación de una comisión legislativa designada de su propio seno, así como por intermedio de una comisión de investigación sobre sus actividades administrativas. En la realidad el Congreso se desnaturalizó al perder su rol deliberante, sumido en un proceso de muerte si bien no súbita sí progresiva, cuyo decreto de defunción en definitiva lo que hizo fue formalizar su total desdibujamiento. Ello se manifestó además de forma simbólica y gráfica. Aprovechando el receso parlamentario de agosto, la ANC ocupó sus instalaciones, dejando arrinconadas en algunas dependencias, bajo el eufemismo de compartir espacios, sus alicaídas funciones. Hubo en los hechos un conato de rebelión parlamentaria que se manifestó en disturbios en los alrededores del Capitolio, sin mayores consecuencias en sus reales efectos, pues el clima de opinión predominante en el país lo identificaba como expresión de una clase política desprestigiada que se negaba a desprenderse de sus cuestionados privilegios.

El diferendo poder constituyente-poderes constituidos se trasladó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde se dio la última batalla por limitar las decisiones de la ANC. El comentario viene al caso dada la impugnación de los decretos regulativos de las funciones del Congreso, que devino en la incuestionable entronización de la ANC como poder originario supraconstitucional. El máximo tribunal había permanecido y de hecho permaneció intocado hasta la aprobación de la nueva Constitución. En la práctica aceptó convivir con la ANC, luego de la trascendental decisión que abrió las puertas de su convocatoria, bajo el acuerdo tácito de que se respetaran sus funciones jurisdiccionales, siempre que no afectaran el funcionamiento de la ANC, y a su vez aceptara la decisión de la asamblea de iniciar el proceso de reorganización del Poder Judicial gracias a la creación de una comisión de emergencia judicial.²⁰ Sin embargo, la impugnación de los decretos

20 El tema del destino de la CSJ fue objeto de una tensa polémica en el seno de la ANC. Mientras un grupo de constituyentes solicitaba medidas radicales que pa-

aludidos puso a prueba el celo jurisdiccional del tribunal. La presidenta del alto tribunal, la magistrada Cecilia Sosa, que había cumplido un relevante papel como facilitadora del proceso constituyente, optó antes por renunciar dado lo que consideraba como complacencia de la mayoría de los magistrados ante la intervención judicial por parte de la ANC. La decisión, que acogía el novedoso concepto de supraconstitucionalidad no fue unánime, pues contó con 6 votos salvados, concluía con un aserto incontrovertible a favor de la ANC:

el recurso de nulidad es improcedente, pues el fundamento del acto impugnado no puede ser la Constitución vigente, desde que la soberanía popular se convierte, a través de la Asamblea Nacional Constituyente, en supremacía de la Constitución, por razón del carácter representativo del Poder Constituyente, es decir, como mecanismo jurídico de producción originaria del nuevo régimen constitucional de la República.²¹

En palabras de Sosa, la Corte prefirió “suicidarse” antes de ser “asesinada”. En la realidad, la Corte se había rendido ante el principio del poder constituyente originario y actuó en consecuencia.

3.2 El proceso de la elaboración de la Constitución de 1999

Si bien es cierto que al iniciar la ANC sus labores no existía un proyecto oficial de Constitución, si existían ideas bastante claras de lo que se quería reformar: cuáles instituciones debían suprimirse o permanecer en lo fundamental, cuáles rediseñar y cuáles crear. La Comisión Bicameral que presidió Caldera recogía un conjunto de propuestas discutidas a lo largo del decenio 1989-1999, que constituía un rico acervo con el cual contar; igualmente el presidente Chávez, con la colaboración de una comisión oficiosa que denominó Comisión Presidencial Constituyente, presentó a la ANC un anteproyecto de Constitución bajo el título “Ideas fundamentales para la Constitución Bolivariana de la V República”. Los partidos Acción Democrática y Proyecto Venezuela hicieron llegar a la asamblea sus propuestas constitucionales al igual que Convergencia y la Asociación Civil Primero Justicia, que posteriormente se constituiría como partido político. El Polo Patriótico, a través de su comisión constitucional presidida por el constituyente Guillermo García Ponce, hizo llegar a la asamblea su

saban por su disolución, la mayoría acogió la vía de la negociación con los altos magistrados.

21 Cfr. Tribunal Supremo de Justicia (2000).

anteproyecto de Constitución, a lo que hay que agregar la propuesta de los constituyentes Combellas y Tablante, quienes con la colaboración del jurista Román Duque Corredor, presentaron las “Bases para la Constitución Ciudadana” a la ANC.

A ello se suma el concurso de diversas organizaciones (ambientalistas, de derechos humanos, las universidades, el mundo de la cultura y el deporte, las mujeres, el clero católico, los indígenas, la institución militar, los trabajadores, los empresarios, las iglesias evangélicas, los gobernadores de los estados, los alcaldes), entre otras organizaciones públicas y de la sociedad civil, que aportaron a la asamblea sus demandas constitucionales.

En suma, la ANC a través de sus comisiones, que operaban puertas abiertas, recogió demandas variopintas de personas y grupos que tuviesen a bien acercarse a sus sitios de reunión. En efecto, la ANC distribuyó su trabajo en 20 comisiones identificadas por los grandes temas constitucionales,²² cuyos productos debían ser procesados y sistematizados por la primera comisión, la Comisión Constitucional, cuya tarea culminante era entregar el proyecto ensamblado a la plenaria para su definitiva consideración y aprobación luego de las deliberaciones de rigor.

Pueden claramente deslindarse dos etapas en el debate constituyente: la primera, amplia y participativa, tanto en el plenario como en las comisiones, donde los constituyentes, unos más que otros, expusieron con largueza sus puntos de vista sobre la emergencia y consiguiente reorganización de los poderes constituidos, así como sobre la primera discusión del anteproyecto de Constitución, elaborado éste bajo un procedimiento de sistematización por la Comisión Constitucional. Esta etapa se prolongó desde principios de agosto hasta mediados de noviembre de 1999; la segunda etapa se corresponde con la segunda discusión del anteproyecto de Constitución, y se prolonga desde el 12 de noviembre cuando se aprueba la reglamentación a regir para el debate, hasta el 19 del mismo mes (el increíble lapso de una semana), fecha en que concluye la segunda discusión y se firma en acto solemne el proyecto definitivo de Constitución por parte de los

22 Cada comisión trabajó con mucha independencia, con su propio grupo de asesores. La falta de mayor fluidez e intensidad en sus relaciones entre sí y con la comisión constitucional dificultó en grado sumo la labor de articulación y contribuyó a la precipitación del producto final y la amplia extensión del texto definitivo.

miembros de la ANC. Se trató de una decisión draconiana de la directiva de la ANC que impidió un mayor debate, y algo sumamente grave, la negación al país de la oportunidad de conocer el proyecto en su totalidad y proponerle últimas modificaciones. Se actuó con arrogancia, *manu militari*, por parte de la directiva (Luis Miquilena, Isaías Rodríguez y Aristóbulo Istúriz), quienes bajo el argumento de la premura, *nolens volens* decidieron que el proyecto debía someterse a referéndum popular el 15 de diciembre, ejerciendo así una verdadera dictadura, no prescrita en el Estatuto, sobre el resto de los constituyentes. En definitiva, la ANC se tuvo miedo a sí misma, apropiándose su cúpula de sus decisiones más relevantes. La premura y la improvisación que guiaron sus últimos actos, no dejaron de producir a la larga consecuencias indeseables: confusión sobre cual texto de Constitución se había efectivamente aprobado, debate sobre inclusión o exclusión de normas que no constan discutidas en el diario de debates e imperdonables errores gramaticales, de sintaxis y estilo, cuyas consecuencias todavía hoy padece, para desprestigio del texto fundamental de la República, el ciudadano común, la academia universitaria y el intérprete de la Constitución.²³

Pudiese parecer a primera vista, dada la composición hegemónica de la asamblea que el debate fue insulso y monótono. Todo lo contrario, sobre todo en la primera etapa señalada, aunque mucho menos en la segunda, dado el apresuramiento y la ausencia de deliberación que impuso la directiva. Los constituyentes, unos más unos menos, expresaron con libertad sus opiniones, determinando algunas veces la fuerza argumental de las ideas cambios de orientación en la decisiones. Cierro que con el paso del furor de las primeras semanas de deliberación, la fuerza mayoritaria o núcleo duro de la ANC, la fracción del MVR cohesionó sus miembros e impuso su disciplina, pero ello no fue a costa de la florida dialéctica que imperó hasta que el “alicate”²⁴ de la directiva, bajo la mirada escrutadora del constituyente Ernesto Alvarenga y la inefable proposición de cerrar el debate por parte del consti-

23 La bibliografía patria resiente la carencia de un estudio sistemático y descarnado que recoja los intrínquilos del proceso de elaboración de la Constitución de 1999.

24 Término del argot parlamentario venezolano que alude a la cancelación abrupta de un debate bajo el argumento de que el tema está suficientemente discutido. El abuso del “alicate” por parte de la directiva de la ANC fue a todas luces excesivo, en detrimento de la naturaleza deliberante del proceso constituyente.

tuyente Néstor León Heredia, cancelaba toda posibilidad de hacer brillar la dialéctica discursiva.

Aunque la efectiva oposición en la ANC estuviese integrada por escasamente seis representantes (Claudio Fermín, Allan Brewer-Carías, Alberto Franceschi, Jorge Olavarría, Antonio Di Giampaolo y Virgilio Ávila Vivas), su aporte a la asamblea fue sobresaliente en propuestas e iniciativas, lo cual contribuyó a animar el debate y mejorar la redacción del proyecto de Constitución. Lamentablemente sólo dos de ellos suscribieron la nueva Constitución (Brewer y Di Giampaolo), aunque los otros cuatro adujeron fundamentadas razones para no hacerlo.

Uno de los puntos más controvertidos del proceso constituyente lo fue la impronta de Chávez sobre el debate y la Constitución definitivamente aprobada. Una alegre conseja aduce que Chávez prácticamente dictó la Constitución a sus seguidores, que cual amanuenses se contentaron con transcribir su dictado. Nada más alejado de la verdad. Baste comparar el proyecto de Constitución que el presidente presentó a consideración de la ANC con el definitivamente aprobado para refutarlo. Es el mayor mentís a tan insidiosa conseja. No obstante, de allí a inferir que Chávez se mantuvo olímpicamente alejado de sus deliberaciones se interpone un espacioso trecho. La verdad sea dicha: Chávez estuvo pendiente de todas y cada una de las decisiones de la ANC, incluso cuando realizaba sus largas giras presidenciales fuera del país. En los momentos de decisiones álgidas la comunicación era fluida y permanente. Todos los constituyentes recordamos el famoso teléfono celular de Antonio Rodríguez, uno de los asambleístas de mayor confianza de Chávez, que fungía de correa de transmisión directa e inmediata con Luis Miquilena, este último en su condición de presidente de la ANC.

¿Cuáles eran en definitiva los temas constitucionales más caros al presidente? No es difícil adivinarlo: el cambio de nombre de la República; para Chávez resultaba una obsesión que la Constitución se denominara bolivariana;²⁵ igualmente resultaba crucial para él la reelección presidencial, propuesta sobre la que contó con mayores adheren-

25 Justo es reconocerlo, Chávez a lo largo de su vida política ha sido coherente con este punto: la Constitución debería estar imbuida del ideario bolivariano, tanto como su movimiento y la república que reclamaba su refundación.

tes de lo que se hubiera imaginado; aumentar el período presidencial a 6 años también era una propuesta no negociable, como la confusa adjetivación “protagónica” de su concepto de democracia; la instauración del Poder Moral y el Poder Electoral como ramas del poder público independientes de la tradicional trilogía de poderes, siguiendo por lo menos en lo formal el modelo bolivariano; la autonomización creciente de la Fuerza Armada Nacional de la tradicional subordinación y tutelaje civil (aspecto que lo apartaba del ideario constitucional de Bolívar); así como una mayor concentración del Poder Ejecutivo en desmedro de las otras ramas del poder público,²⁶ y con especial énfasis en restringir la independencia y autonomía regional y local, que a duras penas comenzaba su andadura a partir de la elección directa de gobernadores y alcaldes el año 1989.

A todas éstas, ¿cuáles fueron los temas más debatidos (no necesariamente los más relevantes) por la constituyente? Intentaré una respuesta sencilla pero contundente:

- El cambio de nombre de la República, de ahora en adelante República Bolivariana de Venezuela, no fue un tema de unión sino por el contrario de división entre los asambleístas. La verdad sea dicha, sólo una minoría estaba convencida de sus bondades y así se expresó en la primera discusión del proyecto, donde la propuesta fue abrumadoramente derrotada. No obstante, la contundente posición de Chávez a favor de la propuesta inclinó la balanza en la segunda discusión, al lograr torcer el voto de la mayoría de los constituyentes, algunos de los cuales tuvieron que tragarse sus palabras por medio de las cuales habían argumentado pocos días antes su rechazo, ante el dictado imperativo de la voz de mando oficial que los conminó a bajar la cerviz y cambiar sumisamente de opinión.
- La eliminación de la segunda cámara del Congreso, el Senado, suscitó un animado debate, libre y abierto al contrario del anterior, donde la mayoría de los constituyentes hizo valer, con variable ca-

26 Aunque en este punto es Chávez coherente con la tradición presidencialista venezolana que se remonta a Bolívar. Recordemos sus frases del Discurso de Angostura en 1819: “Nada es tan peligroso respecto al pueblo como la debilidad del Ejecutivo... En las Repúblicas el Ejecutivo debe ser el más fuerte porque todo conspira contra él”; y del Discurso al Congreso Constituyente de Bolivia en 1826: “El Presidente de la República viene a ser en nuestra Constitución, como el Sol que, firme en su centro, da vida al Universo (Bolívar 1948: 165 y 324).

lidad discursiva su personal opinión. Triunfó la tesis unicameralista, pese a la pobreza argumental aducida por sus más apasionados defensores,²⁷ que no entendieron la relevancia de la segunda cámara para la edificación de un auténtico Estado federal, como lo estipulaba como principio fundamental la nueva Constitución.

- Un tema de encendido debate lo constituyó la definición de los alcances y límites de los derechos de los pueblos indígenas, que por cierto terminó siendo un punto de avance en el constitucionalismo venezolano, al ponerse a la altura de los tiempos en una situación inveteradamente relegada de nuestro ser nacional. La ANC se dividió en dos: los “nacionalistas” que jerarquizaban el principio de la soberanía nacional por sobre una interpretación extensiva del principio de autodeterminación de los pueblos y sus peligros para la integridad territorial de la República; y los “indigenistas” que privilegiaban el fortalecimiento de las culturas y los pueblos indígenas por sobre una interpretación excesivamente estadista de los principios de la seguridad y defensa de la nación. Las diferencias en buena medida fueron zanjadas con la definitiva redacción del actual artículo 126 de la Constitución.
- La doble vuelta o balotaje, en particular el referido a la elección del presidente de la República, tuvo un destino curioso en el seno de la ANC. El balotaje aparecía como uno de los ejes fundamentales de la campaña presidencial de Chávez, que echaba en cara a la ingobernabilidad las mayorías precarias con las que habían sido electos presidentes en Venezuela, de modo particular tanto el primero como el segundo mandato de Caldera. Una vez iniciado el debate Miquilena hizo una fervorosa defensa de la nueva institución que sorpresivamente fue totalmente abandonada sin ninguna explicación a la hora de la definitiva decisión.²⁸
- Asimismo el MVR había hecho un punto de honor de la campaña: refrendaría la eliminación de las asambleas legislativas de los es-

27 *Cfr.* con el diario de debates de la ANC (1999-2000), sesión de fecha 03.11.1999.

28 El sorpresivo cambio de 180 grados estuvo en el “síndrome Tabare”. Tabare Vázquez, candidato de la izquierda en las elecciones presidenciales de Uruguay que tuvieron lugar en esos días, ganó la primera vuelta y perdió la segunda ante el candidato Batlle, fruto del apoyo a este último de los dos grandes partidos tradicionales de dicho país. Tal situación impactó fuertemente a la mayoría de los constituyentes en su decisión de abandonar el balotaje.

tados, tildadas de centros clientelares proclives a componendas y corruptelas de toda laya. A la hora de la verdad, luego de un florido debate, el proclamado cambio fue puramente nominal y hasta “gatopardiano”, pues sencillamente confluyó en que las desaparecidas asambleas legislativas pasaron ahora a llamarse consejos legislativos de los estados.

- Una hora triste de los partidarios del federalismo lo constituyó el vaciamiento de competencias tributarias de los estados, una reiterada demanda de las regiones por alcanzar mayor independencia fiscal frente al excesivo poder centralizado del Estado. Los federalistas constituyentes habían logrado aprobar en la primera discusión del proyecto de Constitución una norma del siguiente tenor: constituye competencia exclusiva de los estados “la creación, organización, control y administración de impuestos generales a las ventas al detalle, así como la organización, control y administración del impuesto al papel sellado, timbres y estampillas, impuestos específicos al consumo de gasolina y otros derivados de hidrocarburos y de los impuestos referentes a sucesiones, donaciones y ramos conexos”. En la segunda discusión fue suprimido el artículo, gracias a la intermediación impositiva del presidente Chávez.
- Punto relevante del debate constituyente consistió en la decisión sobre la consagración constitucional del principio de la nacionalización petrolera, temática sobre la que contrapuntearon dos posiciones: los “nacionalistas”, partidarios del control soberano de la industria petrolera, jerarquizada en la nueva Constitución, y los “aperturistas”, que consideraban que el tema debía manejarse pragmáticamente, y por ende no tenía por qué rigidificarse en el texto fundamental. Terminó predominando una tesis de consenso (artículo 303 de la Constitución), en virtud de lo cual el Estado se reserva la totalidad de las acciones de Petróleos de Venezuela, S.A. y a su vez se autoriza la participación del sector privado en el manejo de las filiales y de otras formas de asociación empresarial.
- La disolución de la Asamblea Nacional por parte del presidente de la República en el supuesto señalado por la *Lex Superior* (artículo 240 de la Constitución), fue un tema de amplio debate, aunque al fin se entendió que no se trataba de una institución cesarista de peligrosas consecuencias, sino de un recurso del primer mandata-

rio para preservar la gobernabilidad ante un eventual bloqueo de su gestión por parte de una mayoría hostil de la Asamblea Nacional.

- La eventualidad de la eliminación de la inmunidad penal de los diputados a la Asamblea Nacional suscitó controversia en la ANC, tanto que dicha tesis triunfó en la primera discusión del proyecto, para ser definitivamente subsanada en la segunda discusión, en términos semejantes a los contemplados por la Constitución de 1961, con la diferencia que ahora su detención y enjuiciamiento conforma una atribución privativa del Tribunal Supremo de Justicia.
- Por último, *last but not least*, resulta inevitable referirnos aquí a la regulación de la Fuerza Armada Nacional inserta en el texto fundamental de la República, principalmente por el debate suscitado en torno al voto militar, la controvertida supresión de su naturaleza no deliberante, así como la eliminación de la disposición contenida en la Constitución derogada, mediante la cual se exigía la autorización del Senado para el ascenso de oficiales de la FAN, desde coronel o capitán de navío, inclusive.

Por supuesto que otros aspectos de la revisión constitucional no dejaron de suscitar controversia, pero a mi modesto entender los arriba señalados ocuparon especial y apasionada atención por parte de la mayoría de los asambleístas.

4. La Constitución de 1999

No constituye el objeto del presente estudio el análisis de las instituciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (sobre el particular me remito a Combellas 2000), sino el de destacar sus rasgos más sobresalientes en el contexto de la historia constitucional republicana.

Lo primero que destaca es su extensión, 350 artículos, un número bastante superior al de la Constitución derogada de 1961, contentiva de 252 artículos. Podemos hablar entonces de una Constitución que responde a la corriente predominante en el constitucionalismo latinoamericano contemporáneo, de textos extensos e inevitablemente detallistas. Nuestra característica de ser frondosos y soñadores en el dibujo

de la patria que queremos construir, encuentra renovada plasmación en la Constitución de 1999. El Preámbulo recoge ese acento sublime (no es casualidad que su principal redactor fuese un reconocido poeta venezolano, el constituyente Gustavo Pereira) en sus frases constitutivas donde, nada más y nada menos, se pretende como fin supremo la refundación de la República. Sin lugar a dudas el mito de la fundación, en este caso recrear la institucionalidad de la nación, cubre cual manto legitimador la obra constituyente de 1999.

Al unísono, y aunque a primera vista pudiese parecer paradójico, se trata de una Constitución principista. No se contenta nuestra *Lex Superior* con incorporar en su título primero los principios fundamentales que le ofrecen a su normativa guía y sustentación, sino que a lo largo y ancho de su articulado no sólo se reiteran sino que se suman prolijamente nuevos principios y valores. Ciertamente que la consagración de principios en la Constitución cumple una función integradora del derecho, que de otra manera se tornaría imposible, dada la inflación normativa característica de nuestro tiempo, pero lo que resulta insólito (y el texto del 99 es proclive a ello) es que tengamos que lidiar también con una inflación de principios, lo que a todas luces torna más compleja la interpretación constitucional.

Una característica descollante de la Constitución de 1999 está en dos rasgos que se fortalecen mutuamente. Por un lado sus novedades institucionales (a título ilustrativo, cinco ramas del Poder Público a diferencia de las tres tradicionales y un modelo de democracia que pretende aparte del patrón predominante, su acendrado republicanismo) y por el otro su ambición. Gracias a su letra intenta cambiar radicalmente a los venezolanos, y sus instituciones, pues ahora su cultura política será distinta y gozará de toda clase de derechos, por añadidura de aplicación inmediata.²⁹ Es como si ella concentrara en su articulado los anhelos más preciados, siempre postergados por los avatares del destino, del pueblo inveteradamente relegado.

Resultaría injusto no resaltar la importancia democrática que acompaña al texto del 99 desde sus orígenes hasta su concreción.

29 Un ejemplo paradigmático se encuentra en el artículo 86 que consagra el derecho a la seguridad social e impone al Estado un conjunto de obligaciones para garantizarlo. Luego de una larga espera se aprobó el 30 de diciembre de 2002 la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, sin que todavía tenga ninguna aplicación, siendo considerada por los expertos como una ley inviable.

Nunca antes en la historia republicana una constituyente había sido directamente convocada por el pueblo y menos refrendada gracias a la participación popular.³⁰ La Constitución de 1999 es sin duda una Constitución genuinamente democrática, gracias a la cual los ciudadanos mediante el referéndum deciden su destino colectivo como nación. La Constitución ha encarnado como símbolo en las actitudes y comportamiento de la gente. A diferencia de la elemental ignorancia y frialdad de la percepción popular respecto a la Constitución de 1961,³¹ la Constitución de 1999, el “librito azul”, lo carga la gente en sus bolsillos y manosea sus páginas para avalar un argumento, sea en el hogar, en la escuela, en el sitio de trabajo o en la calle. Es en este sentido una Constitución ciudadana. Un hecho curioso es digno de citar aquí: los autores del golpe de Estado del 12 de abril de 2002, consumado jurídicamente gracias a un ominoso decreto de cortísima vigencia, pese a romper flagrantemente con el orden constitucional, no se atrevieron a derogar la Constitución de 1999, que conservó formalmente su vigencia.

La naturaleza democrática de la Constitución³² no invalida dos necesarias consideraciones: en primer lugar nuestra *Lex Superior* no fue producto del consenso sino de una imposición mayoritaria. El acuerdo de la representación de la pluralidad política y social de la nación estuvo ausente de su proceso de creación. La Constitución fue obra de una mayoría sin duda relevante pero circunstancial coaligada en torno al presidente de la República, su indisputado mentor. La historia constitucional patria nos enseña que las Constituciones consensuales (1830 y 1961) son las de mayor durabilidad, al asumir ellas un relevante rol integrador y no divisionista en el seno de la comunidad política. La prueba de fuego del texto de 1999 comenzará entonces en el mismo momento en que Chávez abandone el poder. La segunda considera-

30 El referéndum se realizó el 15 de diciembre del 1999. El sí obtuvo el 71,78% de los votos. La abstención representó el 55,63% de los electores, una cifra alta para una decisión tan trascendental.

31 Todavía en los años 90 la mayoría de la población simplemente no conocía y por tanto menos había leído la Constitución de 1961.

32 Este punto sin embargo es discutido, pues se sostiene por algunos la tensa convivencia en la Constitución de instituciones genuinamente democráticas con instituciones vedadas al control constitucional, como sería el caso de la Fuerza Armada Nacional bajo la égida de un presidencialismo arrollador (*cfr.* Escovar Salom 2000).

ción enlaza inextricablemente con la primera: su naturaleza democrática arrastra un fuerte contenido plebiscitario. Como candidato y como presidente, Chávez ha identificado en demasía la Constitución con su liderazgo personalista y carismático, con su régimen y con su cotidiana gestión. Otra dura prueba de la Carta Magna lo será en el inmediato futuro el deslastrarse del sello personalista que la acompaña desde su gestación.

La Constitución de 1999 es una Constitución bolivariana, tanto por su denominación como por la jerarquización en su artículo primero de “la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador”, amén de que el actual régimen ha valorizado como nunca antes el culto a Bolívar y todo lo que proyecte la hagiografía, la simbología y el mito bolivariano. Ello ha teñido de un particular color al texto fundamental, pues como texto normativo las circunstancias históricas la alejan inevitablemente de los proyectos constitucionales del Libertador, que si fueron en buena parte incomprensidos y discutidos en su época, en nuestros tiempos la labor hermenéutica es a todas luces intrincada y difícil. Ese particular color a mi entender se encuentra en la tradición republicana, que fundamentalmente a través de la doctrina bolivariana permea el texto de 1999.³³

5. A manera de conclusión

Un pensamiento de Benjamin Constant (1991) para mí siempre estimulante de citar, guía las reflexiones finales de este trabajo. Dice así: “Para conocer si una constitución es una buena constitución es necesario ponerla en práctica, sólo la experiencia nos mostrará sus debilidades”. Lamentablemente la corta experiencia de la Constitución de 1999 muestra dolorosas debilidades. Analicemos las más polémicas:

El apresuramiento de su aprobación y las improvisaciones abusivas de la directiva de la ANC contribuyeron a erosionar la dignidad de la Constitución, gracias al diferendo en torno a cuál había sido el texto definitivamente aprobado, pues contábamos al menos con cuatro versiones: la carta firmada solemnemente por los constituyentes el 19 de noviembre de 1999; la versión profusamente editada para que los ciudadanos conocieran el proyecto de Constitución que refrendarían el

33 Cfr. Combellas (2003).

15 de diciembre; la Constitución publicada en la Gaceta Oficial de la República el 30 de diciembre; y por último el texto publicado con la correspondiente Exposición de Motivos (por cierto que yo recuerde nunca la conocimos ni menos la discutimos ni aprobamos los constituyentes antes del 15 de diciembre), el 24 de marzo de 2000, en virtud de que se había incurrido en “errores de gramática, sintaxis y estilo” en la versión publicada el 30 de diciembre.

La polémica se desató motivado a que no se subsanaron únicamente errores formales, sino que se tocó y modificó el fondo de algunos artículos constitucionales. Tuvieron que pasar 16 meses para que el TSJ decidiera que el texto auténtico era el publicado originalmente el 30 de diciembre de 1999.

No obstante, la consecuencia más dañina no fue la anterior, a fin de cuentas corregible, sino el denominado régimen transitorio, infausta decisión de la ANC de incalculables efectos negativos sobre el futuro institucional de la República, por lo menos a corto y mediano plazo. En efecto, el 22 de diciembre de 1999, es decir siete días después de refrendada popularmente la Constitución, la ANC sancionó el “Decreto mediante el cual se dicta el Régimen de Transición del Poder Público”, en virtud de lo cual se disolvieron y reconstituyeron todas las ramas del Poder Público, a nivel local, estatal y nacional (salvo la rama ejecutiva, las gobernaciones de los estados y las alcaldías, con la notable excepción en este último supuesto, dada la comisión de presuntos hechos irregulares, del alcalde del municipio Maneiro del estado Nueva Esparta).

El susodicho régimen transitorio no fue contemplado en las Disposiciones Transitorias de la Constitución, refrendadas el 15 de diciembre, y estaba en franca contradicción con las Bases Comiciales que rigieron la convocatoria constituyente, pues si bien éstas autorizaban la aprobación de actos constituyentes, la condición es que lo fueran antes de la decisiva sanción de la Constitución. Pero además de irrespetarse las formalidades constitucionales, el régimen transitorio colidía con el espíritu participativo de la nueva Carta Magna, pues los funcionarios y magistrados designados en ejecución del decreto no se sometieron (independientemente de su capacidad y honorabilidad que no entro aquí a juzgar) al escrutinio público ni a ninguna suerte de procedimiento transparente, sencillamente se designaron “a dedo”, en

evidente contradicción con las pautas de selección establecidas en la Constitución de 1999.

Ello resultó particularmente odioso en el caso del Consejo Nacional Electoral, cuya clara parcialización rendiría frutos amargos con la suspensión de los comicios nacionales el 28 de julio de 2000, y en la designación de una Comisión Legislativa Nacional, denominada popular y peyorativamente como “Congresillo”, con amplísimas atribuciones legislativas,³⁴ contraloras, autorizativas e investigativas, integrado por 11 ex constituyentes y 10 ciudadanos cooptados por la ANC de la sociedad civil, rompiendo con el dogma democrático del Estado de Derecho, de añeja raigambre que se remonta al derecho medieval, estampado en la célebre fórmula jurídica, *quod omnes tangit debet ab omnibus approbari* (“lo que a todos concierne debe ser aprobado por todos”), y que modernamente Rousseau recoge en su *Contrato social* (1993: 38) como principio intangible del constitucionalismo: “Las leyes no son sino las condiciones de la asociación civil, y el pueblo, sometido a las leyes, debe ser su autor; sólo corresponde a los que se asocian regular las condiciones de la sociedad”. El argumento aducido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) (producto a su vez de la transición) para legitimar el régimen transitorio lo constituyó el manido de la “supraconstitucionalidad”, interpretado extensivamente como manto encubridor del maltrato de los principios y valores democráticos de la novedosa Constitución.

El régimen transitorio, además, significó en la práctica la desvirtuación de otro principio cardinal del Estado de Derecho de raigambre democrático, el equilibrio de los poderes, subvertido en los hechos por la preponderancia abusiva del presidente Chávez, al desmembrarse en su beneficio los resortes de control establecidos en la Constitución.

No puedo terminar estas conclusiones sin una consideración que dejo abierta a reflexiones que trascienden los límites aquí establecidos: la problemática de la convivencia de Constitución y revolución. Independientemente de la sinceridad y profundidad de la “revolución pacífica y democrática” (cosa que no entro a valorar aquí), lo cierto es que toda revolución arrastra un dilema ante el constitucionalismo ga-

34 El Congresillo aprobó 32 leyes, algunas orgánicas, incluidas materias tributarias y financieras, además de la reforma parcial de la legislación penal, procesal penal y penitenciaria.

rantista (obviamente la Constitución de 1999 es garantista, al contemplar una avanzada carta de derechos bajo el principio de su naturaleza preeminente frente al Estado); o suspende la Constitución, como hicieron los jacobinos con la Constitución francesa de 1793; o diseña la Constitución bajo principios radicalmente diferentes (la tradición comunista, desde la primera Constitución soviética a la vigente Constitución cubana), pero bajo ningún concepto puede convivir con ella. Ese no es sólo el dilema del chavismo, sino que inexorablemente también es el dilema de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Bibliografía

- Arvelo Ramos, Alberto/Catalá, José Agustín (1998): *El dilema del chavismo. Una incógnita en el poder*. Caracas: El Centauro ediciones.
- Asamblea Nacional Constituyente (1999-2000): *Gaceta constituyente* (diario de debates). Caracas: Imprenta del Congreso de la República.
- Bolívar, Simón (1948): *Ideas políticas y militares*. Buenos Aires: Editorial Jackson.
- Caldera, Rafael (1992): *Caldera. Dos discursos*. Caracas: Editorial Arte.
- Combellas, Ricardo (2000): *Derecho constitucional. Una introducción al estudio de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela*. Caracas: McGraw Hill.
- (2003): “La tradición republicana, la doctrina bolivariana y la Constitución de 1999”. En: *Visión iberoamericana de temas constitucionales*. Caracas: Fundación Manuel García-Pelayo, pp. 95-148.
- Combellas, Ricardo (ed.) (1993): *Venezuela: crisis política y reforma constitucional*. Caracas: Universidad Central de Venezuela.
- Congreso de la República (1992): *Proyecto de Reforma General de la Constitución de 1961 con Exposición de Motivos*. Caracas: Talleres Gráficos del Congreso de la República.
- Constant, Benjamin (1991): *Fragments d'un Ouvrage Abandonné Sur la possibilité d'une constitution republicaine dans un grand pays*. Paris: Aubier.
- COPRE (Comisión Presidencial para la Reforma del Estado) (1988): *La Reforma del Estado. Proyecto de Reforma Integral del Estado*. Caracas: Editorial Arte.
- Escovar Salom, Ramón (2000): “La Constitución y el poder militar”. En: *La Constitución de 1999*. Caracas: Academia de Ciencias Políticas y Sociales, pp. 231-245.
- Kornblith, Miriam (1998): *Venezuela en los noventa. Las crisis de la democracia*. Caracas: Ediciones IESA.
- Lösing, Norbert (2000): “El guardián de la Constitución en tiempos de crisis”. En: *Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano*. Edición 2000, pp. 139-160.

- Pace, Alessandro (1999): "Muerte de una Constitución". En: *Revista Española de Derecho Constitucional*, vol. 57, pp. 271-283.
- Rousseau, Jean-Jacques (1993): *El contrato social*. Barcelona: Ediciones Altaya.
- Tribunal Supremo de Justicia (2000): *Bases jurisprudenciales de la supraconstitucionalidad*. Caracas: Tribunal Supremo de Justicia.
- Urdaneta, Argenis (2002): "Proceso constituyente y bases para una democracia participativa". En: *Memoria Política* 7: 11-65.
- Zago, Ángela (1998): *La rebelión de los ángeles*. Caracas: Warp.

Thais Maingon

Síntomas de la crisis y la deslegitimación del sistema de partidos en Venezuela

1. Introducción

Constituye un tema reiterado en estos tiempos referirse a la crisis del sistema de partidos; de los partidos políticos y su pérdida de credibilidad y representatividad; de la democracia, sus insuficiencias y limitaciones y en general, a los problemas de gobernabilidad democrática. Dificilmente se puede ser original en el estudio de este aspecto del sistema político. La naturaleza de los partidos y la conformación de los sistemas de partidos están íntimamente relacionadas con las formas de sociedad civil y con los grados de modernidad de la política en una sociedad determinada, configurándose paralelismos necesarios entre el sistema representativo y las modalidades de modernización de la política.

Cada sociedad tiene características específicas que se expresan en su cultura política. Uno de los aspectos de la cultura política venezolana que comparte con otros países de la región (p.ej. Argentina), es la falta de una clara separación entre los partidos políticos y el Estado. Pareciera que los partidos se apoderaran del Estado. Ello tiene en principio varios efectos, uno de ellos es que la población identifica al Estado con los partidos políticos o más bien con el partido gobernante, por lo que los fracasos de los gobernantes se trasladan al mismo tiempo, tanto al sistema de partidos como al sistema político.

Existen varias opciones para la investigación y comprensión del sistema de partidos. Diferentes estudios, desarrollados desde el ámbito de las ciencias políticas, han logrado identificar algunos aspectos generales del funcionamiento de los sistemas de partidos que nos podrían orientar hacia la búsqueda de explicaciones que ayuden a entender el proceso de descomposición del sistema de partidos en general y del venezolano en particular, en el entendido de que este proceso no es exclusivo de Venezuela sino que más bien es un fenó-

meno que se está dando en otros países de la región como Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú.

Partiendo de los enfoques más utilizados para analizar el sistema de partidos, en el presente trabajo se mostrarán algunas dimensiones explicativas del proceso de crisis y deslegitimación del sistema de partidos venezolano. De esta forma, se estará en condiciones de responder a las preguntas de cómo, cuándo y por qué sobrevino la descomposición del sistema de partidos. Ello será desarrollado desde la arista que conjuga la mayoría de las dimensiones explicativas presentes en los enfoques, cuál es la representatividad, su calidad y su crisis. Este aspecto funcionará como categoría bisagra y será estudiada desde las pautas electorales y sus resultados, que a pesar de ser unidimensionales son expresivas de pautas socio-estructurales.

Se puede definir a los partidos políticos según sus características, sus objetivos, sus funciones. Kelsen (1975) por ejemplo, define a los partidos políticos como los medios para atender las demandas de la sociedad y para formular las decisiones y acciones que se precisan para alcanzar la legitimidad y funcionalidad democráticas. Las funciones generales de los partidos son múltiples y algunas de las más importantes son: a) la de ser agentes o instrumentos privilegiados en la negociación que se establece entre el Estado y la sociedad con el objetivo de resolver los conflictos que se presenten; b) proponer interpretaciones propias del interés general; c) generar capacidad de apoyo; d) competir con otras propuestas; e) dirigir y orientar las particularidades concertadas desde el punto de vista del interés común; f) articular las demandas e intereses particulares; g) generar consenso sobre las prioridades de acción y demostrar una capacidad real de gestión hacia lo articulado; h) canalizar las demandas populares; i) reducir los costos de información para los votantes. En fin, los partidos además de expresar las preferencias de los ciudadanos, influyen sobre ellas y contribuyen a formarlas.

Siguiendo a Ware (1996) entenderemos por sistema de partidos un conjunto de patrones de competencia y cooperación que se establecen entre diferentes partidos en un sistema político dado y que presentan una cierta estabilidad y perdurabilidad. En esta concepción hay dos aspectos importantes de resaltar. El primero, que la naturaleza de la relación que se establece entre los partidos es al mismo tiempo competitiva y cooperativa (formal, informal o implícita). El segundo as-

pecto viene dado por las características de perdurabilidad y estabilidad del sistema de partidos, lo que incluye la capacidad de adaptación y control de éstos, sobre las modificaciones del entorno. Como apuntan Abal Medina/Suárez (2003), ello es una condición necesaria para poder hablar de la institucionalización de un sistema de partidos.

En la primera parte de este trabajo, caracterizaremos muy brevemente el sistema de partidos en Venezuela y, en la segunda parte nos abocaremos a estudiar el proceso que condujo a su deslegitimación, tomando en cuenta, de una forma general, las diferentes dimensiones contenidas en los enfoques que estudian los sistemas de partidos. Con esta opción metodológica se corre el riesgo de sobre-simplificar la exposición, pero ella es útil para identificar los síntomas de la crisis del sistema de partidos. La metodología de presentación combinará el análisis cuantitativo con explicaciones cualitativas.

2. Caracterización del sistema de partidos venezolano

Siguiendo el enfoque de Sartori, Molina/Pérez (1996), afirman que el sistema de partidos venezolano, desde 1958 hasta 1993, ha transitado desde un “multipartidismo limitado” (entre 1958 y 1973), “a un bipartidismo atenuado” (entre 1973 y 1993), ello fue así porque, entre otras cuestiones, los partidos políticos venezolanos, Acción Democrática (AD – Socialdemócrata) y el Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI – Socialcristiano), pertenecían a la misma familia política democrática y tuvieron la posibilidad de formar gobierno hasta 1993 sin el recurso de terceros partidos. El bipartidismo no impidió que AD y COPEI, siendo los partidos principales, gobernarán solos, la coalición con terceros resultaba innecesaria. A partir de 1998 se está transitando por un “multipartidismo inestable” o “pluri-partidismo fragmentado”, definido como la tendencia a formar coaliciones entre tres o más partidos. Pero también podría ser de “pluralismo polarizado” definido por la situación de incapacidad por parte de la oposición para conformar una línea antagónica bilateral.

En el caso venezolano, como los dos partidos en la alternancia en el poder correspondían a una misma familia, el bipartidismo resultó más estable, y estuvo fuertemente condicionado por la efectividad de la alternancia, por lo que algunos autores lo tipifican como de bipartidismo rígido (entre 1963 y 1983). Ello tuvo como principal efecto una

reducción significativa de la conflictividad, la oposición, la mayoría de las veces, se realizó del mismo lado (del centro hacia la derecha o del centro hacia la izquierda). Sin embargo, al respecto, Hidalgo (1998) señala que el bipartidismo tuvo a mediano plazo –si entendemos como mediano plazo 30 años– un impacto desestabilizador sobre el régimen democrático, como veremos más adelante. La izquierda ocupó un lugar marginal hasta 1993 cuando, como un relámpago, se convierte en el tercer partido que no llegó a consolidarse (nos estamos refiriendo a La Causa R (LCR) que obtuvo 40 escaños en el Congreso Nacional en 1993, luego pasó a cinco en 1998 y a tres en 2000) (véase cuadro 1).

Venezuela y Costa Rica tuvieron por largo tiempo la alternancia en el poder entre socialdemócratas y socialcristianos, lo que hizo posible construir una relativamente larga estabilidad democrática, escapando así a la ola autoritaria que recorría la región en los años 70. El sistema de partidos venezolano estuvo caracterizado por partidos políticos democráticos populares de la misma familia y populistas nacionalistas (favorecedores de orientaciones antidemocráticas, con marcada tendencia hacia la personalización del liderazgo).¹

El sistema de partidos venezolano emerge ligado al fracaso de los movimientos socialistas y populares que aparecieron en aquellos países que pasaron por dictadores autoritarios impopulares y que no contaron con organizaciones socialistas ni comunistas de peso (casos de Costa Rica y República Dominicana). Los partidos políticos incluidos en el Pacto de Punto Fijo y demás pactos institucionales, estuvieron orientados hacia las políticas de desarrollo basadas en la industrialización por sustitución de importaciones y modernización del aparato estatal. La base social de estos partidos fue pluriclasista (canalizar los intereses de un amplio abanico de grupos sociales ubicados en los sectores medios de la sociedad). Se constituyeron, desde sus orígenes, en los canales privilegiados para el ascenso social y político de las clases medias. Compitieron con la fuerza armada que se había mantenido durante largo tiempo como la vía más directa para el ascenso de este vasto sector de la sociedad, que con el tiempo había venido creciendo. Se erigieron como los defensores de los intereses de la clase

1 Para ampliar este aspecto de la caracterización de los partidos políticos venezolanos, véase el interesante trabajo de Ramos Jiménez (2002).

media, con mentalidad modernizante y adoptaron estrategias conciliadoras, en las que siempre estuvo presente la política del compromiso.

Debido a la convivencia de diversos grupos sociales en el seno de estos partidos (clases medias, altas y bajas) se convirtieron, con el devenir del tiempo, en partidos frágiles con débil cohesión interna –las divisiones de AD sucedidas durante la década de los sesenta son un ejemplo de ello– tanto en su proyecto como en su organización. La promoción de la profesionalización de las elites dirigentes con el objetivo de constituirse en el factor decisivo para la conformación de una nueva clase política a nivel nacional y local, fue un factor que a la postre jugó un papel significativo en la crisis de representatividad del sistema de partidos que se manifestó con crudeza a finales de los años ochenta.

Por último, baste una mención sobre la relación y los vínculos más significativos desarrollados por el sistema de partidos venezolanos con la sociedad. Estos fueron básicamente dos:

- a) El “vínculo electoral”: mediante el cual los candidatos se comprometían a responder a las demandas y movilizar a la población por razones electorales. A consecuencia de ello se desplegaron relaciones clientelares (arreglo votos por favores). El clientelismo se insertó de forma muy efectiva en las estructuras del poder público, generando la capacidad de premiar las lealtades electorales de quienes lo apoyaran. Se constituyó en una forma excluyente del ejercicio político, que con el tiempo se consolidó como el elemento articulador de la política. Los partidos que introducen estas prácticas de manera exagerada, con el tiempo se convierten en partidos vulnerables a las crisis. El vínculo fracasa cuando los elegidos no responden a las demandas y falla el clientelismo cuando no se puede responder a los favores por efecto de la crisis económica.
- b) El “vínculo corporativista”: se da como resultado de las asimetrías extendidas a los pocos grupos provistos de los recursos materiales y culturales. A través de estas acciones corporativas se logran respuestas puntuales a problemas y demandas particulares y específicas de determinados grupos sociales, en especial de los trabajadores organizados, pero también están otros grupos como la iglesia y la fuerza armada. Ello incrementa la atomización de la sociedad civil incidiendo en la desorganización y descoordinación interins-

titucional del Estado. Al mismo tiempo se producen rupturas con el vínculo del trabajo cuando, como producto de la crisis económica, aumenta el desempleo y el empleo informal.

3. Síntomas de la crisis y deslegitimación del sistema de partidos

Los enfoques analíticos básicos de la literatura consultada sobre sistemas de partidos identifican diferentes aspectos, algunos de ellos resultan determinantes para ofrecer una visión amplia que ayude a la comprensión del proceso de su crisis y deslegitimación. Las diferentes explicaciones que dan los diversos enfoques podrían conllevar a desacuerdos sobre los aspectos que se muestran como determinantes del proceso de deslegitimación del sistema de partidos; el objetivo aquí es el de señalar algunos de esos aspectos asociados con los síntomas del proceso de deslegitimación del sistema de partidos venezolano a partir de un marco de referencia de explicación general, más que discutir a profundidad cada uno de estos enfoques.

En cuanto al comportamiento del sistema de partidos en Venezuela, desde diferentes aristas se han propuesto diversas explicaciones, que convergen tanto en las razones de su institucionalización y consolidación como de su crisis y deslegitimación. En su mayoría, estos aspectos tienden a coincidir en cuanto a sus dimensiones explicativas. Este será el punto central a desarrollar en esta parte.

Se presentará a continuación un panorama general de cada uno de estos enfoques, conjuntamente con sus dimensiones analíticas más importantes y desde allí se ubicará la situación de desmoronamiento del sistema de partidos en Venezuela a partir de su desenvolvimiento en el espacio electoral, su trayectoria sociopolítica y desempeño institucional.

3.1 Perspectivas de cultura política

Desde este análisis, los aspectos relativos a la cultura política tienden a estar estructuralmente asociados al proceso de conformación y consolidación del sistema de partidos, pero también al proceso de su descomposición y deslegitimación. Ello obliga a retrotraernos y responder la pregunta de ¿cómo fue pactada la democracia venezolana en 1958? Venezuela en su camino hacia la democracia, luego de la dictadura de Pérez Jiménez, estuvo en una situación similar al resto de los

países del Cono Sur: situación caracterizada por una crisis política y económica, es decir presentaba una crisis del modelo de hegemonía. El esfuerzo para construir una nueva hegemonía política fue un proceso complejo que no es objetivo de este trabajo. Aquí sólo nos interesa destacar que en el momento que emerge en el escenario político del país la posibilidad de que se diera una nueva apertura a la democracia representativa con el inicio de una actividad electoral que llevaría a Rómulo Betancourt a la presidencia de la república, al mismo tiempo y a partir de ese momento se dispuso de una suerte de factores que progresivamente, y mediante su desenvolvimiento posterior, concluyeron con el inicio de la institucionalización de la democracia, gestándose así una nueva forma de relación entre el Estado y la sociedad. Se experimentó un reacomodo significativo entre las diversas fuerzas sociales, económicas y militares, dejando a un lado a aquellos sectores con pretensiones políticas radicales que pugnaban por un espacio político por demás legítimo.

El bloque en el poder estaba inicialmente compuesto por una coalición de tres partidos: Acción Democrática (AD), Comité de Organización Político Electoral Independiente (COPEI) y Unión Republicana Democrática (URD). La conformación de un sistema de partidos se inicia con el proceso de consolidación de la democracia y estuvo caracterizado por restricciones en cuanto a la construcción de canales de participación desde la sociedad hacia el Estado. A nuestra manera de ver, éste fue el principio-base del conjunto de compromisos y acuerdos entre los principales actores políticos y sociales y lo que a la postre permitiría la cristalización de un modelo de sistema de partidos caracterizado por la exclusión, el autoritarismo, la concentración del poder y de corte personalista. La conclusión lógica que se deriva de ello es que en Venezuela persistieron y convivieron los resabios autoritarios con las instituciones democráticas. Los pactos establecidos hicieron que democracia y autoritarismo fueran capaces de coexistir sin que los conflictos y fricciones pusieran en peligro la institucionalidad democrática (Welsch 1992; Díaz Polanco/Maingon 2003).

El espíritu contradictorio de las prácticas que se generaron como producto de los pactos, tuvo como consecuencia el que no se resolvieran cuestiones que eran significativas para el desarrollo de la democracia y su sistema de partidos, factores que a la postre podrían estar explicando la crisis y descomposición del sistema de partidos y nos

estamos refiriendo específicamente a los conflictos latentes entre la cultura de la democracia y la del autoritarismo. Al mismo tiempo habría que mencionar que la dinámica y características de la organización interna de los dos principales partidos (muy jerarquizadas y autoritarias) tuvieron efectos negativos sobre las preferencias del electorado (Penfold 2001; Coppedge 1994).

Existe un acuerdo entre los diferentes estudiosos del sistema político venezolano que incluye al sistema de partidos, acerca de la importancia que tuvieron los pactos explícitos y tácitos para la estabilidad del sistema democrático. Sin embargo, hay evaluaciones divergentes en cuanto a sus resultados: unos analistas ponen el énfasis en los logros obtenidos en cuanto a la estabilización de las instituciones democráticas básicas como el voto, la libertad de expresión, existencia de partidos políticos modernos, la resolución de los conflictos; otros critican el fracaso relativo del sistema en disminuir las desigualdades sociales, en redistribuir el poder, por ser poco democráticos, el carácter elitista de las decisiones, por la generación de patrones de relación caracterizados por el clientelismo, caudillismo y corrupción (Coppedge 1994; Ellner 1999; Gómez 1995; Hillman 1994; Levine 1973; entre otros).

Sin embargo, aun durante el período de descomposición del sistema de partidos, denominado también período de desalineación electoral, cuando se abrieron espacios a nuevos liderazgos políticos que finalmente lograron desplazar a los liderazgos tradicionales – entre 1988 y 1993/entre 1993 y 1998 (Molina/Pérez 1996; 1998) los venezolanos mostraron siempre una tendencia alta de preferencia por la democracia. Pereira (2001) detecta que hubo leves fragmentaciones debido a algunas características demográficas, sociales e ideológicas, entre las cuales resaltan

la definición ideológica en el continuo izquierda-derecha, la preferencia por sistemas económicos capitalistas, socialistas y comunistas y la opinión sobre el cambio social (revolucionario, reformas, mantener la sociedad como está) (p. 65).

Estos pequeños cambios, a decir de Pereira se podrían entender a la luz de las continuas crisis económicas, la desigualdad social creciente y la ineficiencia e ineficacia sostenida del desempeño de los partidos políticos en el ejercicio del poder.

3.2 *Perspectivas sociológicas*

Los cambios en las fuerzas sociales y por ende en la sociedad, tienen correspondencia con los cambios que se producen en los sistemas de partidos. La configuración de un sistema de lealtades partidistas se remonta hacia el trienio 1945-1948 y desde sus inicios estuvo constituido por AD, COPEI, URD y el Partido Comunista de Venezuela (PCV). La consecuencia más significativa de esta conformación político-partidista fue que sus efectos perduraron por un largo tiempo aun cuando su composición varió en cuanto al número de los partidos. Es así como, entre 1973 y 1988, se presencia la existencia de un bipartidismo entre AD y COPEI unido a la alternancia en el poder. Los años por venir se caracterizaron por un resquebrajamiento de las lealtades, por la emergencia de nuevos actores y fuerzas políticas y por la presencia de la volatilidad electoral.

Al respecto, una de las conclusiones a la que llegó Pereira (1999) en su estudio sobre la socialización política de los venezolanos, fue la evidencia del quiebre, desde la década de los 80, en el apoyo específico de los ciudadanos a las gestiones de los diferentes gobiernos, a los partidos y a los políticos en general. En palabras de Pereira:

Esto ha impactado el proceso de socialización, generándose sobre estímulos a la independencia política, tanto en la familia como posiblemente en los agentes secundarios, dando lugar a una transformación cultural de la socialización política de los venezolanos, signada por el descenso del partidismo y el incremento de posiciones independientes (p. 155).

Este proceso se profundiza en la medida en que aparecen nuevos partidos (desde el proceso electoral regional y local de 1995) y se presencia una volatilidad electoral que aún hoy en día no ha logrado estabilizarse y por lo tanto no ha logrado tampoco establecer lealtades partidistas perdurables.

La consecuencia de lo anterior es la típica crisis de representatividad e identificación del ciudadano con los partidos políticos tradicionales aunada a la incapacidad de éstos para crear ideas, fuerzas novedosas que movilicen a sectores de la población en forma militante. El resultado electoral nos dice la forma más básica de la representación de los elegidos, que han dejado de representar los intereses de los votantes dejándolos fuera del sistema de partidos. Se produce un aislamiento de los partidos políticos de sus bases de apoyo, pérdidas de militantes, debilitamiento de la identificación partidista, presencia de

un ejercicio político cada vez más subjetivo, reducido, privatizado y vacío de contenidos ideológicos. Del lado de la ciudadanía se presencia una desvalorización de lo público, apoyo a nuevos actores, movimientos políticos, desplazamiento y realineamiento del voto. Los procesos de cambios mencionados traen cambios en la organización partidista, siendo uno de los más importantes el de la profesionalización de la política.

Una vía para ilustrar la desafección política es el grado de participación en los procesos electorales que expresan en buena medida la representatividad de los partidos políticos, pero este aspecto lo desarrollaremos más adelante al incluirlo en las explicaciones que privilegian las dimensiones institucionales.

Aquí nos interesa más bien observar la declinación de la votación de los dos partidos principales del sistema político, así como mostrar el cambio en cuanto a la valoración subjetiva que el ciudadano hace de los partidos, a sabiendas que la representación político-partidista debe sustentarse en la confianza. Como puede observarse en los datos del cuadro 1, entre las elecciones parlamentarias de 1973 y las de 1988, la concentración del voto AD-COPEI llegó a su máximo en los comicios de 1978 (80%) y el mínimo detectado fue en las elecciones del año 2000 (21%). En cuanto a los resultados de las elecciones presidenciales, entre las elecciones de 1958 y las celebradas en el año 2000, los candidatos de AD y COPEI, en 1958 conjuntamente concentraron el 97% de los votos, siendo este valor el máximo de concentración presentado en la historia electoral del país y concentraron 46% en las elecciones de 1993, siendo este valor el mínimo detectado durante el período democrático (cuadro 2).

Llegados a este punto, hagamos un paréntesis para aportar algunos datos de otros países que dan cuenta de que este proceso de desafección por los partidos y por la política en general es un fenómeno que se está dando en otros países, dentro y fuera de la región latinoamericana. Los datos corresponden al período 1997-2001.

En Chile, en 1997, el 53% de las personas en edad de votar no tenía interés en hacerlo. El parlamento de este país, en esta misma fecha fue la institución que ocupó el penúltimo lugar en cuanto a confianza. En Argentina, este % subió a 80. En México, durante la década de los noventa sólo $\frac{1}{4}$ de la población mantenía un nivel de confiabilidad en los partidos políticos. En una encuesta nacional de confianza en las

instituciones realizada entre jóvenes franceses de 18 a 24 años se situó el interés en la política en el último lugar. En Venezuela, la confianza en los partidos políticos ocupó el último lugar, ubicándose después de los sindicatos (cuadro 3).

3.3 Perspectivas político-económicas

Se argumenta que la acción dominante de los partidos políticos se orienta mayoritariamente a maximizar la cantidad de votos a obtener en cada elección. Asimismo, se sostiene que el partido de gobierno sufre un desgaste electoral y la tendencia es que su votación en la siguiente elección sufra una reducción porcentual (Downs 1957). El desempeño del gobierno es evaluado negativamente por un sector importante del electorado definido como actor racional, el cual, buscando un cambio que le proporcione o garantice un beneficio, opta por votar por el principal partido de la oposición (economía del voto). A lo anterior se le podría añadir como factor explicativo de los resultados de las elecciones, la evaluación que hacen los votantes sobre el comportamiento de las variables económicas. Ello nos estaría diciendo de una forma extensiva, que existe una asociación entre la crisis económica por la que atraviesa un país y la deslegitimación de su sistema de partidos.

Ya Lipset (1959) en su teoría de la democracia había demostrado la existencia de una asociación positiva entre el crecimiento socioeconómico y la democracia, sin que ella sea una relación causal. Partiendo de estas explicaciones, Przeworski *et al.* (2000) demuestran empíricamente que esta asociación es débil. Sin embargo, argumentan que el nivel de desarrollo socioeconómico podría contribuir a la supervivencia de la democracia una vez establecida. Es decir, que la democracia, una vez establecida, tiene más probabilidades de sobrevivir si presenta un crecimiento socioeconómico sostenido en el tiempo.² Si

2 No se trata en este trabajo de demostrar si hay o no relación entre el desempeño de la democracia y el sistema de partidos, solamente se sigue de una manera heterodoxa los planteamientos adelantados por Przeworski *et al.* (2000). Entendemos que aunque la eficacia social y económica de la democracia tiene que ver más con la capacidad de desempeño de un gobierno que con las fallas de la cultura política o del sistema de partidos, es necesario resaltar que en Venezuela los dos partidos que conformaron el sistema de partidos (AD y COPEI) gobernaron conjuntamente, lo que los hace responsables del desempeño que tuvo la democracia durante esos años, de sus éxitos y de sus fracasos en mejorar la calidad de vida de

extendemos la modernización económica y social hacia la esfera política, incluyendo al sistema de partidos, podríamos estirar la línea de argumentación y, seleccionando algunos de los indicadores manejados por estos autores (ingreso per cápita, desempleo, empleo informal y pobreza) podríamos llegar a la conclusión de que la probabilidad de supervivencia de un determinado sistema de partidos aumenta al ritmo del incremento y/o mejoramiento de estos indicadores y bajando cuando los países atraviesan por crisis económicas. Ello entendido en el marco general de referencia de la existencia de una relación positiva entre el sistema de partidos y la democracia.

Sin embargo, respecto a esta dimensión, es pertinente agregar una de las conclusiones a las que llegó Tanaka (2002) como resultado de su estudio comparativo de las democracias en Colombia, Perú y Venezuela cuando señala que si bien

[...] las apariencias muestran que la crisis económica y social es la que termina derribando al sistema de partidos, por medio de una aguda crisis de legitimidad, que permitió la llegada al poder de líderes antisistémicos, que se erigieron sobre el descontento que produjo el sistema “tradicional”. Sin embargo la relación crisis – colapso del sistema queda cuestionada con la experiencia colombiana y de otros países, que pasaron también por crisis extremas pero cuyos sistemas de partidos evolucionaron y lograron de algún modo adaptarse a los nuevos desafíos. La crisis económica y social ciertamente impacta sobre la política, pero ésta no tiene porqué convertirse en un colapso (p. 116).

En el marco de esta perspectiva es necesario añadir el tema de la renta petrolera, el intervencionismo del Estado y su influencia en la conformación y constreñimiento de las instituciones, incluyendo al sistema de partidos (Karl 1990; 1997). Desde esta dimensión se argumenta que los vaivenes de los precios del petróleo pudieran estar asociados con la interrupción del proceso de modernización del país y con la posibilidad de financiar la corrupción y el clientelismo desde las instituciones políticas, léase el sistema de partidos. Se invierte así la relación que estableció Lipset entre lo determinante que era la democracia (se incluye al sistema de partidos) para el desarrollo socio-económico. Para Karl, la renta petrolera coadyuvó a conformar la democracia venezolana y su sistema de partidos.

los ciudadanos y en la formulación y ejecución de políticas públicas eficientes y eficaces.

Desde esta misma perspectiva, Penfold (2001) señala el efecto de la caída del ingreso fiscal petrolero como un factor que exacerbó muchas de las contradicciones presentes en el sistema de partidos a presentarse junto con el incremento de la competencia electoral, producto de los cambios que introdujo en este ámbito el proceso de descentralización. Estas variables podrían ser analizadas en conjunto como una forma de entender el colapso del sistema de partidos venezolano.

Ganar una elección es un primer aspecto de la eficacia de un partido político pero no es el principal. El principal es el desempeño de la gestión del gobierno que incluye tanto a los que lo ejercen como a los que se hallan en la oposición (sistema de partidos). En el caso de Venezuela, tanto a AD como a COPEI les toca repartirse los éxitos pero también los fracasos del desempeño institucional de las políticas instrumentadas durante los años de la democracia, producto del pacto de Punto Fijo. La capacidad de desempeño dice sobre lo que se ha logrado. Durante los procesos electorales incluidos en el período 1973-1983 cuando se presenta la concentración máxima de los votos de los partidos AD-COPEI, se observa un incremento del ingreso per cápita que se mantiene desde 1972 hasta 1979, año en que se asiste a la concentración máxima de los votos AD-COPEI (80%). A partir de 1979 hasta 1983, decrece. Igualmente se observa que a partir de 1983 crece de nuevo para posteriormente presentar una tendencia decreciente con numerosas fluctuaciones (gráfico 1). El número de hogares en situación de pobreza, el crecimiento del desempleo y del sector informal son indicadores del bajo desempeño institucional habido durante estos años de democracia (cuadros 4, 5 y 6).³

3.4 Perspectivas institucionales

En contraste con los análisis que privilegian los aspectos político-económicos, desde el institucionalismo se sostiene que los aspectos institucionales, las reglas y sus estructuras tienen que ver con la estabilidad y naturaleza de los cambios de un sistema de partidos, así como también sus efectos en los patrones políticos (de conflicto o de cooperación) que se establecen en un sistema de partidos. En fin, los procesos de reformas o cambios en las instituciones podrían tener un impacto

3 Venezuela se encuentra entre los países de Latinoamérica con mayores niveles de pobreza junto con Nicaragua, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y México.

en el desenvolvimiento del sistema de partidos. A decir de Molina/Pérez (1996)

[...] el sistema electoral venezolano (mayoría relativa para el presidente y representación proporcional parlamentaria) generaba una tendencia hacia el multipartidismo que habría sido responsable del fraccionamiento del sistema de partidos entre 1963 y 1968 (p. 198).

Asimismo, el proceso de descentralización político-administrativa que conllevó la elección por votación directa y universal de los gobernadores y alcaldes (las autoridades regionales y locales) a partir de 1989, introdujo nuevas reglas de juego, como la personalización de la decisión electoral y la emergencia de liderazgos regionales frente a los liderazgos nacionales tradicionales. Esta reforma hizo más compleja y alteró, inequívocamente, la dinámica del sistema de partidos, particularmente en lo referente a la redistribución y legitimidad del poder. Los dos partidos tradicionales no habían aprendido para el momento de las reformas, a compartir el poder con otras fuerzas políticas, lo que profundizó el resquebrajamiento de las expectativas y costumbres electorales de los venezolanos con consecuencias graves para el funcionamiento del sistema de partidos.

Por otro lado, se apunta que el proceso de descentralización y la reforma contribuyó, en los primeros años de su instrumentación, a develar las contradicciones internas de los partidos, a disminuir su liderazgo nacional, a despertar ambiciones políticas que bien podrían ser ejercidas desde los ámbitos regionales y locales contribuyendo de esta forma a la recomposición del cuadro de las lealtades partidistas (Arenas/Masareño 1997; Dietz/Myers 2002).

En las elecciones regionales y locales de 1989, AD y COPEI obtienen la mayoría de los cargos. Entre AD y COPEI obtienen 17 gobernadores de un total de 20, bajando su número para 1995 (15). Asimismo, en 1989 concentraron el 92% de los cargos para alcalde (248 de un total de 269), bajando a 85% (281 de un total de 330) en 1995 (cuadros 7 y 8). Los valores que observamos en el cuadro 9 y visualizados en el gráfico 2, ponen de manifiesto lo que se ha venido señalando. La crisis de representatividad del sistema de partidos trajo, como consecuencia, el surgimiento de otras organizaciones y movimientos políticos que fueron ocupando los espacios otrora ocupados por los dos partidos tradicionales. Así es como, en los comicios regionales de 1992, AD y COPEI concentran el 66% de los votos y las de-

más organizaciones políticas el 34%. Comparando estos resultados con los de las elecciones de 1995, los votos obtenidos por AD y COPEI bajan aproximadamente 10 puntos porcentuales con respecto al porcentaje de votos obtenidos anteriormente y esta tendencia hacia la baja se mantiene igual hasta los últimos comicios de 2000, cuando conjuntamente obtienen 32% de los votos, mientras que otras organizaciones van aumentando progresivamente su caudal de votos.

Desde esta misma perspectiva cabe plantearse otra dimensión de análisis importante: la “abstención”. Los diferentes argumentos y explicaciones que se han dado al respecto, tienen pesos, incidencias y consecuencias diversas para el sistema político. Para algunos estudiosos de este tema (Molina/Pérez 1998) la abstención expresa al menos cuatro aspectos:

- a) insatisfacción de la población que genera evaluaciones y actitudes negativas hacia el sistema político, obviamente que los más afectados por estas evaluaciones son los partidos políticos;
- b) pérdida de la capacidad de movilización de los partidos políticos debido a su baja militancia e identificación partidista;
- c) pérdida de la legitimidad del voto obligatorio y la eliminación de las sanciones legales para quienes no votan y
- (d) presencia de bajos grados de competitividad en las elecciones. La certeza sobre el resultado electoral conspira en contra de la participación.

Otros análisis señalan que una alta o baja participación electoral no puede considerarse como bueno o malo en sí mismo, ello dependerá en gran medida de la situación sociopolítica del país ya que la legitimidad de un sistema político no se puede medir solamente por la participación electoral. Por lo que sería conveniente incluir en el análisis de la abstención, dimensiones de socialización política (lealtades partidistas), racionalidad económica y los cambios generados por las reformas electorales al procedimiento de votación, así como también la percepción por parte del electorado del funcionamiento del organismo responsable de la administración de los procesos electorales Consejo Nacional Electoral (CNE).

Existen otras explicaciones que tienen un carácter global al entender la abstención como un indicador importante del nivel de conciencia política y de identificación con el sistema político que a través de

los años los electores han aprendido a utilizar para expresar su descontento y protesta hacia quienes los representan (Sonntag/Maingon 1990). Se desprende por tanto que la abstención estaría expresando, por un lado, un rechazo hacia el sistema de partidos, así como un desacuerdo con la forma cómo se ha venido gobernando en la democracia. Por otro lado, la abstención pudiera interpretarse como un indicador de pérdida de legitimidad y representatividad de los gobernantes, con lo cual se estaría develando un proceso de deterioro de la confianza en el sistema de partidos.

En 1995 Sonntag (*El Nacional*) señaló, que a diferencia de los países industrializados, la participación en las elecciones en los países en vías de desarrollo, es uno de los parámetros mediante los cuales se puede medir la atención de los ciudadanos en el sistema político de la democracia. A los ciudadanos venezolanos se les convocó, hasta 1999, a participar, casi exclusivamente, a través de las elecciones cada cinco años para las nacionales (presidenciales y congreso) y cada tres para las elecciones regionales y locales, con el fin de elegir a sus representantes, quienes una vez elegidos monopolizan la facultad de seleccionar entre las diferentes políticas a instrumentar, y usurpan los espacios que les corresponden a los ciudadanos. La abstención por tanto, es un síntoma de desinterés por la política, por la forma de orientar y entender al país que indica en el mejor de los casos que la política y quienes la ejercen carecen de toda credibilidad y legitimidad. Por último, la abstención pudiera estar expresando, de una forma silenciosa, las numerosas y cada vez más frecuentes, protestas populares en reclamo de las reformas estructurales por tanto tiempo prometidas y por tanto tiempo postergadas.

Así pues, como se muestra en el gráfico 3, la abstención en las elecciones presidenciales ha venido aumentando desde los comicios de 1973 cuando presentó el valor más bajo de abstención (4%) hasta las elecciones de 2000 cuando se presentó el valor más alto (44%). En relación con las elecciones regionales y locales, éstas siempre han presentado porcentajes de abstención muy altos (gráfico 4).

Las elecciones de 1993 tuvieron como antecedentes inmediatos y presentes en el imaginario colectivo, la rebelión social en respuesta a la pérdida de la “gran Venezuela”, que culminó con los acontecimientos del “Caracazo” en 1989 y los levantamientos militares (4-F y 27-N de 1992). Estos sucesos resumieron y expresaron el malestar social,

político y económico generalizado de la población y funcionaron como el preámbulo hacia la construcción de un clima de conflictividad social y política creciente y permanente. Al mismo tiempo, estos hechos ratificaron la fragilidad de una cultura política tendiente a la democracia y a su profundización y destacaron, por el contrario, una propensión en la población hacia el autoritarismo, con unas ciertas raíces mesiánicas, muy lejanas a la creencia de un Estado de derecho (Maingon 2003).

Este fenómeno del aumento de la abstención no se presenta solamente en Venezuela, veamos algunas cifras de otros países: en EE. UU. se ha elevado la abstención del 37% que había a comienzos de la década de los sesenta, al 60% en la década de los noventa. En Chile, durante el plebiscito de 1988 no hubo abstención real; en las elecciones presidenciales y parlamentarias de 1989 se presentó una muy baja abstención. Sin embargo, en las elecciones legislativas hubo un 14% de abstención y un 14% de votos nulos lo que hace un total del 28% del electorado que no se identificó con partido político alguno. En Colombia, el porcentaje de inscritos que vota ha descendido del 60% a mediados de la década de los setenta a menos del 40% en los noventa.

Por otro lado, en este enfoque se podrían incluir todos aquellos análisis que abarcan el estudio de la institucionalización del sistema de partidos, sus características principales (organización interna) y efectos que parten de la relación positiva que existe entre los sistemas de partidos institucionalizados, la promoción y consolidación de la democracia (Mainwaring/Scully 1995; Panebianco 1988; Coppedge 1994).⁴

Específicamente, Mainwaring/Scully construyeron una tipología de grados de institucionalización de sistemas de partidos a través del cumplimiento de cuatro condiciones:

- a) Estabilidad y fortaleza de las reglas y de la naturaleza de la competencia entre partidos (mide el índice de volatilidad electoral);
- b) Los partidos deben tener raíces estables en la sociedad para estar en condiciones de estructurar las preferencias partidistas, los inte-

4 Algunas investigaciones sobre el grado de institucionalización del sistema de partidos en Latinoamérica desde 1960 destacaban cuatro indicadores básicos: adaptación (años de existencia y supervivencia a los largo del tiempo), complejidad, autonomía y coherencia ideológica.

reses organizados tienen fuertes conexiones con los partidos políticos institucionalizados. Los partidos no solamente ayudan a organizar los sindicatos, centros de estudiantes y vecinos, sino que también están fuertemente presentes en los ámbitos más importantes de la sociedad;

- c) La existencia de una legitimidad acordada por los principales actores políticos hacia el proceso electoral y sus resultados. Los ciudadanos y las organizaciones de intereses perciben que los partidos y las elecciones significan o determinan quién gobernará por lo que el proceso electoral es acordado legítimamente entre los partidos y la sociedad y
- d) La existencia de organizaciones partidistas bien establecidas y autónomas no subordinadas a las ambiciones de un líder.

Estas tipologías dan luz sobre el entendimiento de cómo el sistema de partidos facilita o impide la consolidación de la democracia, pero no ayudan mucho a entender el funcionamiento del sistema de partidos en sí mismos. Un ejemplo de ello es el caso de Venezuela y el proceso de descomposición de su sistema de partidos cuando era definido como un país con un sistema de partidos institucionalizado, relativamente sólido, la evidencia demostró que ello fue así hasta 1993.

Otros acercamientos analíticos dentro de esta misma perspectiva son los relacionados con la eficacia y eficiencia del desempeño de la actividad política y el proceso de la toma de decisiones, funcionamiento del legislativo y su independencia del ejecutivo, su relación con los intereses del gran capital y su autonomía de la representación de los grupos dominantes, entre otras cuestiones. Al respecto Crisp/Johnson (2001) caracterizan al proceso venezolano de toma de decisiones como altamente centralizado, otorgando privilegios a reducidos sectores de la sociedad civil, lo que generó con el tiempo, un descontento creciente, caída de la popularidad de los partidos políticos tradicionales y la necesidad de reestructurar las reglas del juego institucional democrático a través de un proceso constituyente

Otra arista que añade este enfoque al estudio del sistema de partidos es la que se deriva del análisis de lo que se ha denominado el “número efectivo de partidos”. En los países latinoamericanos, a diferencia de los europeos, no se ha producido el fenómeno de la concentración de las fuerzas partidistas en un número menor de organizacio-

nes. Por el contrario, a medida que se producen las fusiones o desapariciones entre las fuerzas partidistas con miras a obtener mayor influencia y peso político, han ido apareciendo nuevos partidos y movimientos políticos que se incorporan al sistema y que en algunas situaciones llegan a alcanzar porciones del electorado decisivas frente a partidos antiguos (son los casos de Fujimori, Collor de Melo y Chávez). Molina/Pérez (1996; 2002), han señalado en varias oportunidades que hasta las elecciones de 1988, el sistema de partidos venezolano respondió a la influencia de la elección presidencial dando lugar a lo que denominan “bipartidismo atenuado”, y luego, al presenciarse el resquebrajamiento del apoyo a los partidos tradicionales de AD y COPEI, entre las elecciones de 1993 y 1998 se asistió a un “sistema multipartidista extremo e inestable”.⁵

Observando el comportamiento de este índice, entre las elecciones parlamentarias 1988 y 1993 hubo un aumento de 2 a 5; un movimiento contrario se observa entre las elecciones de 1998 y 2000, cuando el número efectivo de partidos se redujo a la mitad, pasó de 8 a 4. La misma tendencia siguió este índice en las elecciones presidenciales, entre 1988 y 1993 pasó de 2 a 5, entre 1993 y 1998 subió de 5 a 6 y entre 1998 y 2000 se redujo a la mitad (de 6 a 3). Estos cambios podrían estar significando que se está en presencia de un proceso de reestructuración del sistema de partidos y asociado a éstos se evidencian también cambios en la naturaleza de los partidos que lo integran. En definitiva, el sistema de partidos venezolano sufrió un proceso de desinstitucionalización entendido como la pérdida de las cualidades del sistema institucionalizado, con partidos fuertes y estables y vinculados fuertemente con la población. Los partidos surgidos a partir de las elecciones de 1993 constituyen partidos dominados por sus líderes y que funcionan como maquinarias electorales (cuadro 10).

4. Comentarios finales: lo que develó la crisis y deslegitimación del sistema de partidos

Los procesos de cambio y transformación de los escenarios políticos, sociales y económicos en América Latina están entrando en su tercera

5 Crisp/Jonson (2001) añaden que “[...] las elecciones simultáneas para la legislatura y el ejecutivo mantuvieron el número efectivo de partidos en un nivel relativamente bajo durante casi todo el período” (pp. 267-268).

década. Es en el ámbito político donde con más frecuencia se observan los cambios, y es precisamente en el terreno de los partidos políticos y sus relaciones con la sociedad el que más transformaciones está viviendo. Venezuela no escapa a estos cambios y podríamos aventurarnos a afirmar que es uno de los países, junto con Perú que más rápidamente se deshizo de su sistema de partidos que había permanecido intacto por un poco más de cuatro décadas, sostenido por los partidos políticos que construyeron y consolidaron la democracia. Una democracia producto del Pacto de Punto Fijo de 1958.

Los procesos y resultados ocurridos desde 1993 hasta 1998 pusieron en evidencia que los partidos políticos están pasando, por lo que Cavarozzi/Casullo (2002) denominan como crisis de las modalidades de articulación y representación de intereses, porque

[...] se ha abierto una profunda brecha entre la superficie, aparentemente estable, de las estructuras partidarias y la manera en que estas estructuras articulan, convocan y reflejan a los actores y las dinámicas de la sociedad [...] (p. 10).

Este proceso es parte de lo que hemos venido denominando como la triple crisis por la que viene transitando Venezuela desde hace más de dos décadas: de representatividad del sistema de partidos, de institucionalidad del Estado y de legitimidad del sistema democrático (Maingon/Sonntag 1998).

De estas tres crisis, las dos primeras se expresan cotidianamente y con fuerza en el colectivo; y la última es el resultado de esas dos. Por otro lado, al tiempo que presenciábamos un declive importante de los partidos políticos tradicionales se percibe la irrupción de nuevos actores políticos que se presentan como edificadores de canales alternos de organización de la participación y del ejercicio en el poder, ocupando de esta forma los espacios que dejaron abandonados y descuidados los partidos tradicionales. La interacción en el tiempo de la triple crisis mencionada abona el terreno para impedir la consolidación de un nuevo sistema de partidos.

A la luz de lo expuesto, en el presente trabajo, es indudable la relación que ha existido entre el desenvolvimiento y/o comportamiento de las dimensiones señaladas por los diferentes enfoques y los síntomas de crisis y deslegitimación del sistema de partidos venezolano. Ninguna de estas dimensiones por sí sola es determinante en la explicación de la descomposición habida en el sistema de partidos venezo-

lano. La implosión del sistema de partidos es el resultado de la conjugación que se dio entre ellas. Asimismo, estos cambios son tanto de tipo coyuntural como estructural, internos (evidencia del proceso de agotamiento y falta de representatividad de los partidos políticos desde los años 80) y externos (cambios en el contexto internacional) al sistema de partido. Son movimientos simultáneos que están inscritos en los procesos de globalización, internacionalización, homogeneización, informatización, entre otros.

Podríamos suponer que el sistema de partidos fue incapaz de responder y adaptarse a los cambios económicos y políticos por los que estaba atravesando el país y ello repercutió de una forma drástica en los niveles de su representatividad, pero también, en la respuesta que dieron los ciudadanos (abstención y votar por organizaciones y movimientos políticos emergentes).

Si bien tenemos un panorama amplio en donde convergen las diferentes dimensiones más significativas que explican la descomposición del sistema de partidos en Venezuela, de las reflexiones precedentes puede concluirse que los partidos políticos y no el sistema de partidos ya que éste desapareció, están atravesando por una crisis de inusitadas proporciones al tiempo que se percibe un aumento del protagonismo de los ciudadanos sin partidos políticos. Esto último, lejos de ser negativo es un signo altamente positivo para el futuro, pues supone un mayor compromiso en las conductas y recursos de las organizaciones y movimientos políticos en el ejercicio del poder para con los ciudadanos, pero la otra cara de la moneda es que estamos asistiendo a la imposibilidad para conformar partidos políticos representativos de la sociedad y sus cambios.

Podríamos enumerar algunos de los requerimientos que el sistema de partidos no estuvo en capacidad de responder (algunos de éstos requerían capacidad de adaptación o de cambios de parte de los propios partidos) así como algunas características que afloraron a partir de la crisis del sistema de partidos. Esta enumeración está mayormente guiada por los resultados de la crisis de representatividad que comprende la falta de capacidad del sistema de partidos para responder a las demandas de los ciudadanos en un contexto de crisis política y económica y de cambio social. Algunas de ellas son las siguientes:

- a) Faltó capacidad de respuesta a los requerimientos de la democratización, el sistema de partidos no fue capaz de incrementar los mecanismos de democracia directa. Por lo que progresivamente se presenciaba un proceso de degradación de la legitimidad de los partidos como unificadores de los intereses sociales. Lo que contribuyó al deterioro de la calidad de la representación.
- b) Ausencia de relevo de los dirigentes partidistas, ausencia de un aparato de organización que vinculara los niveles locales, regionales con el nacional, escasa participación de los miembros en las decisiones político partidistas, desmotivación de la militancia, las bases no fueron tomadas en cuenta ni consultadas para la decisiones importantes. El rol legitimador de los partidos políticos aparece cercenado por su capacidad de renovación interna y adaptación a los cambios (apertura hacia la sociedad civil).
- c) Cambios en las funciones del Estado, su reducción como ente regulador de la vida cotidiana, lo que le otorgaba menor capacidad de acción a los partidos.

Finalmente, queda la duda de si hoy en día estamos presenciando la asistencia de un surgimiento de un nuevo sistema de partidos con características diferentes al anterior. Rokkan (1970) apuntó algunas condiciones necesarias para la institucionalización de un sistema de partidos. Creemos que estas condiciones aún guardan vigencia.

- Legitimidad: derecho y respeto a la crítica organizada incluyendo la de la oposición.
- Incorporación: la inclusión en el proceso de la toma de decisiones de los individuos o grupos en el ejercicio del poder público.
- Participación política: elección de representantes, derecho a veto y a ser elegido.
- Representación: capacidad institucional para producir representatividad legítima.
- Poder mayoritario: mecanismo que permite al órgano representativo ejercer un control sobre los órganos ejecutivos.

Bibliografía

- Abal Medina, Juan (2003): "Elementos teóricos para el análisis contemporáneo de los partidos políticos: un reordenamiento del campo semántico". En: Cavarozzi, Marcelo/Abal Medina, Juan (eds.): *El asedio a la política. Los partidos latinoamericanos en la era neoliberal*. Rosario: HomoSapiens Ediciones/Konrad-Adenauer-Stiftung, pp. 33-54.
- Abal Medina, Juan/Suárez, Julieta (2003): "Recorriendo los senderos partidarios latinoamericanos en la última década". En: Cavarozzi, Marcelo/Abal Medina, Juan (eds.): *El asedio a la política. Los partidos latinoamericanos en la era neoliberal*. Rosario: HomoSapiens Ediciones/Konrad-Adenauer-Stiftung, pp. 423-434.
- Álvarez, Ángel (1996): "La crisis de hegemonía de los partidos políticos". En: Álvarez, Ángel (ed.): *El sistema político venezolano: crisis y transformaciones*. Caracas: Universidad Central de Venezuela, pp. 131-154.
- Arenas, Nelly/Mascareño, C. (1997): "Descentralización y partidos políticos en Venezuela". En: *Revista Cuadernos del Cendes*, N° 35, pp. 35-54.
- Cavarozzi, Marcelo/Casullo, Esperanza (2002): "Los partidos políticos en América Latina hoy: ¿Consolidación o crisis?". En: Cavarozzi, Marcelo/Abal Medina, Juan (eds.): *El asedio a la política. Los partidos latinoamericanos en la era neoliberal*. Rosario: HomoSapiens Ediciones/Konrad-Adenauer-Stiftung, pp. 9-32.
- Coppedge, Michael (1994): *Strong Parties and Lame Drucks: Presidential Partyarchy and Factionalism in Venezuela*. Stanford: Stanford Univ. Press.
- Crisp, Brian/Johnson, Gregg (2001): "De instituciones que restringen a instituciones ausentes". En: Carrasquero, José Vicente/Maingon, Thais/Welsch, Friedrich (eds.): *Venezuela en transición: elecciones y democracia 1998-2000*. Caracas: RedPol/CDB Publicaciones, pp. 267-277.
- Díaz Polanco, Jorge/Maingon, Thais (2003): "Actitudes del venezolano frente a la democracia", trabajo presentado. En: XXIV International Congress of the Latin American Studies Association. Dallas, Texas.
- Dietz Henry/Myers, David (2002): "El proceso del colapso del sistema de partidos: una comparación entre Perú y Venezuela". En: *Revista Cuadernos del CENDES*, N° 50, pp. 1-33.
- Downs, Anthony (1957): *An Economic Theory of Democracy*. New York: Harper & Brothers.
- Ellner, Steve (1999): "Obstacles to the Consolidation of the Venezuelan Neighbourhood Movement: National and Local Cleavages". En: *Journal of Latin American Studies*, vol. 31, pp. 75-97.
- Gómez, Luis (1995): "Crisis de legitimidad e inestabilidad política en Venezuela". En: *Revista Venezolana de economía y ciencias sociales*, N° 2-3, pp. 103-164.
- Hillman, Richard (1994): *Democracy for the Privileged: Crisis and Transition in Venezuela*. Boulder: Rienner.
- Karl, Terry Lynn (1990): "Dilemmas of Democratization in Latin America". En: *Comparative Politics*, vol. 23, 1, pp. 1-21.

- (1997): *The Paradox of Plenty: Oil Booms and Petro-States*. Berkeley: University of California Press.
- Kelsen, Hans (1975): *Teoría General del Derecho y del Estado*. México, D.F.: UNAM.
- Levine, Daniel H. (1973): *Conflict and Political Change in Venezuela*. Princeton: Princeton University Press.
- Lipset, Seymour M. (1959): "Some Social Requisites of Democracy. Economic Development and Political Legitimacy". En: *American Political Science Review*, vol. 53, pp. 69-105.
- Maingon, Thais (1993): "El autoritarismo como práctica democrática: 1959-1962". En: *Revista Tierra Firme*, N° 41, pp. 61-94.
- (2002a): "Comportamiento político-electoral del venezolano y construcción de tendencias: 1998-2000". En: *Revista Cuadernos del CENDES*, N° 49, pp. 79-103.
- (2002b): "La sentencia del desastre". En: Cavarozzi, Marcelo/Abal Medina, Juan (eds.): *El asedio a la política. Los partidos latinoamericanos en la era neoliberal*. Rosario: HomoSapiens Ediciones/Konrad-Adenauer-Stiftung, pp. 411-421.
- (2003): "La política social en Venezuela: 1999-2003". En: *Informe Social*, N° 8, pp. 21-28, Ildis-Fundación Friedrich Ebert.
- Maingon, Thais/Patruyo, Thanali (1996): "Las elecciones locales y regionales de 1995: Tendencias políticas". En: *Cuestiones Políticas*, N° 16, pp. 91-136.
- Maingon, Thais/Sonntag, Heinz (1998): "Sorpresas trae la transición: las elecciones regionales, del congreso nacional y presidencial en Venezuela". En: *Anuario Social y Político de América Latina y El Caribe*, N° 2, pp. 32-41.
- Mainwaring, Scott/Scully, Timothy (eds.) (1995): *Building Democratic Institutions Party Systems in Latin America*. Stanford: Stanford University Press.
- Molina, José E. (2000): "Sistemas electorales y sistemas de partidos en los países andinos". En: *Revista Espacio Abierto*, N° 4, pp. 557-578.
- Molina, José E./Pérez, Carmen (1996): "Los procesos electorales y la evolución del sistema de partidos en Venezuela". En: Álvarez, Ángel (ed.): *El sistema político venezolano: crisis y transformaciones*. Caracas: Universidad Central de Venezuela, pp. 193-238.
- (1998): "Evolution of the Party System in Venezuela, 1946-1993". En: *Journal of Interamerican Studies and World Affairs*, vol. 40, N° 2, pp. 1-26.
- (2002): "Venezuela ratifica el cambio: elecciones de 2000". En: Ramos, Marisa (ed.): *Venezuela: rupturas y continuidades del sistema político (1999-2001)*. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, pp. 143-176.
- Panebianco, Angelo (1988): *Political Parties: Organisation and Power*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Penfold, Michael (2001): "El colapso del sistema de partidos en Venezuela: explicación de una muerte anunciada". En: Carrasquero, José Vicente/Maingon, Thais/Welsch, Friedrich (eds.): *Venezuela en transición: elecciones y democracia 1998-2000*. Caracas: RedPol/CDB Publicaciones, pp. 36-51.

- Pereira, Valia (1999): "Problemas familiares de los partidos políticos: cambio de rumbo en la socialización política de los venezolanos". En: *Revista Cuadernos del CENDES*, N° 40, pp. 139-158.
- (2001): "Cambio político radical y actitud hacia la democracia en Venezuela". En: Carrasquero, José Vicente/Maingon, Thais/Welsch, Friedrich (eds.): *Venezuela en transición: elecciones y democracia 1998-2000*. Caracas: RedPol/CDB Publicaciones, pp. 52-68.
- Przeworski, Adam, *et al.* (2000): *Democracy and Development. Political Institutions and Well-Being in the World 1950-1990*. Cambridge: University Press.
- Ramos Jiménez, Alfredo (2001): *Los partidos políticos. Un estudio comparativo*. Mérida: Universidad de los Andes.
- (2002): "Partidos y sistemas de partidos en Venezuela". En: Cavarozzi, Marcelo/Abal Medina, Juan (eds.): *El asedio a la política. Los partidos latinoamericanos en la era neoliberal*. Rosario: HomoSapiens Ediciones/Konrad-Adenauer-Stiftung, pp. 381-410.
- Riutort, Matías (2002): *La pobreza en el trienio 1999-2001*. Caracas: IIES/UCAB.
- Riutort, Matías/Balza, Ronald (2001): *Salario real, tipo de cambio real y pobreza en Venezuela: 1975-2000*. Caracas: UCAB/IIES.
- Riutort, Matías/Orlando, María B. (2001): *Las cifras de pobreza en Venezuela*. Caracas: IIES/UCAB.
- Roberts, Kenneth (2001): "La descomposición del sistema de partidos en Venezuela vista desde un análisis comparativo". En: *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, N° 2, pp. 183-200.
- (2002): "El sistema de partidos y la transformación de la representación política en la era neoliberal latinoamericana". En: Cavarozzi, Marcelo/Abal Medina, Juan (eds.): *El asedio a la política. Los partidos latinoamericanos en la era neoliberal*. Rosario: HomoSapiens Ediciones/Konrad-Adenauer-Stiftung, pp. 55-76.
- Rokkan, Stein (1970): *Citizens, Elections, Parties, Approaches to the Comparative Study of Process of Development*. Oslo: Universitet Forlaget.
- Sonntag, Heinz/Maingon, Thais (1990): "Las elecciones en Venezuela en 1988 y 1989: del ejercicio del rito democrático a la protesta silenciosa". En: *Revista Mexicana de Sociología*, N° 4/90, pp. 127-154.
- Steve; Ellner (1999): "Estudios políticos de Venezuela: un regreso a las realidades del tercer mundo". En: *Revista Politeia*, N° 22, pp. 61-82.
- Tanaka, Martín (2002): *La situación de la democracia en Colombia, Perú y Venezuela a inicios de siglo*. Lima: Comisión Andina de Juristas.
- Ware, Alan (1996): *Political Parties and Party Systems*. Oxford: Oxford University Press.
- Welsch, Friedrich (1992): "Venezuela. Transformación de la cultura política". En: *Nueva Sociedad*, N° 121, pp. 16-20.

Anexos
Cuadros y Gráficos

**Cuadro 1: Resultados elecciones parlamentarias,
Venezuela 1958-2000 (Porcentajes)**

Años	AD-COPEI	OTROS	Convergencia	LCR	MVR
1958	64,7	35,5			
1963	53,5	46,5			
1968	49,5	50,4			
1973	74,7	25,3			
1978	79,5	20,5			
1983	78,6	21,4			
1988	74,3	25,7			
1993	46,0	19,5	13,8	20,7	
1998	36,1	44,0			19,9
2000	21,2	34,5			44,3

Fuente: de 1958-1993: Molina/Pérez (1996; 1998; 2002).

**Cuadro 2: Resultados elecciones presidenciales,
Venezuela 1958-2000 (Porcentajes)**

Años	AD-COPEI	OTROS	Convergencia	LCR	MVR
1958	96,9	3,13			
1963	64,4	35,60			
1968	53,0	47,00			
1973	56,3	43,70			
1978	84,0	16,00			
1983	88,6	11,40			
1988	88,0	12,00			
1993	46,3	1,20	30,5	22,0	
1998*		43,80			56,2
2000*		40,20			59,8

Fuente: De 1958-1988; Molina/Pérez (1996; 1998; 2002).

*: AD como COPEI no llevaron candidatos propios.

Cuadro 3: Confianza en las instituciones, en %, Venezuela 1996 y 2000

Institución	1996 Mucha y alguna	2000 Mucha y alguna
Iglesia Católica	74	76
Ejército	60	64
Federaciones Empresariales	55	64
Medios de comunicación	41	64
Gobierno/Administración pública	29	47
Organizaciones de la sociedad civil	49	56
Policía	30	41
Congreso/Asamblea Nacional	23	34
Sindicatos	27	23
Partidos políticos	14	20

Fuente: Estudio Mundial de Valores EMV (1996; 2000).

Cuadro 4: Pobreza total y crítica, Venezuela 1975-2002

Años	Nivel Hogares	
	Pobreza total	Pobreza crítica
1975	26,1	17,3
1976	28,9	9,3
1977	27,6	7,4
1978	23,0	5,9
1979	24,2	6,9
1980	24,3	9,6
1981	29,4	6,6
1982	33,3	8,6
1983	35,7	10,6
1984	37,2	11,9
1985	42,3	14,5
1986	43,6	14,0
1987	49,3	18,1
1988	52,4	18,4
1989	58,9	26,9
1990	68,9	30,7
1991	69,8	35,8
1992	62,4	27,1
1993	60,1	25,8
1994	59,2	25,6
1995	66,7	25,3
1996	77,1	45,1
1997	70,0	37,0
1998	60,1	29,0
1999	57,2	26,8
2000	58,8	25,8
2001	62,2	28,1
2002	67,3	33,2

Fuente: Riutort/Orlando (2001); Riutort (2002).

Cuadro 5: Tasa de desempleo, Venezuela 1980-2002

Años	Tasa de desempleo %
1980	5,9
1981	6,2
1982	7,1
1983	10,1
1984	23,0
1985	13,1
1986	11,0
1987	7,6
1988	5,6
1989	7,3
1990	9,2
1991	9,5
1992	8,6
1993	6,6
1994	8,5
1995	10,2
1996	11,8
1997	11,4
1998	11,1
1999	14,9
2000*	13,9
2001*	13,0
2002*	16,6
2003 (Agosto)	17,8

Fuente: Riutort/Balza (2001).

*: Instituto Nacional de Estadística.

Cuadro 6: Población empleada en el sector informal, Venezuela 1981-2002

Años	%
1981	44,3
1990	34,2
1994	40,6
2001	48,1
2002*	51,2
2003* (Agosto)	53,0

Fuente: CEPAL.

*: Instituto Nacional de Estadística.

Cuadro 7: Número de gobernadores electos por agrupación política, Venezuela 1989-2000 (a)

Agrupación política	1989	1992 (b)	1995	1998	2000
AD	11	7 (8)	12	7	2
COPEI	6	11 (9)	3	3	1
MAS	2	3 (4)	4	3	3
La Causa R	1	1	1	-	-
Convergencia	-	-	1	1	1
Independientes	-	-	1	-	1
MVR	-	-	-	7	12
PRZVL-PROCA	-	-	-	1	1
MERI-COPEI-AD	-	-	-	1	-
PPT	-	-	-	-	2
Total	20	22	22	23	23

Fuente: CSE/CNE: Dirección de Estadísticas Electorales. Cálculos propios.

(a): En atención a la organización política que obtuvo más votos.

(b): Comicios repetidos.

**Cuadro 8: Alcaldes electos por agrupación política,
Venezuela 1995-2000**

Agrupación política	1989		1995		2000	
	Cargos	%	Cargos	%	Cargos	%
AD	149	55,4	190	57,6	90	26,9
MVR	-	-	-	-	81	24,2
COPEI	99	36,8	91	27,6	50	14,9
MAS	-	-	19	5,8	20	6,0
PPT	-	-	-	-	15	4,5
LCR	-	-	7	2,1	7	2,1
PRVZLA	-	-	-	-	6	1,8
Convergencia	-	-	8	2,4	6	1,8
MPJ	-	-	-	-	3	0,9
Otros	21	7,8	15	4,5	57	17,0
Total	269		330		335	

Fuente: CSE/CNE: Dirección de Estadísticas Electorales. Cálculos propios.

Cuadro 9: Votos válidos de gobernadores por agrupación política y entidad federal, 1992-2000

Entidad	1992			1995			1998			2000			
	Total de votos	AD- COPEI (%)	Otras (%)	Total de votos	AD- COPEI (%)	s (%)	Total de votos	AD- COPEI (%)	Otras (%)	Total de votos	MVR %	AD- COPEI (%)	Otras (%)
Amazonas	16.229	52,9	47,1	20.041	62,6	37,3	24.404	61,9	38,1	nd	nd	nd	nd
Anzoátegui	128.055	65,2	34,8	248.910	52,4	47,5	269.397	31,8	68,1	309.535	41,7	5,3	53,7*
Apure	61.500	88,1	11,8	78.307	80,2	19,8	82.880	45,6	54,3	105.157	44,2	48,3	7,4
Aragua	282.473	29,8	70,2	218.954	23,5	76,5	316.435	17,2	82,7	396.605	84,7	3,1	12,1
Barinas	119.143	93,4	6,6	134.475	92,3	7,7	156.272	48,2	51,8	167.999	52,6	36,4	11,1
Bolívar	214.134	31,3	68,7	209.656	49,1	50,9	244.474	40,6	59,3	273.802	63,7	31,4	4,8
Carabobo	328.407	76,8	23,3	292.918	39,8	60,2	431.176	11,8	88,1	487.224	38,1	---	61,9*
Cojedes	60.790	85,9	14,1	71.649	81,5	18,5	77.197	73,1	26,9	80.795	49,1	49,2	1,6
Delta Amacuro	6.075	26,3	73,7	32.169	36,4	63,6	38.650	29,6	70,3	38.349	6,9	29,8	63,2*
Falcón	195.557	77,1	22,9	186.889	71,9	28,1	217.063	68,3	31,6	231.087	48,6	45,6	5,7
Guárico	134.256	85,9	14,1	125.126	66,4	33,5	169.308	44,5	55,3	165.011	10,7	38,6	50,7*
Lara	232.003	48,6	51,3	302.194	42,6	57,3	333.796	33,4	66,5	376.600	62,1	35,6	2,3
Mérida	165.986	89,5	10,5	174.053	82,4	17,6	199.690	57,4	42,6	221.668	48,5	47,7	3,8
Miranda	435.931	61,9	38,1	380.085	58,3	41,6	558.080	42,9	57,1	666.351	33,7	64,8	1,4

Entidad	1992			1995			1998			2000			
	Total	AD- COPEI	Otras	Total	AD- COPEI	Otras	Total	AD- COPEI	Otras	Total	MVR %	AD- COPEI	Otras
Monagas	147.300	85,6	14,3	155.488	68,5	31,4	175.801	47,2	52,7	192.923	32,6	41,2	26,1
Nueva Esparta	81.868	90,8	9,2	104.657	78,4	21,6	95.986	22,8	77,1	122.366	48,3	47,3	4,4
Portuguesa	165.072	55,1	44,9	165.293	66,5	33,5	180.705	58,7	41,3	202.809	50,1	45,1	4,8
Sucre	167.029	38,9	61,1	185.016	49,3	50,6	196.427	44,8	55,2	228.583	58,2	41,2	0,6
Táchira	208.929	78,6	21,3	212.117	61,6	38,3	261.372	59,3	40,6	292.094	21,5	43,6	34,8
Trujillo	148.559	92,2	7,7	156.684	65,4	34,6	165.518	55,6	44,3	178.903	56,9	36,1	7,1
Yaracuy	116.992	88,4	11,6	124.635	52,1	47,9	130.012	22,8	77,2	142.685	35,4	8,6	55,9
Zulia	507.386	87,2	12,8	532.852	47,5	52,5	559.055	55,5	44,4	661.505	26,7	0,6	72,5
Vargas	---	---	---	---	---	---	83.497	37,9	62,1	84.250	59,7	12,1	28,0
Total	4.412.208	66,2	33,8	4.499.687	55,8	44,2	5.007.156	42,3	57,1	5.637.229	44,3	32,3	23,4

Entidades en las cuales una organización política obtuvo mayor número de votos que AD, COPEI y MVR: Anzoátegui, LCR obtuvo 39%; Carabobo, Proyecto Venezuela-Carabobo (PRVZLA-PROCA) 61%; Delta Amacuro, MAS 63%; Guárico, PPT 48%; Táchira, MAS 29%; Yaracuy, LAPY 51%; Zulia, la organización política Un Nuevo Tiempo obtuvo 51%; en Vargas el PPT obtuvo 22%.

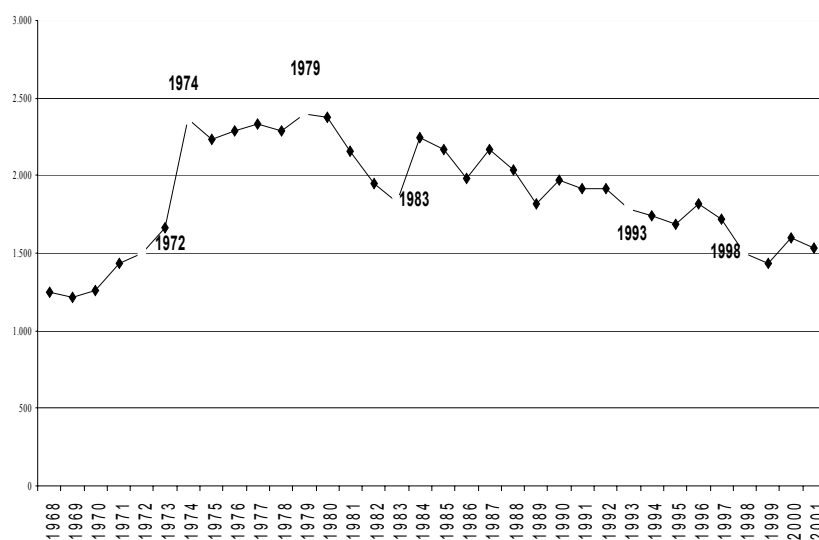
Fuente: CSE: Dirección de Estadísticas Electorales /CNE: Gaceta Electoral de la República Bolivariana de Venezuela, N° 90, 4-12-00. Cálculos propios.

Cuadro 10: Número efectivo de partidos en las elecciones presidenciales y parlamentarias, Venezuela 1947-2000

Elección	Presidenciales Np	Parlamentarias Np
1947	1,13	1,11
1958	1,91	1,83
1963	3,30	1,33
1968	3,90	4,66
1973	1,96	2,12
1978	2,21	2,66
1983	1,62	1,79
1988	1,83	2,24
1993	4,80	4,88
1998	6,40	7,60
2000	3,40	4,30

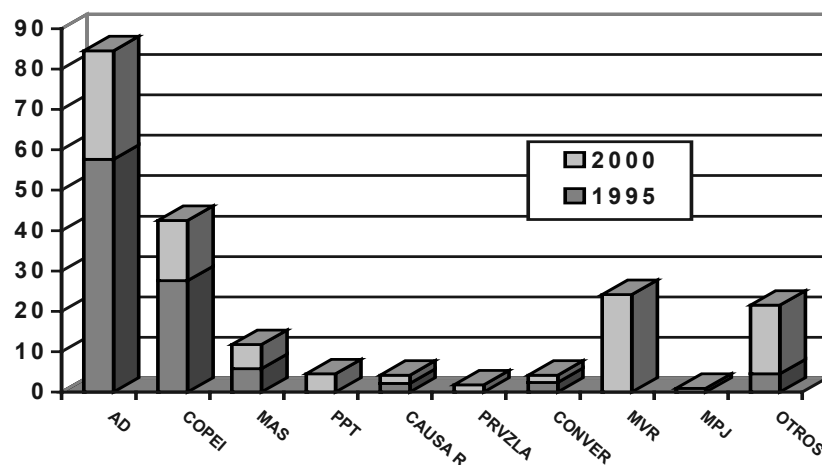
Fuente: Molina/Pérez (1996; 2002); Molina (2000).

Gráfico 1: Ingreso nacional per-cápita a precios constantes de 1997. Venezuela 1968-2001 (Miles de Bs.)

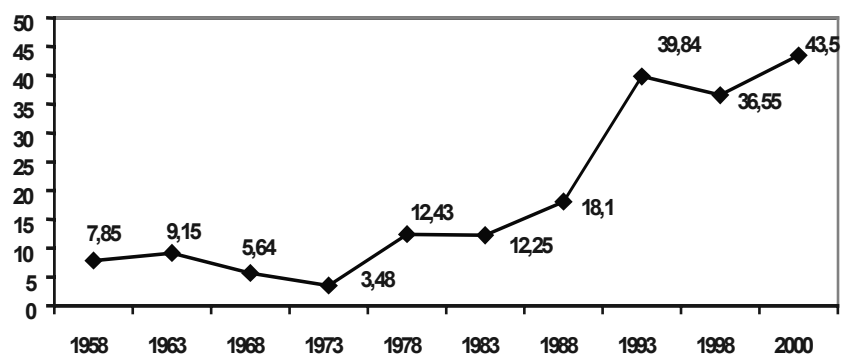


Fuente: Banco Central de Venezuela, Cálculos propios.

**Gráfico 2: Alcaldes por agrupación política.
Venezuela 1995-2000 (porcentajes)**



**Gráfico 3: Abstención en elecciones presidenciales.
Venezuela, 1958-2000 (porcentajes)**



Günther Maihold

¿Por qué no aprenden las elites políticas? El caso de Venezuela

La crisis venezolana que desembocó en el ascenso de Hugo Chávez al poder ha sido descrita como una crisis de triple carácter: una crisis fiscal del Estado causada en parte por una debilidad del sector privado nacional, una crisis y disfunción administrativa asociada a una burocracia estatal inflada y una crisis de legitimidad de las instituciones públicas que se extendía desde el Congreso pasando por el sistema judicial hasta los mismos partidos políticos y las instancias correspondientes al sistema rentista petrolero (Smith/McCoy 1995: 2). Al mismo tiempo existen ciertos elementos estructurales que impidieron una reforma de estas deficiencias del sistema: la extrema centralización del Estado y del sistema de partidos, la cooptación de los grupos de interés (empresarios y sindicatos) por parte del Estado, los mecanismos de consensos y negociación basado en los pactos de elites y una política masiva de subsidios y distribución.

Con este diagnóstico resulta difícil poder despejar un solo factor central para analizar el devenir del sistema político venezolano de la 4ª República. La interrelación y los bloqueos mutuos de los ejes y de los procesos internos de este sistema, considerado por más de 30 años como estable y ejemplar frente a la presencia de muchos gobiernos de carácter autoritario en la región (Maihold 1988), impide el aislamiento de una variable única que fuera apta para una interpretación de carácter más global. Por lo tanto el presente trabajo se limita a tratar un elemento, que para el caso venezolano puede ser detectado desde una retrospectiva histórica como de carácter inspirador en el análisis: la incapacidad de aprendizaje en las elites políticas del país que siempre prefirieron reeditar el sistema de consensos “puntofijista”. Esta demostración de sobre-aprendizaje (Jácome 2000) de una experiencia histórica particular de los años 60 que, aunado a las dinámicas de una economía petrolera, implicó la generación de las bases para una reorientación profunda del sistema político con la subida de Hugo Chá-

vez al poder, resultado del mismo agotamiento del elitismo estéril que ya no lograba renovarse y adaptarse a las exigencias de la sociedad venezolana. Un análisis de estas estrategias de aplicación de aprendizajes habrá que combinar con una revisión de la tipología específica que ha tomado en el caso venezolano el desarrollo de sus elites.¹

1. Poder y aprendizaje

“Poder es la circunstancia de no tener que aprender” es una definición célebre del politólogo Karl W. Deutsch (1963: 21), la cual hace hincapié en que las necesidades de adaptación pueden ser externalizadas hacia otros por parte del que posee el poder. En este sentido el poder puede entenderse como una “patología de aprendizaje” la cual se hace más evidente en el caso de las elites políticas, que por su participación del poder siempre se encuentran subordinadas a estas dinámicas patológicas. Entendiendo “poder” en este sentido se abren dos dimensiones para poder asociar los procesos de aprendizaje al tema del cambio social: La falta de adaptación puede incluir en su extremo la erosión del mismo poder, en caso que no se logre instituir un procedimiento a través del cual se pueda disponer de la información y el conocimiento (como resultado del aprendizaje) necesarios para impedir situaciones de profunda erosión de poder, se corre el riesgo de ser sustituido en el ejercicio de las funciones sociales o políticas de poder y dominancia.

Por esta razón parece muy oportuna la diferenciación que ha introducido Ernst B. Haas (1990: 3) entre los procesos de adaptación y de aprendizaje: Mientras el aprendizaje implica cambios de comportamiento debido a que el actor respectivo pone en entredicho los fundamentos originales que orientan sus valores y acciones, la adaptación implica asumir nuevas acciones sin poner en tela de juicio las mismas bases del comportamiento. Por lo tanto solamente se recurre a un cambio de los instrumentos de la acción en base a una racionalidad técnica, mientras en procesos de aprendizaje se incluirían tanto las metas como los instrumentos de acción en la búsqueda y la definición de nuevos conocimientos consensuales que se han puesto a la disposición a través de la influencia de comunidades epistémicas. Un comporta-

¹ Aparte del texto de Bonilla (1972), Hillman (1994) y los recientes estudios en el marco del volumen editado por McCoy/Myers (2004) no han trascendido estudios sobre las elites venezolanas.

miento adaptativo en este sentido solamente añadiría más metas sin preocuparse mucho de su coherencia en una visión muy incrementalista.

En este sentido, aprendizaje implica la construcción de nuevas visiones fundamentales y la revisión de valores y metas que orienten la acción (social), estableciendo otros nexos causa-efecto que deban guiar el quehacer en el futuro. Esta diferenciación de la postura adaptativa es central para poner en el nivel adecuado nuestro análisis del caso venezolano en el cual enfocaremos entonces no solamente las “vueltas políticas” de corto plazo de la elite venezolana sino seguiremos los grandes hitos del desarrollo político en Venezuela para poder analizar si se dieron estas reubicaciones fundamentales en la interpretación de la realidad.

2. Tipos y procesos de aprendizaje sociales

Para poder ubicar el tema del aprendizaje de un actor colectivo como las elites políticas venezolanas hay que combinar diferentes elementos metodológicos como son la teoría sobre procesos de aprendizaje a nivel de la psicología cognitiva entre los que tomen las decisiones, las aportaciones de la teoría de la organización con referencia al cambio de comportamiento a nivel burocrático y corporativo y conceptos del aprendizaje social en el cambio político. Además existen conceptos de la teoría de socialización en cuanto a valores y normas de la población que pueden surtir un efecto en este debate.²

En la psicología cognitiva se parte de la idea de que crisis o traumas inducen a generar aprendizajes mucho más efectivos que situaciones de normalidad en base a una acumulación gradual de conocimientos. Así el sufrimiento de fracasos estimula reevaluaciones de las creencias básicas y promueve así el aprendizaje mucho más que el éxito que más induce a comportamientos de adaptación. Igualmente resultan mucho más importantes las experiencias directas para producir más aprendizaje, que experiencias secundarias transmitidas a través de terceras fuentes.

2 Para este apartado me estoy apoyando en la investigación de Jennifer McCoy (2000a; 2000b).

Se pueden diferenciar diferentes tipos de aprendizaje:

- **aprendizaje simple** (en el sentido de adaptación) que produce cambios en los instrumentos
- **aprendizaje complejo** implica redefiniciones en las prioridades y metas.
- Los métodos o instrumentos del aprendizaje complejo se hacen efectivos en base
- a la **interacción social** (p.ej. a través de procesos de negociación con otros “power contenders”) o con actores externos en base a nuevos conocimientos o efectos de demostración por impulsos externos,
- a la **reflexión** como consecuencia de fracasos y la búsqueda colectiva de nuevos caminos y
- a la **rotación de personal** (renovación, rotación y integración de nueva gente).

Sin embargo, los procesos de aprendizaje no tienen un carácter homogéneo en los colectivos sociales. Más bien hay que contar con la posibilidad de que diferentes subgrupos estén sacando enseñanzas diferentes debido a sus propios mitos sociales u orientaciones ideológicas. Especialmente en sociedades complejas, donde los mecanismos de cohesión social se han ido debilitando, no se puede suponer que haya gran coherencia en las elites en cuanto a las lecturas e interpretaciones que puedan resultar de situaciones traumáticas. Por lo tanto, hay que suponer a su vez la existencia de procesos de **aprendizaje divergente** que refieren a enseñanzas diferentes que actores varios hayan aprendido de la misma experiencia, así como situaciones de **sobreaprendizaje** (*overlearning*) que corresponden al aprendizaje negativo, es decir percepciones basadas en aprendizajes anteriores bloquean o frenan por su peso el procesamiento de información nueva o la interpretación de situaciones nuevas.

Hay que resaltar que las teorías de desarrollo han hecho hincapié en la posibilidad del “leapfrogging” (Amiti 2001), la oportunidad que las sociedades en vías de desarrollo pueden aprovechar para brincarse etapas formativas del desarrollo, aprovechándose de las experiencias y adelantos hechos por otros países más desarrollados. A este ahorro de recursos hay que contraponer la falta de los procesos de aprendizaje propios, ya que se incurre en dinámicas de **aprendizaje instrumental**

las cuales incluyen la posibilidad de acudir al “préstamo” de ideas generadas en otro ambiente para mejorar la propia posición estratégica. Esta situación por si sola no implica un proceso de aprendizaje como tal, sino que genera procesos de aprendizaje divergentes por los efectos que pudieran tener estas “ideas prestadas” en el ámbito político propio. Tales experiencias pueden demostrarse especialmente en aquellos países en los cuales se realizó más bien una implantación externa de un régimen democrático sin que los mismos ciudadanos realmente hayan luchado por lograr este sistema de convivencia social. Por lo tanto, hay que resaltar que procesos de aprendizaje instrumental pueden resultar exitosos, sin embargo, la evidencia empírica más bien indica que una situación de aprendizaje complejo con un amplio involucramiento de la población puede dar mayor estabilidad a regímenes democráticos.

Aparte, señalan varios autores (Offe/Preuß 1990) que la democracia no puede sobrevivir sin que el aprendizaje cognitivo estuviera acompañado por el **aprendizaje moral o normativo**: la convicción de que el sistema democrático será siempre el mejor sistema de gobierno para toda la sociedad difícilmente puede implantarse desde afuera.

Sin embargo, sigue presente la dificultad de aplicar conceptos de aprendizaje individual a procesos colectivos de aprendizaje sin caer en la reedificación de actores colectivos. Por lo tanto se propone analizar aquellos elementos de búsqueda de nuevas rutinas y procesos de “trial and error” para encontrar indicios de procesos alternativos/divergentes de aprendizaje o se analizan las maneras cómo en comunidades epistémicas se transfieren nuevas visiones para establecer las bases de un conocimiento consensuado de carácter paradigmático. El aprendizaje colectivo implica dinámica de grupos, relaciones de poder y ámbitos de inseguridad alrededor de ciertas temáticas, los cuales por su parte abren espacios para nuevas ideas y mayores oportunidades para el aprendizaje. Esta tesis se profundiza en la opinión de Haas (2004) en la idea de que aprendizaje en organizaciones públicas tiene que originarse por fuera de la política, ya que posibles competidores por posiciones de poder se inclinan por definir la situación en términos de códigos de poder sin incluir necesariamente el interés por un mejor análisis del marco fundamental del quehacer político; es decir, entre elites políticas dominan relaciones de carácter adaptativo y menos de

aprendizaje, lo cual demuestra su distancia por inducir el cambio social en base a nuevos conocimientos.

3. Ciclos de aprendizaje en el caso venezolano

En lo siguiente se partirá de la tesis central desarrollada por Jácome (2002: 99ss.) que dice que Venezuela puede considerarse un caso ejemplar de sobre-aprendizaje y de un aprendizaje simple de su elite política, mientras que el aprendizaje complejo solamente se hace presente en algunos individuos y no en el contexto de los grupos sociales como tales, con el resultado de en una grave crisis de gobernabilidad. Sin embargo, se evidenció el aprendizaje divergente en varios individuos y grupos entre 1989 y 1995, mientras que la ausencia del aprendizaje complejo en la mayoría de la elite política ayudó a que pudiera madurar una situación de un casi descalabro de una democracia consolidada, cuyo desenlace fatal logró ser evitado en momentos de agudo conflicto. En términos de las teorías de transición democrática esta experiencia ha sido discutida por unos como una “desconsolidación” democrática mientras otros insisten en un proceso de “reequilibrar” una democracia establecida.³

3.1 El “puntofijismo” y el surgimiento del sobre-aprendizaje

El patrón de comportamiento que definió el posterior desenvolvimiento del quehacer político en Venezuela fue el “Pacto de Punto Fijo” de 1957, no tanto por los acuerdos firmados por los suscriptores de este acuerdo, sino también por las reglas no escritas, las cuales sin embargo lograron normar por más de 30 años los estilos y modalidades de la 4ª República venezolana. Como elemento central se concibe la experiencia del **trienio** (1945-1948) de Rómulo Gallegos, período en el cual se definieron los rasgos centrales de una matriz estadocéntrica que prevalecieron incluso durante la dictadura de Pérez Jiménez (1948-1958). En el **trienio** se rompió la tradicional alianza entre la elite política, militar y económica que estaba marcada por su asociación con la producción nacional del café, del cacao y del petróleo (Bonilla 1972: 83). El surgimiento de nuevos actores políticos con característica de masas cambió los equilibrios establecidos y alcanzó

3 Cfr. el texto de John Peeler en este volumen y Smith/McCoy (1995).

importancia social, aunque marcados por un cierto sectarismo de Acción Democrática (AD). Una confluencia de los diferentes segmentos de la elite y las fuerzas políticas apenas vuelve a aparecer con la Unión Patriótica en 1957 y marca el aprendizaje central de los diferentes grupos de la elite manifestado en el “Pacto de Punto Fijo” firmado por los líderes de los partidos de tinte socialdemócrata AD, democristiana COPEI (Comité de Organización Política Electoral Independiente) y URD (Unión Republicana Demócrata) con la participación de los militares, la iglesia, los empresarios y sindicatos. Este acuerdo logra establecer condiciones que han sido centrales para un período de paz y estabilidad en la vida política de Venezuela que solamente se vio interrumpido en los años 60 por el surgimiento de la guerrilla.

Como elementos centrales de este acuerdo y del estilo de hacer política emanado de él pueden mencionarse:

- El centralismo del Estado y de los partidos como instrumentos de integración del sistema político y de la vida social;
- la incorporación de los mayores grupos de interés (empresarios y sindicatos) en las decisiones gubernamentales, dando lugar a un sistema de articulación de intereses de carácter corporativo;
- las fórmulas de negociación y de consenso a través de pactos políticos de subsidio como mecanismos para solventar conflictos político-sociales;
- el petróleo como base de financiamiento del sector público, lo cual implicó al mismo tiempo una baja presión impositiva y fiscal sobre los demás sectores productivos y otros ingresos (Navarro 1995).

Este concepto de hacer política y dirimir conflictos padeció desde su puesto en funcionamiento de un carácter exclusivista y excluyente al mismo tiempo, ya que adjudicó a las partes firmantes la capacidad de veto y bloqueó la entrada en el régimen de otros grupos de interés hasta el grado que debieron recurrir a la fuerza para ser admitidos en el sistema, como fue el caso de la guerrilla convertida en MAS (Movimiento al Socialismo).

La sucesión presidencial del país estaba dominada por las dos fuerzas políticas centrales de Venezuela, AD y COPEI, que casi lograron turnarse cada 5 años en el poder como clara expresión de este sistema de pacto establecido.

Presidentes de Venezuela

1958 Junta de Gobierno:	Wolfgang Larrazábal Ugueto
1958-1959	Edgard Sanabria
1959-1964	Rómulo Betancourt (AD)
1964-1969	Raúl Leoni (AD)
1969-1974	Rafael Caldera (COPEI)
1974-1979	Carlos Andrés Pérez (AD)
1979-1984	Luis Herrera Campíns (COPEI)
1984-1989	Jaime Lusinchi (AD)
1989-1993	Carlos Andrés Pérez (AD)
1993-1994	Ramón J. Velásquez
1994-1999	Rafael Caldera (Convergencia)
desde 1999	Hugo Chávez Frías (MVR)

El **Pacto** como tal garantizó la participación de los signatarios en funciones y acciones de gobierno independientes de los resultados electorales. La búsqueda del consenso aparece como el programa general económico y político central para la realización de la estabilidad anhelada a través de comisiones, planeación concertada y acuerdos sociales que proliferaron durante el pleno desarrollo del sistema “puntofijista”.

3.2 Intentos para reeditar el modelo “puntofijista” en el marco de un aprendizaje simple (adaptación)

El sobre-aprendizaje de las elites políticas venezolanas se refleja en su búsqueda por revivir y actualizar el modelo que habían fundado y aprendido. Aparte de los elementos rentistas que alimentó el atractivo de este estilo de política, hay que tener presente que era la generación de **Punto Fijo** la que dominaba el sistema político del país, caso ejemplar de esto es la persona de Rafael Caldera, que como firmante del pacto también parece ser la personalidad que cierra la vigencia plena de este período, no sin reflejar en su segundo mandato todos los elementos centrales que integraron la racionalidad profunda del pacto.

Sin embargo, ya antes había intentos por reeditar el Pacto en otras figuras y formas: Solamente hay que recordar el primer intento más amplio de reeditar el estilo de “Punto Fijo” en los intentos del gobierno de Jaime Lusinchi por crear un Pacto Social bajo la tutela del Esta-

do en 1983 con la participación laboral de la CTV (Confederación de Trabajadores de Venezuela) y la parte empresarial representada por FEDECAMARAS (Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela).

Sin embargo, este intento no prosperó, al igual como el “Pacto para la Reforma” firmado el 4 de diciembre de 1990 por los partidos políticos representados en el Congreso durante la presidencia de Carlos Andrés Pérez. A pesar de la referencia explícita en el documento al agotamiento del “Pacto de Punto Fijo”, el nuevo Pacto resulta ser fiel heredero de la lógica pactista establecida. La percepción de crisis presente en el país desde 1982 y manejado siempre de nuevo con Leyes habilitantes desde una presidencia fuerte ya había empezado a llegar a sus límites. Desde los años 50 hasta los años 70, junto con la nacionalización de la industria del petróleo, Venezuela había vivido altos niveles de crecimiento y bajos niveles de inflación; esta experiencia estaba presente tanto en la elite como en la población en forma de “edad de oro”, situación a la cual se deseaba volver. Por lo tanto se manejó a lo largo de muchos años la hipótesis de que con el cambio del personal en el gobierno pudiera volverse a esta experiencia del pasado, induciendo una cierta lógica restaurativa en el quehacer político.

Al contrario de esta tendencia parece darse un recambio del pensar en la elite venezolana para inducir transformaciones en el país, lamentablemente más desde una perspectiva de adaptación que de aprendizaje (complejo). Esta tendencia entra en choque con la perspectiva restaurativa que se articuló desde la sociedad venezolana (Keller 1995; Myers 1995), aunque al inicio el interés por definir nuevas reglas de juego a través de la Comisión Presidencial de Reforma del Estado (COPRE) encontró amplia participación. Tratando de identificar y consensuar elementos de reforma estructural para ajustar la institucionalidad del país a los nuevos retos, la COPRE define un pacto para reformas pero sin participación real de los actores sociales, siguiendo más bien un tinte tecnócrata. Además la elite política no la asumió en términos de aprendizaje sino de adaptación a las circunstancias del momento; indicador de esta interpretación es la suspensión de la reforma constitucional en 1992. Se proyecta un énfasis demasiado articulado en cuanto a reformas económicas dándole un segundo lugar a las reformas sociales y políticas en el tiempo del presidente

Pérez, que implicó un modelo de cambio que quería acompañar con instituciones tradicionales y una cultura política establecida a una apertura económica; en lugar de este concepto unilateral habría sido esencial cambiar a su vez el comportamiento y las prácticas de la elite para poder efectuar una transformación hacia un nuevo modelo de desarrollo y de estilo político.

Sin embargo, con el fin del *boom* de los precios petroleros a finales de los años 70 quedaron por lo pronto sin base los fundamentos centrales de este modelo de desarrollo. La presión sobre la clase política por combatir la corrupción y el enriquecimiento ilícito parece dar sus efectos en cuanto a cambios políticos que coinciden con el nuevo auge petrolero en 1979. Pero con mayor fuerza en los años 1983 y 1986 Venezuela cae en graves problemas de financiamiento y de endeudamiento. Sin embargo, el esquema del “Pacto de Punto Fijo” se mantiene intacto con la alternancia de Herrera Campíns (1978) y Jaime Lusinchi (1983). Es apenas en el año 1988 con la segunda elección de Carlos Andrés Pérez y el “Gran Viraje” que aparece una nueva orientación en cuanto a la introducción de nuevas políticas con los procesos de ajuste estructural, de reforma política y descentralización, así como de los procesos de integración regional.

Sin embargo, la sociedad venezolana no aceptó este camino, tal y como lo ejemplariza con la resistencia violenta del “Caracazo” en febrero de 1989 y la posterior destitución del presidente Pérez. Con el inicio del gobierno interino de Ramón J. Velásquez y en 1994 con la elección de Rafael Caldera se da desde la elite política una señal a la sociedad venezolana que con la experiencia y las enseñanzas del pasado iba a ser posible restaurar la “edad de oro” de Venezuela, no solamente en lo económico con una nueva política centrada en la función del Estado y ajena a las recetas neoliberales (Welsch/Werz 1993).

Justamente el regreso de Rafael Caldera a la presidencia (aunque con una nueva coalición de partidos nombrado CONVERGENCIA) indica que no hubo en este contexto un empuje para la elite política de inducir un aprendizaje complejo, más bien reforzó los estilos establecidos de pensar que se podía volver a los esquemas anteriores al 2º gobierno de Carlos Andrés Pérez. En los dos primeros años de gestión, el gabinete de Caldera implementa un programa de más gobierno central e interventor hasta que la insostenibilidad de la situación fiscal y financiera del país llevan al presidente a asimilar la Agenda Vene-

zuela de Teodoro Petkoff que resulta ser un programa de ajuste monetario y de privatizaciones para poder controlar el gasto fiscal.

Acuerdo y Concertación Nacional, Nuevo Pacto social, Reforma de la Constitución, todos estos intentos de reeditar el sistema “puntofijista” no tuvieron éxito, ya que se mantuvieron dentro de los ámbitos de la lógica aprendida de la “Generación del 28”. Sin embargo, los cambios no se limitaron a las situaciones económicas, paralela va la reorientación de un sistema bipartidista a un sistema multipartidista. Surgen partidos nuevos como “Causa R” y “Convergencia”, el mismo Caldera se monta sobre un discurso antipartidista para llegar a su segunda presidencia. Su gestión estuvo marcada por el esfuerzo de encontrar y forjar alianzas legislativas para lograr su supervivencia política, ya que el partido que había fundado –COPEI– no había apoyado su candidatura. En 1993 los partidos del “Pacto de Punto Fijo” AA y COPEI apenas lograron el 47% del voto popular mientras que en 1988 habían concentrado en sus candidatos el 93% del voto en la elección presidencial. A COPEI le queda entonces asumir una posición de “oposición constructiva” en el Congreso, ejemplo del aprendizaje simple realizado por esta fuerza política. La segunda presidencia de Rafael Caldera es en este sentido la fase más típica del sobre-aprendizaje, porque aplica las lógicas del “Pacto de Punto Fijo” (Hellinger 2003: 34) y mantiene al mismo tiempo un discurso antipartidista, sin ocuparse realmente de los nuevos actores sociales que habían surgido en la sociedad y hasta en el sistema político. Se pensaba poder manejar la situación en base a los aprendizajes del pasado, y el sobre-aprendizaje solamente dejó posibilidades para el aprendizaje simple sin poner en tela de juicio los mismos fundamentos de esta experiencia histórica. Las nuevas expresiones políticas (Hellinger 2003: 35ss.) como Causa R, aunque fungieron menos como proyecto político y más en términos de electoralismo, al igual como el fenómeno político de Irene Sáez documentaron a nivel político los síntomas de la disolución de los partidos políticos establecidos ante la presencia de una Miss World 1981, que despertaba esperanza y confianza (Romero 1997).

En la fase del aprendizaje simple de las elites se vuelve a aplicar la “cultura de acuerdos” en base a políticas distributivas a favor de grupos, intereses y clientelas en un marco de hegemonía corporativista. La elite política monopoliza el proceso de toma de decisiones en el

poder, y la participación popular se ve limitada a las elecciones periódicas con los niveles de abstención electoral en aumento.

3.3 Percepciones y salidas de la crisis: el aprendizaje divergente

Los síntomas de crisis del modelo pos-1958 en la retrospectiva pueden colocarse en una larga fila de complicaciones que pusieron en jaque al sistema político establecido:

El inicio lo da la devaluación en el año 1983 que todavía podía ser percibida como un problema coyuntural, ya el mismo “Caracazo” de 1989 y los intentos del golpe de Estado el 10 de marzo de 1992 y de nuevo el 27 de noviembre del mismo año no dejaban duda de que no se trataba solamente de un problema del presidente Carlos Andrés Pérez; los trabajos del Consejo Consultivo de la Presidencia de la República y el documento final de las deliberaciones del “Grupo de Notables” señalaron claramente el agotamiento del sistema establecido, pero los intentos de lograr una Reforma Constitucional, otro intento de lograr un nuevo consenso político, fracasaron en 1992 (Kornblith 1992) al igual como el Gran Acuerdo Nacional elaborado por AD y COPEI. Se puso en el primer lugar de la atención pública la remoción del presidente de su cargo. Con su suspensión el 21 de mayo de 1993 y su sustitución el día 5 de junio por Ramón Velásquez como presidente interino era evidente que la crisis estructural rebasaba los alcances del sistema “puntofijista”, aunque la función del “Grupo de Notables” como fuerza extrainstitucional y alejado de los partidos tan criticados reflejaba que el cambio de personas era suficiente para ajustar el sistema venezolano. La crisis del sector bancario en 1994 y la gestión de Rafael Caldera como presidente apoyado por el MAS y Convergencia Nacional, una coalición de 16 partidos pequeños, dejaba claro que la vuelta al pasado y la reedición del Pacto no iba resolver la crisis profunda que padecía el país. La votación en favor de Caldera de apenas 30,5% de la población no dejó dudas al respecto. El gobierno de Caldera podría interpretarse como un intento de la sociedad venezolana de reinventar el país desde una perspectiva del pasado, lo cual puso en duda las búsquedas anteriores de una nueva matriz para las relaciones políticas y sociales.

La posición de que la disposición del petróleo hace posible “una democracia con pocos perdedores” (Karl 1995: 33) ha mostrado su

poca validez en el caso venezolano, que por lo menos ha estado expuesto a un proceso significativo de regresión democrática. Más bien se está adelantando la interpretación de que las estructuras rentistas están teniendo un efecto perverso en tanto “congelan arreglos políticos existentes” (Karl 1995: 34) por la transformación de las instituciones (políticas) en agencias de distribución de rentas, lo cual les quita toda flexibilidad para poder adaptarse a tiempo a nuevos retos.

Con el asenso al poder de Hugo Chávez, ganó presencia la opinión de que “la elite de *Punto Fijo*” representaba la corrupción política, sindicatos entregados a intereses personales y hombres adinerados de empresa (Myers 2004: 12), discurso que sigue aplicando hasta hoy en día a la oposición denunciándola como “las oligarcas”. En este sentido logra ganar apoyo para su propia posición señalando a aquellos grupos que habían participado en el Pacto, los partidos, los empresarios, la iglesia y los militares,⁴ todos hoy en día grupos ajenos y opuestos al régimen chavista o reconvertidos bajo los signos del movimiento bolivariano como en el caso de las fuerzas armadas. Ya este cambio hace perceptible el aprendizaje divergente surgido desde la fase de la crisis venezolana, cuando un grupo central –no integrado en los arreglos “puntofijistas”– pone en entredicho los fundamentos de un sistema y logra el apoyo de amplias partes de la población contra la elite dominante. Así como el Partido Comunista de Venezuela (PCV) había quedado excluido del “Pacto de Punto Fijo”, hoy en día se ha mantenido aparte a los representantes del “viejo régimen”, lo cual implicó la resistencia de estos grupos a través de movilizaciones, del golpe del 11 de abril de 2002, de la huelga de PEMEX y del referéndum revocatorio. Sin embargo, aquellos que habían quedado fuera del arreglo elitista de “Punto Fijo”, los pobres urbanos y las clases medias en situación de precariedad (Myers 2004: 25) se convirtieron en los grupos centrales de apoyo al proyecto de Hugo Chávez y fungen hoy en día como su más fuerte base electoral.

A lo mejor la formación del consenso entre las élites se convirtió en la meta central de la estabilidad democrática a costa de la representación, la participación y la legitimación.

4 Una revisión de diferentes grupos integrantes del Pacto ofrecen Ortiz (2004), Hillman (2004) y Trinkunas (2004).

4. Conclusiones: enseñanzas de un caso de aprendizaje paradigmático

Venezuela (Jácome 2002: 120ss.) puede comprenderse como un caso de aprendizaje democrático temprano con oportunidades posteriores de aprendizaje, fungiendo así como “test”, si los actores aprenden desde nuevas situaciones o crisis. Tomando como referencia las tres dimensiones del aprendizaje complejo (interacción de la elite política con otros actores sociales, reflexión y rotación de personal) podemos identificar solamente en situaciones muy reducidas que se haya dado un proceso de aprendizaje complejo. Sin embargo, nos parece a diferencia de la tesis sostenida por Jácome (2002) que hubo en la segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez una primera fase de aprendizaje divergente más allá de lo individual, pero la puesta en práctica de este aprendizaje fracasó ante la opinión dominante de grandes grupos de la elite y de la población que redujeron los síntomas de la crisis a un problema del personal político y se esforzaron hasta la segunda presidencia de Rafael Caldera por lograr una restauración de esquemas “puntofijistas”, tanto en la política económica como en el modelo de generación de consenso. Fue apenas con la Agenda Venezuela que este gobierno cambió de orientación hacia un programa de ajuste, lo cual de nuevo implicó una deslegitimación profunda del sistema político.

Por lo tanto nos parece oportuno señalar que solamente desde la interacción de los procesos de aprendizaje o no-aprendizaje entre elites y grandes grupos de la población logramos entender adecuadamente el desenlace del sistema “puntofijista” en el régimen chavista. La desarticulación de las elites tradicionales y sus instituciones junto con las expectativas en la población que se pueda restaurar la “edad de oro” del desarrollo venezolano bloquearon el avance del aprendizaje divergente tanto hacia otros segmentos de la elite como amplios sectores de la población. El limitado cambio generacional en la composición de la elite política (reflejado en personalidades como Rafael Caldera o Ulises Alfaro) es seguramente un elemento adicional que impidió que procesos de aprendizaje hubieran podido avanzar más.

En este sentido se pueden identificar para el caso venezolano los siguientes elementos en cuanto a los procesos de aprendizaje social:

- el éxito del método “puntofijista” en las décadas iniciales experimentado por los actores políticos involucrados;
- el sobre-aprendizaje de las elites en términos de tratar de resolver cada crisis en base a una estrategia consensual reeditando el método de pactos;
- dominancia de aprendizajes simples e instrumentales en el sentido de buscar la adaptación;
- impacto de comunidades epistémicas hiperintegradas en las elites políticas que dieron poco espacio para voces divergentes;
- falta de competencia entre los rivales políticos;
- limitado aprendizaje de las crisis económicas por la continuidad del esquema rentista en base al petróleo;
- falta de sintonía de procesos de aprendizaje divergentes entre segmentos de las elites políticas y sectores amplios de la población y
- una estructura de elites exclusiva y excluyente que no permitió procesos de intercambio e integración de nuevas personas más allá de relaciones de asociación (como en el caso de los tecnócratas en los segundos gobiernos de Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera).

Que el último patriarca de la política venezolana haya sido la persona que dio a Hugo Chávez, un populista militar, la posibilidad de entrar de nuevo en el juego político de Venezuela puede parecer como una ironía de la historia. Hasta donde este proyecto bolivariano abre una nueva etapa de aprendizajes paradigmáticos, como seguramente fue el caso del “Pacto de Punto Fijo”, es todavía una pregunta de investigación de futuro. Que Chávez es la expresión del fin de una época de aprendizajes importantes para la democracia venezolana –al parecer– de nuevo bajo el signo de una creciente petrolización de la política queda ya hoy fuera de cualquier duda.

Bibliografía

- Adler, Emanuel/Haas, Peter, M. (1992): "Conclusion: Epistemic Communities, World Order, and the Creation of a Reflective Research Program". En: *International Organization* vol. 46, No. 1, pp. 367-390.
- Amiti, Mary (2001): "Regional Specialization and Technological Leapfrogging". En: *Journal of Regional Science* vol. 41, pp. 149-172.
- Bonilla, Frank (1972): *Cambio político en Venezuela. El fracaso de las elites*. Caracas: CENDES.
- Deutsch, Karl W. (1963): *The Nerves of Government*. New York: The Free Press.
- Haas, Ernst B. (1990): *When Knowledge is Power. Three Models of Chance in International Organizations*. Berkeley: University of California Press.
- Haas, Peter M. (1992): "Introduction: Epistemic Communities and International Policy Coordination". En: *International Organization* vol. 46, No. 1, pp. 1-36.
- (2004): "When does Power Listen to Truth? A Constructivist Approach to the Policy Process". En: *Journal of European Public Policy* vol. 11, No. 4, pp. 569-592.
- Hellinger, Daniel (2003): "Political Overview: The Breakdown of Puntofijismo and the Rise of Chavismo". En: Ellner, Steve/Hellinger, Daniel: *Venezuelan Politics in the Chávez Era. Class, Polarization, and Conflict*. Boulder/London: Rienner, pp. 27-54.
- Hillman, Richard S. (1994): *Democracy for the Privileged. Crisis and Transition in Venezuela*. Boulder/London: Rienner.
- (2004): "Intellectuals: An Elite Divided". En: McCoy, Jennifer/Myers, David J.: *The Unraveling of Representative Democracy in Venezuela*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, pp. 115-129.
- Jácome, Francine (2000): "Venezuela: Old Successes, New Constraints on Learning". En: McCoy, Jennifer (ed.): *Political Learning and Redemocratization in Latin America: Do Politicians Learn from Political Crises?* Miami, FL: North-South Center Press, pp. 99-130.
- Keller, Alfredo (1995): "Soziale und wahlpolitische Indikatoren als Spiegel der Erfüllung politischer Forderungen. Beispiel Venezuela". En: Mols, Manfred/Thesing, Josef (eds.): *Der Staat in Lateinamerika*. Mainz: Hase & Köhler, pp. 377-390.
- Kornblith, Miriam (1992): "Reforma constitucional, crisis política y estabilidad de la democracia en Venezuela". En: *Politeia*, Caracas, No. 15, pp. 121-169.
- Maihold, Günther (1988): "30 Jahre Demokratie in Venezuela – ein Modell für Lateinamerika?". En: Sevilla, Rafael (ed.): *Venezuela. Kultur- und Entwicklungsprobleme eines OPEC-Landes in Südamerika*. Bad Honnef: Horlemann, pp. 75-93.
- Myers, David J. (1995): "Perceptions of a Stressed Democracy: Inevitable Decay or Foundation for Rebirth?". En: McCoy, Jennifer/Smith, William C./Serbin, Andrés/Stambouli, Andrés (eds.): *Venezuelan Democracy under Stress*. Boulder: North-South Center Press/University of Miami, pp. 107-138.
- (2004): "The Normalization of Punto Fijo Democracy". En: McCoy/Myers 2004, pp. 11-29.

- McCoy, Jennifer (2002a): "The Learning Process". En: McCoy, Jennifer (ed.): *Political Learning and Redemocratization in Latin America: Do Politicians Learn from Political Crises?* Miami, FL: North-South Center Press, pp. 1-14.
- (2002b): "Comparative Lessons". En: McCoy, Jennifer (ed.): *Political Learning and Redemocratization in Latin America: Do Politicians Learn from Political Crises?* Miami, FL: North-South Center Press, pp. 131-148.
- McCoy, Jennifer/Myers, David J. (eds.) (2004): *The Unraveling of Representative Democracy in Venezuela*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Navarro, Juan Carlos (1995): "In Search of the Lost Pact: Consensus Lost in the 1980s and 1990s". En: McCoy, Jennifer/Smith, William C./Serbín, Andrés/Stambouli, Andrés (eds.) *Venezuelan Democracy under Stress*. Boulder: North-South Center Press/University of Miami, pp. 13-32.
- Offe, Claus/Preuß, Ulrich K. (1990): "Instituciones democráticas y recursos morales". En: *Isegoría*, Madrid, No. 2, pp. 45-74.
- Ortiz, Nelson (2004): "Entrepreneurs: Profits without Power". En: McCoy, Jennifer/Myers, David J.: *The Unraveling of Representative Democracy in Venezuela*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, pp. 71-92.
- Peeler, John A. (1985): *Latin American Democracies. Colombia, Costa Rica, Venezuela*. Chapel Hill/London: University of North Carolina Press.
- Romero, Aníbal (1997): "En torno al enigma Irene Sáez". En: *Venezuela Analítica* No. 16/junio <<http://www.analitica.com/archivo/vam1997.06/pint2.htm>> (26.08.2006).
- Smith, William C./McCoy, Jennifer (1995): "Venezuelan Democracy under Stress". En: McCoy, Jennifer/Smith, William C./Serbín, Andrés/Stambouli, Andrés (eds.): *Venezuelan Democracy under Stress*. Boulder: North-South Center Press/University of Miami, pp. 1-10.
- Trinkunas, Harold A. (2004): "The Military: From Marginalization to Center Stage". En: McCoy, Jennifer/Myers, David J.: *The Unraveling of Representative Democracy in Venezuela*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, pp. 50-70.
- Welsch, Friedrich/Werz, Nikolaus (1993): "Venezuela: die Wahlen vom Dezember 1993 und der Beginn der zweiten Amtszeit Caldera". En: *Lateinamerika: Analysen, Daten, Dokumentation*. Nr. 25/26: *Abkehr vom Neoliberalismus? Wahlen in Lateinamerika 1992-1993*. Hamburg: Institut für Iberoamerika-Kunde, Nr. 25/26, pp. 155-165.

2. El surgimiento de Hugo Chávez y la oposición

Friedrich Welsch/María del Pilar Camprubí

Las victorias electorales de Chávez y sus bases políticas

1. Introducción

Desde el mismo día de su juramentación como presidente de la República el 2 de febrero de 1999, Chávez impulsó su proyecto de refundación de la república bajo el lema de la transformación participativa de la democracia venezolana (*Gaceta Oficial* 1999: 36.634). Valiéndose de su importante apoyo electoral y sus altos niveles de popularidad, logró convertir la movilización política de la campaña electoral en una dinámica permanente, en cuyo curso los venezolanos fueron convocados a expresar sus pareceres o preferencias a través de ocho actos de carácter participativo electoral en menos de dos años. Se celebraron tres referendos y cinco elecciones hasta finales de 2003, etapa que analizamos en esta contribución:

- Referendo consultivo sobre la convocatoria de una Asamblea Constituyente, 25 de abril de 1999;
- Referendo aprobatorio de la Constitución de 1999, 15 de diciembre de 1999;
- Referendo consultivo sobre la reestructuración sindical, 3 de diciembre de 2000;
- Elecciones de los miembros de la Asamblea Constituyente, 25 de julio de 1999;
- Elecciones presidenciales, 30 de julio de 2000;
- Elecciones de gobernadores y alcaldes, 30 de julio de 2000;
- Elecciones parlamentarias: diputados a la Asamblea Nacional, al Parlamento Andino y al Parlamento Latinoamericano, 30 de julio de 2000;
- Elecciones municipales: concejales y juntas parroquiales, 3 de diciembre de 2000.

Por medio de esta cadena de referendos y elecciones, Chávez y sus aliados lograron sumar victoria tras victoria, en una ruta triunfadora

que el propio presidente comparó con la Campaña Admirable (Chávez 2003), aquella paradigmática guerra de movimiento conducida por Bolívar en 1813, cuando partió de los Andes, derrotó a las fuerzas realistas en una batalla tras otra y entró triunfante a Caracas en menos de tres meses. Los actos electorales y la secuencia de victorias crearon la imagen de una transformación profundamente participativa y de un presidente victorioso sin precedentes.

Por otra parte, Chávez definió su administración, desde el primer momento, como gobierno del pueblo (Chávez 1999), resaltando su compromiso con los sectores sociales más desfavorecidos, en los que se concentra el grueso de su apoyo político y electoral (Gil Yepes 2001: 21).

En el presente trabajo examinamos las dimensiones y la cualidad de estas victorias en perspectiva comparada y ofrecemos aproximaciones al perfil político-cultural y social de las bases de apoyo de Chávez.

2. Participación y apoyo efectivo en referendos 1999-2000

En su Decreto no. 3 de fecha 2 de febrero de 1999, el presidente Chávez justifica la convocatoria de una Asamblea Constituyente, diciendo que el sistema político venezolano estaba en crisis y las instituciones habían sufrido un “acelerado proceso de deslegitimación”, que “los beneficiarios del régimen, caracterizado por la exclusión de grandes mayorías”, habían bloqueado “los cambios exigidos por el pueblo” y que, en consecuencia, se habían “desatado las fuerzas populares” que sólo encontrarían “su cauce democrático a través de la convocatoria del Poder Constituyente Originario... para transformar el Estado, en base a la primicia [*sic*] del ciudadano...” (*Gaceta Oficial* 1999: 36.634). Ciertamente, el sistema político estaba en crisis, pero el argumento del bloqueo de cambios debe ser relativizado, pues se había introducido la elección directa de gobernadores y alcaldes, así como la institución referendaria. En la década de los años 90, antes de la entrada en vigencia de la Constitución de 1999, se realizaron en Venezuela 50 referendos regionales y locales, 31 de ellos revocatorios y 19 consultivos (Consejo Nacional Electoral).

A pesar de estos cambios dirigidos a abrirle cauces a la participación ciudadana, los venezolanos acudieron cada vez menos a las elec-

ciones desde la década de los años 80, y su fe en la institución electoral había prácticamente desaparecido, lo que puede interpretarse como creciente deslegitimación substantiva, aun cuando no formal, de ese régimen. Esta fe comenzó a recuperarse con la elección de Chávez en 1998 y quedó plenamente restablecida en la dinámica comicial de 1999 (Carrasquero/Maingon/Welsch 2001: 80). Se podía esperar, en consecuencia, que la transformación participativa del sistema político y la posterior relegitimación de los poderes públicos contarían con un amplio respaldo del electorado venezolano y que el caudal de votos que llevó al poder a Chávez y le reconfirmó en su cargo superaría con creces los niveles de sus antecesores.

Sin embargo, los datos sobre la participación de los venezolanos en referendos y elecciones no confirman esta hipótesis. Como se observa en la tabla 1, la participación en los referendos para convocar la Asamblea Constituyente y aprobar la nueva Constitución fue escuálida, alcanzando apenas a cuatro de cada diez que fueron a depositar su voto. Si nos guiamos por los criterios de legitimidad substantiva establecidos por Chávez en su justificación de la consulta, la nueva democracia participativa nació sobre una base legitimadora endeble, pues apenas un tercio de los venezolanos con derecho de votar apoyó efectivamente esa convocatoria y aprobó la nueva Constitución y sólo uno de cada seis manifestó su apoyo a la reestructuración sindical (tabla 1).

Tabla 1: Participación y apoyo efectivo en los referendos de 1999

Referendo	Participación (%)	Resultado (%)	Apoyo efectivo (% de la PE*)
Consultivo convocatoria Constituyente, 25-4-1999	38	Sí 88 No 11	Sí 33 No 5
Aprobatorio Constitución, 15-12-1999	44	Sí 72 No 28	Sí 32 No 12
Consultivo Sindical, 3-12-2000	24	Sí 62 No 38	Sí 15 No 9

*PE = población electoral;

Fuente: Consejo Nacional Electoral; cálculos propios.

3. Participación electoral y caudal de votos presidenciales 1958-2000

En la república refundada por la Constitución de 1999, que establece una “sociedad democrática, participativa y protagónica” (Constitución 1999: 3) no se han podido alcanzar o superar los niveles de participación electoral del régimen sustituido. La democracia representativa instaurada en 1958 nació y se consolidó con altísima participación, mientras que al menos en esta arena, la democracia participativa todavía queda lejos de convencer, según se desprende de la tabla 2. Los niveles de abstención se han duplicado en comicios plenamente comparables: los municipales separados (dos elecciones en 1979 y 1984, una en 2000), y han aumentado en dos tercios en los comicios presidenciales y parlamentarios paralelos (ocho elecciones de 1958 a 1993, una en 2000; la elección presidencial de 1998 fue por separado). Las elecciones regionales no son comparables en los mismos términos, dado que se celebraron cuatro procesos separados desde la introducción de la elección popular de los gobernadores de los estados, mientras que en el proceso del año 2000, se combinó la elección del presidente de la República con la de diputados a la Asamblea Nacional, gobernadores de los estados, diputados a los Consejos Legislativos y alcaldes (“megaelecciones”). Hasta 1978, los venezolanos habían elegido a sus gobernantes y representantes en un solo acto electoral, con un voto llamado “grande” para presidente de la República y otro llamado “pequeño” para senadores, diputados al Congreso Nacional y a las Asambleas Legislativas de los estados, así como a los Concejos Municipales.

El cuadro no cambia si comparamos el caudal de votos que recibieron los presidentes electos en los diez comicios celebrados desde 1958. Dado que entre 1958 y 2000 la población electoral se cuadruplicó de algo menos de tres a casi doce millones, nuestro índice es la proporción de votos presidenciales respecto de la población electoral: los datos de la tabla 3 demuestran que el apoyo electoral específico de Chávez en las dos elecciones que ganó no fue particularmente impresionante. Pérez (1988) y Lusinchi (1983), con poblaciones electorales significativamente menores, son los dos presidentes de mayor votación absoluta, seguidos por Chávez en sus dos elecciones; y mientras que el apoyo relativo de cinco presidentes alcanza o supera el 40%,

Chávez no obtuvo más que apenas un tercio, superando solamente a los presidentes Caldera y Leoni, cuyos apoyos relativos no pasaron de un escaso quinto a un buen cuarto de la población electoral. Mención aparte merece el hecho de que en Venezuela, donde no existe la figura de la segunda vuelta en elecciones presidenciales, no se ha cuestionado, por meramente formal, la legitimidad de los candidatos electos aun cuando sus apoyos relativos eran minoritarios.

Tabla 2: Participación en elecciones 1958-2000

Elecciones presidenciales y parlamentarias		Elecciones municipales separadas	
Año	Participación	Año	Participación
1958	93,4	1979	72,9
1963	92,2	1984	59,3
1968	96,7	2000	23,8
1973	96,5	Media 1979-1984	66,0
1978	87,5		
1983	87,8		
1988	81,9		
1993	60,2		
2000	56,2		
Media 1958-1993	85,0		

Fuente: Consejo Nacional Electoral; cálculos propios.

En todo caso, los bajos niveles de participación ciudadana en los eventos electorales y referendarios de los años 1999 y 2000 indican que el proceso de refundación de la república liderado por Chávez no logró revertir la tendencia apática constatada por Pérez Baralt (2001: 131); la abstención como alternativa frente a regímenes o procesos políticos que responden a las necesidades de los ciudadanos.

Tabla 3: Votos presidenciales como proporción de la población electoral (PE) 1958-2000

Presidente	Año	PE	Votos válidos	Proporción *
Lusinchi	1983	7.777.892	3.773.731	49
Pérez	1973	4.737.122	2.130.743	45
Betancourt	1958	2.913.801	1.284.092	44
Pérez	1988	9.185.647	3.868.843	42
Herrera	1978	6.223.903	2.487.318	40
Chávez	1998	11.013.020	3.673.685	33
Chávez	2000	11.720.971	3.757.773	32
Leoni	1963	3.369.968	957.574	28
Caldera	1968	4.134.928	1.083.712	26
Caldera	1993	9.688.795	1.710.722	18

*Redondeada;

Fuente: Consejo Nacional Electoral; cálculos propios.

4. Victorias electorales y correlación de fuerzas 1999-2000

Abstención aparte, los diferentes actos electorales produjeron importantes dividendos a la alianza del Polo Patriótico liderada por Chávez. En las elecciones de los miembros de la Asamblea Constituyente celebradas el 25 de julio de 1999, el Polo Patriótico obtuvo alrededor de dos tercios de los votos emitidos, lo que se tradujo en un 95% de los escaños, mientras que los partidos de oposición e independientes lograron, en conjunto, apenas siete de los 128 escaños (Maingon/Pérez Baralt/Sonntag 2001: 236-37). El Polo Patriótico también dominó claramente las elecciones parlamentarias y regionales del 30 de julio de 2000, en las que obtuvo mayorías absolutas en la Asamblea Nacional, el conjunto de diputados a los Consejos Legislativos de los estados y las delegaciones venezolanas a los parlamentos Andino y Latinoamericano, así como tres cuartos de las Gobernaciones de Estado. La oposición sólo logró buenos resultados en las (muy poco concurridas) elecciones municipales del 3 de diciembre de 2000, en las que obtuvo dos tercios de las alcaldías y algo más de la mitad del conjunto de concejales (tabla 4).

Tabla 4: Resultados de las elecciones, 1999-2000

Elección	Fecha	Cargos	Resultados	
Asamblea Constituyente	25.7.1999	128	Polo Patriótico	121 (95%)
			Partidos opositores	4 (3%)
			Independientes	3 (2%)
Asamblea Nacional	30.7.2000	165	Polo Patriótico	104 (63%)
			Oposición	61 (37%)
Gobernadores (incl. alcalde mayor de Caracas)	30.7.2000	24	Polo Patriótico	18 (75%)
			Oposición	6 (25%)
Consejos Legislativos	30.7.2000	219	Polo Patriótico	133 (61%)
			Oposición	94 (39%)
Parlamento Latinoamericano	30.7.2000	12	MVR* y aliados	8 (66%)
			Oposición	4 (33%)
Parlamento Andino	30.7.2000	5	MVR*	4 (80%)
			Oposición	1 (20%)
Alcaldes (sin alcalde mayor de Caracas)	30.7.2000	335	Polo Patriótico	120 (36%)
			Oposición	215 (64%)
Concejales	3.12.2000	2.349	Polo Patriótico	1.051 (45%)
			Oposición	1.298 (55%)

*MVR = Movimiento Quinta República.

Fuente: Consejo Nacional Electoral.

Sin embargo, el dominio abrumador de la coalición de Chávez no se mantuvo en los niveles originalmente alcanzados, dado que algunos gobernadores, el alcalde mayor de Caracas y un número de diputados a la Asamblea Nacional se separaron de las filas del Polo Patriótico para declararse independientes o sumarse a la oposición. Los cambios en la correlación de fuerzas entre 2000 y fines de 2003 se observan en la tabla 5.

La variación de la correlación de fuerzas en las instancias parlamentarias y gubernativas refleja la tendencia de personalización de la política y su progresiva desinstitucionalización (Molina 2001: 207).

Tabla 5: Correlación de fuerzas 2000 y 2003

Cargos	2000	2003
Diputados a la Asamblea Nacional	Polo Patr. 104 (63%) Oposición 61 (37%)	Bloque del Cambio 87 (53%) Bloque Autonomía 79 (47%) Parlament.
Gobernadores, alcalde mayor de Caracas	Polo Patr. 18 (75%) Oposición 6 (25%)	Polo Patriótico 14 (58%) Oposición 9 (38%) Independiente 1 (4%)

Fuente: Consejo Nacional Electoral, Asamblea Nacional.

5. Votos nulos

Un nuevo fenómeno que se presentó en las elecciones de 1999 y 2000 es la alta incidencia de votos nulos. En la elección de los miembros de la Asamblea Constituyente del 25 de julio de 1999, casi el 12% de los votos emitidos fueron nulos, y la proporción de éstos llegó al 35 y 40%, respectivamente, en las boletas para Representantes a los Parlamentos Latinoamericano y Andino (30 de julio de 2000). También un tercio de las boletas para diputados a la Asamblea Nacional/Lista (30 de julio 2000) y un cuarto de las boletas para Concejales/Lista (3 de diciembre de 2000) resultaron nulos (Consejo Nacional Electoral). Aunque la incidencia media de votos nulos fue menor en el caso de la elección de gobernadores (6%), su efecto fue decisivo para determinar el ganador en siete estados en los que la diferencia entre los dos candidatos más votados fue inferior a los votos nulos considerados normales (Kornblith 2001: 151). Kornblith concluye que la distorsión de la voluntad del elector en función de la alta incidencia de votos nulos favoreció a los candidatos de la coalición de Chávez y se debió, principalmente, a la práctica fraudulenta de usar boletas premarcadas en un elevado número de mesas electoral, lo cual lleva la anulación del voto por la máquina de escrutinio si el elector marca su preferencia sin darse cuenta que su boleta ya tiene algún voto marcado.

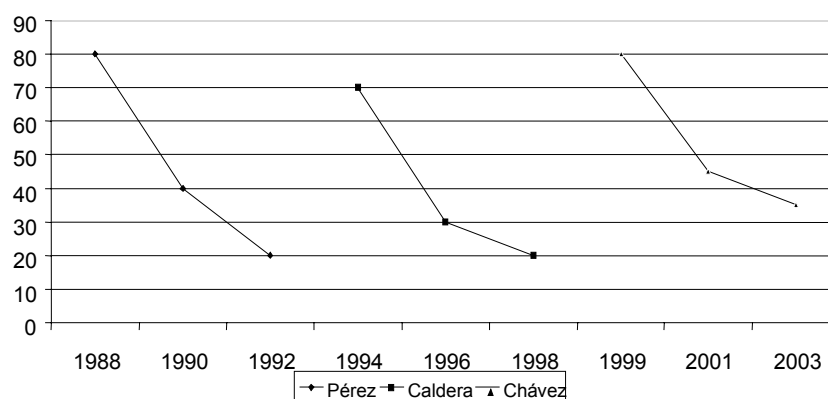
En síntesis, la perspectiva comparada y el examen del apoyo efectivo recibido en los sucesivos actos electorales y referendarios revela que las victorias de Chávez y su alianza no fueron tan categóricas como para asegurar un sólido y duradero respaldo a su gobierno y proyecto de refundación sistémica. La dinámica del cambio prometido

y conducido por Chávez generó una coyuntura favorable con elevados niveles de aprobación de su gestión que produjo buenos dividendos electorales, pues la decisión del voto estuvo estrechamente asociada a la evaluación del gobierno (Molina 2001: 205). La República Bolivariana de Venezuela nació y se instituyó sobre una base de legitimidad formal inobjetable, aunque con un endeble respaldo popular efectivo. Transcurrida casi la primera mitad del mandato de Chávez, los venezolanos evalúan su gobierno en términos mucho menos entusiastas; en otras palabras, sus bases de apoyo se han erosionado. A continuación revisaremos el perfil actual de este apoyo.

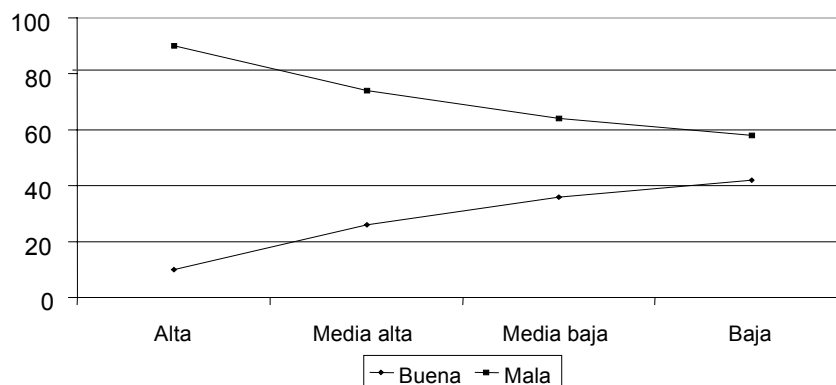
6. Evaluación de la administración Chávez

Tradicionalmente, las curvas de aprobación pública de la gestión gubernamental en Venezuela se parecían a una hamaca: elevados niveles en la luna de miel inicial, creciente crítica hacia la mitad del mandato asociada al desgaste y cierta recuperación hacia la culminación del período, asociada al aumento del gasto clientelar efectista antes del comienzo de las campañas electorales y durante las mismas. Esta tendencia cambió en la década del 90, ya que las curvas de aprobación de la gestión de los presidentes Pérez (1988-1993) y Caldera (1994-1998) evidencian una fuerte caída inicial, seguida por un descenso continuo, aunque menos pronunciado, en la segunda mitad del mandato. El mismo patrón se repite en el caso de Chávez, aunque el descenso en la segunda mitad de lo que sería el acostumbrado quinquenio presidencial es mucho menos pronunciado que el de sus antecesores (1999-2003; el primer sexenio de Chávez bajo la Constitución de 1999 comenzó en agosto de 2000) (gráfico 1).

Discriminadas por variables socioeconómicas tales como estrato social y edad, los datos demuestran que la administración Chávez ya no goza de aprobación mayoritaria en ninguno de los segmentos. Como era de esperar, los estratos socioeconómicos altos y medios altos evalúan su gestión en términos mucho más negativos que los medios bajos y bajos (gráfico 2).

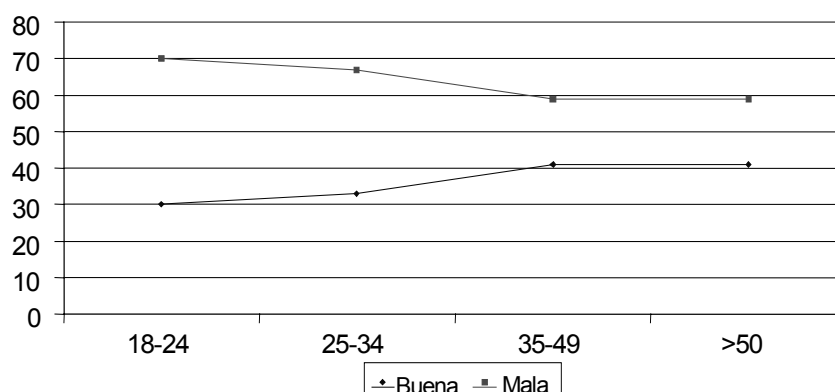
Gráfico 1: Aprobación de la gestión presidencial 1988-2003

Fuente: Consultores 21.

Gráfico 2: Aprobación de la gestión de Chávez por clase social, 2003

Fuente: Datanálisis (2003a).

En cuanto a la variable edad, la administración de Chávez también es calificada como mala por todos los segmentos, siendo el rechazo significativamente mayor entre los jóvenes que entre las personas mayores de 35 años (gráfico 3).

Gráfico 3: Aprobación de la gestión de Chávez por edad, 2003

Fuente: *Datanálisis* (2003a).

Además, la opinión pública califica negativamente la labor de los poderes públicos y las instituciones vinculadas al gobierno, con excepción de la Fuerza Armada. El Poder Judicial, la Asamblea Nacional, la Fiscalía, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, el Ejecutivo aparecen con calificaciones negativas, mientras que los sectores que Chávez adversa y ataca constantemente, tales como la Iglesia, los medios de comunicación social, la sociedad civil, los industriales y la Coordinadora Democrática (instancia que agrupa a todos los partidos de oposición y algunas organizaciones no gubernamentales) son evaluadas en términos positivos. Aunque los sindicatos y los partidos de oposición no se destacan positivamente, sus calificaciones superan claramente las de los Círculos Bolivarianos y del partido oficialista MVR (tabla 6). La serie longitudinal (*Datanálisis* 2003b) demuestra que, en febrero de 2001, los partidos de oposición y los sindicatos ocupaban los últimos puestos en la tabla de evaluación, para subir a posiciones medias en julio de 2003, mientras que el MVR, que tenía una evaluación ligeramente positiva en 2001, cayó al penúltimo lugar en abril de 2002, donde continúa en todas las mediciones desde entonces, acompañado por los Círculos Bolivarianos en la última casilla. En cambio, la labor de las autoridades locales y regionales (alcaldes y gobernadores), en conjunto, es evaluada en términos positivos (tabla 6).

Tabla 6: Calificación de la labor de instituciones, julio de 2003

Institución	Calificación
Iglesia	4,37
Medios de comunicación	4,14
Sociedad civil	3,72
Industriales	3,72
Fuerza Armada	3,49
Alcaldes	3,43
Gobernadores	3,31
Coordinadora Democrática	3,17
Sindicalistas	2,96
Poder Judicial	2,87
Demás partidos (oposición)	2,87
Asamblea Nacional	2,86
Defensor del pueblo	2,83
Fiscalía	2,68
Contraloría	2,63
Gobierno	2,54
MVR	2,43
Círculos Bolivarianos	2,29

Fuente: Datanálisis (2003b).

Escala de calificaciones: 4-5, buena; 3-3.99, regular; 1-2.99, mala.

En resumen, los venezolanos parecen haber llegado a un nivel de desencanto con el régimen político establecido por Chávez y sus ejecutorias, que es comparable con su frustración en el régimen anterior. Si continúa vigente la tesis de Molina (2001: 205) sobre el peso del factor “evaluación del gobierno” en la decisión del voto, las perspectivas de Chávez en futuras elecciones no son alentadoras. Por otra parte, es obvio que no todos los venezolanos se sienten desilusionados por Chávez, su proyecto y su gestión. El análisis de los valores y metas de los ciudadanos, apoyado en estudios cuantitativos y cualitativos, nos permitirá describir su perfil.

7. Perfil de los simpatizantes de Chávez

En un estudio cualitativo sobre la cultura política del venezolano que la empresa Hinterlaces realizó en junio de 2003 por encargo del partido Movimiento al Socialismo, MAS (Hinterlaces 2003), se indagó la percepción de Chávez y de la oposición, así como los valores y aspiraciones de los ciudadanos identificados con alguno de los dos polos y de los que se muestran escépticos respecto de ambos; los grupos entrevistados fueron reclutados exclusivamente entre los estratos medios bajos y pobres.

Entre otras facetas, el estudio revela que los simpatizantes de Chávez, sus opositores y los escépticos comparten los mismos medios de información preferidos: los canales de televisión privados y el tabloide Últimas Noticias y los diarios El Nacional y El Universal; con excepción de Últimas Noticias, estos medios son considerados como opositores del régimen. La única diferencia estriba en que los simpatizantes de Chávez nombran el canal de televisión del Estado, órgano propagandístico del régimen, en el primer lugar de sus preferencias. En este contexto debemos señalar que, según datos de la empresa AGB (2003a), el canal oficial tiene un *share* del 2% en todo el país.

Desde la campaña electoral de 1998, Chávez se ha proyectado como líder preocupado por los sectores humildes y defensor de sus derechos, y así es percibido tanto por sus seguidores como por venezolanos no simpatizantes con ninguno de los polos. Le atestiguan buenas intenciones y calidad humana y le identifican con el cambio. Sus opositores reconocen a Chávez como la figura que sacudió sus cimientos, los despertó y unificó para la acción política en defensa de la democracia que habían dado por descontada.

Los tres segmentos –seguidores, escépticos y opositores– critican sus frecuentes e interminables alocuciones en transmisiones obligadas de todos los medios de comunicación radioeléctricos (según AGB Venezuela, Chávez habló durante 2003 por casi 166 horas, es decir, casi 21 jornadas de ocho horas completas, en tales “cadenas” de radio y televisión, que sumadas a las 9 jornadas en 1999, 14 en 2000, 15 en 2001 y 9 en 2002, dan un total de 28 jornadas en cinco años) (AGB 2003b y 2003c). Igualmente ven con desagrado su estilo agresivo –que interpretan como promoción de la violencia– y la corrupción que lo rodea. Pero lo que destaca es la crítica de sectarismo por parte de

los escépticos y la diferenciación de los seguidores de Chávez entre “duros” y “blandos”, es decir, entre quienes critican su inconsecuencia y debilidad con la oposición y quienes manifiestan su desagrado por su agresividad y el empleo del término revolución (tabla 7).

Tabla 7: Percepción de Chávez

	Simpatizantes	Escépticos	Opositores
P	Tiene buenas intenciones	Tiene buenas intenciones	Nada
O	Se preocupa por los	Se preocupa por los pobres	Unió a los venezolanos en
S	pobres	Ayuda al pueblo	su contra
I	Es humano	Es humano	Nos hizo tomar conciencia
T	Ahora sabemos nuestros	Mercados populares	Damos más valor a la
I	derechos	Promesa del cambio	democracia
V	Mercados populares	Sus ideas y proyectos	Nos incentivó a participar
O	Promesa del cambio		
N	Habla mucho/cadenas	Habla mucho/cadenas	Fanfarrón
E	Está mal asesorado	Está mal asesorado	Demagogo
G	Le rodea equipo corrupto	Le rodea equipo corrupto	Autócrata
A	Es inconsecuente	Deslumbrado por el poder	Vulgaridad
T	Enfrentamiento excesivo	(viajes, fiestas)	Manipula a los pobres
I	La palabra revolución	Intolerante, prepotente	Fomenta la violencia
V	Es débil con la oposición	Fomenta la violencia	Incapaz
O		No toma en cuenta a todos	Corrupto

Fuente: Hinterlaces (2003).

Los grupos de seguidores de Chávez, escépticos y adversarios que fueron entrevistados no evidenciaron diferencias respecto de los valores a que atribuyen importancia. Todos destacan la honestidad, unión, paz, responsabilidad y sinceridad. Así como el respeto y comprensión. Tampoco aparecen diferencias significativas en cuanto a los deseos o aspiraciones que mencionan, prácticamente todos, materiales y auto-centrados, pues todos aspiran a empleos estables, salud, educación, vivienda y un mejor futuro para sus familias e hijos. Sin embargo, los simpatizantes de Chávez fueron los únicos que manifestaron inconformidad con su entorno social actual expresando deseos de mudarse. En otras palabras, no cifran sus esperanzas tanto en programas de mejoramiento de las zonas populares sino, más bien, en su salida defi-

nitiva de éstas. Por otra parte, sólo en los grupos de adversarios al régimen se mencionó una meta sociotrópica, a saber, contribuir con el país (Hinterlaces 2003).

Los resultados del estudio cualitativo de 2003 son consistentes con la evidencia encontrada en la encuesta representativa nacional de cultura política realizada en el año 2000 (Red de Estudios Políticos 2000), pues no se observan diferencias verdaderamente importantes entre los seguidores o simpatizantes de Chávez, sus adversarios y los ciudadanos no identificados con ninguno de estos dos polos.

En efecto, los ciudadanos que se identificaron como militantes o simpatizantes del partido oficialista MVR comparten las actitudes y los valores de quienes se identificaron con alguno de los partidos de oposición o se declararon como independientes. No se presentan diferencias significativas entre estos segmentos en cuanto a su posición ideológica, preferencia por cambios graduales mediante reformas, disposición de participar en acciones de calle, estima de la libertad de expresión, la percepción de su capacidad de autodeterminación o su satisfacción con la vida (tabla 8).

Tabla 8: Identificación partidista (IP), cultura política y grupo social

Variable dependiente	Asociación con IP (tau-c de Kendall)
Valores	
Tolerancia	-.047
Responsabilidad	-.015
Libertad de expresión	-.010
Actitudes	
Posición ideológica (izquierda-derecha)	.021
Actitud hacia el cambio (reformista)	.028
Disposición hacia acciones de calle	.018
Autodeterminación	.015
Satisfacción con la vida	.014
Sistema económico liberal	-.058*
Variables socioeconómicas	
Educación	.106**
Estrato social	.108**
Grupo étnico (blanco/no blanco)	-.069*

p<.05; **p<.001

Fuente: Red de Estudios Políticos/Estudio Mundial de Valores (2000).

La identificación político-partidista está asociada, de forma muy moderada aunque estadísticamente significativa, con la preferencia de un sistema económico liberal, la variable étnica y variables socioeconómicas tales como educación y estrato social. Concretamente, los militantes y simpatizantes del MVR se inclinan un poco más hacia un sistema económico en el que se practiquen formas de cogestión entre los dueños y los empleados de las empresas. Por otra parte, la proporción de personas con bajos niveles de instrucción –ninguna o primaria incompleta– es menor entre los independientes que entre los militantes y simpatizantes del MVR o de los partidos de oposición, mientras que éstos pertenecen en grado ligeramente mayor a los estratos sociales bajos. Finalmente, el MVR cuenta más personas de color entre sus filas que los partidos de oposición y los independientes, dando así soporte –aunque con base en una asociación muy débil– a la tesis que tanto el liderazgo de Chávez como su rechazo tienen facetas étnicas (Gott 2000).

8. Conclusiones

Nuestro análisis revela que las victorias electorales de Chávez representan una base legitimadora endeble para la transformación revolucionaria que ha emprendido, dado que su apoyo efectivo no pasa de un tercio de los electores. Más aún, si se toma en cuenta que la evaluación positiva de la gestión de gobierno fue la variable que tuvo mayor incidencia en la decisión del voto por Chávez en las elecciones del año 2000, que la misma ha caído en forma continua y que una parte de sus seguidores no están de acuerdo con esa revolución, se puede concluir que su proyecto ya no cuenta con respaldo mayoritario. Un reacomodo democrático luce inevitable. La secuencia de victorias en los años 1999 y 2000, comparada por Chávez con la Campaña Admirable, podría resultar en un régimen transitorio relativamente corto como el que se instauró a raíz de ésta; en todo caso, en aquella oportunidad Bolívar perdió la república para recuperarla definitivamente seis años más tarde.

Bibliografía

- AGB Venezuela (2003a): "Share". En: <<http://www.agb.com.ve/libro2001/share/10.htm>> (14.3.2005).
- (2003b): "Cadenómetro". En: *El Universal*, 12.1.04, p. 1.
- (2003c): "Cadenas". En: <<http://www.agb.com.ve/libro2001/cadena/1.htm>> (14.3.2005).
- Asamblea Nacional (2003): "Listado de Diputados por Grupos de Opinión". En: <<http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/lista-dip-partidos.asp>> (14.3.2005).
- Carrasquero, José Vicente/Maingon, Thais/Welsch, Friedrich (eds.) (2001): *Venezuela en transición: elecciones y democracia 1998-2000*. Caracas: CDB Publicaciones.
- Chávez F., Hugo R. (1999): "Discurso en el Paseo de Los Próceres". En: <http://www.analitica.com/bitbliblioteca/chavez/los_proceres.asp> (26.9.2003).
- (2003): "Cadena nacional, Tercer aniversario de la relegitimación de los poderes". En: <<http://www.venezuela.gov.ve/ns/alloc/reelegitimacion30jul03.doc>> (26.9.2003).
- Consejo Nacional Electoral: <<http://www.cne.gov.ve/estadisticas>> (26.9.2003).
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999): *Gaceta Oficial* No. 36.860 de fecha 30.12.1999. Caracas: Imprenta Nacional.
- Consultores 21 (2003): "Apuntes sobre la popularidad del presidente". En: <<http://www.consultores21.com/domino/html/c21/Consulta.nsf/Articulos>> (11.10.2003).
- Datanálisis (2003a): "Definiciones del Nivel de Aprobación-Gobierno". En: <http://www.datanalisis.com.ve/evaluación_presidencial.htm> (11.10.2003).
- (2003b): "Encuesta Nacional Omnibus, Julio de 2003". En: *El Universal* 24.08.2003, p. 2.
- Gaceta Oficial de la República de Venezuela* (1999): No. 36.634, 2 de febrero de 1999, Decreto de convocatoria a un referéndum para convocar a una Asamblea Constituyente. Caracas: Imprenta Nacional.
- Gil Yepes, José A. (ed.) (2001): "Popularidad del Presidente Chávez". En: *Escenarios Datanálisis*, Año IV, No. 3, pp. 18-30.
- Gott, Richard (2000): *In The Shadow of the Liberator*. London/New York: Verso.
- Hinterlaces (2003): "Estudio cualitativo mediante focus groups para determinar la cultura política del venezolano. Junio 2003". Caracas, manuscrito.
- Kornblith, Miriam (2001): "Confiabilidad y transparencia de las elecciones en Venezuela: examen de los comicios del 30 de julio de 2000". En: Carrasquero, José Vicente/Maingon, Thais/Welsch, Friedrich (eds.), pp. 133-163.
- Maingon, Thais/Pérez Baralt, Carmen/Sonntag, Heinz R. (2001): "Reconstitución del orden político: el proceso constituyente de 1999". En: Carrasquero, José Vicente/Maingon, Thais/Welsch, Friedrich (eds.), pp. 216-243.
- Molina, José E. (2001): "Comportamiento electoral en Venezuela 1998-2000: cambio y continuidad". En: Carrasquero, José Vicente/Maingon, Thais/Welsch, Friedrich (eds.), pp. 188-213.
- Pérez Baralt, Carmen (2001): "Cambios en la participación electoral". En: Carrasquero, José Vicente/Maingon, Thais/Welsch, Friedrich (eds.), pp. 123-132.

Red de Estudios Políticos (2000): “Estudio Mundial de Valores. Realizado con el apoyo de FONACIT”. En: *Banco de Datos de Opinión Pública de la Universidad Simón Bolívar*. Caracas: Universidad Simón Bolívar.

Andreas Boeckh/Patricia Graf

El comandante en su laberinto: el ideario bolivariano de Hugo Chávez

1. Introducción: el bolivarianismo como acertijo gráfico

Con el comienzo de la presidencia de Hugo Chávez la adoración por Bolívar ha alcanzado una nueva culminación. Sin duda, Bolívar ya era una figura omnipresente: quien buscaba el centro de cualquier ciudad venezolana, sólo tenía que preguntar por la “plaza Bolívar”, en la cual sin duda encontraría un monumento del Libertador.¹ Su retrato se encontraba en incontables paredes, en canciones populares se hablaba de su fama (“cuando Bolívar nació, Venezuela mejoró”), emisoras de radio emitían “la palabra de Bolívar” con voz dramática varias veces al día, pero citando casi siempre oraciones fuera de su contexto original, y en ninguna alocución podía faltar un homenaje a Bolívar, elogiando su genio y los valores incorporados por él. Incluso se pagaba con “bolívares”. Una superación ya no parecía posible. Sin embargo, quien visita Venezuela hoy en día, visita “la República Bolivariana de Venezuela”, puede ver “escuelas bolivarianas”, encontrará “sindicatos bolivarianos”, descubrirá “círculos bolivarianos” y vivirá la “revolución bolivariana”.

Parece que un héroe, y a la vez mito nacional, se ha convertido en el estandarte de un régimen que a su vez reclama el mito para sí. La meta de nuestro artículo es, dentro de lo que cabe, rellenar el “bolivarianismo” omnipresente con fundamentos e interpretarlo en el contexto de la política venezolana.

Esto por cierto no es una tarea fácil. Aun después de la lectura de innumerables discursos de y entrevistas al presidente, de comunicados públicos por parte de sus seguidores y después de un análisis profundo de las controversias que se han originado a raíz del bolivarianismo, hemos encontrado pocas ideas concretas. Con seguridad hay una cosa

1 Según un decreto de 1872 todas las plazas centrales de Venezuela tienen que llevar su nombre (Harwich 2003: 7).

que no se le puede reprochar al presidente: que sea un dogmático. Por eso va a sufrir un desengaño el que espere que esta presentación de “el ideario bolivariano de Hugo Chávez” sea un concepto ideológico coherente. Por varias razones, dicho intento estaría condenado a fallar. Obviamente Hugo Chávez se alimenta de diversas fuentes ideológicas, sin reparar en la falta de coherencia entre ellas (Lombardi 2003: 5). En la imagen bolivarianista del “árbol con tres raíces”, citada muchas veces por Chávez y sus seguidores, Bolívar solamente es una de ellas, sin duda una de gran importancia. Simón Rodríguez, “el Rousseau americano” incorpora la segunda y Ezequiel Zamora, el líder de los campesinos y general en la guerra civil, la tercera. El pensamiento político de Simón Bolívar tampoco se caracterizaba por ser sistemático, lo que quiere decir que referirse a éste tampoco promete la coherencia deseada, por lo que sirve como marco de referencia para las más diferentes posiciones políticas.

Aparte de las tres interpretaciones anteriores, todavía se pueden mencionar otras raíces significantes para el entendimiento político de Hugo Chávez y su concepción del mundo; sin embargo, no son tan fácilmente identificables como Bolívar, Rodríguez y Zamora. Con eso no nos referimos a su tendencia de citar –de forma muy incoherente y poco entendible– a los clásicos de la filosofía política y a otras autoridades intelectuales en sus discursos orales y escritos. Normalmente tales citas son usadas deliberadamente y no expresan una preferencia ideológica. Así por ejemplo, se refiere en su famosa carta del 11.04.1999 dirigida a la Corte Suprema, a la “ley sicológica de la compensación”, a Gaitán, a Zamora, a la evidencia cartesiana, a las necesidades geopolíticas imprescindibles para la supervivencia del Estado y a la prioridad absoluta del poder ejecutivo, acercándose al profesor alemán de derecho público Carl Schmitt, al cual por supuesto no cita; menciona también a los geógrafos Ratzel y McKinder, y finalmente alude al misterioso “peligroso escenario de las causas generales que dominan al planeta”, remontándose a Montesquieu y a Darwin (Chávez 1999).

Existen otras dos figuras, bastante contrastivas, que parecen formar parte de los guías ideológicos de Chávez: Fidel Castro y el sociólogo argentino Ceresole. Sin lugar a duda, Chávez empatiza con Castro y mantiene una amistad más allá de la mera política. Pero el hecho que en Venezuela y en parte también en los EEUU se considere a Chávez como un marxista disfrazado y aprendiz de Castro, obvia-

te es mera polémica política. Al parecer Chávez ha leído a Marx (Bilbao 2002: 32). Sin embargo, los frutos de estas lecturas no se reflejan en sus discursos. Algunos seguidores de la ya vieja y desaparecida izquierda marxista se han encontrado varias veces con Chávez y aún hoy en día siguen impresionados por su persona (López Maya 2003: 75); pero eso sería más bien indicativo del triste estado de la izquierda y menos una caracterización de Chávez. No es Marx el referente para el discurso igualitario, sino Zamora. Su grito bélico “horror a la oligarquía”, que trae a la memoria la sentencia “guerra a los palacios” del poeta alemán Georg Büchner, aún hoy le sonará amenazante a uno que otro venezolano bien establecido (Hellinger 2001). Su política económica puede ser calificada como poco competente, pero de ninguna manera es marxista. Y tampoco puede ser considerado como marxismo el hecho que Chávez haga de la polarización social en Venezuela su tema político o que –al menos retóricamente–, se ponga a defender a los pobres.

Considerando a Ceresole y su tesis acerca de un futuro posdemocrático para América Latina, la cual predice que el poder será ejercido por fuertes caudillos y un tipo de alianza militar-civil, se podrían identificar algunas analogías con la persona y actitud de Chávez. Su constante énfasis en su procedencia militar, su concepción de un “ejército como el agente para el cambio social” (Bilbao 2002: 33), la designación de militares para ocupar posiciones dirigentes en las diversas instituciones estatales, la función clave de las fuerzas armadas para la realización del Plan Bolívar 2000 y finalmente su admiración por regímenes militares populistas como el de Omar Torrijos en Panamá y Velasco Alvarado en el Perú (López Maya 2003: 75) develan la idea de una unión entre las fuerzas armadas y el pueblo, constelación que presuntamente existió en el ejército libertario de Simón Bolívar. Esta concepción es difícil de compaginar con el entendimiento liberal de la democracia. Sin embargo, hasta ahora ha rechazado aplicar las consecuencias autoritarias de las tesis de Ceresole, a pesar de la masiva incorporación de las fuerzas armadas en la administración y la política, y también a pesar del estilo obviamente caudillista en su ejercicio del poder. El hecho de que este autor, quien ha defendido el auténtico autoritarismo latinoamericano sin el menor pudor, haya roto sus relaciones con Chávez, no ha perjudicado la imagen del presidente.

Así es difícil y bastante desalentador la comprensión de la ideología chavista a partir del análisis de los elementos de las referencias ideológicas. En una entrevista con el presidente realizada por el periodista Luis Bilbao del diario *Le Monde Diplomatique*, el presidente ha rechazado consecuentemente definir un concepto político que llegase más allá de la ya mencionada referencia al árbol de las tres raíces, sin explicación alguna del contenido de esta imagen (Bilbao 2002). De acuerdo a las instrucciones ideológicas de Chávez y sus referencias acerca de Bolívar, no se trata de montar un ideario ideológico, sino más bien de evocar el manejo flexible de ciertos valores en situaciones diferentes, que sirvan de legitimación para las más variadas políticas.

En fin, lo que Chávez entiende por el concepto del bolivarianismo y lo que proclama en nombre de la “revolución bolivariana” es una mezcla de elementos inseparables sacados de la mitología política venezolana, como también de pautas del discurso del populismo izquierdista. En este sentido su pensamiento y entendimiento políticos son más una muestra de continuidad y no una ruptura con el pasado, lo que intentaremos describir en la segunda parte de este artículo. Sin embargo, es de gran interés preguntar, por qué el bolivarianismo llega a adquirir tal auge justamente en este instante. En la tercera parte trataremos de analizar esta “mezcla ideológica” del régimen y la apoteosis del mito bolivariano en el contexto de la crisis económica, social y política, la cual venía gestándose en los últimos veinte años y ha causado el desmoronamiento del país. La pregunta acerca de cuán fuerte es el recurso de Chávez al mito de Bolívar para legitimar su régimen, será tratado en la cuarta parte. Cuando hablamos del mito acerca de Simón Bolívar, nos referimos al mito de fundación, comparable con la Revolución Francesa y Napoleón Bonaparte; la guerra de independencia americana y George Washington. En la quinta parte analizaremos el bolivarianismo como proyecto de la política internacional, para así plantearnos en la sexta parte algunas preguntas relacionadas con la sustentabilidad de este proyecto político que se identifica con el concepto del bolivarianismo.

2. Los puntos de partida del discurso chavista: el mito de Bolívar y las tradiciones populistas

Recurrir a Simón Bolívar, referirse a valores bolivarianos y la metamorfosis de Bolívar de una persona histórica a un héroe casi divino y mítico no son fenómenos nuevos para los venezolanos. Empezando con la recuperación del cuerpo del difunto en el año 1842, el fundador de la Gran Colombia, que trágicamente fracasó, se ha vuelto un mito nacional. Desde entonces muchos políticos se vieron confrontados con la tentación de instrumentalizar este mito para la legitimación de su poder. Con razón se ha indicado en Venezuela que el mito de Bolívar ha sido secuestrado por presidentes de las más variadas tendencias políticas para justificar políticas de toda índole (Quintero 1999; Arenas/Gómez Calcaño 2002). De hecho lo han transformado en un “héroe para todas las causas”, como lo ha formulado Nikita Harwich (2003). Para las fiestas centenarias de Bolívar, Guzmán Blanco lo ha estilizado como ídolo y guía del “ilustre americano”, refiriéndose a él en relación con su proyecto positivista “orden y progreso” (Harwich 2003: 12). Al pagar la deuda externa del país, Vicente Gómez se sentía como sucesor de Bolívar: mientras Bolívar había alcanzado la independencia política, él tenía la tarea de realizar la independencia económica. Su sucesor, el general López Contreras fue el primero que usó el nombre de Bolívar públicamente en una campaña electoral, creando las “agrupaciones cívicas bolivarianas” (Harwich 2003: 15). Quedan ejemplos innumerables por mencionar. Lo importante es ver que el mito de Bolívar ha sido usado para distintos conceptos políticos, para el libre comercio y para la substitución de importaciones, al igual que para un nacionalismo venezolano, un nacionalismo latinoamericano o la ecología, entre muchos otros. Si todos recurren a Bolívar, su figura se transforma en una pantalla donde se proyectan distintos anhelos, conceptos y posiciones políticas. En algunas leyendas populares Bolívar llega a ser mulato o negro, parecido al caso de los santos en las antiguas iglesias de los esclavos en el Brasil (Conway 2002).

Pero hay que tomar en cuenta que en el pasado los presidentes siempre han recurrido a Bolívar, presentándole como protector del orden establecido. Ahora vemos que también Chávez acude a Bolívar para defender su política, pero haciendo de él un revolucionario. Tam-

bién aquí se pueden identificar ciertas fuentes intelectuales que han influido a Chávez, como el filósofo marxista venezolano J. R. Núñez Tenorio que presentó a Bolívar como revolucionario antiimperialista en su libro “Bolívar y la guerra revolucionaria”, publicado en 1969 (Harwich 2003: 18-20).

Desde Guzmán Blanco, el culto a Bolívar ha adquirido una dimensión claramente religiosa. Fue él quien ha elevado este culto a un nivel comparable con la religión católica (Harwich 2003: 11). López Contreras ha declarado la inspiración irradiada por Bolívar como segunda religión de los venezolanos, viéndose a sí mismo marcado por el ideario bolivariano (Harwich 2003: 14). Así en muchas ocasiones los discursos sobre Bolívar adquieren un carácter oratorio. El discurso himnico de Arturo Uslar Pietri, realizado en la inauguración de una estatua de Bolívar en Washington en febrero de 1959, fue publicado en un libro con el título “Oraciones para despertar” (Uslar Pietri 1998), acercando en esta instancia la palabra oración a su significado religioso. La interpretación de la muerte de Bolívar como un sacrificio, en analogía con la muerte de Cristo no es una novedad del pensamiento de Chávez, sino que ya tiene tradición. Los dos equivalen a mártires de una causa sagrada (Arenas/Gómez Calcaño 2002: 4). Así no se entiende como una blasfemia atrevida el hecho de que Chávez llame a Cristo y a Bolívar luchadores por un mundo mejor en sus discursos (presentándose a sí mismo como continuación de este linaje), sino que activa un topos ya establecido en la mitología política del país. En eso no ha podido cambiar mucho la infracción al tabú, cometida por el historiador Carrera Damas, el cual ha expuesto la manipulación del mito bolivariano en su disertación “El culto a Bolívar” (Carrera Damas 1969). No es posible derrotar una religión por medio del análisis, ni siquiera cuando se trata de una “religión cívica”.

Hasta hoy en día se pueden reconocer y oír los elementos religiosos en el culto bolivariano. Así también se pueden encontrar en textos de canciones populares comparaciones entre Cristo y Bolívar: “Cuando Bolívar nació, Venezuela pegó un grito diciendo que había nacido el segundo Jesucristo” (Texto del grupo *Un solo pueblo*, citando a Arenas/Gómez Calcaño 2002: 5). Con referencia a Chávez ya existe un “Chávez nuestro”, en el cual Chávez es apoyado por el pueblo para que lo libere de la corrupción y de Carlos Andrés Pérez, a quien se identificaba claramente como Lucifer (Levine 2002: 248).

La evocación de Bolívar siempre es a su vez una evocación de valores. En el ya mencionado discurso de Uslar Pietri, éste no sólo festeja a Bolívar como gran personaje histórico, lo que sin duda ha sido, sino que también como incorporación de todo lo admirable de la historia latinoamericana e inspiración eterna para todos los que luchan por la justicia, la fraternidad y el progreso en América Latina. Su estatua se presenta como memorial de la unidad de los venezolanos y al mismo tiempo como referencia a una persona de importancia mundial y trascendental, llegando a representar un símbolo de valores y aspiraciones nobles, más allá de la historia y la región latinoamericana.

Así, cuando Chávez se refiere a valores y virtudes bolivarianas, mencionando a Bolívar no como personaje histórico, sino como personalidad mística (Francia 2003: 24), él claramente se sitúa en una tradición venezolana. Para Chávez, Bolívar representa una fuerza moral, un motor que adelanta el país. Pero no hay que olvidar que estos valores no superan las exigencias de la Revolución Francesa: en el artículo número uno de la Constitución bolivariana se puede leer:

La República bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador.

Identificarse con Bolívar es para Chávez identificarse con la democracia y la soberanía del pueblo, la única soberanía de las naciones (Chávez 2001a). Sin embargo, el uso del concepto de pueblo por Chávez sufre una mutación. Ya no se habla de la unión del pueblo venezolano en su totalidad tal y como Uslar Pietri la ve realizada por Bolívar. El concepto de “pueblo” abarca al pueblo simple y humilde, para el cual los valores bolivarianos siempre han existido, y que llegaría a representar la verdadera Venezuela. Según la tradición del populismo se distingue entre “pueblo” y “oligarquía”, siendo esta última caracterizada muchas veces como “rancia”. Aun así, Bolívar no pierde del todo su función de figura integradora nacional. En algunos discursos y en la Constitución sigue ejerciendo esta función. Si a él se le presenta como el protagonista en la lucha por los derechos de los indígenas y como libertador de los esclavos (Moncada 2003), muy bien se le puede ver en el contexto de un proyecto de integración nacional, que ahora también quiere incluir a los segmentos sociales marginados. Bolívar es

proclamado tanto revolucionario² como gran ídolo para la revolución bolivariana, volviendo así a formar parte de la estrategia de polarización y pierde con ello su valor como figura de integración.

A diferencia de Chávez, el historiador Samuel Moncada se ha referido de una forma más sistemática al tema, durante la conferencia internacional de solidaridad para la revolución bolivariana, explicando por qué Bolívar juega un papel tan trascendental para el régimen, y por qué es percibido como revolucionario (Moncada 2003).

- En primer lugar se menciona el ideal de la independencia, que es entendida como absoluta y sin restricciones,³ y la cual adquiere una tendencia decididamente antiimperialista para Chávez y sus seguidores. De hecho, Bolívar no intuía nada bueno al analizar los efectos que podrían tener la dinámica social y las ambiciones de la política exterior de los EEUU para América Latina. En otro lugar Moncada indica la necesidad de una integración latinoamericana –también basándose en Bolívar– con lo cual se refería a una integración económica, pero principalmente a una integración política, sin la cual no sería de duración la independencia de las repúblicas latinoamericanas. (En la parte cinco trataremos las consecuencias de estos aspectos del bolivarianismo para la política exterior venezolana.)
- En segundo lugar se menciona la soberanía del pueblo, y en relación a ésta, la democracia, en la cual el poder político debería ser ejercido en provecho de toda la ciudadanía y no para aventajar a unos pocos.
Bolívar también representa los ideales de la justicia social y la igualdad de una sociedad multi-étnica, en la cual ya no existen barreras sociales o étnicas, y en la cual las diversas etnias pueden convivir manteniendo sus respectivas formas de vida. No se puede negar que los derechos de los indígenas han sido altamente valorados en la nueva Constitución. En la Venezuela de Chávez parece

2 Sin embargo no todos los que apoyan a Chávez están convencidos de ello. También existen voces que –con cierta razón– ven a Bolívar como representante de la clase alta aristocrática y conservadora, llegando a la conclusión que Chávez es el verdadero revolucionario y así “mejor que Bolívar” (Monzant Gavidia 2003).

3 Pero hay una excepción importante: la Constitución venezolana, como prácticamente única en toda América Latina, posibilita la disolución del país en una unificación latinoamericana (véase también capítulo 5).

haberse superado la forma del unitarismo y del monismo, que percibe como peligroso para la existencia del Estado todo tipo de divergencia del concepto unitario del pueblo. No hay que olvidar que éste ha marcado el entendimiento del Estado durante mucho tiempo en América Latina. Aunque se respete la diversidad cultural, no significa que en Venezuela se vea en el pluralismo político una opción razonable. Justamente no es el caso, como veremos más adelante. La tradición antipluralista, monista y unitarista tiene sus raíces tanto en la concepción del Estado hispano-colonial, como también en el jacobinismo francés, por lo cual ha podido emerger en el pasado con tendencias conservadoras o revolucionarias.

- Un pasaje de texto, en el cual Bolívar defiende la devolución de los “resguardos indígenas” a la población indígena, es interpretado atrevidamente como un programa de reforma agraria general.
- Los crecientes esfuerzos en el ámbito de la educación, según Moncada, tienen vínculos con las palabras del libertador. Chávez sin embargo, se refiere al profesor de Simón Bolívar, Simón Rodríguez, quien formuló el derecho fundamental a la educación. Justamente la educación es uno de los enfoques retóricos del régimen de Chávez, que tiene el fin de minimizar las restricciones del acceso a la educación secundaria y universitaria. Según Chávez, el presupuesto destinado a la educación se ha duplicado desde 1999 y equivale a un 6% del Producto Interno Bruto (PIB). En el plan Bolívar está apuntada la proposición de fundar mil “escuelas bolivarianas” al año. Él dice que éstas han adquirido tal grado de popularidad que son frecuentadas por hijos de familias de la clase media que antes estaban en colegios particulares (Bilbao 2002: 59). De acuerdo a los datos que tenemos presentes acerca del presupuesto nacional no podemos confirmar esta declaración. Estos datos más bien indican una tendencia contraria.⁴
- Según Moncada, Bolívar también es un ejemplo para la lucha contra la corrupción.

4 La parte del presupuesto nacional destinada a la educación ha descendido del 17% en 1999 a un 15,2% en 2003 (República Bolivariana de Venezuela 2003: 180, 181). Tampoco alcanza el 6% del PIB los gastos destinados al total de la educación como lo plantea Chávez tan sólo para el gasto en los colegios (Weltbank, World Development Indicators Online).

- Mencionando a Bolívar, se explica la necesidad de la unidad entre el pueblo y las fuerzas armadas, entendiendo a las susodichas en la tradición de un ejército libertador reclutado del pueblo. Sin embargo, también se reconoce el peligro de una preponderancia de las ideas e intenciones de las fuerzas armadas en la sociedad. Hasta ahora ya ha avanzado notablemente el proceso de integrar a los militares en áreas sociales e infraestructurales, como lo prevé el “Plan Bolívar”, posibilitando la ocupación de importantes cargos administrativos por militares de alto rango. Esto se puede interpretar de dos formas: por un lado como un “clientelismo castrense” (*El Universal* del 28.4.2003), o como una necesidad política, ya que las administraciones ocupadas por los antiguos partidos no se dejan controlar de otra manera.

Queda claro que el orador se ha esforzado en indicar ciertas relaciones entre Bolívar y las tendencias fundamentales de la política chavista y sus tópicos sobresalientes, para demostrar la importancia actual de Bolívar en Venezuela. Igual que en intentos anteriores opta por un método altamente selectivo, llegando así a conclusiones distorsionadas de su contenido real, como en el caso de la reforma agraria.

Las declaraciones de Chávez y sus seguidores también muestran su cercanía a temas, pensamientos y concepciones de la política populista, los cuales se dejan relacionar fácilmente con lemas bolivarianistas. Sin embargo, se pueden constatar algunas diferencias en comparación con el populismo de los años treinta hasta los años sesenta.

1. El **personalismo**, la tendencia a presentaciones carismáticas; el entendimiento que sólo el extraordinario personaje del líder está en condiciones de resolver los problemas; la idea de una unidad mística entre pueblo y líder tienen dos aspectos correlativos: por un lado representan el menosprecio contra reglas claras y procesos bien regulados y por el otro contra instituciones y organizaciones intermediarias que son vistas como estorbosas y como obstáculo para una libre comunicación directa entre el pueblo y el líder. Eso es lo que hace a un sistema populista peligrosamente subcomplejo. El mero enfoque en el ejecutivo y sus representantes normalmente lleva a pérdidas de informaciones en el proceso de la comunicación política, así como también a un aprendizaje patológico. Estos rasgos son localizables en el régimen chavista. Sin embargo, los

problemas de una sociedad moderna no se pueden resolver en el nivel del esfuerzo individual, como lo quería sugerir el programa de radio “Aló presidente” todos los domingos. La focalización en Bolívar en el ámbito de la mitología política equivale a la focalización en Chávez en la política real y en los debates políticos en Venezuela. Cabe mencionar en segundo lugar que dentro de este concepto político no cabe el concepto de la división de poderes y la independencia de los jueces, viendo que en su ya mencionada carta a la corte suprema del 11.4.1999 ha defendido la supremacía del ejecutivo sobre cualquier otro órgano constitucional.

2. Personajes caudillistas son presentados como desprendidos, altruistas y heroicos. Ya se ha mencionado la analogía entre el martirio de Bolívar y el de Jesucristo, e igualmente Chávez ha declarado varias veces que está dispuesto a sacrificar su vida por el pueblo y sus legítimos intereses. José Martí y Eliécer Gaitán sirven de referencias y para dramatizar esta visión, el régimen hace circular rumores sobre atentados al presidente.
3. Los discursos populistas diferencian entre el simple pueblo (o la masa) y la oligarquía. El pueblo es caracterizado meramente con atributos positivos. Además se le presenta como la víctima de poderes oscuros, de los cuales sólo un salvador puede liberar. En cambio la oligarquía es una minoría, normalmente no especificada, la cual se enriquece a costa del pueblo y la que vive una vida parasitaria. No cabe duda que este esquema no ha podido ni querido explicar las complejas estructuras de una sociedad, ya que ni en los regímenes populistas anteriores se ha definido la oligarquía, así que cualquiera podría sentirse parte de “los buenos”. El uso de los conceptos “oligarquía” y “pueblo” sirvió para formar una gran alianza de clases entre los campesinos, los trabajadores y la clase media excluyendo sólo una pequeña oligarquía que representa al enemigo y establece la coalición.

Justamente aquí se puede encontrar una diferencia importante del populismo de carácter chavista. La oligarquía tiene un nombre: a ella se unen los defensores del “puntofijismo”, que son los partidos políticos establecidos y los trabajadores organizados en la CTV (Confederación de Trabajadores de Venezuela), además de los terratenientes y poseedores de capital que han explotado a la clase trabajadora (Bilbao 2002: 24) y finalmente, el clero conser-

vador que es acusado de haberse olvidado del mensaje social del evangelio. A este último, Chávez muchas veces le esclareció el verdadero significado del cristianismo. Resumiendo: todos los que se opongan a la revolución bolivariana son parte de la oligarquía y éstos, sin duda, son muchos. Así la oligarquía ha perdido el carácter de una pequeña y peligrosa minoría. Eso se puede verificar observando las actuales fronteras de conflictos políticos: ¿Dónde más en el mundo se ha visto que una confederación de sindicatos ha organizado un paro general junto con la federación de empresarios?

4. La confrontación entre “pueblo” y “oligarquía” demuestra la inclinación hacia un riguroso esquema de amigo-enemigo, al igual que hacia un concepto político de eterna lucha entre los poderes de la luz y los poderes de las tinieblas. “Vivimos en tiempos apocalípticos, no existe una posición intermedia. Uno está con Dios o con el diablo, y nosotros estamos con Dios” (Roberts 2003: 70). Compromisos no son vistos como actos de prudencia política, sino como capitulación frente a lo malo. Esta retórica de estilo fundamentalista contribuye a la polarización del debate político.
5. El “pueblo” es visto como el soberano, el actor principal. Sin embargo, hasta ahora los regímenes populistas han producido una movilización política sin una participación política. La organización de las clases inferiores siempre ha sido fuertemente controlada de una manera corporatista. Lo que sí han podido hacer, es integrar a los grupos populares marginados usándolos como recurso político y como destinatarios de servicios estatales. Está claro que hoy en Venezuela ya no se trata de conquistar el derecho de voto y la libertad de organización para los sectores menos privilegiados. Sin embargo, Chávez sí puede atribuirse el haber al menos articulado las quejas y las necesidades de todos los atingidos por el proceso del empobrecimiento durante los últimos veinte años. Eso no lo han conseguido los partidos políticos antes de 1998. Ahora, es dudoso, si el concepto constitucional de la “democracia participativa” realmente ha creado nuevos y eficientes canales de articulación y posibilidades de participación. Es curioso que el presidente sea nombrado el más alto líder en las constituciones de los “círculos bolivarianos”, que supuestamente son organizaciones participativas de base.

6. Finalmente, hay que mencionar que el nacionalismo constituye un pilar de la política populista, principalmente para reforzar la independencia política y el nacionalismo económico. Ambos elementos están presentes en la política chavista, como se verá más adelante en el capítulo sobre la política exterior. Su discurso antiimperialista se mueve en el ideario de los años setenta.

Resumiendo: el bolivarianismo es una mezcla de elementos de la mitología política del país con temas clásicos y concepciones políticas del populismo, con el recurso a mecanismos establecidos. Ahora, la pregunta realmente interesante es cómo esta amalgama ha llegado a desarrollar un potencial tan explosivo a finales de los años noventa, que llegó a dominar la política y el discurso político en Venezuela.

3. El bolivarianismo de Chávez como reacción a la crisis económica, social y política

Tienen razón Ellner y Hellinger en indicar una relación entre la polarización política forzada por Chávez y la polarización social, así como con el fracaso del proyecto modernizador de la Acción Democrática bajo Rómulo Betancourt (Ellner/Hellinger 2003; Medina/López Maya 2003). Hay que entender el chavismo y su ideología del bolivarianismo como reacción a la crisis social y el desmoronamiento político de los últimos veinte años.

No es cualquier crisis la que estimula el nacimiento de movimientos populistas, pero los movimientos populistas sí son siempre respuesta a una crisis. La crisis económica mundial de 1930 y sus abrumadoras consecuencias sociales han provocado movimientos y regímenes populistas más o menos autoritarios, los cuales han intentado solucionar la crisis económica con el nuevo modelo de desarrollo de la industrialización a través de la substitución de la importación; combatir la crisis social por medio de una política de redistribución dirigida por el Estado y dominar la crisis política a través de una integración corporativista de la clase trabajadora y la clase media.

La crisis de este modelo de desarrollo que desembocó en la crisis de la deuda externa durante los años ochenta, nuevamente había provocado reacciones populistas en algunos países. Estas han sido identificadas bajo el nombre de neopopulismo. Sin embargo, han definido nuevos y diferentes fines desarrollistas: por un lado se optaba por una

postura de defensa, queriendo revitalizar o preservar el antiguo modelo. El gobierno de Chávez pertenece a este grupo. Por el otro lado, surgieron intentos que promovieron una reestructuración neoliberal de la economía y la sociedad con métodos de la política populista (Fujimori en el Perú, Menem en Argentina, Salinas en México).

El modelo del desarrollo financiado por las rentas en Venezuela había llegado a sus límites por el año de 1980, el momento en el cual el alza del precio petrolero ya no provocaba un crecimiento económico. Había que despedirse del sueño, que Venezuela había llegado a la edad de oro; sueño que había surgido a raíz del aumento explosivo del precio petrolero en el año de 1974. Fueron las clases de ingresos menores que resintieron la reducción de sus salarios, de donde se desarrolló el conflicto de distribución, que antes se resolvía con un crecimiento del ingreso de las rentas petroleras, y la exclusión de las clases más pobres de la coalición distributiva. Esta coalición había sido la base del amplio pacto político de 1958. Cuando Fedecámaras se negó a seguir la línea del gobierno Lusinchi y firmar un “pacto social” con la CTV, se hizo evidente que había terminado el tiempo de las soluciones consensuales de la democracia pactada. A partir de un discurso neoliberal altamente agresivo llegaron a ser deslegitimados los pagos de carácter distributivo, como las subvenciones a los sectores de transporte o alimentación por ser populistas y clientelistas. Al mismo tiempo no se mencionaba que existían enormes transferencias indirectas a las clases pudientes en la forma que prácticamente no pagaban impuestos. A partir de allí se defendía la introducción de las reglas del mercado, lo cual a su vez sólo se refería al mercado del trabajo donde mandaban los mecanismos de oferta y demanda (Boeckh 1988; 1997).

La polarización social y los procesos de empobrecimiento, todos muy bien documentados (Roberts 2003), no sólo fueron consecuencias del decreciente precio petrolero o los fracasados intentos de adaptación neoliberal, sino que también fueron resultados de luchas distributivas en el ámbito político. Aunque estos mecanismos de distribución de las rentas no eran evidentes y entendibles para los afectados, sí se expandió el sentimiento de haber sido excluido del reparto de la riqueza nacional en las clases empobrecidas. Esta impresión bien tenía razón, aunque la corrupción no haya sido su causa, como lo quiso hacer creer Chávez en sus campañas electorales y aun después.

Junto con la decadencia del modelo rentístico y la disminución de su poder distributivo se ha establecido la crisis política, tratada repetidas veces (Boeckh 2000/01; 2003; Hellinger 2003, Levine 2002 entre otros), por lo cual aquí no es necesario tratar detalladamente el asunto. El hecho que el “Caracazo” en 1989 fue una sorpresa para todos los partidos políticos, demostró que los partidos habían perdido el contacto con el “pueblo” y no estaban al tanto de la ira que se había acumulado en los sectores de los barrios pobres. El sistema político del “puntofijismo” perdía su credibilidad y dejaba olvidar sus logros históricos por la creciente corrupción, que es particularmente escandalosa en tiempos de empobrecimiento, y por la increíble arrogancia con la cual los partidos establecidos trataban de proseguir con sus tretas políticas. Lo que quedaba era la impresión de un cartel poderoso y corrupto. La “Cuarta República” cometió suicidio en los años noventa, al parecer sin que los partidos establecidos tomaran cuenta de ello. Así, ni las reformas políticas (intentos de reformar los partidos políticos y de descentralización política y administrativa) han podido frenar la creciente pérdida de legitimidad. Esta crisis política fue lamentada en todos los estratos sociales.

Aquí Chávez ha podido cumplir con el requerimiento mínimo para una candidatura exitosa, ya que por su procedencia indudablemente no pertenecía a la elite establecida. Él provenía, al igual que Fujimori en el Perú, de una clase marginada, con lo que la elección de su persona representaba una ruptura con el sistema. Kurt Weyland indica que el discurso del marginado salvador que viene a liberar al pueblo de la oligarquía corrupta llega a ser un elemento fundamental del populismo (Weyland 1999).

Chávez ha podido ascender políticamente porque ha sabido articular la crisis social y la crisis política en su discurso, obteniendo así el apoyo de segmentos de todas las clases sociales para su proyecto de la reestructuración del sistema político. El porcentaje de la población satisfecha con la democracia subió entre 1999 y 2000 (inmediatamente después de su elección) del 35% a un 50% (*Latinobarómetro* 2000: 12). La popularidad del presidente fue muy alta al principio, porque su “revolución” sólo trataba de eliminar el “puntofijismo”, siempre y cuando éste también era considerado causa de la crisis social. El planteado contraste populista entre “pueblo” y “oligarquía” aún podía ser rastreado en el concepto del discurso populista clásico, es decir como

una figura retórica que no excluía a nadie. Igualmente se podía interpretar la evocación de Bolívar como siempre se había hecho antes: conjurando justamente la unidad del pueblo en su totalidad. Ésta tenía además un aspecto muy funcional: Chávez era muy querido por las clases pobres y lograba canalizar su insatisfacción sin poner en peligro al sistema. Fue un alivio para la clase establecida ver que la esposa de Chávez también iba de *shopping* a Miami, igual que ellos.

La clase media llegó a restringir su apoyo a Chávez en el momento que éste empezaba a cuestionar el modo de distribución de las rentas restantes relacionados con ciertas políticas sectoriales (política social, política educacional, fomento de las pequeñas empresas), mostrándose más inclinado en atender los intereses de las clientelas que habían salido perdiendo con la crisis de 1980. Éste fue el momento de cortarle el indiscutible acceso a posiciones claves en la política económica a los fuertes intereses económicos. Todo eso claramente no constataba ser una revolución, pero en comparación con la política establecida hasta entonces sí representaba una ruptura con las reglas del juego. Fue a partir del creciente conflicto por la distribución del poder y de las rentas que el bolivarianismo empezó a cambiar su carácter. Ahora Bolívar era visto como un revolucionario.

A nuestro parecer hay algo que es más importante que sólo rellenar el concepto del “bolivarianismo” en relación con las consecuencias en el sistema venezolano y en el ámbito de la historia latinoamericana. Al contrario de las ideologías de los partidos establecidos, los cuales creaban sus programas políticos a partir de conceptos extranjeros (fueran social-demócratas o cristianos) y distinto al neoliberalismo, el cual no puede esconder su procedencia, la evocación de Bolívar significaba volver a las raíces latinoamericanas, a algo familiar, y además representaba la valoración de las propias tradiciones. Después de décadas de desorientación caracterizadas por la decadencia social, económica y política, el bolivarianismo llegó a ser símbolo de un nuevo comienzo a base de valores y orientaciones autóctonas. Así, Chávez no se cansa de mencionar que la “revolución bolivariana” es un producto originario de Venezuela y no un modelo copiado del extranjero, ya que había que buscar las soluciones a los problemas en Venezuela y en sus propias tradiciones.

Los modelos latinoamericanos alternativos habían perdido su credibilidad desde el momento del colapso del sistema de desarrollo a

base de la substitución de importaciones. Entonces se trataban de reactivar valores y recetas universales para la política (estándares liberal-demócratas) y para la economía (economía de mercado). En esta búsqueda de estrategias de desarrollo y el entendimiento de la modernidad desde la independencia en América Latina, la cual oscilaba constantemente entre imitación y autonomía, vemos que en los años ochenta y noventa de nuevo se recurrió a modelos extranjeros. El solo término de la “política de ajuste” es un indicativo para este hecho (Boeckh 1999). La confianza de encontrar soluciones propias para los problemas en del subcontinente se vio fuertemente defraudada. Justo después de la crisis de la deuda, un colega venezolano había dicho en una conversación, que América Latina recién iba a dejar de producir catástrofes cuando dejase de ser América Latina. El bolivarianismo de hoy es simplemente el movimiento en dirección contraria. Después de no haber tenido grandes éxitos con la política de adaptación, habiendo hecho muchos sacrificios en espera de un mejor futuro, al parecer en vano, llegó el momento de que conceptos autóctonos se volvieron a poner de moda, aun siendo éstos débiles e imprecisos.

Llega a ser irónico que el país que menos ha estado en contacto con reformas neoliberales y que se encontraba muy abajo en el índice de la globalización (Naím 2001) formulara ahora la crítica más fuerte al neoliberalismo y a la globalización a partir de la retórica bolivariana-populista. El solo rechazar conceptos de desarrollo y de la modernidad no constituyen una alternativa por sí sola. Para todos aquellos, sin embargo, que se habían acomodado con la modernidad importada, el discurso chavista llega a representar la vuelta hacia el pasado premoderno del país, era recaer en la barbarie. De hecho, la actual controversia en Venezuela recuerda mucho a la contraposición positivista entre “civilización y barbarie” (así también Ellner/Hellinger 2003: 226) en la cual Chávez, a los ojos de sus adversarios, quiere representar la barbarie consciente y gustosamente, forzando su cercanía con el pueblo simple, su lenguaje recio y la permanente mención de su origen mestizo.

4. El bolivarianismo como estrategia de legitimación

Queda claro que no es recién desde el gobierno de Chávez que Venezuela esté luchando contra una crisis social y la decadencia política.

La que es nueva es la forma con la que Chávez instrumentaliza políticamente esta crisis. Como se ha dicho antes, los partidos tradicionales habían ido perdiendo su legitimidad, siendo relacionados cada vez más con la odiada corrupción. Hugo Chávez había logrado presentarse como figura externa en relación con todas las instituciones que eran parte del “puntofijismo”, y él iba a terminar la crisis política. El instrumentalizó el fastidio contra las elites viejas, atacando en sus discursos repetidamente a la “Cuarta República” y sus representantes, sin evitar acusaciones personales. Parecían no tener límites sus invenciones humorísticas, así por ejemplo dotó a Salas Römer con el apodo de “Frijolito”⁵ en la campaña electoral de 1998 (Rösch 2001: 50). Chávez logró establecer un sistema “anti-partidos” con la creación de la “Quinta República”, lo que también se refleja en la Constitución, en la cual los partidos son casi completamente ignorados. Con la renuncia de instituciones intermediarias vemos que Chávez recurre a tradiciones resistentes y populistas (Weyland 1999: 182). Sin embargo no ha llegado a tal extremo como un colega de Fujimori que creó el tipo del “partido descartable”, participando en cada elección con un nuevo partido. Según varias declaraciones, el presidente ha mostrado su interés por cordones de transmisión.

Chávez acude al discurso de la soberanía del pueblo, relacionado con Simón Bolívar y su declaración: “La soberanía del pueblo es la única autoridad legítima de las naciones” (Bolívar 1826), una idea restringida posteriormente por el propio Bolívar.

Desde la toma del poder, Chávez ha demostrado cuánto le valía la soberanía del pueblo, convocando a una asamblea constituyente para la elaboración de una nueva Constitución bolivariana, la cual fue ratificada por el pueblo a través de un plebiscito. La constante apelación de Chávez que los venezolanos leyeran la Constitución ha sido fructífera. Por un lado la Constitución se ha vuelto el libro sagrado del régimen y sus artículos son citados de memoria al enfrentarse con una persona no instruida. Por el otro lado, eso ha sido un factor de creciente fama para Chávez, ya que al parecer le ha devuelto los derechos a los venezolanos.

Los círculos bolivarianos representan otro instrumento importante que garantiza la participación del pueblo. Cada círculo debe agrupar

5 “Frijolito” es el nombre del caballo de Salas Römer.

entre siete y once personas, en donde se tratan temas de salud, seguridad, educación, del transporte en el barrio, etc. Éstos se pueden organizar a nivel comunal o a nivel del episcopado. El respectivo nivel superior es representado por los círculos elegidos desde abajo. Pero hay controversias considerables acerca del carácter de los círculos: para algunos representan el brazo armado de Chávez, otros los ven como una verdadera posibilidad de participación política. El programa de televisión “Aló Presidente” ayuda a difundir esta imagen del presidente que escucha los intereses del pueblo y el cual ayuda directamente donde haya necesidad. Los que están presentes en los programas tienen la oportunidad de desahogarse directamente con él. Así no existe una organización intermediaria que intervenga en esta comunicación. Aquí la referencialidad directa a Simón Bolívar es empleada básicamente para la legitimación del régimen.

Cuando Chávez acusa a la oposición de ser traidora de la patria, intentando quitarle legitimidad, está evocando otra traición: tal como fue traicionado Cristo por Judas durante la última cena, así la oposición traiciona lo más sagrado que tiene Venezuela: a Simón Bolívar y claro, a su encarnación Hugo Chávez. A esto también se refiere al acusar en una carta abierta a los obispos de fariseos e hipócritas (Chávez 2000b). Nunca deja de mencionar que él es una víctima constante de mentiras y traiciones. Y la oposición le ayuda. De hecho, los reportajes de las grandes cadenas de televisión que él ha nombrado “los cuatro caballeros apocalípticos” (Chávez 2001b), han demostrado su falta de objetividad periodística. Durante los paros, estos canales funcionaban como vehículos de propaganda altamente manipuladores de la oposición, y también se mostró durante el golpe que los propietarios de los canales, que se presentaban como defensores ardientes de la libertad de prensa, la censuraban.

Finalmente cabe mencionar el discurso anti-imperialista de la política exterior, el cual será tratado a continuación.

5. El bolivarianismo como proyecto de la política exterior

También en los pronunciamientos del presidente acerca de la política exterior se pueden encontrar varias referencias a Bolívar y al bolivarianismo. Chávez ve grandes similitudes entre la situación de América Latina después de la independencia y la de hoy en día. Bolívar había

intentado, aunque sin lograrlo, crear un Estado gigante latinoamericano, o al menos mantener la unidad de la Gran Colombia, para defender la reciente independencia contra España y la dinámica expansiva de los EEUU. También Chávez siente que la soberanía de los Estados latinoamericanos está amenazada. Principalmente el unilateralismo del gobierno estadounidense y el proyecto del ALCA (Área de Libre Comercio para las Américas) representan un peligro. Al igual que Bolívar, también Chávez presiona hacia la integración latinoamericana como único proyecto de oposición a la hegemonía estadounidense en la región. Con eso retoma un importante mito de la creación, que es el sueño de la unión latinoamericana:

el sueño bolivariano de constituir la Gran Confederación de Naciones Mestizas del continente aún tiene vigencia. No es una utopía. Se torna, más bien, una necesidad fundamental para darle solidez y consistencia a todas y cada una de las naciones de nuestro entorno político, cultural y geográfico (Chávez 2000a: 8).

Con gusto cita la carta de Jamaica, en la cual Bolívar invoca la unión del subcontinente como requisito de una victoriosa lucha de independencia.

Las metas de integración sobrepasan la integración económica, la cual –según el ex-ministro de relaciones exteriores Rangel– eran calificadas meramente como formalidad o ritual (Rangel 1999). Chávez entiende la integración como un proyecto político de absoluta prioridad: “La integración no puede partir de la economía, eso debe ser la consecuencia. La integración debe partir de lo político” (Chávez 2003a).

La posibilidad de integrar a Venezuela en una estructura política más grande ya está fundada en la Constitución. El artículo 153 permite la creación de la unión de Estados, para la cual deberían ser de prioridad los países de América Latina y el Caribe, con tal que sea positivo para el desarrollo económico, social, cultural y político de la nación. La idea de una unión está relacionada con la demanda de un pacto de defensa militar latinoamericano (*El Nacional* del 31.8.2000) o al menos un pacto brasilero-venezolano como preparación de una estructura parecida a la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) (*O Estado de Sao Paulo* del 31.8.2000). Este pacto sería el sucesor directo del ejército de liberación de Bolívar.

La idea principal de Chávez es construir alternativas integracionistas a los proyectos planteados por los EEUU, para asegurarles así a los países latinoamericanos el derecho de participar de la formulación de las reglas del juego. Aquí sin duda se encuentran similitudes con la política exterior del Brasil. Sin embargo, la política exterior de dicho país evita retomar el lenguaje anti-imperialista de los años setenta, siendo así mucho más sutil su balance entre confrontación y cooperación con los EEUU (Calcagnotto/Nolte 2002).

Por lo tanto, Chávez no apoya el proyecto de la creación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Un bloque como el ALCA no puede ser la solución de los problemas de la región. En cambio, es de mayor urgencia la unión de la región caribeña y latinoamericana, propuesta por el ministro de Relaciones Exteriores Luis Alfonso Dávila en una entrevista con la BBC (26.08.2001).

Para luchar contra los planes integradores “imperialistas” que supuestamente se esconden detrás del proyecto del ALCA, Chávez prefiere citar la Biblia en vez de recurrir a Bolívar. Así compara el ALCA con la tentación de Jesús frente al diablo en el desierto (Chávez 2001a). El proyecto alternativo de Chávez es el ALBA, la “Alianza Bolivariana de las Américas” (Bilbao 2002: 65).⁶

“Tal como está planteado el ALCA, es un juego en el cual nosotros, países dominados, dependientes, no tendríamos ninguna posibilidad de sobrevivir porque este mecanismo fue engendrado por el neoliberalismo”, así la explicación de Chávez para su modelo alternativo del ALBA.⁷

Como lo demuestra esta cita, su discurso contra la hegemonía estadounidense implica su rechazo del neoliberalismo y el “capitalismo salvaje” (Chávez 2003a; 2003b; Baspineiro 2003). Ambos representan para él facetas de la lucha antiimperialista. Y justamente aquí el discurso chavista podría desencadenar una cierta explosividad en América Latina, a pesar de sus exageraciones y desagradados retóricos que afligen a sus colegas presidentes. Chávez ciertamente ve su lucha contra el imperialismo y la globalización en América Latina como un modelo (Baspineiro 2003). Como ya se había mencionado anteriormente, las esperanzas que se tenían en reformas del mercado fueron

6 <<http://www.ecuador.indymedia.org/es/2003/02/1772.html>> (24.3.2004).

7 <<http://www.profesionalespcom.org/Venezuela/ALBA.html>> (24.3.2004).

decepcionadas. Pero no iremos a discutir las causas de su fracaso (Boeckh 2002a). De todas formas son mucho más complejas de lo que la crítica chavista y alguna que otra crítica a la globalización quieran aceptar. Pero lo que sí podemos ver, es que al igual que el ataque frontal al “puntofijismo” en Venezuela, estas críticas han tocado un punto muy sensible. El hecho de referirse a Bolívar le permite además, en el contexto latinoamericano, retroceder de la orientación hacia el exterior y volver a concentrarse en tradiciones propias y conceptos supuestamente latinoamericanos. Los frecuentes y amistosos encuentros diplomáticos con Fidel Castro forman parte de su propósito de irritar a la hegemonía menospreciada. Queda por formular, no por responder, la pregunta, si el bolivarianismo, el populismo y la crítica a la globalización de Chávez son síntomas de una recaída a un pasado supuestamente superado, o si forman el comienzo de un nuevo movimiento, el cual será copiado por otros gobiernos con poco éxito en sus esfuerzos de adaptación o por ser víctimas de un nuevo choque externo.

Tampoco se puede hacer una declaración clara acerca de supuestos intereses hegemónicos venezolanos en la región, los cuales tal vez se hacen visibles en la política de relaciones exteriores a través de las presiones de integración. Existen voces que sí lo ven así, por ejemplo en situaciones como la fundación del “Grupo de los Tres”, en la cual –citando a Bolívar– Chávez dice que la presencia de una autoridad sublime sería un requisito fundamental dentro de una confederación de Estados. En relación a los países caribeños se puede observar el ejercicio de una política típica de una potencia mediana, la cual no se basa en el liderazgo ideológico, sino en el suministro preferencial de petróleo (Boeckh 2002b).

6. El bolivarianismo como proyecto del futuro: ¿cuál es la validez del concepto?

Para finalizar, queremos expresar sintéticamente por qué el bolivarianismo y el populismo chavista representan una salida en dirección equivocada, sin ofrecer soluciones para la crisis del país. Chávez ha comprendido perfectamente cómo exponer las debilidades del viejo sistema y eliminarlas democráticamente. Pero hasta ahora no ha habido la creación de una estructura de sustitución del antiguo y moribun-

do sistema político, ya que los intentos de reconstrucción han dividido profundamente al país.

1. Está claro que la revaloración de Bolívar ha podido crear un sentimiento de un nuevo comienzo, dejando atrás la desorientación de las últimas décadas y revivir viejas tradiciones y valores autóctonos. Con el discurso chavista y la acentuación de las propias raíces políticas y filosóficas, mediante la revitalización de una supuestamente ya superada retórica populista, también se trata de otra cosa: es la pregunta cómo Venezuela tiene pensado tratar el reto del cambio global, y quién definirá los estándares de la modernidad. Al fracasar el proyecto de la modernización por medio de las rentas del petróleo, queriendo integrar a toda la sociedad a los estándares de la modernidad importada, llegó el momento de difundir nuevos valores y de no dejar que sean formulados por los que siempre lo han hecho.
2. Estos valores y el entendimiento político populista que corresponde a ellos no son capaces de generar procesos políticos adecuados a la crisis del país. En vez del menosprecio hacia instituciones, organizaciones intermediarias y mecanismos regulados, sería importante reforzarlos para posibilitar la articulación y el procesamiento de distintos intereses sociales, para así crear una cierta base para reglas políticas claras y para fomentar una confianza en estas reglas. En vez, de acuerdo a la clásica manía populista de negar el pluralismo social y político, y difamarlo como peligro para la comunidad, sería importante verlos como una oportunidad para la solución racional y regulada de los conflictos. El quitarle la legitimación a otros puntos de vista y arraigarse en el concepto fundamentalista de lo que significa la política, provoca un nivel de confrontación política que exige enormes cantidades de energía. La posibilidad de plantearse la confrontación política con la pobreza y la desigualdad social como un proyecto nacional, y no como lucha contra la oligarquía, se está actualmente demostrando en el Brasil.
3. El proyecto bolivariano, si es que se pueda hablar de él como un proyecto, es meramente político. Se puede ver que el discurso bolivariano casi no hace referencia a los problemas económicos o las causas de la crisis económica. Esto refleja muy bien que hasta

ahora lo político ha sido la prioridad absoluta de Chávez y que carece de conceptos económicos.

4. La limitación del discurso acerca de la igualdad en la fórmula de la distribución equivale al viejo modelo del Estado de distribución de tipo populista. A diferencia de los otros Estados latinoamericanos, todavía es posible sostener estos modelos por la gran cantidad de ingresos petroleros. Revitalizar la OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) fue la condición básica para posibilitar la política de distribución chavista, lo que puede ser calificado como el más grande logro de este gobierno. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que así también se ha elevado la vulnerabilidad de la política chavista en relación con las oscilaciones de los precios petroleros. El gobierno recurre nuevamente, y con más énfasis que antes, al viejo modelo de desarrollo dependiente de las rentas, el cual se encuentra en crisis desde los últimos veinte años.
5. También cabe ver que el discurso acerca de la equidad no sólo se refiere a la distribución. Éste le da un sentimiento de integración política a las clases pobres, dándoles la impresión de ser escuchadas. La finalidad consiste en devolverle la dignidad y autoestima a la clase marginada. Manteniendo la línea de discursos populistas tradicionales, el trato con las clases menos privilegiadas no sólo consiste de una política material, sino también de una política simbólica, viendo que ésta da una cierta protección al régimen en caso de desagradados políticos y oscilaciones económicas. Pero, esta reserva de legitimidad no es inacabable y a largo plazo es imposible protegerse de recesiones económicas.
6. Regímenes populistas que tienden hacia un entendimiento democrático en busca de resultados rápidos, y que intentan evitar regulaciones, normalmente tienen una base de legitimidad bastante pequeña. Porque cuando los resultados no equivalen a las demandas, no se puede recurrir a la legitimidad basada en reglas establecidas y confiables. Ya que la retórica bolivariana y revolucionaria no le ayudará a Chávez para frenar una crisis económica y las crecientes tendencias de empobrecimiento a largo plazo, el futuro del régimen será dictado en el campo de la economía. Por causas ya mencionadas eso sólo puede terminar en un fracaso.

A diferencia de los años sesenta y setenta, hoy en día faltan los recursos materiales para una superación de la crisis por medio de una política populista de distribución y un aislamiento hacia el exterior. No es necesario celebrar el neoliberalismo y la globalización para dudar que la ideología chavista y la evocación de Bolívar generen respuestas y soluciones adecuadas para los problemas del país. Teniendo en cuenta su rendimiento insatisfactorio en el ámbito social y económico, la legitimidad ya no le durará mucho tiempo más. Mucho de la manera de cómo hoy se presenta la ideología del régimen, hace pensar en la famosa cita de Marx, que explicaba que “todos los hechos y personas de importancia histórico-mundial se producen, por decirlo así, dos veces: La primera vez como tragedia y la segunda vez como farsa ridícula” (Marx 1965: 9).

Bibliografía

- Arenas, Nelly/Gómez Calcaño, Luis (2002): *Los círculos bolivarianos: El mito de la unidad del pueblo*. Caracas: Centro de Estudios del Desarrollo.
- Baspineiro, Alex Contreras (2003): “Globalizar la Revolución Bolivariana”. En: <<http://www.narconews.com/issue29/articulo746.html>> (09.10.2003).
- Bilbao, Luis (2002): *Chávez y la Revolución Bolivariana*. Santiago de Chile: Editorial Aún Creemos en los Sueños.
- Boeckh, Andreas (1988): “Die Schuldenkrise und die Krise des bürokratischen Entwicklungsstaates in Venezuela”. En: *Politische Vierteljahresschrift*, 29, 4, pp. 636-655.
- (1997): “Venezuela: Die schmerzvolle Transformation eines Erdöllandes”. En: Boeckh, Andreas/Pawelka, Peter (eds.): *Staat, Markt und Rente in der internationalen Politik*. Opladen: Westdeutscher Verlag, pp. 285-315.
- (1999): “Wie man Unpassendes passend macht. Das Elend des Fortschritts in Lateinamerika”. En: Thiel, Reinold E. (ed.): *Neue Ansätze zur Entwicklungstheorie*. Bonn: Deutsche Stiftung für internationale Entwicklung, pp. 82-95.
- (2000/2001): “Venezuela auf dem Weg zu einem autoritären Neopopulismus?”. En: *Welt/Trends* 29, pp. 79-96.
- (2002a): “Entwicklung im Zeitalter der Globalisierung. Befunde und Fragen mit Blick auf Lateinamerika”. En: Birle, Peter *et al.* (eds.): *Globalisierung und Regionalismus. Bewährungsproben für Staat und Demokratie in Asien und Lateinamerika*. Opladen: Leske + Budrich, pp. 231-254.
- (2002b): “Die Außenpolitik Venezuelas”. En: Calcagnotto, Gilberto/Nolte, Detlef (eds.): *Südamerika zwischen US-amerikanischer Hegemonie und brasilianischem Führungsanspruch. Konkurrenz und Kongruenz der Integrationsprozesse in den Amerikas*. Frankfurt/Main: Vervuert, pp. 212-225.

- (2003): “The Painful Transition of a Rentier State: Globalization and Neopopulist Regression in Venezuela”. En: Beck, Martin/Barrios, Harald/Boeckh, Andreas/Segbers, Klaus (eds.): *Resistance to Globalization. Political Struggle and Cultural Resilience in the Middle East, Russia, and Latin America*. Berlin/London/New York: Lit-Verlag, pp. 142-157.
- Bolívar, Simón (1826): “Discurso al Congreso Constituyente de Bolivia, Lima”. En: <<http://www.analitica.com/bitbliblioteca/bolivar/bolivia.asp>> (13.10.2003).
- Calcagnotto, Gilberto/Nolte, Detlef (2000) (eds.): *Südamerika zwischen US-amerikanischer Hegemonie und brasilianischem Führungsanspruch. Konkurrenz und Kongruenz der Integrationsprozesse in den Amerikas*. Frankfurt/Main: Vervuert.
- Carrera Damas, Germán (1969): *El culto a Bolívar*. Caracas: Universidad Central de Venezuela.
- Chávez Frías, Hugo (1999): “Carta del Presidente Hugo Chávez a la Corte Suprema de Justicia”. En: <http://www.analitica.com/biblioteca/hChavez_cartacsj.asp> (29.10.2003).
- (2000a): “La propuesta de Hugo Chávez para continuar la revolución”. En: <<http://www.analitica.com/bitbliblioteca/hchavez/revolucion.asp>> (29.10.2003).
- (2000b): “Respuesta a la Conferencia Episcopal Venezolana”. En: <<http://www.analitica.com/bitbliblioteca/hchavez/obispos.asp>> (29.10.2003).
- (2001a): “Discurso en inauguración de la I Cumbre sobre la Deuda Social y la Integración Latinoamericana”. En: <http://www.analitica.com/bitbliblioteca/hchavez/deuda_social.asp> (29.10.2003).
- (2001b): “Discurso en instalación de la I Cumbre del Grupo de los Tres”. En: <http://www.analitica.com/bitbliblioteca/hchavez/discurso_g3.asp> (29.10.2003).
- (2003a): “Discurso en acto de la entrega de la Presidencia del Grupo de los 77”. En: <http://www.analitica.com/bitbliblioteca/hchavez/entrega_grupo77.asp> (29.10.2003).
- (2003b): “Discurso del Chávez al Foro Social Mundial”. En: <<http://www.revistalineas.com.ar/notas/febrero2003/discursodechavezelforo.htm>> (29.10.2003).
- (2003c): “Carta del presidente Hugo Chávez a la Corte Suprema de Justicia”. En: <http://www.analitica.com/bitbliblioteca/hchavez/carta_csj.asp> (15.08.2003).
- (2003d): “Chávez, en vez del ALCA el ALBA”. En: <<http://www.ecuador.indymedia.org/es/2003/02/1772.shtml>> (20.09.2003).
- Conway, C. (2002): “The Latin American Cult of Bolívar”. En: <<http://victorian.fortunecity.com/dadd/453/cult.htm>> (05.11.2003).
- Ellner, Steve/Hellinger, Daniel (eds.) (2003): *Venezuelan Politics in the Chávez Era. Class, Polarization, and Conflict*. Boulder et al.: Lynne Rienner Publishers.
- Ellner, Steve/Rosen, Fred (2002): “Venezuelas kürzester Putsch”. En: *Jahrbuch Lateinamerika. Analysen und Berichte* 26, pp. 221-231.
- Francia, Néstor (2003): “El pueblo en la revolución bolivariana”. En: <http://www.analitica.com/bitbliblioteca/nestor_francia/el_pueblo.asp> (29.10.2003).
- Harwich, Nikita (2003): “Un héroe para todas las causas: Bolívar en la historiografía”. En: *Revista Iberoamericana*, III, 10, pp. 7-22.

- Hellinger, Daniel (2001): "Tercermundismo y Chavismo". Inédito.
- (2003): "The Breakdown of Puntofijismo and the Rise of Chavismo". En: Ellner, Steve/Hellinger, Daniel (eds.): *Venezuelan Politics in the Chávez Era. Class, Polarization, and Conflict*. Boulder et al.: Lynne Rienner Publishers, pp. 27-54.
- Latinobarómetro (2000): "Latinobarómetro Survey 2000". En: <<http://www.latinobarometro.org>> (05.11.2003).
- Levine, Daniel H. (2002): "The Decline and Fall of Democracy in Venezuela: Ten Theses". En: *Bulletin of Latin American Research*, 21, 2, pp. 248-269.
- Lombardi, John V. (2003): "Prologue". En: Ellner, Steve/Hellinger, Daniel (eds.): *Venezuelan Politics in the Chávez Era. Class, Polarization, and Conflict*. Boulder et al.: Lynne Rienner Publishers, pp. 1-7.
- López, Francisco Sánchez (2001): "Drei Jahre 'Bolivarianische Revolution' in Venezuela: Trabajadores y empresarios unidos jamás serán vencidos". En: *Brennpunkt Lateinamerika* 24, pp. 261-268.
- López Maya, Margarita (2003): "Hugo Chávez Frías: His Movement and His Precidency". En: Ellner, Steve/Hellinger, Daniel (eds.): *Venezuelan Politics in the Chávez Era. Class, Polarization, and Conflict*. Boulder et al.: Lynne Rienner Publishers, pp. 73-92.
- Marx, Karl (1965): *Der 18. Brumaire des Louis Napoleon*. München: Insel Verlag.
- Medina, Medófilo/López Maya, Margarita (2003): *Venezuela: Confrontación social y polarización política*. Bogotá: Ediciones Aurora.
- Moncada, Samuel (2003): "Ponencia en el Encuentro Mundial de Solidaridad con la Revolución Bolivariana". En: <http://www.analitica.com/biblioteca/samuel_moncada/bolivarianismo.asp> (29.10.2003).
- Monzant Gavidia, José Luis (2003): "Chávez es superior a Bolívar". En: <<http://www.rebellion.org/venezuela/jlmonzant040203.htm>> (29.10.2003).
- Naím, Moisés (2001): "The Real Story Behind Venezuela's Woes". En: *Journal of Democracy* 12, 2, pp. 17-32.
- Quintero, Inés (1999): "Del Bolívar para todos al Bolívar para Chávez". En: *El Nacional*, 28.11.1999.
- Rangel, José Vicente (1999): "Palabras del excelentísimo Señor José Vicente Rangel, Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Sesión inaugural de la etapa ministerial de la XXV reunión ordinaria del Consejo Latinoamericano, 28.10.1999". En: <<http://www.mre.gov.ve/discursos/rangel12.htm>> (05.11.2003).
- República Bolivariana de Venezuela, Ministerio de Finanzas, Oficina Nacional de Presupuestos (2003): *Resumen de la Ley de Presupuesto 2003*. Caracas.
- Roberts, Kenneth (2003): "Social Polarization and the Populist Resurgence in Venezuela". En: Ellner, Steve/Hellinger, Daniel (eds.): *Venezuelan Politics in the Chávez Era. Class, Polarization, and Conflict*. Boulder et al.: Lynne Rienner Publishers, pp. 55-72.
- Rösch, Michael (2001): "Neue Formen der Politik in Venezuela und Peru? Eine vergleichende Untersuchung über den Zusammenhang zwischen Neopopulismus und Autoritarismus". Tübingen: Universität Tübingen (Magisterarbeit).

- Uslar Pietri, Arturo (1998): *Oraciones para despertar*. Caracas: Monte Ávila Editores Latinoamericana.
- Weltbank (2003): "World Development Indicators Online". En: <<http://devdata.worldbank.org/data-query/>> (29.10.2003).
- Weyland, Kurt (1999): "Populism in the Age of Neoliberalism". En: Coniff, Michael L.: *Populism in Latin America*. Tuscaloosa: University of Alabama Press, pp. 171-190.

Margarita López Maya

Las insurrecciones de la oposición en 2002 en Venezuela: causas y desafíos¹

1. Preámbulo

La sociedad venezolana vivió entre fines de 2001 y primeros meses de 2003 uno de los períodos más convulsionados de su historia contemporánea. Fracturada en dos bloques políticos poderosos que se enfrentaron continuamente, en dos oportunidades el gobierno del presidente Chávez hubo de afrontar por parte de las fuerzas sociales y políticas que se le oponen, una insurrección de grandes proporciones que puso en peligro su continuidad democrática. El golpe de Estado del 11 de abril y el paro general indefinido con parálisis de la industria petrolera de diciembre de 2002 a febrero de 2003 constituyen dos episodios estrechamente relacionados. En ambos, una significativa porción de venezolanos militares y civiles se sublevaron contra el gobierno, desconociendo su legalidad y legitimidad, mientras otra también significativa porción de venezolanos, igualmente civiles y militares, se movilizaron intensamente e incluso expusieron sus vidas para defenderlo. Para marzo de 2003 el gobierno de Chávez había sobrevivido a estas poderosas insurrecciones.

Entender por qué un gobierno democráticamente electo en 1998 y ratificado en 2000, que incluso en sus primeros 2 años cumplió algunas de las demandas más exigidas por el electorado venezolano en la última década, es repudiado y desconocido por una parte de la población –hasta el extremo de sentirse legítimamente autorizada a usar la violencia para deponerlo– mientras es respetado y amado por otra, es el objetivo de este artículo. Aquí se sostiene que en la Venezuela de fines de 2001 se cristalizó una situación sociopolítica altamente polarizada, que si bien pareció desencadenarse a partir de circunstancias

¹ Este artículo está basado en la ponencia “Insurrecciones de 2002 en Venezuela: causas e implicaciones” presentada en el XXIV Congreso Internacional de LASA celebrado en Dallas, Texas en marzo de 2003. Se ha reformulado para ajustarlo a los requerimientos de este Simposio.

coyunturales, tenía raíces profundas en un conjunto de problemas, algunos de naturaleza histórico-estructural, que la sociedad venía acumulando sin resolver. Esa situación de extrema polarización política fue percibida por las fuerzas de la oposición como una pérdida de legitimidad y piso político por parte del gobierno y un fortalecimiento de sus posiciones y proyecto político. A partir de ese diagnóstico, fuerzas sociales y políticas reunidas en la Coordinadora Democrática (CD) se plantearon una insurrección cívico-militar para derrocar al gobierno y sustituirlo por un gobierno de facto que los representara y sirviera de transición hacia otro gobierno. Aunque la oposición fracasó en su objetivo el 11 de abril, no modificó su diagnóstico ni rectificó en sus estrategias políticas, que serían a lo largo de 2002 fundamentalmente insurreccionales y desembocaron en el paro indefinido de diciembre de 2002 a febrero de 2003, también resultaron en un fracaso para la oposición. Se sostiene que la continuación de una conducta insurreccional por parte de la oposición se debió a otros factores adicionales que impidieron –y siguen impidiendo– que comprenda a cabalidad la naturaleza del conflicto sociopolítico venezolano y en consecuencia, actúe de manera apropiada a alcanzar sus fines políticos de manera democrática. Al final inferimos de esta conducta de la oposición algunos de los desafíos que enfrenta en el futuro inmediato.

El artículo se ha organizado en tres partes. En la primera, se hace una descripción analítica de cómo evolucionaron entre octubre de 2001 y marzo de 2003 las insurrecciones de la oposición venezolana. En la segunda parte, se desarrolla una interpretación sobre las causas que determinaron en las fuerzas de oposición una estrategia insurreccional como salida a la situación política que se percibió como crítica a principios de 2002. En la tercera parte, se complementa esta interpretación con otros aspectos que se hicieron más evidentes después de abril y permiten comprender el fracaso de las estrategias insurreccionales de la oposición hasta febrero de 2003. Se finaliza señalando algunos desafíos políticos que afrontan las fuerzas de oposición en lo inmediato.

2. La evolución de la crisis

Entre fines de 2001 y febrero de 2003 ocurrieron en la sociedad venezolana varias confrontaciones entre gobierno y oposición que pusieron

de manifiesto la existencia de una polarización política extrema, así como su canalización hacia una situación insurreccional contra el gobierno legal y legítimamente constituido por parte de fuerzas sociales y políticas opositoras. Las condiciones propiciadoras de la polarización política venían desarrollándose en los años previos, pero se fueron ahondando en el último cuatrimestre de 2001 siendo un desencadenante importante las acusaciones de autoritarismo y agresión verbal que la oposición hacía de manera creciente contra el presidente y su gobierno, a propósito de la aprobación de un conjunto de leyes, algunas medulares de su proyecto político, mediante el recurso constitucional de la Ley Habilitante. En diciembre de 2001 la confrontación desembocó en un paro cívico, el primero de cuatro, que fue respondido con un endurecimiento del discurso presidencial y amenazas de dirigentes del partido de gobierno al orden democrático. A partir de entonces la polarización y confrontación se hizo más intensa desembocando en el segundo paro cívico, en abril de 2002, que sirvió de antesala al golpe de Estado del día 11. Con este golpe de Estado y el retorno de Chávez al poder 48 horas después, se reveló la hondura de la fractura sociopolítica venezolana y se ahondó la crisis política. Las iniciativas de diálogo, negociación o acuerdos que en los meses siguientes se intentan, no producen resultados significativos. Ese diciembre se arribó de nuevo a un impasse entre los dos bloques, que llevó a la oposición a organizar un cuarto paro cívico, que al igual que en abril desembocará en una situación insurreccional. Para mediados de febrero de 2003 se hizo claro que el gobierno de Chávez había logrado sobrevivir a la huelga petrolera y ganaba control sobre la industria. Para marzo la oposición había levantado el paro.

2.1 Diciembre 2001: el primer paro cívico²

El paro cívico del 10 de diciembre de 2001, convocado por la máxima representación patronal del país, la Federación de Cámaras de Industria y Comercio (Fedecámaras), fue el resultado del creciente enfrentamiento de distintos grupos empresariales con el gobierno de Chávez. El descontento de empresarios y comerciantes se había venido manifestando desde el inicio de la gestión gubernamental, pero fue ese año que se cohesionaría como fuerza política opositora por la forma, ade-

2 El desarrollo de esta parte es una versión resumida de López Maya (2002a).

más de los contenidos, cómo el Ejecutivo Nacional aprobó 49 leyes. Éstas fueron aprobadas el 12 de noviembre a través del uso de facultades extraordinarias concedidas al Ejecutivo por la Asamblea Nacional por medio de una Ley Habilitante. Fedecámaras argumentó que ellas no habían sido suficientemente consultadas con la sociedad y lesionaban derechos constitucionales, como el de participación, propiedad privada, justicia, libertad, derechos humanos y pluralismo político. Entre las leyes más criticadas por los empresarios estaban las leyes de Tierras, Pesca e Hidrocarburos, que sin duda afectan intereses de estos sectores. Propietarios de tierras rurales y empresarios de la pesca industrial venían movilizándose desde septiembre de ese año, y recibieron hacia octubre el respaldo de la máxima representación empresarial.

El paro del 10 de diciembre no sólo paralizó de manera significativa las actividades comerciales del país urbano, sino que también cohesionó por primera vez las distintas fuerzas organizadas de la oposición, incluyendo sectores gremiales, sectores medios de diversa naturaleza, pequeños partidos políticos emergentes, viejos partidos venidos a menos como Acción Democrática (AD) y Copei (Comité de Organización Política Electoral Independiente), y algunos intereses sindicales tradicionales representados en la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), todos ellos descontentos por considerar afectados sus intereses y por el estilo autoritario y pugnaz del gobierno del presidente. Este paro cívico fue el primer éxito que se anotó la oposición en su confrontación contra el gobierno de Chávez y es el punto de partida de un endurecimiento de las posiciones de ambos bandos que desembocará en un segundo paro cívico en abril, esta vez como parte del desarrollo de un golpe de Estado. La oposición reconocería en los meses próximos al presidente de Fedecámaras, Pedro Carmona Estanga, por su actuación durante este paro, como cabeza de su movimiento.

El gobierno y las fuerzas que lo respaldan, agregadas en los partidos Movimiento Quinta República (MVR), Patria Para Todos (PPT) y otros, reaccionaron ante esta primera demostración de fuerza de la oposición acentuando el discurso y la acción confrontacional, y fortaleciéndose su liderazgo más intransigente. El mismo 10 de diciembre, por ejemplo, el gobierno resolvió trasladar a Caracas los actos conmemorativos del día de la aviación, que estaban pautados para reali-

zarse en la ciudad de Maracay. Buscó con ello hacer sentir su fuerza exhibiendo en el cielo los aviones militares. Asimismo, organizó en Caracas una concentración campesina en la tarde, para celebrar la promulgación de la ley de Tierras. En ambos actos, el presidente se presentó en traje militar, declaró que iba a acelerar la aplicación de las nuevas leyes y amenazó con nuevas resoluciones oficiales para regular actividades privadas. En el MVR se emprendieron acciones contra aquellos de sus parlamentarios que habían propiciado el diálogo con la oposición, pasando sus expedientes al órgano disciplinario del partido. Este endurecimiento de las posiciones del gobierno y su partido, tuvo su contraparte en Fedecámaras y la oposición en general, que en una actitud igualmente intransigente, y desde una posición fortalecida por el éxito del paro cívico, exigieron a partir de entonces la derogación de las 49 leyes sancionadas a través de la Habilitante. Algunos líderes y grupos ya solicitaban la renuncia del presidente. Estas posiciones extremas impedirían en los meses siguientes el diálogo y la negociación política entre las partes en pugna.

2.2 Abril 2002: *segundo paro cívico y golpe de Estado*³

Una continua movilización callejera de lado a lado, es la característica de la dinámica sociopolítica de los primeros meses de 2002 ante el bloqueo de salidas negociadas que se da después del paro cívico de diciembre. Una parte de la oposición maneja desde fines de año la demanda de la renuncia del presidente, otros piden que se impulse a mediano plazo un referendo revocatorio. Corren también insistentemente rumores sobre el descontento en las fuerzas armadas, habiendo señas de que un sector radicalizado de la oposición juega al golpe de Estado. En este contexto se produce en el mes de febrero el conflicto entre el Ejecutivo Nacional y sectores de la gerencia mayor de Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA), que será la plataforma que impulsará el segundo paro cívico que desembocará en el episodio del golpe de Estado del 11 de abril.

El conflicto de sectores de la gerencia mayor y ejecutiva de PDVSA tuvo como motivo visible el nombramiento en febrero por parte del Ejecutivo de un nuevo presidente y nueva junta directiva de la empresa. Con Gastón Parra como nuevo presidente de la compañía,

3 En esta parte se toman extractos de López Maya (2002b y 2003a).

eran ya 4 los presidentes que había nombrado el gobierno aparentemente sin lograr sus objetivos de alinear la empresa con la reforma petrolera que venía desarrollando como parte medular de su proyecto político. Sin embargo, el motivo hecho público para el paro no era ese, y no se cuestionó abiertamente el nombramiento de Parra sino el de miembros directivos internos de la compañía. Alegaba la gerencia que estos nombramientos violaban reglas consuetudinarias de la empresa, que otorgaban esos cargos por “méritos”. El argumento de la “meritocracia” para ascender o sentarse en la junta directiva de PDVSA era la reivindicación tras la cual se ocultaba la diferencia más honda entre gobierno y sectores de la gerencia en torno a la política petrolera. En la década anterior, de implementación de orientaciones económicas gubernamentales de naturaleza neoliberal, la gerencia se había independizado de la supervisión estatal y había formulado y desarrollado una política de “apertura petrolera”. Con ella buscó distanciar al país de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo), reducir el ingreso fiscal petrolero, propiciar el retorno de los capitales foráneos petroleros y eventualmente llevar a una privatización de la industria. Las leyes de Hidrocarburos Gaseosos de 1999 y de Hidrocarburos de 2001 revirtieron estas tendencias y retomaron una política que podría *grosso modo* caracterizarse como una continuación, actualizada a los nuevos tiempos, de la política nacionalista que a lo largo del siglo XX había desarrollado el Estado venezolano con la industria petrolera.⁴

El paro de actividades administrativas en PDVSA demandando la renuncia de los directores internos de la junta recién nombrados, recibiría en abril el apoyo de la CTV que tomó la iniciativa de convocar el día 9 a un segundo paro cívico de solidaridad con la gerencia de la compañía, que fue ampliamente respaldado e incluso impulsado por Fedecámaras, las diversas organizaciones de oposición y el Episcopado de la iglesia católica.⁵ Aunque menos exitoso que el del 10 de diciembre, el sindicalista Carlos Ortega en nombre de la CTV prorrogó este paro por 24 horas más y el 10 de abril, ante una escasa concentra-

4 Para un estudio a profundidad de la reforma petrolera del gobierno de Chávez, véase Lander (ed.) (2003).

5 La secuencia y detalle del golpe del 11 de abril se basa en la construcción propia de un cronograma del golpe a partir de diversas fuentes hemerográficas e información procedente de distintas páginas web. Ver López Maya (2003a).

ción frente a la sede de la CTV, declaró el paro como “indefinido”, lo que sería entusiastamente apoyado por el resto de las fuerzas opositoras. Esa misma tarde convocaron también a una marcha para el día 11 que se movería del Parque del Este de Caracas hacia una de las sedes de PDVSA, también en el este de la ciudad (PDVSA-Chuao), para mostrar su solidaridad con la gerencia de la industria. Como es sabido, esa marcha, ampliamente convocada por los medios de comunicación, fue multitudinaria y una vez llegada a la sede de PDVSA-Chuao, fue persuadida a seguir hacia el centro de Caracas, a la sede del Palacio Presidencial para “sacar” de allí al presidente Chávez. Esta insurrección civil confrontó en el centro una situación de violencia, cuyo origen a la fecha no ha podido ser aclarado, que arrojó 19 muertos y más de un centenar de heridos. Estos sucesos sirvieron de justificación para la insurrección militar de un sector de oficiales de alto rango, produciéndose un golpe de Estado que depuso por 48 horas al presidente.

El 13 de abril, instaurado ya un gobierno de facto presidido por el señor Carmona Estanga de Fedecámaras, diversas y nutridas movilizaciones de los sectores populares que apoyaban al presidente derrocado, conjuntamente con una insurrección militar de signo contrario al del día 11, devolvió a Chávez al poder retomándose el hilo constitucional roto por el golpe cívico-militar. A partir de entonces, y a diferencia del 10 de diciembre, el presidente prometió y se avino a bajar el tono de su discurso, pidió disculpas por errores y ofensas y prometió rectificaciones con sus adversarios políticos. En los meses siguientes, los sectores más democráticos del gobierno se fortalecieron y se hizo manifiesto, en efecto, algunos cambios importantes en estilo y conducta: cambios en el gabinete económico colocándose funcionarios con mayor capacidad de comunicación con sectores empresariales, política de rectificación y reconciliación con la gerencia mayor de PDVSA; moderación del discurso presidencial, mayor respeto por los procedimientos institucionales. El presidente no volvió a usar el uniforme militar e invitó al país a personalidades y organismos internacionales que pudieran brindar sus apoyos para ayudar a salir de la crisis política que el golpe había abierto. El vicepresidente, por su parte, tomó la iniciativa de abrir mesas de diálogo con diversos sectores de la sociedad.

En contraste, las fuerzas de oposición se mantuvieron renuentes al diálogo o la negociación con el gobierno y siguieron centradas en la política de la calle, pidiendo elecciones “ya”, que no está contemplado en la Constitución, y/o la renuncia del presidente. Aunque en un primer momento se halló debilitada políticamente por el retorno del presidente, así como dividida por desavenencias reveladas durante el golpe, entre partidarios y detractores de atajos violentos, no construyó en los meses siguientes una estrategia de clara vocación democrática, que neutralizara sus sectores más radicalizados. Fue sólo en noviembre, tres semanas antes del inicio del cuarto paro cívico, cuando bajo reiteradas presiones de personalidades y organismos internacionales, se avino a sentarse en la Mesa de Negociación y Acuerdos instaurada bajo la facilitación del secretario de la OEA (Organización de Estados Americanos), César Gaviria. Sin embargo, para ese momento, el predominio de los sectores radicalizados y antidemocráticos en la Coordinadora Democrática hacía improbable que un acuerdo político prosperara antes de la nueva medición de fuerzas que prometía el paro, donde la oposición se sentía confiada en salir victoriosa.

2.3 Diciembre: huelga general y paro petrolero⁶

La segunda gran insurrección de este año comienza a fabricarse desde agosto. Una decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictaminó que no existían méritos para enjuiciar por rebelión militar a 4 altos oficiales, responsables del golpe de Estado del 11 de abril. Fue ésta una clara decisión política y no jurídica del máximo tribunal, que abrió la puerta para una nueva aventura militar. Para el mundo civil fue señal de que en el país reinaba la impunidad. El 22 de octubre, 14 militares, entre ellos algunos de los absueltos por el TSJ en agosto, tomaron la plaza Francia de Altamira, en el este de Caracas, pronunciándose en “desobediencia legítima” contra el gobierno y declarando la zona “territorio liberado”. Anunciaron que sólo abandonarían la plaza cuando cayera Chávez y llamaban a sus compañeros de armas a alzarse contra el gobierno.

En el mismo mes de octubre, luego de una marcha, la CD dio lo que dijo ser un ultimátum a Chávez: si no renunciaba y convocaba a

6 Esta descripción analítica del paro petrolero es una versión resumida de López Maya (2003b).

elecciones la oposición llamaba a un nuevo paro cívico. El presidente hizo caso omiso y la oposición convocó para el 21 de octubre su tercer paro cívico. Aunque este paro fue parcial y menos beligerante que los dos previos, comenzó allí la recta final para desembocar en el paro indefinido y petrolero de diciembre-febrero. A partir de este paro de octubre se sucederían sin cesar una serie de hechos que fueron cargando con violencia la atmósfera del país: la toma de la plaza Altamira por los militares, ya señalada, el día siguiente de este paro; a inicios de noviembre se sucede un encuentro violento en el centro de Caracas entre allegados del gobierno y de la oposición motivado por la solicitud de un referendo consultivo por parte de la CD; en esos días se devela también una conspiración al allanar la casa de un ex canciller de AD y encontrarse en ella material preparatorio de un gobierno transitorio; una balacera se produce a mediados de noviembre en la plaza Bolívar de la ciudad motivada por un conflicto policial, donde mueren 3 personas; poco después el Ejecutivo Nacional intervino la Policía Metropolitana y ordenó la salida de la Guardia Nacional a la calle para patrullar la ciudad de Caracas. En noviembre estalla una crisis en el Consejo Nacional Electoral (CNE), que pone de relieve la politización también de esa institución. El 2 de diciembre, con todo lo anterior a cuestas, comenzará el 4º paro cívico en el lapso de un año.

Este paro mostró connotaciones distintas a los precedentes, al hacerse evidente que no sólo se sumaba al paro la gerencia administrativa de PDVSA, como en abril, sino buena parte de la gerencia operativa y los capitanes de la Marina Mercante, procediendo a paralizar buena parte de las actividades operativas de la compañía y prácticamente la totalidad de la flota de tanqueros de PDV Marina. PDVSA es la compañía más grande de América Latina y corazón de la actividad económica de Venezuela. La mitad del ingreso fiscal venezolano proviene del negocio petrolero. El lunes 9 de diciembre, día en que las fuerzas de la oposición convirtieron el paro en “indefinido” hasta que “caiga” Chávez, en cadena oficial transmitida por todos los medios de comunicación audiovisual, el presidente de PDVSA reconoció que la compañía estaba virtualmente paralizada. Denunció el paro como un “sabotaje criminal”. Convocó al pueblo a salir a la calle y rodear edificios, instalaciones y otros bienes de la empresa, a fin de apoyar al gobierno en su esfuerzo por presionar a la gerencia a levantar la para-

lización. El conflicto petrolero se hizo central y las demás acciones perdieron relevancia.

La paralización de la industria le dio una dimensión profunda a esta insurrección. Más allá del gobierno de Chávez, el conflicto pareció perseguir la quiebra financiera del Estado venezolano. En el caso de tener éxito la gerencia de PDVSA, manteniendo el control de la empresa y forzando la salida del presidente, se convertiría en un actor con poder de veto sobre los gobiernos electos, una empresa por encima del Estado nacional, capaz de imponer su proyecto político a éste y a la sociedad en su conjunto. Pese a los muchos pronósticos que aseguraban que no había gobierno venezolano que aguantara un paro petrolero, hacia mediados de enero la evolución del conflicto tendía a favorecer al gobierno; lentamente éste retomaba control sobre la empresa, activaba diferentes operaciones, y anunciaba un proceso de reestructuración de la misma. Hacia mediados de febrero la tendencia de control del gobierno sobre la industria se hizo clara y al finalizar el mes de marzo más de 18.000 gerentes y trabajadores habían sido despedidos por abandono del trabajo y la empresa había logrado rescatar todos sus tanqueros, se había iniciado el proceso de arranque de sus refinerías y se acercaba con pasos firmes hacia su producción normal de barriles diarios. El gobierno había sobrevivido y la oposición levantó el paro.

3. El gobierno de Chávez ¿legítimo?

En un libro clásico de la sociología de Barrington Moore Jr. publicado en 1978, que se titula *La injusticia. Las bases sociales para la obediencia y la rebeldía*, se explica como toda sociedad establece los límites permitidos para quienes gobiernan y quienes son gobernados en aras de la convivencia social. Estos límites pueden estar explícitos, como en la Constitución o implícitos como en costumbres y modos de comportamiento. Cuando alguna de las partes, autoridad o gobernado viola esos límites, se produce indignación moral y sentimientos de injusticia que impulsan la rebeldía. En Venezuela se ha venido produciendo por más de dos décadas estos sentimientos hacia el gobierno, tanto por parte de sectores populares, como más recientemente por parte de sectores empresariales, gerentes de PDVSA, grupos de clase media y sindicatos tradicionales ¿por qué?

Las reglas de la convivencia social y los límites entre gobernantes y gobernados, cimentados en los pactos constitutivos del sistema democrático venezolano de 1958, permitieron una relativa paz social en Venezuela por cerca de 3 décadas. Pero desde los años 80 esas reglas han venido siendo violentadas por el creciente empobrecimiento y cierre de expectativas de mejora económica y ascenso social que padecen las grandes mayorías de la población. La exclusión y polarización social y cultural, que en nuestras sociedades es un problema histórico, resultado del proceso de colonización, fueron poco superadas por la república nacida de las luchas emancipadoras del siglo XIX. Pero, la democracia resultante del pacto de Punto Fijo, en los años 60, 70 y aún en parte de los años 80 del siglo XX, se legitimó con una promesa de inclusión y justicia social por la vía de la distribución de la renta petrolera y la construcción de un orden democrático. Esta promesa sería explícitamente rota por los gobiernos venezolanos después del Caracazo de 1989, con la aplicación de programas de ajuste y reestructuración económica de naturaleza neoliberal, así como por la sustitución del discurso de inclusión, armonía y unión social del Estado nacional-populista por el del liberalismo individualista (Coronil/Skurski 1991). Por otra parte, ese episodio del Caracazo, con la masiva represión con la que fue resuelto, motivó una toma de conciencia colectiva sobre la ruptura producida. Nunca más los partidos de Punto Fijo pudieron recuperar la legitimidad perdida produciéndose poco después el colapso del sistema de partidos.

A mediados de los años 90, la polarización social va a encontrar expresión política en actores y proyectos también polarizados, que hasta los meses del paro petrolero se mostraban incapaces de reconocerse uno al “otro” como iguales, de respetarse entre sí y, consiguientemente, de moverse de acuerdo con reglas de juego transparentes, en la lucha por alcanzar el predominio político en nuestra sociedad. La sociedad venezolana vive desde los años 90 lo que Gramsci conceptuó como una lucha hegemónica, es decir, una lucha donde actores con proyectos distintos para la sociedad buscan predominar, recurriendo a reglas institucionales pero también extra-institucionales (Laclau 1985). En diferentes momentos de esta lucha hegemónica, en 1992 y dos veces en el 2002, actores de signo contrario decidieron tirar el tablero del juego democrático para alcanzar el predominio político. Afortunadamente hasta ahora, ninguno de los dos tuvo éxito.

En 1998, de acuerdo a reglas democráticas establecidas, en elecciones transparentes Chávez, y la alianza de fuerzas conocida como el *Polo Patriótico*, alcanzó el predominio político para gobernar según su proyecto ofrecido en campaña electoral. Se cristalizó entonces la hegemonía del proyecto político llamado bolivariano. Estos mismos actores y su proyecto fueron ratificados por la sociedad venezolana en el referendo constitucional de 1999 y en elecciones de 2000. Chávez y su alianza política representan principal, aunque no exclusivamente, los intereses de los pobres y empobrecidos del proceso sociopolítico venezolano que aspiran inclusión y justicia social. El proyecto bolivariano promete la refundación de la república, el desplazamiento de la vieja élite política, la permanencia de un Estado regulador de diversos aspectos de la vida económica y social, la propiedad estatal del petróleo y la universalidad de los derechos sociales entre sus aspectos más centrales. Sus adversarios, con distintos matices e ideologías que se orientan principalmente por la doctrina del liberalismo, han recibido el respaldo mayoritario de los sectores medios y altos de la población. Ellos expresan el otro polo social, por el momento no hegemónico.

Si bien la polarización política actual tiene estas bases sociales reales y duras que nunca debemos perder de vista por los poderosos intereses que tras ellos se alinean, hay sin embargo, factores adicionales que a mi modo de ver han llevado la confrontación legítima a un antagonismo extremo que ha puesto en peligro la posibilidad de una superación democrática de la confrontación. Por una parte, desde que asumiera el poder, pero de manera más aguda desde los últimos meses de 2001, el gobierno de Chávez alteró reglas de la convivencia social venezolana, en el sentido que le da Moore al término: aprobó leyes medulares a su proyecto político sin someterlas al necesario debate democrático; hizo uso de símbolos de fuerza y amenazas para amenazar a la oposición cuando ésta ejercía su derecho a la protesta, aunque es indispensable reconocer que en los tres primeros años de gobierno de Chávez la represión del Estado a estas movilizaciones fue notoriamente menor a la de gobiernos previos (López Maya 2003c). El presidente recurrió permanentemente, hasta el golpe de abril, a un discurso pugnaz, discriminatorio y ofensivo, descalificando a sus opositores y exponiéndolos al escarnio público; el oficialismo buscó penetrar organizaciones sindicales como la CTV para cooptarlas o ahogar-

las, incumpliendo su obligación de producir seguridad y protección, de mantener la paz social (Ellner 2003).

Muchos de los actores sociales y políticos de la oposición se unificaron en la Coordinadora Democrática y se radicalizaron ante esta conducta gubernamental, convocando a la insurrección del 11 de abril aduciendo que era legítima por las violaciones a la convivencia social realizadas por el gobierno y la alianza de fuerzas que lo respaldan. Estos sectores, en medio de su resentimiento, respaldados por medios de comunicación, también polarizados y radicalizados, por encuestas de opinión, la mayoría de las cuales también están polarizadas del lado de la oposición, identificaron su rechazo al gobierno y su proyecto político con un supuesto rechazo que tendría toda la sociedad venezolana. Desde su posición, se trataba de una insurrección “popular” mayoritaria, por no decir unánime. Según estos grupos el gobierno no tenía ya piso político. Pero, como se hizo patente el 13 de abril y luego a lo largo del resto del año y durante el paro petrolero, esto era un craso error de diagnóstico.

4. Flaquezas y errores de la oposición

En la capacidad que demostró el gobierno para sobreponerse a dificultades de la magnitud de las que le presentaron las fuerzas de la oposición en 2002 y parte de 2003 debe considerarse, entre otros, sus destrezas políticas, su legitimidad y el coraje que en los momentos más difíciles demostraron muchos de sus líderes. Sin embargo, en este ensayo no nos ocuparemos de desarrollar estos aspectos, sino de poner de relieve las flaquezas manifiestas en la estrategia de las fuerzas opositoras para forzar la salida del presidente. Sostendremos que en el fracaso del golpe de Estado y del paro petrolero jugó un papel primordial lo arriba señalado, un diagnóstico errado de la situación del país, de las fuerzas y recursos que sostienen al gobierno y de la propia fuerza que se tenía.

4.1 Falla el diagnóstico de la oposición el 11 de abril

Como ya se ha señalado, las fuerzas que conforman la oposición se trazaron a partir del paro cívico de diciembre de 2001 una estrategia política radicalizada de naturaleza insurreccional. No hubo por parte de ellos después de diciembre de 2001 y hasta el golpe de Estado del

11 de abril la disposición para conversar y negociar políticamente con el gobierno. La lectura política que se hizo del paro cívico –que había sido un éxito total– trajo en las fuerzas opositoras una percepción de fortaleza y conllevó a una actitud cerrada al diálogo, centrada en la exigencia de derogatoria de todas las leyes sancionadas por el Ejecutivo a través de la Ley Habilitante. Asimismo, convenció de las bondades de utilizar una permanente movilización de calle como herramienta para precipitar una salida política rápida que les fuera favorable.

Este estado de cosas, combinado con los sentimientos de indignación moral e injusticia que señalamos en el acápite segundo, llevaron a la oposición a buscar una salida insurreccional. Tanto quienes estaban comprometidos en la conspiración cívico-militar –y venían planificando el golpe de Estado desde hacía meses– como las organizaciones sociales que no formaban parte de ella –pero se movilizaron en la marcha que se desvió de PDVSA-Chuao al Palacio de Miraflores– estaban convencidas de que una salida de fuerza era legítima y les sería favorable. Sin embargo, ese cálculo falló pues el presidente fue repuesto en su cargo apenas 48 horas después gracias a una masiva movilización popular y un contragolpe militar que reflejó un apoyo significativo de Chávez en el pueblo y entre la Fuerza Armada. En este sentido, falló el diagnóstico que argumentaba que el gobierno carecía de apoyos sociales importantes pues los tenía y muy sólidos en los sectores populares y la Fuerza Armada. Una vez hecho esto evidente, sorprende que las fuerzas de oposición persistieran ocho meses después en una salida insurreccional, ¿por qué de nuevo el cálculo favorable a una salida de este tipo?

4.2 Más errores de diagnóstico durante la huelga general

En este segundo fracaso de la oposición persisten un conjunto de estimaciones equivocadas sobre la situación política del país. Se añaden además algunos nuevos ingredientes. Destaquemos éstas en primer lugar:

Las fuerzas de oposición no evaluaron con acierto la capacidad de resistencia económica del Estado venezolano. Este Estado es un Estado petrolero y el gobierno es el legítimo administrador de sus finanzas. Esto significa que disponía de una capacidad de resistir en términos económicos bastante apreciable, aspecto que la dirigencia de la

oposición no evaluó en su justa dimensión. Un análisis que contrastara entre sí las consecuencias económicas para el gobierno y para los diversos sectores sociales de la oposición, a lo largo de un paro insurreccional que podía prolongarse en el tiempo, hubiera puesto de relieve algunas de las fortalezas con que contaba el gobierno para resistir con ventaja sobre sus adversarios privados. El gobierno venezolano dispone no sólo de sus reservas internacionales, tiene el Fondo de Estabilización Macroeconómico para situaciones de contingencia, y ambos estaban holgados de recursos para cuando se produjo la huelga de diciembre. Además, el Estado si bien contaba con un flujo de caja disminuido, mantenía un cierto flujo. En contraste, los sectores de oposición si bien tenían recursos económicos poderosos también, habían parado sus comercios y sus industrias; se estaban comiendo sus ahorros y además cada día que pasaba en paro general significaba la quiebra de pequeños empresarios y comerciantes, con lo cual debilitaban sus bases de apoyo. Las escasas previsiones de la dirigencia opositora, que creía que al paralizar la industria petrolera por una, o a lo sumo por dos semanas, provocaría una catástrofe económica al gobierno que lo forzaría a renunciar, si bien podía ser un escenario probable, a todas luces no era el único. ¿Y si el paro pasaba las dos semanas? ¿Quién tenía más capacidad de resistencia, el gobierno o la oposición? Aparentemente nadie entre el liderazgo se hizo seriamente esa pregunta crucial.

En segundo término, tampoco midieron las consecuencias políticas del paro general y petrolero en ciertos sectores e instituciones nacionales, de manera muy importante en la Fuerza Armada. Esto es aún más sorprendente si se toma en cuenta el comportamiento de la institución en abril y la reorganización que desde entonces el presidente hizo entre los oficiales de alto rango. Un ataque insurreccional contra el gobierno, que se centrara fundamentalmente en las finanzas del Estado, como era el caso, acabó cohesionando más que antes a la institución militar en torno a Chávez. Porque el paro petrolero de tener éxito iba a mermar significativamente las bases económicas del Estado nación con lo cual pondría en lo inmediato en peligro su capacidad de soberanía. La FFAA, como garante de la soberanía nacional no tenía que pronunciarse a favor del gobierno de Chávez en esta aguda contienda. Le bastaba con tomar la posición institucional de defender la soberanía nacional, cosa que hizo diligentemente una vez que el

gobierno le ordenó tomar las instalaciones petroleras para defenderlas contra las fuerzas de la oposición que las ponían en riesgo de daños o destrucción.

En tercer término, una insurrección al margen de la Constitución y las leyes, tampoco puede ser recibida con beneplácito por Estados nacionales del mundo, que si lo aplauden hoy, mañana les puede pasar lo mismo, que se les subleve una transnacional ubicada en su territorio. Tampoco organizaciones y agencias internacionales podían ver esta acción con buenos ojos, porque el gobierno de Chávez es legal y legítimo. Ya la posición de los países de la OEA en abril demostró lo complejo que es conseguir el reconocimiento internacional cuando se usan vías insurreccionales como éstas de la oposición. Los EE. UU. por otra parte, después de sus torpezas de abril y con el conflicto iraquí encima, se movían con más cuidado en su relación con el gobierno de Venezuela. La oposición debió evaluar las pocas simpatías y apoyos internacionales que una acción como ésta podía tener. Pero también las desestimó.

En cuarto lugar, el liderazgo de oposición no pareció evaluar la posibilidad de que el presidente Chávez no renunciara. No parece haber sopesado el grado de compromiso del gobierno con la reforma petrolera que venía adelantando desde que ganara la primera vez en 1999. Si bien es cierto que el gobierno se orientó después del golpe del 11 de abril por una estrategia de rectificación y reconciliación con la gerencia de la industria petrolera, no había dado ninguna señal que permitiese pensar que bajo presión estaría dispuesto a sacrificar o negociar su reforma petrolera. Al contrario, el presidente nombrado en PDVSA, Alí Rodríguez, es responsable y autor principal de la ley de Hidrocarburos de 2001. El compromiso de Chávez, de su gabinete y de sus aliados políticos con esa reforma se hizo más fuerte después de abril por la difusión de todo tipo de información sobre lo que Venezuela se jugaba como país petrolero de caer Chávez. El comportamiento del gobierno de EE. UU. en el golpe de abril y sus vínculos con el capital petrolero internacional también ayudaron a esa mayor conciencia. De manera que la oposición debió evaluar la cerrada resistencia que presentaría el gobierno ante la amenaza a una de las políticas medulares de su proyecto político. Sin embargo, no lo hizo.

Finalmente, una de las fallas más importantes, es la reiterada incapacidad que ha demostrado el liderazgo de la oposición para reconocer

y tratar de comprender el poderoso respaldo que el presidente Chávez tiene en los sectores populares. Así como Chávez fue devuelto al poder el 13 de abril por impresionantes manifestaciones civiles que impulsaron y acompañaron a los sectores militares que desconocieron el gobierno de facto de Carmona, en diciembre y enero, al llamado del gobierno y del presidente de PDVSA, también masivas movilizaciones rodearon las instalaciones de la industria y los centros de distribución interna de gasolina y gas para presionar a la gerencia a levantar la paralización de la industria. Entre las numerosas otras iniciativas que se dieron entre las bases que apoyan al gobierno para hacer fracasar la huelga destacaron, por ejemplo, los cientos de miles de firmas que se recogieron entre enero y febrero para apoyar un recurso de amparo introducido en el Tribunal Supremo de Justicia para obligar a los gerentes de PDVSA a reactivar la industria. Otro ejemplo, cuando la empresa de PDVSA, PDV Gas, cerró el gasoducto del oriente del país y obligó a paralizar a las industrias básicas ubicadas en la zona de Guayana: del acero, aluminio, hierro, bauxita, etc. los sindicatos de esas industrias, que se habían opuesto a la huelga general de la CD se movilizaron en masa hasta otra entidad federal, el estado Anzoátegui, para protestar y obligar a la gerencia a abrir las llaves del gasoducto y proveer el gas. Eso lo hicieron 2 veces en diciembre, con lo que evitaron que otro centro estratégico de la economía venezolana se paralizara. Y cómo no resaltar la continua y obediente respuesta de los sectores populares a los llamados del gobierno a tener paciencia, a ir por las vías democráticas, a no usar la violencia pero a estar permanentemente movilizadas. Entre enero y febrero, pese a las significativas penurias materiales y espirituales que el paro estaba acarreando a la población más pobre del país, ésta se mantuvo movilizada con mínimos grados de agresión y violencia. Esta significativa expresión de apoyo nunca ha sido debidamente apreciada por las fuerzas de oposición.

5. Como conclusión: los desafíos de la oposición

Para fines de 2003 la crisis política venezolana seguía sin resolverse y las fuerzas que buscan salidas violentas, si bien debilitadas seguían presentes en el escenario sociopolítico. Si bien la institución electoral fue reconstituida mediante un proceso apegado al Estado de derecho, lo que ha abierto un importantísimo espacio institucional que facilita

el arbitraje político en condiciones democráticas, todavía distintas instituciones de los poderes públicos, como las instancias administradoras de la justicia, los cuerpos de seguridad del Estado, el Poder Ciudadano (Fiscalía, Defensoría del Pueblo y Contraloría) se encuentran fuertemente averiadas por la politización y polarización que las han penetrado y las aventuras autoritarias que vivió la sociedad en el 2002. Con el paro petrolero, además, las finanzas del Estado quedaron severamente golpeadas y sólo una acción inteligente y sostenida en el tiempo por parte del gobierno podría recuperarlas en un lapso prudencial.

Desde las fuerzas de la oposición, el fracaso de las insurrecciones pasadas ha llevado a un más visible, y mayor debilitamiento y fragmentación de las fuerzas reunidas en la CD. Si bien esto no es nuevo, las fuerzas de la oposición constituyen un abigarrado y muy diverso abanico de fuerzas sociales y políticas con intereses muy disímiles e ideologías que van de la extrema derecha a la izquierda pasando por todos los matices, lo novedoso es que ciertas organizaciones políticas y sociales han logrado hacer prevalecer la estrategia del referendo revocatorio como la nueva vía para buscar la salida del presidente. La patronal Fedecámaras, la sindical CTV, los medios privados de comunicación, las organizaciones de clase media lideradas por el dirigente vecinal Elías Santana y la organización de la gerencia petrolera, Gente del Petróleo, principales responsables de la estrategia insurreccional del año pasado, han aceptado aparentemente esta estrategia del referendo revocatorio, al menos en el discurso, y junto con ésta, parecen haberle dado más espacios a los partidos políticos de oposición para que alcancen un rol de mayor peso en la CD.

El referendo revocatorio es un derecho constitucional. El artículo 72 que lo consagra estipula su realización cumpliendo los siguientes requisitos:

- a) debe haberse cumplido la mitad del mandato de la autoridad;
- b) a solicitud debe estar respaldada como mínimo por un 20% de firmas de los electores inscritos en el Registro Electoral Permanente (REP);
- c) cuando se haga el escrutinio, el número de electores que se pronuncian a favor de revocar el mandato debe ser superior al número de votantes que eligieron a la autoridad en cuestión;

- d) deben votar por lo menos el 25% de los electores inscritos en el REP; y e) sólo puede hacerse una vez.

Según estas disposiciones, para activar este derecho las fuerzas opositoras deben entregar al CNE más de 2.400.000 firmas de electores inscritos en el REP y para revocar el mandato deben obtenerse más de 3.757.773 votos, pues Chávez ganó con ese número de votos en el 2000. Ambas son cifras altas en términos de electores registrados, lo que implica que la oposición se enfrenta a un desafío político respetable. Necesitará hacer un esfuerzo sostenido y coherente para alcanzar ambas cifras en medio de una situación en la cual está debilitada y dividida. Sin embargo, con poderosos medios de comunicación, diversas organizaciones sociales y políticas a su favor, y un respaldo de importantes sectores de ingresos medios y altos, la meta del revocatorio parece posible. No obstante, siguen despertando serias dudas otros problemas de mayor profundidad que constituyen los desafíos que enfrenta la oposición con los que termino esta ponencia.

Entre los grupos de la oposición se evidencia una crónica ambigüedad de propósitos. En los actuales momentos, por ejemplo, y pese al reiterado discurso a su favor, el entusiasmo por el referendo no es un sentimiento unánimemente compartido. Algunos hasta han llegado a decir que preferirían esperar a las elecciones de 2006. Las encuestas que registran un mayoritario apoyo al revocatorio no son muy confiables por la polarización que las afecta. Por otra parte, la forma en que se manejaron para cumplir con los requisitos constitucionales del revocatorio fue un buen ejemplo de la ineficiencia que produce esta ambigüedad que los expone a un nuevo fracaso y se presta para justificables desconfianzas por parte de las fuerzas del gobierno. Hubo desavenencias en torno al asunto de las firmas a recolectar. Algunas organizaciones sostuvieron que las firmas ya recogidas el pasado febrero en un evento conocido como “el firmazo” eran válidas y sólo debían llevarse al CNE el 20 de agosto para iniciar el proceso. Otros —entre ellos dirigentes de los partidos AD y Primero Justicia, así como abogados constitucionalistas opositores— advirtieron que la pregunta formulada en febrero tenía visos de inconstitucionalidad y que por éste y otros motivos, se iban con seguridad a desencadenar tensiones, apelaciones, complicaciones que arriesgarían a que dichas firmas fueran declaradas ilegales al ser revisadas por un nuevo CNE o la Sala Elec-

toral del TSJ. Si esto ocurriera, habría que recogerlas de nuevo y se habría perdido un tiempo valioso para iniciar el proceso revocatorio, pudiéndose incluso perder sentido el hacerlo, pues la Constitución también estipula que pasados los 4 años de mandato, si se da la falta absoluta del presidente, lo reemplazará por el período faltante el vicepresidente, una autoridad directamente designada por él. ¿Cuál hubiera sido el sentido de sacar a Chávez después del 20 de agosto del 2004, si quien quedará por el período faltante será su vicepresidente? La decisión final que tomó la CD de entregarlas, hace pensar que siguen teniendo mucho poder en el seno de la oposición actores que sólo buscan mantener y/o acentuar situaciones de turbulencia política y polarización para repetir una salida insurreccional.

La ambigüedad de propósitos está estrechamente relacionada con los conflictos que surgen de las disímiles características de las organizaciones que conviven en la CD y sobre todo con la calidad y vocación democrática de aquéllas que han ejercido en distintos momentos del año pasado el liderazgo político. De manera muy obvia, antes que los partidos políticos, han jugado un papel protagónico organizaciones sociales y medios de comunicación que se fueron fortaleciendo en Venezuela en los últimos 20 años como resultado del rechazo a la política, a los políticos y a los partidos. Gracias a la hegemonía del pensamiento neoliberal, y el pobre desempeño de los partidos políticos de modelo de Punto Fijo, este rechazo se convirtió en una especie de sentido común de los venezolanos en los años 80 y 90.

Fedecámaras, la CTV, los medios de comunicación privados, la ex gerencia mayor de PDVSA reunida en Gente de Petróleo y Unipetrol, las diversas organizaciones vecinales de clase media que se autodenominan “sociedad civil” pasaron en este período —y algunos desde antes— a llenar el vacío de representación y mediaciones dejado por el colapso del sistema de partidos tradicional venezolano. Pero, sin duda, carecen de atributos para hacerlo. Estas organizaciones de carácter corporativo y/o social, e inclusive algunos partidos emergentes como Primero Justicia, o tradicionales como COPEI, tienen un discurso democrático que se agota rápidamente, como en efecto lo corroboramos en su respaldo inicial al golpe de Estado y al paro insurreccional de diciembre. Salvo la CTV, estas son organizaciones conceptualmente concebidas para ejercer una ciudadanía que se relaciona, en la mejor tradición liberal conservadora, con derechos de propiedad y no con la

solidaridad social (Lander 1995: 135). Son organizaciones que parten de la defensa y preservación de derechos de los que ya tienen y no para la inclusión de los que no tienen lo que explica que les resulta irrelevante, amenazador o incluso inexistente, las organizaciones populares cuya concepción de ciudadanía no puede sino ser distinta, porque en ellas se trata de luchar por el cambio. Políticamente hablando, los sectores populares sólo pueden ser vistos por estos actores, cuando los ven, no como ciudadanos sino como amenazas a su propiedad y a su seguridad. De allí el frecuente uso de calificativos despectivos como hordas, turbas, etc. para referirse a ellos y las estrategias no democráticas, como la implementación de “planes de contingencia” en algunas urbanizaciones o el plan de defensa activa organizado por la CD como respuesta a un evento organizado por el oficialismo el 23 de enero de 2003 (García-Guadilla 2003). En estas ocasiones, los vecinos de las urbanizaciones de clase media se organizaron para defenderse –incluso con armas– de las “hordas chavistas y los círculos bolivarianos que invadirían sus casas” según rumores propagados insistentemente, entre otros por los militares sublevados en la plaza Altamira.

Este no es el caso de la CTV procedente de otros orígenes doctrinarios y políticos. No obstante, su dirigencia, de dudosa legitimidad, pues el proceso eleccionario que los llevó a los máximos cargos de la Confederación estuvo lleno de vicios, se ha venido plegando a las concepciones de esta llamada “sociedad civil” y tuvo responsabilidad mayor en estas insurrecciones. En el caso de los partidos, como AD o MAS, con bases doctrinarias social demócratas, fundados para cumplir funciones propiamente políticas como negociar entre diversos intereses para alcanzar acuerdos, reconocer y representar la pluralidad de intereses de una sociedad, buscar mediar estos intereses en el Estado, o construir proyectos de sociedad para la convivencia en la diferencia, el pragmatismo y la mediocridad de su dirigencia actual, además de su poca credibilidad, les han impedido orientar y más bien, al igual que la CTV, se han dejado conducir por los intereses económicamente poderosos del momento.

El resultado de estas carencias es la inexistencia de parte de las fuerzas de oposición de una clara vocación democrática, lo que se expresa en reiteradas estrategias y tácticas políticas que manipulan el discurso institucional mientras algunos de sus grupos siguen intentan-

do salidas violentas. Adicionalmente, hasta la fecha, carecen de una alternativa de gobierno unitaria, que sea creíble y/o viable para sectores que vayan más allá de los que respaldan la actual polarización política. Tampoco existe un liderazgo medianamente reconocido por todos. El proceso revocatorio en los próximos meses, volverá a exacerbar la polarización política y la guerra mediática, con toda la violencia y dificultades económicas que esto nos ha acarreado el año pasado y que ha aminorado ligeramente en los meses intermedios del 2003. Muchos venezolanos nos preguntábamos si valía la pena volver a someternos a una confrontación de estas características cuando no estaba clara la oferta política alternativa que se ofrece y cuando el año 2004 fue un año de elecciones municipales y regionales que arrojaron una importante luz sobre la correlación de fuerzas que existía entre los grupos de la oposición, así como entre esas fuerzas y las del gobierno. Tales elecciones despejaron muchas interrogantes sobre los apoyos políticos de cada quien y sobre todo prepararon mejor a los ciudadanos para elegir en una contienda presidencial donde estaban las ofertas programáticas más claras.

Desafortunadamente, en la oposición siguen persistiendo las emociones, el inmediatez político, la mediocridad del liderazgo e intereses anti-democráticos en el trazado de sus estrategias políticas. Sin embargo, recientemente, se han visto algunas iniciativas interesantes, que apuntan a darle más visibilidad a las organizaciones políticas y a sus líderes, que se manejen mejor en un campo tan complejo y difícil como es este de la política. La presidente de Fedecámaras declaró en agosto de 2003 que la organización no era un partido político, de manera que no convocaría a la marcha de entrega de las firmas para el revocatorio ante el CNE. Igualmente, ese día, se dio la palabra durante el mitin de cierre a dirigentes de partidos que en otras oportunidades han tenido un papel muy secundario en estas actividades. Por otra parte, la elección de los rectores principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral por el Tribunal Supremo de Justicia, que recibió el reconocimiento por parte de las fuerzas del gobierno y de la oposición, es sin duda uno de los signos más positivos con que cierra el 2003. Son señales que indican que quizás los grupos de la oposición comienzan a procesar sus derrotas y rectificar sus conductas. De esta manera, podemos concluir esperando que esta tendencia se fortalezca para el bien de la democracia y de una sociedad que ha asumido los

altos costos que acarrea una conducción política tanto de gobierno como de oposición que han privilegiado demostraciones de fuerza, confrontaciones violentas por encima del ejercicio de la política.

Bibliografía

- Coronil, Fernando/Skurski, Julie (1991): "Dismembering and Remembering the Nation: The Semantics of Political Violence in Venezuela". En: *Comparative Studies in Society and History*, vol. 33, no. 2, abril, pp. 288-335.
- Ellner, Steve (2003): "Tendencias recientes en el movimiento laboral venezolano: autonomía versus control político". En: *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, vol. 9, no. 3, pp. 159-180.
- García-Guadilla, María Pilar (2003): "Politización y polarización de la sociedad civil venezolana: las dos caras frente a la democracia". Ponencia presentada en el XXIV Congreso Internacional de LASA. Dallas, Texas, 27 al 29 de marzo.
- Laclau, Ernesto (1985): "Tesis acerca de la forma hegemónica de la política". En: Labastida Martín del Campo, Julio: *Hegemonía y alternativas políticas en América Latina*. México, D.F.: Siglo XXI.
- Lander, Edgardo (1995): *Neoliberalismo, sociedad civil y democracia. Ensayos sobre América Latina y Venezuela*. Caracas: Ediciones de la UCV.
- Lander, Luis E. (ed.) (2003): *Poder y petróleo en Venezuela*. Caracas: Ediciones Faces (UCV)/PDVSA.
- López Maya, Margarita (2002a): "El paro cívico del 10 de diciembre". En: *Nueva Sociedad*, no. 177, enero-febrero, pp. 8-12.
- (2002b): "El golpe de Estado del 11 de abril en Venezuela y sus causas". En: *Sociedad y Economía*, no. 3, octubre, pp. 7-18.
- (2003a): "Venezuela: recuento de una semana fatídica para la democracia". En: *Observatorio Social de América Latina*, no. 7, junio de 2002, pp. 23-26.
- (2003b): "Venezuela después del golpe: una segunda insurgencia". En: Medina, Medófilo/López Maya, Margarita: *Venezuela: confrontación social y polarización política*. Bogotá: Ediciones Aurora.
- (2003c): "Movilización, institucionalidad y legitimidad". En: *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, vol. 9, no. 1, pp. 211-228.
- Moore, Barrington (1978): *Injustice. The Social Bases of Obedience and Revolt*. Stanford: Ray Freiman & Company.

Steve Ellner

La transformación del movimiento sindical y la sociedad civil en Venezuela: ¿revolución o paralelismo?

Desde los comienzos del movimiento laboral venezolano en 1936, los partidos políticos han ejercido una influencia importante en los sindicatos. Algunos historiadores argumentan que la experiencia venezolana a este respecto es distinta de aquella de otros países (como Inglaterra en el caso del *Labor Party*), donde la organización de los primeros sindicatos es anterior a la fundación de partidos políticos modernos, es decir, de masas. Aparentemente, en Venezuela, la secuencia fue al revés. Según este punto de vista, la sociedad civil (incluyendo a los sindicatos), como también los “lazos sociales tradicionales”, se encontraban prácticamente ausentes al comienzo del período moderno en 1936, dejando un vacío que sería llenado por los partidos políticos emergentes (Levine 1978: 85-86; Coppedge 1994: 31). Sin embargo, el hecho es que en Venezuela la fundación de las primeras organizaciones laborales relativamente estables coincidió con la fundación de los primeros partidos políticos modernos en 1936, después de la muerte de Juan Vicente Gómez. Recientemente, varios estudiosos han vuelto a examinar el año 1936, demostrando la efervescencia del movimiento popular y el grado de autonomía de su actuación (Battaglini 1993).

Algunos analistas políticos argumentan que, a partir de 1936, el movimiento laboral se ha caracterizado por una relación de sumisión frente a los partidos y al Estado (Salamanca 1995: 199-200; 1998). Dirigentes del partido Causa R (antes de cambiar de línea a mediados de los años 90) defendieron vehementemente esta interpretación. Sin embargo, en varias situaciones históricas claves los dirigentes sindicales divergieron de las posiciones de los líderes de su partido político respectivo. Por ejemplo, los dirigentes de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) eran partidarios de llamar a una huelga general en vísperas del golpe que derrocó al presidente Rómulo Galle-

gos en 1948, propuesta vetada por la dirigencia política (Ellner 1980: 140). En 1958-1959, los dirigentes de la CTV defendían una política de unidad entre los partidos y proponían un candidato de consenso para las elecciones presidenciales de 1958 con el propósito de enfrentar a las fuerzas “pérezjimenistas”. Este planteamiento también suscitó una reacción negativa entre la dirigencia partidista (Ellner 1995: 37-38).

Esta discusión histórica sobre la relación entre el movimiento laboral y los partidos políticos no es ajena al debate actual sobre estrategias laborales. A partir de la elección de Hugo Chávez en 1998, la política venezolana ha estado marcadamente polarizada, tendencia reforzada por los medios de comunicación que se han puesto en casi su totalidad a la disposición de las fuerzas políticas de la oposición. En su cobertura del movimiento laboral organizado, los medios han hecho hincapié en la postura vehementemente anti-gobierno de la cúpula de la CTV y, en particular, de su presidente, Carlos Ortega. Así, han estimulado las posturas políticas de los dirigentes laborales, mientras que soslayan, o simplemente ignoran, las reivindicaciones y otros planteamientos concretos de los trabajadores. En el seno de la CTV, sin embargo, muchos sindicalistas han expresado una preocupación considerable por la manera en que el movimiento laboral viene siendo utilizado por intereses políticos y por el acercamiento con organizaciones que no comparten los objetivos de los trabajadores o, como en el caso de Fedecámaras, tienen intereses diametralmente opuestos.

El problema tampoco se aborda de una manera monolítica entre los chavistas. Lo más importante es que los líderes que se han opuesto a las huelgas promovidas por la CTV entre 2001 y 2003 y que se manifiestan receptivos frente a la propuesta de una confederación obrera alternativa, no están menos dispuestos a expresar sus reservas frente a la posibilidad de que se esté promoviendo una organización oficialista que estaría bajo las órdenes del Estado. En consecuencia, Chávez puede movilizar apoyo a una política de repudio a los dirigentes tradicionales de la CTV, sobre todo entre los sectores populares; sin embargo, no puede evitar que quede la sospecha de que se está trabajando en función de la creación de un sindicalismo de corte oficialista.

En este artículo, proponemos analizar el problema de la autonomía del movimiento laboral, abordándolo desde diversos ángulos. En pri-

mer lugar, examinaremos las tendencias, tanto dentro de la CTV como entre los sindicalistas chavistas, que abogan por una política autónoma para los trabajadores organizados. También se analizarán las posiciones de aquellos dirigentes independientes que hayan mostrado que no están dispuestos a tomar partido en el enfrentamiento político entre chavistas y anti-chavistas. En segundo lugar, examinaremos problemas específicos, como las prestaciones sociales y el sistema de seguridad social, con el propósito de establecer una distinción entre los intereses y los puntos de vista de la clase obrera y de los partidos respectivamente. Al formular posturas frente a estos problemas, los tres sectores mencionados enfrentan problemas y corren riesgos. Si la CTV deja de enfatizar suficientemente los objetivos propiamente laborales, pierde su razón de ser y se confunde con el llamado monótono y repetitivo para que “se vaya Chávez”, con la que puede ser percibida como un aliado fijo de Fedecámaras. De la misma manera, si los sindicalistas chavistas hacen hincapié en los objetivos políticos por encima de los reclamos propiamente laborales, la nueva federación provocará un rechazo entre los trabajadores, precisamente por una ausencia de autonomía frente al Estado, elemento imprescindible para que prospere cualquier movimiento laboral. Por último, los independientes necesitan aclarar sus objetivos en torno a problemas laborales porque, si no, se desdibuja su identidad o, peor, terminan absorbidos por uno u otro de los bandos en conflicto.

1. La CTV y la pérdida de autonomía en los años noventa

Frente a los inicios del programa neoliberal del presidente Carlos Andrés Pérez (CAP) y el Caracazo de febrero de 1989, la CTV llamó a una huelga general de 24 horas para el 18 de mayo. Durante el resto de la administración de CAP, dirigentes laborales acompañaron a congresistas de Acción Democrática y otros partidos en esfuerzos para obstaculizar, y demorar la implementación de una legislación de inspiración neoliberal. Aquellos miembros del gabinete partidarios del neoliberalismo culparon a los políticos y dirigentes laborales de AD (Acción Democrática) de haber traicionado al presidente, sabotando su programa de reformas y preparando el terreno para su caída (Naím 1993: 47-49). No obstante, la oposición de la CTV a Pérez era relativa porque, aparte de la huelga del 18 de mayo de 1989 y algunas protes-

tas de calle organizadas en febrero de 1990, la organización sindical no se esforzó por movilizar a sus bases para oponerse al programa económico del gobierno.

Con la llegada de Rafael Caldera a la presidencia, el comportamiento de los dirigentes de AD cambió y, de hecho, formaron una alianza no-oficial con el gobierno, a cambio de un compromiso de garantizar la estabilidad de sus militantes en sus puestos en la administración pública. Hay quienes consideran la “Agenda Venezuela” de Caldera menos neoliberal que el “paquete económico” introducido por CAP. En todo caso, Caldera evitó aquel “tratamiento de *shock*” de Pérez, quien sorprendió al país con el anuncio de su programa económico a sólo días de haber asumido el gobierno. Caldera esperó hasta que el público se encontrara más dispuesto a aceptar un cambio radical de política, ablandado a consecuencia del estancamiento económico de sus dos primeros años de gobierno.

El abandono, por parte de los dirigentes de la CTV, de aquellas posturas independientes y críticas que habían mostrado frente a CAP, se hizo particularmente evidente frente a las reformas que afectaban a las prestaciones sociales y al sistema de seguridad social. A diferencia de los dirigentes del movimiento obrero en otros países, quienes protestaron en contra de las amenazas a estas conquistas tradicionales, llegando a veces hasta a dividirse en torno a las disputas sobre cómo enfrentarlas, los dirigentes de la CTV terminaron apoyando las medidas propuestas, mansamente y por unanimidad. Tomando en cuenta la importancia de estas reformas, y cómo la reacción de la CTV a ellas explica su pérdida de prestigio, hace falta examinar en más detalle la posición de la dirigencia cetevista frente a las dos medidas.

Caldera intentó generar un apoyo amplio para sus políticas neoliberales con la creación de una Comisión Tripartita, con el fin de redactar la propuesta legislativa para reformar los sistemas de seguridad social y de prestaciones sociales. Cuando, durante la discusión sobre una reforma de la Ley del Trabajo en 1990, Fedecámaras y el gobierno de Pérez habían propuesto la eliminación de la “retroactividad”, la CTV se había negado a discutir el asunto. Durante los primeros años de los noventa, la CTV mantuvo esta postura, aunque ya los dirigentes de los partidos más importantes, incluyendo a AD, COPEI y el MAS (Movimiento al Socialismo), expresaban su apoyo a la reforma. En su 11º Congreso, celebrado en 1995, la CTV ratificó su posi-

ción, pero ya en enero del año siguiente llegó a un acuerdo tentativo con Fedecámaras en el marco de la Tripartita para eliminarla.

La CTV fijó tres condiciones para que se abandonara la retroactividad: una cláusula sobre el costo de la vida; el derecho del trabajador de elegir entre el viejo y el nuevo sistema de pago por despido; y, finalmente, la implementación de un sistema de seguridad social efectivo para reemplazar el existente, cuya prestación de servicio había deteriorado seriamente. No obstante, el acuerdo final de la Comisión Tripartita, presentado al país por televisión en una ceremonia encabezada por el presidente Caldera, no incorporó ninguna de estas tres exigencias. Dirigentes de la CTV expresaron su satisfacción por las promesas de dirigentes empresariales de que la eliminación de la retroactividad llevaría a salarios más altos y a una disminución del desempleo, pero ninguna de las dos cosas se cumplieron. El acuerdo de la Comisión Tripartita sí incorporó una exigencia importante de la CTV: la creación de un “fondo de solidaridad” para que los trabajadores peor pagados pudieran recibir más que el mínimo establecido por ley. Sin embargo, el Congreso vació esta previsión de todo sentido, ya que la ley de seguridad social aprobada bajo Caldera asignó solamente 1% del salario del trabajador al fondo solidario. La CTV avaló tanto la reforma de la Ley del Trabajo promulgada en junio de 1997, que eliminó la retroactividad, como la legislación que básicamente privatizó el sistema de seguridad social.

A partir de 1974, cuando el pago por despido se definió como un “derecho adquirido” (por el decreto-ley número 124), el sistema había funcionado como una especie de sistema de seguridad social, una función que se debilitó marcadamente con la reforma de 1997. Esta reforma neutralizó el objetivo central del sistema tal como venía funcionando, que era de proporcionar al trabajador despedido una cantidad apreciable de dinero para poder enfrentar períodos prolongados de carencia de empleo formal. El problema central era la eliminación de la retroactividad (que en Venezuela tenía mayor alcance que en cualquier otro país del continente), lo que había determinado que el pago por despido se calculaba sobre la base del último pago mensual, multiplicado por los años de servicio. En efecto, calcularlo de esta manera compensa al trabajador por la pérdida de poder adquisitivo de sus prestaciones sociales debido a la inflación. La reforma de 1997, en cambio, calculaba el pago sobre la base del salario recibido durante

cada mes del empleo y su cálculo reflejaba los estragos que significaba la inflación para el poder de compra de los asalariados. Después de la reforma, muchos empleadores empezaron a pagar las obligaciones legales por este concepto al terminar cada año, en lugar de esperar que el empleado dejara el trabajo (una práctica anteriormente limitada a empresas pequeñas no sindicalizadas). Los trabajadores, ansiosos por recibir un pago que complementara sus salarios y con el temor de que la inflación pudiera comer los montos acumulados para el pago de despido, aceptaron la práctica sin objeciones. En aquellos casos en que la compañía guardara los montos obligados para un eventual despido, la reforma de 1997 otorgó al empleado el derecho de retirar hasta un 75% para ciertas contingencias. En la práctica, se autorizaba a los empleados aprovechar estos retiros como un recurso normal y hasta regular, de manera que, al terminar su relación laboral con la empresa, no quedaba casi nada. De esta manera, al eliminar la retroactividad, la reforma desvirtuó el objetivo central del sistema vigente y lo sustituyó por lo que equivale a un bono anual.

La CTV recibió críticas muy duras por su participación en la formulación de la reforma de 1997, sobre todo porque se trataba de un sistema de retroactividad que había estado vigente desde el año 1936. La CTV había estado acompañada en las negociaciones por las otras centrales menores, las de inspiración socialcristiana, la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Confederación de Sindicatos Autónomos de Venezuela (CODESA), y la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV) (dominada por el Partido Comunista). Ésta última fue la única que se negó a firmar el acuerdo final. Mientras tanto, Chávez, que recién empezaba su campaña electoral, se sumó al coro de quienes criticaban la reforma. PROVEA (Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos), la organización de defensa de los derechos humanos, apoyó un intento de anular la reforma por violar el carácter inviolable de los derechos adquiridos de los trabajadores (plasmado en el Artículo 3 de la Ley del Trabajo).

El sistema de seguridad social privatizado que introdujo Caldera favorecía a aquellos trabajadores que ganaban sustancialmente más que el salario mínimo. Según la nueva ley, todos los trabajadores tendrían que depositar un porcentaje de su salario en un “fondo de pensiones individual” registrado a su nombre, como también en un “fondo

solidario” que beneficiaría a todos aquellos cuya pensión no alcanzara el mínimo establecido. Sin embargo, a diferencia de los “sistemas mixtos” de otros países como Uruguay, los trabajadores de bajos salarios no podrían recibir ingresos de ambos fondos simultáneamente, de manera que recibirían el simple mínimo establecido por la ley. La “solidaridad” también se encontraba limitada por el hecho de que los trabajadores de la economía informal (incluyendo a aquellos con ingresos mayores) tenían pocos incentivos para incorporarse al sistema.

Al aceptar el nuevo sistema, la CTV también abandonó otra posición defendida hasta ese momento: la reestructuración del Instituto Venezolano de Seguro Social (IVSS) en lugar de su eliminación. Muchos pensionados (incluyendo uno de sus dirigentes, Edgar Silva) culparon a la CTV porque sus representantes en la junta directiva del IVSS no lograron impedir el deterioro de la institución durante las décadas anteriores. Según Silva, la CTV compartía la responsabilidad de una política (aplicada durante los años anteriores) que, en forma irresponsable, había juntado los presupuestos de los distintos subsistemas de la seguridad social para prestar dinero sin suficientes garantías, hasta a instituciones afiliadas a la CTV (Silva, entrevista personal, Caracas, 7 de mayo de 2003).

Uno de los argumentos principales esgrimidos por los neoliberales a favor de la reforma era, que ofrecía al trabajador “el derecho de elegir”. Esta postura evidentemente responde a la glorificación del individualismo típico del neoliberalismo. De hecho, el presidente Bush ha recurrido al mismo argumento para justificar su política de una privatización parcial del sistema de pensiones estadounidense, como también a favor de la introducción de un sistema de *vouchers* en las escuelas públicas, lo que apunta hacia una privatización del sistema educativo. En Venezuela y en América Latina en general, este mismo argumento ha sido utilizado para justificar la privatización de la seguridad social y del sistema de prestaciones sociales. No obstante, en el caso venezolano, este “derecho a elegir” es muy limitado. La reforma de 1997 contempla tres sistemas para guardar las prestaciones sociales de los trabajadores: Fideicomiso, un fondo de prestaciones sociales, o acreditarlas al trabajador en la contabilidad de la empresa. A pesar de que la Ley del Trabajo (en el Artículo 108) otorga al trabajador el derecho de elegir entre estas alternativas, en la práctica, muy pocos patronos, si hay alguno, consultan a sus trabajadores. Es más, bajo los

términos de la legislación introducida por Caldera sobre seguridad social, el derecho del trabajador de elegir entre planes de jubilación alternos, y sobre quienes los iban a administrar, también resultó ser muy limitado. En la práctica solamente tenía cierto sentido para los trabajadores mejor pagados, porque la gran mayoría con ingresos cercanos al salario mínimo no tienen la posibilidad de ingresar a su “fondo de capitalización individual” un monto suficiente para ejercer este derecho, tomando en cuenta que sus pensiones difícilmente superarían el mínimo fijado por la ley.

El hecho de que la legislación polémica sobre seguridad social y prestaciones sociales hubiera sido formulada conjuntamente por representantes de los trabajadores, los patronos y el Estado, desprestigió el sistema tripartito. Desde comienzos de los años setenta, las comisiones tripartitas habían jugado un papel central en el sistema neocorporativista venezolano (Salamanca 1998: 134-154). Estas comisiones redactaban la legislación, participaban en las decisiones sobre ajustes en el salario mínimo (tal como quedó establecido en la Ley del Trabajo de 1990) y ejercían una función casi-judicial en relación con ciertas materias laborales. El apoyo unánime que prestaron los dirigentes de la CTV a las reformas neoliberales contribuyó a desacreditar a la misma Confederación. Chávez, una vez en el poder, se negó a crear Comisiones Tripartitas (como establece la ley) y rechazó la “política de consenso” en general, con el argumento de que equivalía a un sistema de toma de decisiones por las elites.

2. El gobierno de Chávez y el debate sobre la autonomía sindical

Durante la campaña electoral de 1998, el discurso de Chávez se caracterizó por sus fervorosos ataques en contra de los partidos políticos y en contra de una dirigencia sindical desde hacía mucho tiempo estrechamente vinculada a AD y COPEI. Es más, Chávez y otros de su movimiento se referían a los dirigentes de la CTV como una “mafia sindical”. En consecuencia, las victorias aplastantes en la elección presidencial de 1998 y en la serie de elecciones de 1999 y 2000, colocaron a los dirigentes de la CTV a la defensiva. Esta nueva situación ofreció a los dirigentes sindicales chavistas de la Fuerza Bolivariana de Trabajadores (FBT) un abanico importante de oportunidades.

Durante los primeros tres años de gobierno, el movimiento chavista se debatía entre moderados y partidarios de una línea dura. Con la creciente agresividad de la oposición a partir de 2001 y las llamadas a derrocar a Chávez, se plantearon estrategias distintas. Los moderados proponían diálogo y concesiones, mientras que los de la línea dura tildaban de “conspiradores” a los opositores y favorecían una respuesta basada en sus propias movilizaciones. Al interior del movimiento laboral chavista, uno de los debates centrales era sobre la autonomía sindical, sobre la relación entre los trabajadores organizados y la sociedad política (el Estado y los partidos políticos). Una tendencia radical era partidaria de aprovechar la coyuntura favorable, con el control del Ejecutivo y de la Asamblea Nacional y el debilitamiento de su adversario, para asestar un golpe contundente a la “mafia sindical”. El dirigente comunista Pedro Eusse resumió este enfoque como “contar simultáneamente con apoyo político desde arriba y con los trabajadores desde abajo” (entrevista personal, 10 de julio de 2001). Esta estrategia soslayaba la autonomía sindical con vistas a promover objetivos de mayor alcance, como la transformación de aquellas estructuras sindicales que se consideraban responsables de fomentar la colaboración de clases y la corrupción. Entre las propuestas consideradas por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) entre 1999 y 2000 y por la Asamblea Nacional en el 2000 se encuentran procedimientos judiciales en contra de los dirigentes laborales corruptos, la confiscación de las propiedades de los sindicatos y la disolución de la CTV para posibilitar la creación de una “confederación laboral unificada”.

Al plantear una alternativa a la estructura de la CTV, la postura radical corría el riesgo de promover un sindicalismo paralelo. A la vez, descartaba completamente la tradición de políticas de consenso heredada de Punto Fijo. De hecho, los radicales rechazaban tajantemente ese consenso, que abarcaba a los dirigentes pro-*establishment* de los partidos políticos, de los trabajadores organizados y de las organizaciones empresariales, y la misma actitud se encontraba reflejada a menudo en los discursos y en las acciones del mismo Chávez. Por ejemplo, el gobierno de Chávez se negó a convocar las Comisiones Tripartitas (con representantes sindicales, empresariales y del Estado) y en su lugar promovía “mesas de diálogo” diseñadas para incorporar a las bases laborales a las discusiones sobre políticas y legislación.

Una tendencia “moderada” del chavismo expresaba su preocupación por las acusaciones de que el chavismo promovía un movimiento sindical “oficialista”, expresadas por actores tanto nacionales como internacionales (como la Organización Internacional de Trabajo-OIT). De hecho, la presión de la OIT explica por qué, hacia finales del año 2000, el gobierno engavetó la propuesta de una Ley de Garantías y Protección de las Libertades Sindicales diseñada para sacudir al movimiento laboral y, de repente, aceptó las “mesas de diálogo” con dirigentes de la CTV (coordinadas por el Ministerio del Trabajo), para discutir temas tales como la reforma de la seguridad social, el desempleo y la unificación del movimiento sindical. Después, los chavistas radicales se quejarían de que estas discusiones no habían estado a la altura de las expectativas y que los dirigentes de la CTV no habían cumplido con los acuerdos logrados sobre la unificación del movimiento laboral y la incorporación de la masa obrera a las elecciones sindicales.

Los chavistas “moderados” advirtieron de los peligros de un “sindicalismo paralelo” que, en los años sesenta, había condenado a los sindicalistas de izquierda a una situación de aislamiento frente al resto de la clase trabajadora. Argumentaron, además, que a nivel mundial, los izquierdistas habían generalmente llegado a la conclusión de que es preferible militar en sindicatos “mayoritarios” y no en sindicatos pequeños comprometidos abiertamente con “objetivos revolucionarios”.

Más allá de estas diferencias sobre estrategia laboral, radicales y moderados se enfrentaron sobre reformas específicas. Los moderados del MVR (Movimiento Quinta República), encabezados por el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Luis Miquilena, se opusieron a la jornada semanal de 40 horas que proponían los cuatro representantes laborales en la ANC. Otro moderado, vicepresidente de la ANC, Isaías Rodríguez, sugirió mecanismos para evitar las prestaciones sociales retroactivas, que los radicales finalmente lograron incorporar a la Constitución (en la cuarta “disposición transitoria”).

3. Las elecciones sindicales de octubre de 2001

A pesar de la creciente polarización de la vida nacional entre chavistas y anti-chavistas, un grupo importante de dirigentes sindicales llegó a

asumir una postura independiente: sin identificarse con el sindicalismo chavista, se alejaba de la dirigencia cetevista. Hasta las elecciones directas para la CTV y sus organizaciones afiliadas en octubre de 2001, estos dirigentes pertenecían a sindicatos cetevistas y se oponían a la creación de una confederación paralela. Modificaron su posición a consecuencia de los encontronazos (hasta físicos) provocados por las elecciones sindicales. Su oposición el año siguiente a las cuatro huelgas generales convocadas por la CTV y Fedecámaras fue un motivo adicional para abandonar la confederación.

Uno de los independientes más importantes era Ramón Machuca, presidente del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica (SUTISS) que representaba a los trabajadores de la compañía siderúrgica privatizada SIDOR. En mayo de 2001, Machuca encabezó una huelga de 21 días contra SIDOR con consecuencias serias para la región de Guayana. Una de las exigencias sindicales era una reducción del número de “empleados de confianza” (muchos de los cuales apoyaron la huelga) porque eran por definición excluidos del contrato. Durante el conflicto, la dirigencia de la CTV ofreció su apoyo, el cual fue aceptado con agradecimientos por Machuca. Sin embargo, se hizo evidente que, mientras que la preocupación de Machuca era netamente gremial, dirigentes de la CTV como Carlos Ortega y Alfredo Ramos (que como Machuca pertenecía a la Causa R) tenían otra agenda. Ramos propuso que la CTV convocara a una huelga general en apoyo a los trabajadores de SIDOR. Ortega sugirió que trabajadores en sectores claves que tenían vencidos sus contratos siguieran el ejemplo de SUTISS y pararan sus labores. Los chavistas del comité ejecutivo de SUTISS también apoyaban la huelga, pero se opusieron a la extensión del conflicto con fines políticos. La huelga culminó con un acuerdo que respondió a las exigencias de los sindicatos, incluyendo un año de inamovilidad para los trabajadores. El Presidente Chávez posteriormente declaró que la huelga se había llevado a cabo con éxito y que tanto el gobierno como los dirigentes sindicales habían aprendido de la experiencia (Díaz Rangel 2002: 130-131).

Elecciones directas para los dirigentes de la CTV y sus federaciones afiliadas (en lugar de aquellas de segundo o tercer grado) habían sido propuestas originalmente por el Frente de Trabajadores Copeyanos (FTC) a mediados de los años 80. Durante la administración de Caldera en los noventa, se combinó una propuesta legislativa de CO-

PEI con otra presentada por la Causa R, dentro del marco de la alianza entre estos dos partidos en el Congreso (conjuntamente con el MAS). AD se opuso categóricamente a la propuesta hasta que, con su propio debilitamiento político después de la elección de Chávez, votó a favor de una resolución en este sentido en el Congreso Extraordinario de la CTV celebrado en 1999.

Los sindicalistas adecos, conscientes de su reputación de ser simples instrumentos de su partido, fundaron el Frente Unitario de los Trabajadores (FUT) que incorporó a militantes de partidos tan disímiles como AD, COPEI, Bandera Roja y la Unión para el Progreso (dirigida por Francisco Arias Cárdenas). A pesar de esta diversidad, Carlos Ortega y Manuel Cova, ambos de AD, ocuparon los dos puestos más importantes de su plancha. De hecho, fue la primera vez en casi cuarenta años que los puestos de Presidente y Secretario General de la CTV estarían ocupados simultáneamente por miembros del mismo partido.

La decisión del FBT de participar en las elecciones de la CTV representó un triunfo para los moderados del MVR que se oponían a una actividad sindical al margen de la confederación. En otra muestra de amplitud, los chavistas eligieron como su candidato a la presidencia de la CTV a Aristóbulo Istúriz de Patria Para Todos (PPT), partido que había tenido relaciones conflictivas con el Presidente Chávez, en lugar de optar por Nicolás Maduro del MVR. Los chavistas evidentemente sentían la necesidad de responder a la preocupación de muchos trabajadores sobre el peligro de un movimiento obrero oficialista, sobre todo porque el Presidente Chávez apoyaba con vigor las posiciones adoptadas por sus seguidores sindicalistas.

En lugar de seguir promoviendo un sindicalismo paralelo en la industria petrolera, Istúriz buscó un frente amplio para derrotar a Carlos Ortega en su intento de reelección para el puesto de presidente de Fedepetrol. En efecto, los chavistas, se abstuvieron de apoyar a su propio candidato, José Gregorio Rodríguez, y optaron por el ex-copeyano Rafael Rosales. Aunque Rodríguez no retiró su candidatura, su campaña era de bajo perfil. El apoyo a Rosales dio importantes frutos, en la medida en que fortaleciera el crecimiento de un movimiento independiente dentro de la CTV que, en los meses posteriores a las elecciones de la CTV, terminaría aliándose con los chavistas.

Las elecciones que se realizaron en octubre de 2001 para la CTV y sus federaciones nacionales y estatales afiliadas fueron acompañadas por muchas alteraciones del orden público, acusaciones de fraude y otras irregularidades y una abstención estimada entre el 50 y el 70%. La Guardia Nacional, respondiendo a la solicitud del CNE (Consejo Nacional Electoral) de proteger la integridad física de sus funcionarios, ocupó los centros de votación en distintas regiones. Las elecciones para la CTV fueron pospuestas en los estados productores de petróleo de Anzoátegui, Zulia, Monagas y Amacuro, mientras que Alfredo Ramos, candidato de la Causa R, exigió un recuento en varios otros estados.

Tres semanas después de las elecciones, la Comisión Electoral de la CTV proclamó a Carlos Ortega presidente y a Manuel Cova secretario general y anunció que el FUT había conquistado el 64,04% de los votos, mientras que el sector oficialista obtuvo el segundo lugar con el 19,25%. Istúriz insinuó que Ortega había ganado las elecciones pero que el porcentaje atribuido al FUT había sido inflado notablemente. De hecho, AD tenía un buen motivo para distorsionar los resultados de esta manera: solamente con un triunfo aplastante del FUT se pudo lograr mantener su control de la CTV mientras que garantizara a sus aliados en la FUT una representación en el comité ejecutivo.

Los conflictos en torno a la elección de octubre llevaron a Ramón Machuca, Rafael Rosales y otros independientes a enfrentarse a la dirigencia adeca de la CTV y ello explica su salida de la organización año y medio después. En el caso de Machuca, también llevó a su salida definitiva de la Causa R. Poco después de las elecciones, la dirigencia nacional de la Causa R había protestado por los incidentes ocurridos en el estado Bolívar que llevaron a la quema de 20 actas de votación y disturbios que dejaron quince heridos. La Causa R culpó a la FUT de fraude (como hizo también Istúriz), más específicamente de haber alterado los resultados para otorgar a su candidato Víctor Moreno (anteriormente de la Causa R) un escaso margen de ventaja sobre Machuca en la elección para la presidencia de la federación. En consecuencia, la dirigencia nacional de la Causa R amenazó con retirarse del proceso electoral de la CTV. Sin embargo, de repente, cambió la línea. De hecho, Machuca se sintió traicionado por su partido cuando sorpresivamente se reconcilió con el FUT, tanto a nivel nacional como estatal.

4. Las huelgas generales de 2001-2003 y sus secuelas

Los antecedentes de las cuatro huelgas generales convocadas por Carlos Ortega durante el curso de un año, eran la exitosa huelga petrolera que él dirigió a mediados del año 2000 y la huelga de los trabajadores siderúrgicos de mayo del 2001, ambas trataron de transformarse en un conflicto nacional. La primera huelga general fue convocada para el 10 de diciembre del 2001. La CTV y Fedecámaras la justificaron para protestar en contra de la promulgación simultánea de 49 leyes en noviembre, muchas de las cuales tenían un contenido popular y nacionalista, sin haberlas sometido a la “consulta nacional” requerida por la Constitución de 1999. En esencia, la huelga era una reacción en contra de la radicalización y aceleración del proceso de cambio. Por cierto, poco antes de la huelga, Chávez había dicho: “La oligarquía exige que eliminemos estas leyes. Esto significa que tenemos que aplicarlas y hacerlo lo antes posible”.

A primera vista, las huelgas generales de diciembre 2001, abril 2002 (que culminó en el golpe frustrado), octubre del 2002 y diciembre a febrero del 2002-2003 parecen dar un mentís a los supuestos de Marx. En los cuatro casos, las organizaciones de trabajadores y de empresarios se juntaron para impulsar la salida de un presidente “revolucionario” o para exigir elecciones presidenciales inmediatas. Pero de hecho, la reacción de los venezolanos a las huelgas dependía en gran parte de su clase, tal como Marx hubiera predicho. Mientras que los barrios más pobres rápidamente volvieron a la normalidad durante las huelgas “indefinidas” de abril 2002 y diciembre-febrero 2002-2003, en las urbanizaciones en donde viven los sectores más acomodados de todas las ciudades del país, se evidenció un apoyo entusiasta.

Durante la huelga general iniciada en diciembre 2002, la llamada de la Coordinadora Democrática (que abarcaba los partidos y las organizaciones no gubernamentales de la oposición) para celebrar cacerolazos cada noche a partir de las ocho encontró receptividad en los sectores de clase media y alta (haciendo recordar los días anteriores al derrocamiento de Allende). Después de tres días de huelga, la oposición declaró su transformación en una “huelga activa”, lo que significaba movilizaciones en la calle. Poco después, las entradas a las refinerías fueron escenarios de protestas por parte de personas de la clase media que intentaban impedir el acceso a las plantas de sus trabajado-

res, a veces tildándolos de “rompe-huelgas”. Los dirigentes chavistas, por su parte, caracterizaron a la huelga como un paro empresarial (*lockout*). Además de los obreros petroleros, las organizaciones laborales que representaban a los trabajadores de la industria pesada de la región de Guayana se negaron a apoyar la huelga, tal como en el caso de los empleados públicos y los trabajadores del Metro de Caracas. Los dirigentes de estos sindicatos, que pertenecían a la CTV y no eran considerados pro-chavistas, surgieron como una tercera fuerza en el movimiento laboral del país.

Los dirigentes laborales “independientes” Rafael Rosales, Ramón Machuca, Franklin Rondón y Francisco Torrealba (presidente de los trabajadores del metro) se opusieron a las huelgas generales por dos razones. Primero, no estaban de acuerdo con la alianza con Fedecámaras, el adversario tradicional de la clase obrera. Segundo, señalaron que Ortega y otros dirigentes de la CTV no los habían consultado antes de llamar a las huelgas.

En el caso de Fedepetrol, Rosales entró en conflicto con el secretario general de la federación, Félix Jiménez, que había argumentado a la hora de la huelga de abril que la violación en PDVSA (Petróleos de Venezuela, SA) del sistema meritocrático y los intentos de llenar los puestos profesionales con partidarios del gobierno se aplicaría posteriormente a la nómina menor de trabajadores. Después de la huelga de abril, el gobierno se abstuvo de aplicar represalias en contra de los ejecutivos de la industria y de otros profesionales identificados estrechamente con la oposición y que seguían haciendo una labor política dentro de la empresa. De manera que el argumento institucional de Jiménez parecía de poca relevancia cuando se planteaba la huelga de diciembre. Además, las demandas económicas de los trabajadores de PDVSA, que llevaron a Rosales a considerar un apoyo a la huelga de octubre, habían sido satisfechas posteriormente con el acuerdo con el gobierno sobre el contrato colectivo. Rosales especialmente apoyó la restitución de la cláusula que asignaba al sindicato el 60% de las contrataciones. De esta manera, Rosales podía argumentar en diciembre que la huelga general no tenía ningún contenido gremial y estaba motivada políticamente.

A pesar de que el fracaso de la huelga general de diez semanas iniciada en diciembre hiciera mucho para desacreditar a la CTV, algunos de los sindicalistas chavistas seguían renuentes de abandonar la

CTV para formar una organización rival. Así, por ejemplo, la facción de trabajadores petroleros llamada La Jornada (que estaba encabezada por José Gregorio Rodríguez y que durante diez años había jugado un papel importante entre los sindicatos petroleros del oriente del país) se encontraba dividida en torno a este punto. Algunos miembros recurrían a los argumentos ya señalados sobre los peligros de desprenderse de los sindicatos mayoritarios y aislarse de la clase obrera.

Sin embargo, varios acontecimientos recientes fortalecieron la posición de aquellos favorables a la creación de una nueva confederación. Primero, la CTV se encontraba desacreditada por el fracaso de la última huelga general y, sobre todo, por su prolongada alianza con Fedecámaras. Los meses siguientes parecían el momento ideal para asestarle a la CTV un golpe mortal. Se argumentaba que si los chavistas no rompían completamente con la CTV, perderían el respeto de los trabajadores. Segundo, durante el golpe frustrado de abril, Luis Miquilena y sus seguidores, que habían sido los defensores más consecuentes de la estrategia de trabajar dentro de la CTV, habían abandonado el MVR. Por último, el desastre electoral de la CTV en octubre de 2001 y las huelgas generales posteriores, habían fomentado el surgimiento de un grupo de dirigentes sindicales independientes que, en su mayoría, estaban dispuestos de romper definitivamente con la CTV.

Inmediatamente después del fracaso de la última huelga general, los independientes más importantes, incluyendo a Machuca, Rosales, Torrealba y Rondón, recorrieron el país organizando apoyo para una nueva confederación. Machuca estaba convencido de que la única manera de evitar que a esta nueva confederación se le tildara de “oficialista” era nombrar como presidente a uno de los independientes. Originalmente, Machuca había propuesto el nombre de Rondón para el puesto, pero rápidamente se acordó que fuera el mismo Machuca quien encabezara la nueva organización. Sin embargo, en la reunión que fundó la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), celebrada en Caracas en marzo del 2003, los chavistas del FBT propusieron una estructura “horizontal” con una coordinadora nacional de 21 miembros, sin que hubiera nombramientos para puestos específicos como la presidencia o la secretaría general. Lograron convencer a los dirigentes independientes, con la excepción de Machuca que se negó a incorporarse. Posteriormente hubo encuentros entre Machuca y la UNT y no se descartaba una reconciliación.

Los fundadores del UNT insistieron en que la nueva confederación evitaría las estructuras y las prácticas que en el pasado habían llevado a corrupción, control político y colaboración de clases. El derecho de pedir un referéndum revocatorio se concibió como un mecanismo para evitar que los dirigentes se alejaran de las bases de su organización. Adicionalmente, los dirigentes del UNT se empeñaron en protegerse en contra del peligro de que la organización cayera en manos de burócratas sindicales carentes de vínculos permanentes con las bases. De manera que aquellos políticos, incluyendo diputados nacionales, que decían representar a los trabajadores pero que no contaban con seguidores entre los sindicatos se consideraban “asesores”, y los 21 coordinadores eran elegidos entre activistas sindicales. La UNT pudo atraer dirigentes nacionales importantes de federaciones representando a empleados públicos, maestros, la industria pesada de la región de Guayana, el metro, las industrias de la electricidad y de telecomunicaciones, como también a trabajadores de las plantas de Ford y Mavesa. Sin embargo, con la excepción de Amacuro y (en menor medida) Carabobo, la UNT fracasó en el intento de incorporar a dirigentes de las federaciones estatales afiliadas a la CTV.

La UNT asumió posiciones que reflejaban los intereses de los trabajadores, aun cuando no necesariamente respondían a la línea del MVR. Así llamó al gobierno a introducir un decreto para facilitar el control obrero de aquellas empresas quebradas en manos del Fondo de Garantías de Depósitos (FOGADE). Los empleados de Macuto Sheraton, por ejemplo, asumieron la dirección del complejo hotelero cuando éste se declaró en bancarrota y había situaciones parecidas en otras empresas del país. Indudablemente, los dirigentes de la UNT fueron influenciados por los acontecimientos en Argentina, donde la crisis económica y financiera de los últimos años ha impulsado experimentos de autogestión.

La dirigencia de la UNT, a diferencia de sus homólogos en la CTV, insistieron en que fueran las empresas que habían cerrado sus puertas en diciembre las que pagaran los platos rotos provocados por la huelga. En contraste con este discurso, algunos dirigentes sindicales firmaron acuerdos reconociendo la suspensión de los acuerdos colectivos, la suspensión temporal de trabajadores y la exclusión de los salarios correspondientes al período de la huelga de los cálculos sobre otros beneficios. Estas concesiones tenían como propósito otorgarle a

la empresa un compás de espera, para evitar la bancarrota en el período difícil después de la huelga.

La huelga de diciembre también puso en el tapete un asunto que se venía discutiendo dentro del movimiento laboral chavista desde que Chávez ganara la elección presidencial: la necesidad de sacar de la administración pública a aquellos empleados considerados no confiables. Después de la huelga, los chavistas de línea dura insistieron en una purga completa en la industria petrolera. 18.000 empleados que habían participado en la huelga, en su mayoría de la nómina mayor, fueron despedidos por su responsabilidad en la paralización de la industria (y hasta de actos de sabotaje). Los chavistas de línea dura advirtieron que muchos empleados que habían apoyado la huelga intentaban regresar a la industria, consiguiendo trabajo con contratistas, sin que los nuevos ejecutivos actuaran para impedirlo.

La línea dura era partidaria de extender la purga dentro de la industria petrolera para que abarcara a los trabajadores de la nómina menor, una exigencia que podría considerarse políticamente motivada por cuanto durante muchos años, Fedepetrol había sido un bastión de AD. De hecho, después de la huelga, se redujo la nómina de los obreros (nómina menor) en un 28% (estadística proporcionada por PDVSA al “PCV Energy” de Washington). También se argumentaba que, en la selección de personal para reemplazar a quienes se habían plegado a la huelga, debieran tener preferencia los chavistas que habían arriesgado sus vidas durante la huelga, formando brigadas cívicas para resguardar la seguridad de las instalaciones petroleras. Sin duda, esta exigencia también formaba parte de una estrategia sindical diseñada para consolidar el control de Rosales en Fedepetrol y la salida de la federación de la CTV. Además, los de la línea dura señalaron otros lugares dentro del sector público, como educación y la empresa de electricidad Cadafe, en donde los seguidores de Luis Miquilena y otros “enemigos del proceso revolucionario” ocupaban puestos claves y asumían posturas inamistosas para con los empleados chavistas (*Tribuna Popular* 2003: 6). El reemplazo de empleados pertenecientes a los partidos tradicionales por chavistas evidentemente involucraba el riesgo de transformarse en una simple operación de clientelismo político, una tradición profundamente enraizada en Venezuela.

La estrategia chavista buscaba ganar, o por lo menos neutralizar, actores internacionales que habían respaldado a la CTV cuando ar-

gumentaban que Chávez violaba convenios internacionales sobre la libertad sindical. A pesar de que el Presidente John Sweeney de la AFL-CIO (American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations) norteamericana se había comprometido a revisar la política exterior virulentamente anticomunista de su confederación, el movimiento obrero norteamericano respaldó los intentos de los dirigentes sindicales tradicionales venezolanos de recuperar su influencia y, posteriormente, de derrocar a Chávez. La AFL-CIO canalizó fondos de la National Endowment for Democracy (financiado por el Congreso de los Estados Unidos) hacia la CTV, y más que duplicó sus aportes en 2001. El 27 de febrero de 2003, el Comité Ejecutivo de la AFL-CIO aprobó una resolución expresando su seria preocupación “por el orden de detención recientemente promulgado en contra de Carlos Ortega, por acusaciones de traición, rebelión civil, instigación de crímenes y devastación”. El representante de la organización para América Latina, Stan Gacek, sostuvo que, durante los eventos de 2002 su organización se había empeñado en fortalecer las fuerzas progresistas en el movimiento obrero venezolano. Gacek agregó que “ayudó un proceso que llevó miembros de la izquierda... a la dirección de la CTV” (Shorrock 2003: 21). No obstante, como comentó este autor en *The Nation*, respondiendo a la afirmación de Gacek,

Dentro de la CTV no hay ninguna corriente a nivel nacional que haya cuestionado la obsesión de la confederación por derrocar a Chávez por cualquier vía – aun en detrimento de los intereses obreros. Entonces, ¿quiénes eran estos “izquierdistas” de la CTV supuestamente favorecidos por los esfuerzos de la AFL-CIO? (Ellner 2003).

La cuestión de autonomía *vis-à-vis* partidos políticos también se debatió en el campo anti-chavista durante 1999 y 2000. Un ejemplo de la adopción de una posición independiente se presentó durante la campaña electoral a nivel municipal en diciembre 2000, celebrada conjuntamente con el referéndum sobre los sindicatos. La CTV, controlada por AD, llamó a la abstención, mientras que el partido recomendó a sus militantes a votar para derrotar la proposición y favorecer sus propios candidatos.

Sin embargo, la polarización extrema que se produjo a partir del año 2001 borró las diferencias entre los dirigentes obreros de la oposición, y entre éstos y sus respectivos partidos. Dentro de la CTV, algunos de los dirigentes no-adechos expresaron críticas tímidas a las rela-

ciones tan estrechas entre la confederación y el tradicional adversario del movimiento laboral, Fedecámaras, pero estas críticas no trascendieron y no se profundizaron. Después del fracaso de la huelga general de 2002-2003, algunos miembros del comité ejecutivo de la CTV intentaron comprometer la confederación con un proceso de renovación, específicamente a favor de la creación de sindicatos nacionales por rama de industria, una propuesta planteada originalmente en 1959. Pablo Castro, un miembro del comité ejecutivo, consideraba que con el exilio de Carlos Ortega el momento era propicio para realizar cambios en la confederación. El deslinde fundamental dentro del comité ejecutivo era entre, por una parte, aquellos como Castro y el secretario general Manuel Cova (que pertenecía al grupo de negociadores que se reunía con el secretario general de la OEA (Organización de Estados Americanos), César Gavira) y, por la otra, Ortega que se encontraba identificado con el ex-secretario general de AD, Rafael Marín que proponía salir de Chávez por cualquier vía. De hecho, Castro y otros intentaron reemplazar Ortega por Cova en la presidencia de la CTV pero fue regañado públicamente por Henry Ramos, presidente de AD, por intentar aprovechar la ausencia de Ortega.

En todo caso, lo más importante es que, fueran lo que fueran las críticas de miembros del comité ejecutivo, no hubo ningún esfuerzo organizado para moderar el empeño en sacar a Chávez de la presidencia de la República. Ningún miembro del comité ejecutivo llegó a plantear una “autocrítica” a raíz del fracaso de la huelga general, ni cuestionar la alianza con Fedecámaras. De hecho, esta insistencia en no reconocer sus errores explica en gran parte por qué se permitió que la huelga siguiera hasta agotarse, en lugar de suspenderla después del primer mes, cuando ya era evidente que tenía pocas posibilidades de éxito. Este fracaso no solamente tuvo consecuencias devastadoras para la economía nacional; también contribuyó a desacreditar a la oposición y, en particular, a la CTV.

5. Conclusión

La cuestión de autonomía *vis-à-vis* el Estado y los partidos políticos, y el peligro de la creación de un movimiento laboral “oficialista”, han estado en el centro de los debates recientes al interior del movimiento laboral organizado. Así AD, por primera vez en su historia, promovió

la creación de una coalición como el FUT para las elecciones sindicales, en un intento de convencer a los trabajadores, que no tenía la intención de buscar un control absoluto de la CTV. La misma preocupación explica por qué el FBT chavista decidió apoyar a Aristóbulo Asúriz, que poco antes había tenido un desencuentro con Chávez, como candidato en las mismas elecciones, en lugar de respaldar a Nicolás Maduro del MVR. También explica por qué la nueva UNT incorporó a su Coordinadora Nacional exclusivamente a activistas sindicales, excluyendo deliberadamente a “burócratas” laborales.

Era muy difícil que el movimiento obrero venezolano se aislara del proceso de polarización extrema que, a partir de 1998, dividió a la nación en bloques pro- y anti-Chávez. No obstante, el movimiento obrero es menos polarizado de lo que pareciera a primera vista (sobre todo si la fuente de información son los medios de comunicación). De hecho, un número significativo de puestos claves, tanto a nivel de sindicato como de federación, se encuentran ocupados por dirigentes obreros independientes. Es más, la posición de los dirigentes obreros del MVR frente a reformas importantes, como la seguridad social (la Ley Orgánica de Seguridad Social en diciembre 2002 es considerada “una conquista laboral”) y las prestaciones sociales, no coincide con la de otros dirigentes del partido.

La situación actual en el movimiento obrero organizado puede compararse con aquella de los primeros años de democracia después del 23 de enero de 1958. En aquel entonces, la nación se encontraba polarizada pero los dirigentes laborales de los distintos partidos propusieron una candidatura unida para las elecciones presidenciales de diciembre 1958. Además, a pesar de la creciente conflictividad política durante el año siguiente, en noviembre 1959 la CTV celebró un “Congreso de Unidad”. No cabe duda de que los intereses de los obreros venezolanos fueron perjudicados por las posteriores confrontaciones y divisiones en el movimiento en el contexto de la lucha armada de los años sesenta. Hoy en día los dirigentes obreros enfrentan desafíos parecidos. Lo más importante a tomar en cuenta es que la polarización y politización extremas dentro del movimiento obrero conlleva el riesgo de dos escenarios indeseables: el sindicalismo paralelo y la creación de un movimiento obrero oficialista.

Bibliografía

- Battaglini, Óscar (1993): *Legitimación del poder y lucha política en Venezuela: 1936-1941*. Caracas: UCV.
- Coppedge, Michael (1994): *Strong Parties and Lame Ducks: Presidential Partyarchy and Factionalism in Venezuela*. Stanford: Stanford University.
- Díaz Rangel, Eleazar (2002): *Todo Chávez: De Sabaneta al golpe de abril*. Caracas: Planeta.
- Ellner, Steve (1980): *Los partidos políticos y su disputa por el control del movimiento sindical en Venezuela, 1936-1948*. Caracas: Universidad Católica Andrés Bello.
- (1995): *El sindicalismo en Venezuela en el contexto democrático (1958-1994)*. Caracas: Tropykos.
- (2000): “El impacto de la privatización sobre la fuerza laboral en Venezuela: ¿reorganización radical o ajuste moderado?”. En: *Politeia* núm. 25, pp. 37-75.
- (2003): “Letter to the Editor” en respuesta al artículo de Tim Shorrock, “Labor’s Cold War” publicado en *The Nation* (19 de mayo, 2003).
- Levine, Daniel (1978): “Venezuela since 1958: The Consolidation of Democratic Politics”. En: Linz, Juan/Stepan, Alfred: *The Breakdown of Democratic Regimes: Latin America*. Baltimore: Johns Hopkins University, pp. 82-109.
- Mogollon, Mary (1994): “El sindicalismo en Venezuela”. En: *VenEconomía* (Abril), pp. 9-11..
- Navarro, Juan Carlos (1995): “In Search of the Lost Pact: Consensus Lost in the 1980s and 1990s”. En: McCoy, Jennifer/Serbin, Andrés/Smith, William/Stambouli, Andrés: *Venezuelan Democracy under Stress*. New Brunswick/New Jersey: Transaction Publishers, pp. 13-31.
- Naím, Moisés (1993): *Paper Tigers and Minotaurs: The Politics of Venezuela’s Economic Reforms*. Washington: Carnegie Endowment.
- Salamanca, Luis (1995): “The Venezuelan Political System: A View from Civil Society”. En: McCoy, Jennifer/Serbin, Andrés/Smith, William/Stambouli, Andrés: *Venezuelan Democracy under Stress*. New Brunswick/New Jersey: Transaction Publishers, pp. 197-241.
- (1998): *Obreros, movimiento social y democracia en Venezuela*. Caracas: UCV.
- Shorrock, Tim (2003): “Labor’s Cold War”. En: *The Nation* (19 de mayo).
- Tribuna Popular* (2003) “Cadafe y sus filiales: objetivos de la conspiración” (primera quincena de marzo), p. 6.
- VenEconomía* (2002): “Informe Económico Trimestral” (enero).

Javier Corrales

El subsidio a la oposición: las ventajas para el oficialismo

Este ensayo intenta aportar un argumento sobre las causas de la inestabilidad política durante el gobierno de Hugo Chávez (1999-presente).¹ La inestabilidad política no llegó a Venezuela con Chávez (Hellinger 2003; Corrales 2002; Weyland 2002; Canache 2002; Ellner 1993), pero con Chávez ha llegado a extremos nunca vistos desde 1958. Venezuela bajo Chávez adolece de un tipo de inestabilidad en particular, la polarización entre dos bandos: oficialistas y opositores, con un bando menor intermedio que se niega a sumarse a uno o al otro (*Consultores21*; Gil Yepes 2003).

Las explicaciones sobre esta polarización suelen ser dos. Una explicación, de corte neo-marxista, interpreta la polarización como el resultado de un conflicto económico-estructural. Según este relato, fuerzas populares llegaron asombrosa y democráticamente al poder bajo el liderazgo de Chávez, desde donde tratan de defender posturas económicas en pro de grupos marginados y en contra de los agentes de la globalización capitalista (Wilpert 2003; Gott 2000; López-Maya/Lander 2000). Un gobierno de dicho corte progresista, dirían los marxistas, inevitablemente engendra resistencias por parte de los intereses comprometidos con el status quo. El defecto principal de esta explicación de la polarización es que no puede explicar el perfil de la oposición: es multitudinaria en tamaño (en vez de minoritaria), abarca múltiples estratos económicos (no simplemente a los privilegiados), y alberga diferentes tendencias ideológicas, inclusive a antiguos seguidores de la propuesta socio-económica de Chávez (no sólo a conservadores).

La otra explicación de la polarización se basa en la idea de que Chávez ha violentado la democracia en Venezuela, reemplazando la democracia con un “cultismo a su persona” Falcoff (2001) y entablado

1 Una versión más elaborada de este trabajo aparece en Corrales (2003).

relaciones con regímenes y grupos anti-democráticos en el exterior (Robinson 2003; Boersner 2003). Según este relato, la inestabilidad es producto del autoritarismo del gobierno, que ha generado resistencias por parte de la sociedad civil. No cabe duda que el gobierno ha cometido ciertas violaciones de derechos humanos y políticos y que ha amedrentado –o peor aún, colmado con seguidores leales– las instituciones que se suponen cumplen la función de rendimiento de cuenta horizontal. Todo ello es preocupante en cualquier democracia. Sin embargo, estas violaciones y contactos externos no-democráticos no son más graves que los que han ocurrido en otros gobiernos recientes en América Latina (en México en los años 80, en Argentina y Perú en los 90), inclusive en la misma Venezuela, sin que éstos generasen niveles semejantes de inestabilidad. Y a pesar de todo, en Venezuela, siguen rigiendo plenamente las libertades civiles y políticas. La calidad de la democracia se ha deteriorado, pero el nivel de deterioro (es decir, el nivel de autoritarismo) no corresponde con el nivel de polarización en Venezuela.

Este trabajo por lo tanto busca otra explicación. El problema en Venezuela es más delicado –pero no por ello más sencillo– que un conflicto estructural o una implantación de una dictadura. Se trata de la violación de una norma en el ejercicio de la democracia, norma que no suele ser reconocida como fundamental para la democracia, aun por los defensores de la democracia liberal. Esta norma es el subsidio a la oposición.

Casi todos los teóricos de la democracia liberal coinciden en que un principio máximo de toda democracia es el respeto por las minorías, y sobre todo, la disidencia. Sin dicho respeto, obviamente, no hay democracia. La complicación ocurre cuando surge una división de fuerzas extremadamente asimétrica entre oficialismo y oposición, es decir, cuando los oficialistas obtienen mucho más caudal electoral que la oposición. En dichas situaciones, el mero respeto a la oposición es insuficiente. Ello cumple con los requisitos de una democracia, pero no con los requisitos para una democracia estable. Dada la posición desventajosa de la oposición, gozar de un simple respeto significa poco para la oposición. Para no sentirse desventajada por el régimen, la oposición precisa de mucho más que respeto. Necesita también de garantías, y sobre todo, de subsidios. La necesidad de garantías mutuas en las constituciones democráticas lo reconoce la literatura de

democratización desde los años ochenta (O'Donnell/Schmitter 1986; Di Palma 1990; Karl/Schmitter 1991; Przeworski 1991); la necesidad de subsidios políticos no se reconoce tanto, pero es crucial (Reynolds 2002). Venezuela demuestra que la falta de dichos subsidios atenta contra la estabilidad democrática.

1. Chávez en comparación a otros casos legendarios de inestabilidad/polarización

Antes de pasar al tema del subsidio a la oposición, conviene situar el gobierno de Chávez desde una perspectiva comparada. Hay dos maneras de catalogar al gobierno de Chávez. Una vez como ejemplo de los muchos gobiernos populista-nacionalista clásicos latinoamericanos que generan alta inestabilidad política (Braig 2003). Ejemplos notables son los gobiernos de Gerardo Machado en Cuba (1925-1933), Betancourt en Venezuela (1946-1948), Juan D. Perón en Argentina (1946-1955), Joao Goulart en Brasil (1961-1964), y Salvador Allende en Chile (1970-1973).

Otra manera es catalogar el gobierno de Chávez como un ejemplo de los varios gobiernos neófitos que se han puesto de moda en América Latina desde finales de los ochenta. Este tipo de gobierno ocurre cuando llega al poder un candidato sin trasfondo o carrera política (es decir, sin experiencia con cargo electivo). El candidato irrumpe en la escena política de un modo relámpago y hace campaña electoral sin contar con –y a menudo, enfrentado contra– las maquinarias partidarias tradicionales. Entre los regímenes de este tipo que han generado inestabilidad (o más bien, impaciencia por parte de la oposición) se encuentran Fernando Collor de Mello en Brasil, Alejandro Toledo en Perú y Lucio Gutiérrez en Ecuador.

Como lo demuestra el Cuadro 1, el régimen de Chávez –en cuanto al perfil del gobierno y el perfil de la oposición– comparte características con todos estos regímenes, pero no de modo perfecto. Siempre existe alguna diferencia marcada entre el caso venezolano y cada uno de los casos que aparecen en el cuadro. Es probable que al lector le parezcan debatibles algunas de las clasificaciones que hago en dicho cuadro. Pero mi propósito no es dar una clasificación detallada sobre cada uno de estos regímenes. Simplemente pretendo señalar que el gobierno de Chávez no es ni tan típico ni tan atípico. Despliega carac-

terísticas que lo asemejan con regímenes populistas clásicos o regímenes de neófitos más recientes, pero también tiene características únicas.

Una de las características que el gobierno de Chávez comparte con muchos de estos gobiernos, sobre todo aquellos en el que el oficialismo contaba con mayorías electorales fuertes, es un desconocimiento de la oposición. El resto de este ensayo aborda este tema.

Cuadro 1: Características sobre las relaciones entre gobierno y oposición: Venezuela en comparación

Gobierno de Hugo Chávez (1999-presente)	Regímenes populistas Clásicos					Regímenes de Neófitos	
	Cuba	Ven.	Arg.	Brasil	Chile	Perú	Ecuador
	Machado	Trienio	Perón	Goulart	Allende	Toledo	Gutiérrez
	1925-33	1045-48	1946-55	1961-64	1970-73	2001-	2002-
Características del gobierno							
Presencia militar	√		√				√
Agenda de campaña: populista	√	√	√	√	√	√	√
Política económica de gobierno: populista	√	√	√	√	√		
Descenso marcado de popularidad del Pres.	√					√	√
Desconocimiento de la oposición	√	√	√	√			
Depresión económica	√				√		
Desconocer/sobrepasar el parlamento	√	√	√	√	√		
Características de la oposición							
Partidos políticos en derrumbe o débiles	√			√		√	
Nuevos grupos civiles de oposición	√	√				√	√
Participación militar en la oposición	√	√	√	√			
Participación empresarial		√	√	√	√		
Participación de sindicatos						√	√
Participación de la iglesia		√	√		√		
Participación de ex colaboradores del gobierno							√

2. Las tentaciones del mayoritarismo

La característica principal del gobierno de Chávez que a mi juicio más culpa tiene de la polarización que vive el país es el mayoritarismo desenfrenado con el que se inauguró el régimen (Coppedge 2003). Chávez llegó al poder con el beneficio de un caudal de votos impresionante. Contar con dicho caudal no es una violación democrática. Sí lo es haber intentado usar dicho caudal político para colocarles trabas a la oposición partidaria. El uso del poderío mayoritario para tratar de desplazar a la oposición ha sido la causa principal de la inestabilidad política.

Para ilustrar este problema conviene comenzar con un planteamiento abstracto. Supongamos que en una democracia plena, luego de unas elecciones libres, el oficialismo obtiene una gran mayoría (digamos el 70% de los votos) y la oposición obtiene una gran derrota (digamos el 30%). Esta correlación de fuerza es sumamente cómoda para el oficialismo.

En este momento, el oficialismo enfrenta tres opciones sobre cómo relacionarse hacia la oposición. La primera opción es **respetar** dicha correlación de fuerza. El oficialismo lleva a cabo elecciones. En todas las elecciones la oposición pierde. La oposición por lo tanto no consigue ocupar puestos políticos importantes o mayoritarios. Tiene un poder de negociación disminuido, y por lo tanto no logra detener, ni posiblemente influir, las iniciativas del ejecutivo. El gobierno gobierna contento y la oposición sufre un desaliento perenne.

No obstante, dentro de la opción de respetar la oposición, existe un riesgo para el oficialismo. La oposición no desaparece del todo. Ella retiene ciertos ámbitos de poder (control sobre algunos escaños en el Congreso, en las gobernaciones, en las instituciones de la sociedad civil). Más aún, la oposición cuenta con la capacidad de recuperarse. Por lo tanto, el beneplácito con el que gobierna el oficialismo bajo una política de respeto hacia la oposición no es duradero, existe la posibilidad del renacimiento de la misma, lo cual puede serle desventajoso al oficialismo.

Por lo tanto, la segunda opción del oficialismo es tratar de **desplazar** y **desactivar** (es decir, desalojar del poder y crearle trabas operativas) a la oposición. El gobierno se vale de su espectacular caudal político para tratar de debilitar aún más a la oposición, la cual se en-

cuentra, luego de unas elecciones desastrosas, en una situación particularmente vulnerable. Dicha estrategia de debilitamiento de la oposición acarrea una ventaja sobre la estrategia de respetar la oposición: puede quedar para siempre desarticulada, incapaz de recuperarse a corto y mediano plazo y, por ende, representar una amenaza para el oficialismo. Pero también acarrea un peligro: la oposición puede hallar maneras de sobrevivir el ataque, convirtiéndose entonces en una fuerza política desleal.

La tercera opción es la de tratar de **subsidiar** la oposición. Esta alternativa consiste en otorgarle a la oposición más poder político del que arrojaron los resultados electorales. No basta únicamente con respetar los puestos conseguidos por la oposición por vía de las elecciones. El oficialismo hace todo lo posible por darle mayores cuotas de poder e inclusive incorporar a la oposición en la toma de decisiones.

Naturalmente, el oficialismo tiene pocos incentivos para seguir esta opción tercera: ¿qué fuerza política voluntariamente subsidia a su oposición? El único incentivo que tiene el oficialismo es que, con esta política de subsidio, la oposición se puede transformar en un actor leal y cooperador con el oficialismo. Pero ello es una apuesta insegura. Ante una oposición débil, un oficialismo va a tratar de aprovecharse de dicha debilidad para propinar golpes más duros contra ella, para así desarticularla de una vez y por todas. Nos encontramos ante una proposición contra-intuitiva: mientras más débil sea la oposición, más tentación va a sentir el oficialismo de tratarla con dureza.

El gobierno de Chávez, en su primer año, se decidió por la segunda opción. Es la misma opción que Alberto Fujimori siguió en Perú en 1990: desplazar y aplastar los partidos y grupos de oposición. Sin embargo, a diferencia de lo que sucedió bajo Fujimori, Chávez no logró su cometido de acabar con la oposición. Al contrario, sólo logró desatar su furia, sino incentivó, su resurgimiento y recomposición.

3. Chávez a la hora de fundar un nuevo régimen: afán por desactivar la oposición

El gobierno de Chávez llega al poder con una mayoría cómoda. Obtiene el 56% de los votos en las elecciones presidenciales de diciembre de 1998. Más aún, de los pocos partidos de oposición que sobrevi-

vieron, la mayoría se encontraba dividida. No obstante, la oposición no se encontraba exenta de poder —controlaba cerca del 54% del Congreso y la mayoría de las gobernaciones. Respetar dicha representación de fuerzas le significaba a Chávez aceptar un gobierno dividido—un poder ejecutivo carente de control del poder legislativo y de las gobernaciones. Para Chávez, respetar dicha situación política le resultaba desventajoso, pues significaba tener que negociar con la oposición todas sus medidas “revolucionarias”. Buscó por lo tanto el modo de desarticular la oposición, y principalmente, de tratar de desalojar de las instituciones públicas a los representantes de la oposición. Para ello usó el proceso de la reforma constitucional de 1999.

Las elecciones de delegados para la Asamblea Constituyente magnificó extraordinariamente la asimetría entre el oficialismo y la oposición. A pesar de que el oficialismo obtuvo no más del 70% de los votos, las leyes electorales y los errores de la oposición (Penfold 1999) dieron lugar a una proporción de delegados hiper-asimétrica: el oficialismo logró ocupar el 93% de los escaños en la Asamblea Constituyente. A partir de este momento, comienza el proceso por parte del oficialismo de restringir y desplazar la oposición. El oficialismo utilizó el organismo en el que tenía hiper-mayoría para crearle barreras a la oposición.

El intento de restringir a la oposición comenzó en el seno mismo de la Asamblea Constituyente. Carentes de poder de negociación debido a su baja representación (menos del 5% de los escaños), la oposición fue incapaz de frenar el presidencialismo excesivo que impulsaba el oficialismo. A pesar de que la Constitución final garantiza un gran número de derechos civiles, el texto es sumamente hiper-presidencialista y adverso hacia los grupos de oposición. Por ejemplo, el financiamiento público de los partidos políticos quedó abolido. Un número mayor de leyes pueden ser creadas por vía del referendo en vez de por vías legislativas. El Congreso, que es el lugar por excelencia donde la oposición ocupa espacios, perdió la capacidad de supervisar las Fuerzas Armadas. El presidente obtuvo un mandato de 6 años, con la posibilidad de reelección. Si el Congreso votase tres veces en contra del presidente, el presidente puede disolver el Congreso (Combellas 2003; Maingon *et al.* 2000).

La oposición no pudo bloquear el anhelo hiper-presidencialista del ejecutivo, y es por ello que la oposición salió perdiendo. Sin embargo,

ella pudo haber aceptado el texto final, por más desfavorable que fuera, ya que creaba espacios políticos que podía tratar de conquistar. Igualmente, la nueva Constitución creaba ciertos mecanismos de control sobre el ejecutivo. Lo que la oposición no pudo aceptar fueron las facultades que el ejecutivo le otorgó a la Asamblea Constituyente, no sólo para cambiar las reglas del juego (es decir, la Constitución), sino también la composición de las instituciones públicas, aquellas mismas que la Constitución consagra como mecanismos de control sobre el poder ejecutivo. En agosto del 1999, por ejemplo, la Asamblea tomó las cedes del Parlamento. En septiembre, la Asamblea destituyó a la gran mayoría de los jueces federales. En noviembre, la Asamblea apoyó un decreto que restringía arbitrariamente la duración del debate sobre la reforma, para con ello apurar el proceso de redacción. En diciembre, una semana después de la aprobación de la nueva Constitución, la asamblea decretó el “Régimen de Transición del Poder Público”, con lo cual se dismantelaron el Congreso, las legislaturas estatales, las autoridades de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía y Contraloría Generales de la República, y el Consejo Nacional Electoral. Este limpiamiento de las instituciones políticas se hizo con el aval del poder ejecutivo.

Estas medidas fueron el equivalente a un auto-golpe. Se usó un ente político que contaba con hiper-mayoría oficialista para desalojar las instituciones públicas y recolonizarlas con adeptos al gobierno. Se bloquearon los espacios posibles que la oposición podía ocupar. Dicho proceso, por consiguiente, impartió la sensación de amenaza entre la oposición. Ella concluyó que cooperar con el ejecutivo, en vez de aportarle más ramas de poder, le traía irónicamente más retrocesos políticos, más pérdidas de terreno político. La colonización de poderes, tanto en el texto de la nueva Constitución como en las acciones que llevó a cabo el oficialismo durante el proceso de redacción, llenó de terror a la oposición. A partir de enero del 2000, la oposición en Venezuela entra en estado de pánico ante un ejecutivo que se le veía obstinado en conseguir el aplanamiento de la oposición.

Conviene comparar el comportamiento del oficialismo durante la inauguración de la Quinta República con el del oficialismo en otros momentos fundacionales en Venezuela. La primera comparación es con el Trienio. En aquél entonces, el oficialismo se comportó de la misma manera: es decir, trató de desplazar la oposición y de negarle

cualquier tipo de subsidio político. Al igual que el MVR (Movimiento Quinta República) en 1999, AD (Acción Democrática) llegó al poder con una asimetría extraordinaria. Dicha asimetría se reflejó claramente en la Asamblea Constituyente de 1946: AD obtuvo el 85% de los escaños. Al igual que el MVR en 1999, AD procedió entonces a redactar una Constitución que le abría muy pocos espacios a las fuerzas de la oposición.

Cuadro 2: Asimetría entre el oficialismo (O) y partidos de oposición (POs)

	O	POs	Asimetría G-POs	Fuente
<i>Trienio (Asimetría alta)</i>				
1946 Delegados a la Asamb. Const. (% de escaños)	85,63	14,38	71,25	Kornblith
<i>Punto Fijo (Asimetría baja)</i>				
1958 Elecciones presidenciales (% de votos)	49,18	50,82	-1,64	CNE
1958 Diputados (% de escaños)	54,90	45,20	9,70	CNE
1961 Comisión Constitucional (% de escaños)	36,36	63,56	-27,20	Kornblith
<i>Quinta República (Asimetría alta)</i>				
1998 Diputados (noviembre) % de escaños)	46,20	53,80	-7,60	CNE
1998 Presidencial (diciembre) (% de votos)	56,20	42,79	13,41	CNE
1999 Delegados a la Asamb. Const. (% de escaños)	93,13	4,50	88,63	Penfold
2000 Presidenciales (% de votos)	59,76	40,24	19,52	CNE

G: AD en Trienio, AD en Punto Fijo, AD en 1989-1992, MVR+MAS+PPT en la Quinta República.

En cambio, a la hora de fundar el régimen democrático de 1958, el oficialismo se comportó del modo opuesto. En las elecciones de 1958, el oficialismo obtuvo un 49% de los votos para presidente, y un cómodo 55% de los votos en el Congreso. A pesar de esta mayoría, el oficialismo no cayó en la tentación de desplazar la oposición, sino al contrario, hizo lo posible por subsidiarla. Dicho subsidio se evidencia en el modo en que se decidió redactar la Constitución de 1961. En vez

de hacer elecciones directas, lo cual hubiera creado una delegación numéricamente ventajosa para el oficialismo, éste concordó con la oposición seleccionar a los delegados en base a cuotas de poder, cuotas que le eran sumamente favorables a la oposición. Se designaron 22 delegados para la comisión constituyente, 8 de los cuales eran del oficialismo, 11 de la oposición y 3 independientes. Es decir, mientras que la oposición sólo controlaba el 45% del Congreso, el oficialismo le otorgó casi el 66% de la representación política en la comisión constitucional. A la hora de crear las reglas del juego político, el oficialismo fue más allá de respetar las fuerzas de la oposición; terminó inclusive otorgándole un inmenso subsidio político. El resultado de dicho subsidio es que las fuerzas de oposición beneficiadas se volvieron leales al nuevo régimen.

El subsidio del pacto de Punto Fijo y la Constitución de 1961 hacia los grandes partidos de oposición (no de los partidos pequeños) ha sido bien estudiado (Corrales 2001) y generó exceso de consenso, e inclusive, cartelismo político (Maihold 2003). Lo que conviene recalcar es que Venezuela ha presenciado en su historia ejemplos de ambas estrategias posibles del oficialismo: subsidio a la oposición (1958-1961) y repudio de la oposición (1948 y 1999). No es coincidencia que las estrategias de repudio hayan generado la inestabilidad política más profunda.

4. Recuperación de la oposición

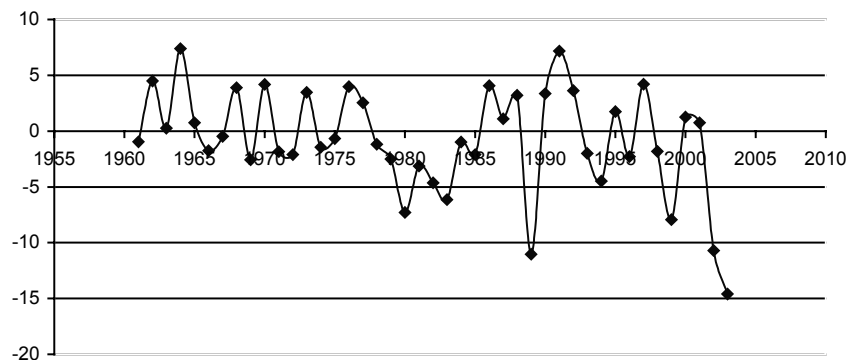
Para que la estrategia de desplazar y desactivar la oposición funcione, se deben de cumplir dos condiciones. Primero, el oficialismo debe ser capaz de ofrecer al electorado grandes triunfos en su gestión de gobierno. Segundo, los partidos de oposición deben estar sumamente debilitados a la hora del ataque, y más aún, desprovistos de aliados en la sociedad civil y en el extranjero. Ninguna de estas dos condiciones se dio en Venezuela entre el 2000 y el 2002. Es por ello que el oficialismo fracasó en su intento por doblegar la oposición.

En cuanto a los resultados de la gestión de gobierno, no existe indicador más revelador que la evolución del producto interno bruto (PIB) per cápita. Como lo demuestra el Cuadro 3, la gestión de Chávez ha arrojado un año de recesión (1999), dos años de crecimiento anímico (2000 y 2001), que es todavía más pobre si se toma en cuenta

el estímulo generado a raíz del aumento del precio del petróleo), y dos años de depresión económica (2002 y 2003). Es uno de los desempeños económicos más desastrosos de Venezuela desde 1959.

Conviene comparar este desempeño con el del gobierno de Alberto Fujimori en Perú a principios de los 90, régimen que sí logró desarticular la oposición partidaria. En sus primeros años de gobierno, sobre todo luego de su auto-golpe de 1992, Fujimori eliminó la inflación, restauró el crecimiento y la inversión, y aumentó el gasto público. Chávez no ostenta ningún logro semejante, razón por la cual el oficialismo ha perdido adherentes y sufrido deserciones importantes (Welsch 2003).

Cuadro 3: PIB per cápita, crecimiento anual (%)



La otra condición es que la oposición partidaria resultó no estar tan debilitada como se imaginó el gobierno. Los partidos de oposición habían retenido, renovado o creado arraigos electorales en las gobernaciones. Más aún, los partidos supieron compensar el deterioro de las maquinarias partidarias con la construcción de lazos nuevos con grupos diversos de la sociedad civil. Para el año 2001, la oposición partidaria estableció nexos y alianzas entre sí (Maingon 2003), y más destacadamente, con los sindicatos, los empresarios, diversas organizaciones no-gubernamentales y barriales, el sector educativo, la iglesia católica, los medios de comunicación, las universidades, antiguos colaboradores del régimen de Chávez, y militares. Muchos de estos grupos eran enemigos acérrimos entre sí, antes de Chávez. El hecho de que el oficialismo generó polémicas con cada uno de estos grupos

indudablemente facilitó la tarea de los partidos de oposición de entablar lazos con ellos.

Para principios del año 2000, la oposición ya estaba convencida que el oficialismo no era de confiar. Para el año 2002, la oposición contaba con coaliciones necesarias para poder levantarse políticamente. Pero una vez recuperada la fuerza política, la oposición cometió su principal error hasta la fecha, perder control sobre los sucesos de abril del 2002. Luego de forzar a Chávez del poder el 11 de abril del 2002, la oposición instaló un nuevo gobierno, dirigido por Pedro Carmona, que procedió a abolir la Constitución y a perseguir a los seguidores de Chávez. Carmona se convirtió instantáneamente en una réplica del monstruo contra el cual la oposición se había levantado, un oficialismo que, lejos de subsidiar la oposición, pretendía destruirla. De inmediato, Carmona perdió apoyo de la mayoría de sus colaboradores, lo que provocó su caída y el regreso de Chávez. Pero el país se quedó con el trago amargo, es decir con la impresión que tanto el oficialismo como la oposición se encontraban indispuestos a tolerarse mutuamente. Mientras cada bando mantenga dicha actitud, la posibilidad de atenuar la polarización en Venezuela es remota.

La decisión de la oposición del 2003 de optar por el referendo revocatorio para solucionar su diferencia política con el oficialismo constituye un paso correcto en favor de la despolarización política. Al aceptar someterse al referendo, la oposición está haciendo uso de instrumentos constitucionales, lo cual significa que la oposición ha por fin aceptado la Constitución que en un momento consideró inaceptable. Ello pudiera significar el inicio de un proceso de auto-transformación de la oposición, dejando de ser una fuerza desleal para convertirse en una fuerza leal. Pero todo dependerá, como dependió al principio del régimen, de la postura del oficialismo. Si el oficialismo entorpece dicho proceso electoral, entorpecerá también dicha transformación de la oposición.

5. Conclusiones

El planteamiento principal de este ensayo es que la estabilidad democrática depende no sólo del respeto a la oposición, como bien lo recalcan los teóricos liberales del siglo XVIII, sino también del subsidio político de la misma. Para que la oposición no se sienta amenazada y

temerosa por su futuro político, debe sentir que el régimen democrático le es sumamente generoso. El chavismo ha provocado inestabilidad precisamente en su incapacidad, o bien, su falta de deseo, de subsidiar la oposición.

El problema de subsidiar la oposición es complicado políticamente. Cuando existe poca asimetría entre el oficialismo y la oposición, no es tan necesario subsidiar la oposición, pues ésta ya cuenta con suficiente fuerza. En cambio, cuando la asimetría es grande, es decir, cuando la oposición es sumamente débil ante el oficialismo, es entonces que se hace más imprescindible subsidiar a la oposición. El problema es que, en dichas circunstancias, el oficialismo siente pocos incentivos para otorgar subsidios. Al contrario, el oficialismo suele opinar que nunca ha habido mejor momento para arremeter contra la oposición, ahora que se encuentra en declive. El oficialismo siente entonces la tentación de aprovechar la vulnerabilidad de la oposición para debilitarla más.

Sin embargo, el caso de Venezuela demuestra que, aun para los gobiernos hiper-mayoritarios, el otorgar subsidios a la oposición puede ser una estrategia ventajosa. Si la estrategia de desactivar la oposición fracasa, como sucedió en Venezuela entre el 2000-2002, el resultado es el surgimiento de una oposición intransigente, desleal, y capaz de derrocar el gobierno. Ningún gobierno puede funcionar bien, y difícilmente sobrevivir, con semejante oposición. Al oficialismo le conviene por lo tanto una oposición más cooperadora. Los gobiernos democráticos suelen tener más éxito cuando la oposición está dispuesta a negociar con ellos que cuando la oposición está enfrentada tenazmente. Si el oficialismo en Venezuela decide empezar a otorgarle subsidios a la oposición, o al menos, frenar su afán por desconocerla, no sería la oposición la única beneficiada. El mismo oficialismo pudiera también salir beneficiado.

Bibliografía

- Blanco, Carlos (2002): *Revolución y desilusión. La Venezuela de Hugo Chávez*. Madrid: Los Libros de la Catarata.
- Boersner, Demetrio (2003): "Dimensión internacional de la crisis venezolana". Ponencia en el simposio "Venezuela en la encrucijada", Berlín (en este volumen).
- Braig, Marianne (2003): ¿La *longue durée* del populismo o el populismo como sombra de la democracia? Ponencia en el simposio "Venezuela en la encrucijada", Berlín (en este volumen).
- Buxton, Julia (2003): "Economic Policy and the Rise of Hugo Chávez". En: Ellner, Steve/Hellinger, Daniel (eds.): *Venezuelan Politics in the Chávez Era: Class, Polarization, and Conflict*. Boulder, Colorado: Lynne Rienner, pp. 113-130.
- Canache, Damarys (2002): *Venezuela: Public Opinion and Protest in a Fragile Democracy*. Coral Gables, FL: North-South Center Press/University of Miami.
- Combellas, Ricardo (2003): "El proceso Constituyente y la Constitución de 1999". Mimeo.
- Consultores21. *Various Years*. Caracas: Public Opinion Polls.
- Coppedge, Michael (2003): "Venezuela: Popular Sovereignty versus Liberal Democracy". En: Domínguez, Jorge I./Schmitter, Philippe (eds.): *Constructing Democratic Governance in Latin America*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, pp. 165-192.
- Corrales, Javier (2001): "Strong Societies, Weak Parties: Regime Change in Cuba and Venezuela in the 1950s and Today". En: *Latin American Politics and Society*, 43, 2 (Summer), pp. 81-113.
- (2002): *Presidents Without Parties*. Pennsylvania: Penn. State University Press.
- (2003): "Power Asymmetries and Pact-Making: Revisiting and Updating the Venezuelan Case". Paper presented at the David Rockefeller Center for Latin American Studies. Cambridge, MA: Harvard University (October).
- Crisp, Brian (2000): *Democratic Institutional Design*. Stanford: Stanford University Press.
- Di Palma, Giuseppe (1990): *To Craft Democracies: an Essay on Democratic Transitions*. Berkeley: University of California Press.
- Ellner, Steve (1993): "The Venezuelan Left: From Years of Prosperity to Economic Crisis". En: Carr, Barry/Ellner, Steve (eds.): *The Latin American Left: From the Fall of Allende to Perestroika*. Boulder: Westview Press, p. 139-154.
- Falcoff, Mark (2001): "Viva Chávez!". May 21, <http://findarticles.com/p/articles/mi_m2633/is_3_15/ai_75607815/print> (25.5.2007).
- Gil Yepes, José Antonio (2003): "Public Opinion Toward the Personalities and Institutions of the Fifth Republic". Dallas, Texas: Latin American Studies Association. XXIV International Congress (March 27-29).
- Gott, Richard (2000): *In the Shadow of the Liberator*. London: Verso.
- Hellinger, Daniel (2003): "Political Overview: The Breakdown of Puntofijismo and the Rise of Chavismo". En: Ellner, Steve/Hellinger, Daniel (eds.): *Venezuelan*

- Politics in the Chávez Era: Class, Polarization, and Conflict*. Boulder, Colorado: Lynne Rienner, pp. 27-54.
- Karl, Terry (1990): "Dilemmas of Democratization in Latin America". En: *Comparative Politics*, 23, 1 (October), pp. 1-23.
- Karl, Terry Lynn/Schmitter, Philippe (1991): "Modes of Transition in Latin America, Southern Europe and Eastern Europe". En: *International Social Science Journal* 128, pp. 269-284.
- Kornblith, Miriam (1991): "The Politics of Constitution-Making: Constitutions and Democracy in Venezuela". En: *Journal of Latin American Studies*, vol. 23, Issue 1 (Febr.), pp. 61-89.
- Levine, Daniel (1998): "Beyond the Exhaustion of the Model: Survival and Transformation of Democracy in Venezuela". En: Canache, Damaris/Kulisheck, Michael (eds.): *Reinventing Legitimacy: Democracy and Political Change in Venezuela*. Westport, CT: Greenwood, pp. 187-214.
- López-Maya, Margarita/Lander, Luis (2000): "Refounding the Republic". En: *NACLA Report on the Americas*, 33, 6 (May/June).
- Maihold, Günther (2003): "¿Por qué no aprenden las élites políticas? El caso de Venezuela". Ponencia en el simposio "Venezuela en la encrucijada", Berlín (en este volumen).
- Maingon, Thais (2003): "Síntomas de la crisis y la deslegitimación del sistema de partidos en Venezuela". Ponencia en el simposio "Venezuela en la encrucijada", Berlín (en este volumen).
- Maingon, Thais/Pérez Baralt, Carmen/Sonntag, Heinz P. (2000): "La batalla por una nueva Constitución para Venezuela". En: *Revista Mexicana de Sociología*, vol. 62, num. 4 (oct.-dic.), pp. 91-124.
- O'Donnell, Guillermo/Schmitter, Phillippe (1986): *Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies*. Baltimore, Maryland: Johns Hopkins University Press.
- Penfold, Michael (1999): *Constituent Assembly in Venezuela*. Atlanta: The Carter Center.
- Przeworski, Adam (1991): *Democracy and the Market: Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America*. New York: Cambridge University Press.
- Reynolds, Andrew (2002): *The Architecture of Democracy*. Oxford: Oxford University Press.
- Roberts, Kenneth (2003): "Social Polarization and the Populist Resurgence in Venezuela". En: Ellner, Steve/Hellinger, Daniel (eds.): *Venezuelan Politics in the Chávez Era: Class, Polarization, and Conflict*. Boulder, Colorado: Lynne Rienner, pp. 54-72.
- Robinson, Linda (2003): "Terror Close to Home". En: *US News and World Report*, October 6, pp. 20-22, 24.
- Statistical Yearbook for Latin America and the Caribbean* (2002): Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Statistics and Economics Projections Division.

- Welsch, Friedrich/Camprubí, María del Pilar (2003): “Las victorias electorales de Chávez y sus bases políticas”. Ponencia en el simposio “Venezuela en la encrucijada”, Berlín (en este volumen).
- Weyland, Kurt (2002): *The Politics of Market Reforms in Fragile Democracies*. Princeton: Princeton University Press.
- Wilpert, Gregory (2003): “Collision in Venezuela”. En: *New Left Review*, 21 (May-June), pp. 101-116.

Miriam Kornblith

Elecciones y referendos en Venezuela: “¿Quién le teme al soberano?”

1. Introducción

A partir de 1958 se instauró en Venezuela un orden pluralista, caracterizado como el “sistema populista de conciliación de élites” (Rey 1989), o como la “democracia puntofijista” en alusión al Pacto de Punto Fijo suscrito en octubre de 1958 por los partidos AD, COPEI y URD. En sus primeras décadas, este orden dio lugar a la estabilidad política, al consenso interélites, a la alternabilidad democrática y a la incorporación de la población a los beneficios socioeconómicos del modelo de desarrollo. No obstante, desde finales de los años 80 el país entró en una etapa de inestabilidad, tensiones y cambios, tanto en el ámbito socioeconómico como en el político e institucional, que se ha prolongado hasta el presente. Los últimos años de esta fase, correspondientes al período presidencial de Hugo Chávez (1999-2003), han estado marcados por la confrontación y el conflicto provocado por el intento de “refundar la República”, a partir de la implantación de reglas, instituciones y actores distintos e incluso contrapuestos a aquellos que articularon a la sociedad venezolana a partir de 1958.

Las tensiones y cambios experimentados por la sociedad venezolana se expresaron consistentemente en comportamientos y resultados electorales. Desde 1958 hasta el presente en Venezuela ha habido 20 procesos comiciales de carácter nacional.¹ En este trabajo tratare-

¹ Las elecciones presidenciales y de todas las autoridades legislativas en los años 1958, 1963, 1968, 1973, 1978, 1983, 1988 y 1993 y las elecciones parlamentarias y de algunas autoridades regionales en noviembre de 1998 y las presidenciales de 1998. Las elecciones municipales de 1979 y 1984. Las elecciones de autoridades regionales en 1989, 1992, 1995. Los 3 procesos comiciales asociados con la promulgación de la Constitución de 1999: referendo nacional, elección de representantes a la Asamblea Constituyente y aprobación del proyecto de Constitución. Elecciones presidenciales, parlamentarias y algunas autoridades regionales en julio 2000 y elección de autoridades municipales y referendo sindical en diciembre 2000. Entre las experiencias frustradas se cuenta la fallida megaelección de mayo

mos de mostrar la manera en que los procesos comiciales ocurridos entre 1998 y 2000 sirvieron para expresar las preferencias colectivas y reflejaron los cambios que se fueron operando en las mismas, y hasta qué punto los mecanismos de representación existentes tradujeron adecuadamente dichas preferencias y sus cambios. Pero también examinaremos las enormes dificultades que está confrontando la sociedad venezolana en la actualidad, para volver a traducir adecuadamente sus preferencias a través de mecanismos electorales, que permitan adecuar los cambios en el ánimo colectivo en nuevas correlaciones de fuerza, más cónsonas con las actuales preferencias, luego de 5 años de ejercicio gubernamental del presidente Chávez y de su coalición. Esos esfuerzos se han expresado recientemente en la promoción del referendo revocatorio presidencial como mecanismo institucional para promover la salida de Chávez del poder.

Partimos del supuesto de que un ajuste apropiado entre las preferencias colectivas y las autoridades electas y sus decisiones produce una mayor satisfacción con el sistema político y sus productos; por el contrario, si dicha relación se distorsiona o los esquemas de representación no son capaces de recoger con fidelidad las preferencias y expectativas colectivas, se produce una desafección respecto del sistema político y el rechazo a su liderazgo. En las páginas que siguen examinaremos esta dinámica a la luz de los resultados de la variedad de comicios ocurridos entre 1989 y el año 2000, y los intentos por activar salidas electorales entre los años 2002 y 2003.

2. Las elecciones de 1998, el ascenso de Chávez y el desplazamiento del liderazgo tradicional²

En materia político-electoral el año 1998 se caracterizó por la ocurrencia de situaciones inéditas y por importantes transformaciones en la organización de los comicios, en la dinámica partidista y de las candidaturas del proceso electoral y en los resultados que emergieron del mismo.

Uno de los cambios más importantes fue la conformación del llamado Polo Patriótico, alianza partidista estructurada en torno a la can-

2000 y el truncado referendo consultivo previsto para febrero 2003, y el rechazo a la solicitud de referendo revocatorio presidencial de septiembre de 2003.

2 Las páginas que siguen se apoyan ampliamente en Kornblith (2003b; 2003c).

didatura de Hugo Chávez. Como es bien conocido, el ingreso de Chávez al escenario público venezolano ocurrió a raíz del fracasado intento golpista del 4 de febrero de 1992. Si bien la asonada no logró sus objetivos desde el punto de vista militar, derivó en un éxito político para sus principales promotores, que rápidamente despertaron simpatías entre la población desencantada con el pobre rendimiento económico del país, acumulado desde inicios de los años 80 y con las carencias del liderazgo tradicional, tanto en el ámbito partidista, como en otras áreas del acontecer nacional. Los principales líderes del movimiento insurgente, los oficiales activos Hugo Chávez Frías, Francisco Javier Arias Cárdenas, Urdaneta Hernández y Joel Acosta Chirinos fueron juzgados y sentenciados a prisión, junto con un numeroso grupo de oficiales que participaron en la intentona.

A inicios del año 1994, bajo la presidencia de Caldera, los insurgentes fueron sobreseídos y dados de baja de las Fuerzas Armadas. Mientras que Arias Cárdenas y otros dirigentes optaron por participar en la vida democrática, al punto Arias incursionó exitosamente como candidato a gobernador en el estado Zulia en los comicios de 1995, logrando la victoria con el apoyo de La Causa Radical (LCR), Chávez se mantuvo en la línea de la abstención. No obstante hacia mediados de 1997 cambió su estrategia política, se asoció con diversas individualidades y organizaciones civiles y optó por la vía electoral. Se estructuró y legalizó el partido Movimiento Quinta República (MVR) y se inició su consistente ascenso en las encuestas de opinión pública. El Polo Patriótico agrupó al naciente partido MVR y a organizaciones tradicionales como el MAS (Movimiento al Socialismo), PCV (Partido Comunista de Venezuela), Movimiento Electoral del Pueblo (MEP) y otros grupos como el PPT (Patria para Todos) y cuatro pequeñas agrupaciones.³

El partido COPEI (Comité de Organización Político Electoral Independiente) eligió como candidata presidencial a una independiente, Irene Sáez, ex Miss Universo y exitosa alcaldesa de Chacao, quien ostentaba altos niveles de popularidad en las encuestas preelectorales. AD (Acción Democrática) seleccionó a su máximo dirigente partidista y secretario general Alfaro Uceró, cuyas primeras incursiones en la

3 Información y análisis de la conformación política, organizativa e ideológica de este movimiento en: Blanco Muñoz (1998); Garrido (1999; 2000) entre otros.

vida política nacional databan de los años 40. El recién formado partido Proyecto Venezuela, expresión nacional del partido regional Proyecto Carabobo, designó a Henrique Salas Romer como su candidato presidencial, exitoso ex gobernador del estado Carabobo. La Causa R inicialmente apoyó a Irene Sáez, y luego resolvió lanzar su propia candidatura con Alfredo Ramos. Se postularon 16 candidatos presidenciales, pero entre renuncias y otras eventualidades la lista se redujo a 11. A diferencia de los comicios previos, el cuadro de candidaturas reflejaba la prominencia de individualidades provenientes de organizaciones no tradicionales o independientes de los partidos políticos.

El área propiamente electoral también experimentó cambios significativos. En diciembre de 1997 se promulgó la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política (LOSPP), en la cual se introdujeron importantes innovaciones. Entre las más destacadas se cuenta la automatización del proceso electoral, en las fases de votación, escrutinio, totalización y adjudicación. La despartidización de los organismos electorales, a partir de la incorporación de ciudadanos independientes como autoridades del organismo central, el CNE (Consejo Nacional Electoral), y la selección por sorteo de los miembros de las juntas electorales estatales y municipales y las mesas de votación. La consagración del derecho al sufragio de los venezolanos residentes en el exterior y la inclusión del referendo consultivo para materias de alcance nacional.

Debido a la coincidencia de las elecciones nacionales y regionales en diciembre de 1998, el Congreso resolvió en mayo de 1998 separar los comicios. Se decidió que las elecciones del Congreso, gobernadores y asambleas legislativas de los estados tuvieran lugar en noviembre de 1998 y las presidenciales en diciembre de 1998, dejando para el segundo semestre de 1999 la elección de los concejos municipales y juntas parroquiales.

Diversos sectores políticos e institucionales, incluyendo la directiva del CNE, abogaron a favor de la separación de las elecciones. El principal argumento era la necesidad de preservar la autonomía y visibilidad de la elección regional, en sintonía con el proceso de descentralización. Se argumentaba que el influjo de las elecciones nacionales sobre las demás, particularmente de la presidencial, le restaría independencia y relevancia a los comicios regionales. Se destacó que la profusión de opciones y candidaturas confundiría al elector, impidién-

dole una escogencia bien informada y reflexiva. También se planteó que la organización del proceso comicial y el acto de votación en elecciones conjuntas se dificultarían tanto que podrían afectar su viabilidad. Aceptada la necesidad de la separación de los comicios, el orden en que éstas debían ocurrir generó ásperas polémicas.

El esquema propuesto en el Congreso obedeció al interés de los partidos dominantes de asegurar posiciones de poder en el ámbito parlamentario y regional frente a la creciente consolidación y ascenso de la candidatura de Chávez, que percibían como peligrosa para la estabilidad y permanencia del orden democrático, y para su propia supervivencia. Se pensaba que si la elección presidencial tenía lugar primero, una intención de voto favorable a Chávez, como consecuencia del llamado “efecto portaviones”, determinaría la escogencia de los representantes al parlamento y a los gobiernos regionales, generando en toda la estructura político-administrativa una correlación de fuerzas favorable a la misma. Por el contrario, se argumentaba que si los comicios parlamentarios y regionales ocurrían en primer lugar, el votante estaría en mejores condiciones para diferenciarlos de la elección presidencial y para apoyar a los liderazgos locales y parlamentarios de manera más autónoma. Diversos sectores políticos y de la opinión pública cuestionaron este esquema por considerarlo ventajista, sin embargo así fue aprobado y llevado a cabo. Así, por primera vez en la historia comicial del país desde 1958, tuvo lugar una elección presidencial aislada del resto y hubo dos elecciones en un mismo año.

Las vicisitudes de la dinámica político-electoral y de la campaña condujeron a otras situaciones inéditas y dramáticas. Faltando muy pocos días para la realización de la elección presidencial, los partidos AD y COPEI le retiraron el soporte a sus respectivos candidatos y apoyaron a Salas Romer, contra quien se habían opuesto acerbamente hasta pocas semanas antes. Todo ello generó gran confusión e irritación en el electorado, el cual se volcó a favor de la candidatura de Chávez. Así, nuevamente por primera vez desde 1958, los grandes partidos tradicionales se presentaron a la contienda sin candidato propio y le endosaron sus votos a un candidato ajeno.

Los acomodos del cronograma electoral, las decisiones iniciales acerca de las candidaturas y los cambios de última hora, fueron una expresión vívida del estado de confusión y de decaimiento en que se encontraban las organizaciones partidistas tradicionales y, por otro

lado, del significativo reto que les plantearon las opciones emergentes. En los sondeos de opinión se fue consolidando un apoyo consistente a las organizaciones y candidatos que representaban una ruptura con el pasado. No obstante, hay que destacar que las innovaciones introducidas en la ley del sufragio vigente y que se pusieron en marcha en los comicios de 1998 expresaban tendencias también presentes entre porciones de ese liderazgo, y que apuntaban hacia el refrescamiento de las reglas electorales y la actualización institucional del país.

2.1 Las elecciones parlamentarias y regionales de noviembre de 1998

Al examinar los resultados de las elecciones legislativas de noviembre de 1998 destacan varios aspectos. Por un lado, el rápido crecimiento y “posicionamiento” de los partidos Proyecto Venezuela (PV) y sobre todo MVR, que por primera vez participaban en la competencia electoral nacional. Otro rasgo fue la nueva reducción del volumen sumado de votos y de escaños de los partidos AD y COPEI, fenómeno que había ocurrido con fuerza en las elecciones de 1993. Esta vez ambas agrupaciones concentraron el 36,1% de los votos lista a la cámara de diputados, aunque por efecto del sistema electoral alcanzan el 43,5% de los puestos. Se evidenció en esos comicios la fragilidad de la implantación de los partidos LCR y Convergencia que habían obtenido altas votaciones en 1993 y que disminuyeron severamente su caudal electoral 5 años después, aunque parte de la votación de LCR se dirigió hacia los candidatos del PPT, partido que resultó de una escisión de LCR. Por último, el MAS logró una votación algo inferior a la obtenida en 1993, con lo que su vinculación con el Polo Patriótico no incrementó su caudal electoral.

La votación para elegir a los representantes de la cámara de diputados de los partidos muestra cambios importantes en las preferencias de los electores. La votación sumada de AD y COPEI alcanzó el 36% del total, mientras que los votos combinados de MVR (19,9%) y PV (10,4%), los nuevos partidos con votación significativa de esta contienda, superaron ligeramente el 30% del total. Si bien estos porcentajes no se tradujeron exactamente en la distribución de escaños dentro del Congreso, sí se observa cómo las fuerzas emergentes siguen desplazando a las tradicionales, produciéndose así un resultado semejante al de 1993, aunque con diferentes partidos nuevos. Ello nos lleva a

llamar la atención sobre un rasgo muy destacado por Molina Vega (2001), como es el de la volatilidad del electorado y la desalineación partidista, que provocaron el surgimiento de un sistema multipartidista inestable de difícil consolidación, a diferencia del bipartidismo estable que caracterizó la dinámica partidista desde 1973 hasta 1988. Y desde luego, insistir en la ratificación de la tendencia al desalojo y sustitución de los partidos tradicionales por fuerzas emergentes.

En la elección de gobernadores también ocurrió una nueva alineación de fuerzas. De un total de 23 gobernaciones (se agregó el recién creado estado Vargas), los candidatos del partido AD triunfaron en 8 estados y los de COPEI en 4 y en alianza, en 1 estado. Los partidos asociados al Polo Patriótico triunfaron 7 gobernaciones, correspondiéndole 1 al MVR, 3 al MAS, 3 al PPT. Por su parte PV repitió su victoria en Carabobo, Convergencia se mantuvo en Yaracuy y en el Zulia ganó nuevamente Arias Cárdenas, apoyado por una amplia alianza que incluyó al MVR, COPEI, LCR y al partido Integración, Renovación y Nueva Esperanza (IRENE).

De ambos grupos de resultados electorales emergió un nuevo panorama político-electoral, en el que compartían posiciones de poder de manera relativamente equilibrada los partidos tradicionales y los grupos emergentes, destacando el rápido crecimiento de los últimos, así como el sensible debilitamiento de las opciones que en 1993 tuvieron ese carácter, los partidos Convergencia y LCR. Los resultados de las elecciones de noviembre de 1998 también muestran que en las regiones más pobladas ganaron posiciones las nuevas fuerzas en detrimento de las tradicionales. Si bien estos resultados no fueron concluyentes en términos de la implantación definitiva del Polo Patriótico o del desplazamiento definitivo de los partidos tradicionales, anunciaron un cambio en la correlación de fuerzas y alertaron a los sectores tradicionales acerca de la implantación de Chávez y de su coalición.

2.2 Las elecciones presidenciales de diciembre de 1998

Los evidentes avances del Polo Patriótico, la limitada votación del partido PV, el sólido apoyo a la candidatura de Chávez reflejada en los diversos sondeos de opinión, el decaimiento de la candidatura de Irene Sáez, la falta de arraigo de Alfaro Ucero, la marcada polarización del ambiente político-electoral generaron una dinámica muy par-

ricular entre las elecciones de noviembre y las de diciembre de 1998. Los partidos AD y COPEI resolvieron retirar su respaldo a sus respectivos candidatos y apoyar la candidatura de Salas Romer. El cálculo fue que la votación sumada de los partidos y candidatos asociados con esas agrupaciones superaría a la de Chávez. Si bien en términos aritméticos había elementos de juicio para llegar a esa conclusión, la realidad produjo un resultado muy diferente.

No obstante, la decisión de última hora de apoyar a Salas Romer, crítico severo del bipartidismo de AD y COPEI, contra quien estos partidos se habían enfrentado hasta con mayor fuerza que contra el propio Chávez, generó un sentimiento de desconcierto y rechazo en la población, que se volcó a votar a favor de Chávez. Igualmente, el incremento de la votación entre uno y otro proceso, al bajar la abstención del 46% al 37%, fue absorbido mayoritariamente por Chávez.

Finalmente resultó una contienda altamente polarizada en la que los 2 candidatos más votados, ambos representantes de sectores emergentes, obtuvieron el 96,17% de los votos. Al igual que en las elecciones de 1993, las preferencias de los electores se orientaron tempranamente a favorecer a las opciones más cuestionadas del *status quo*, prevaleciendo el candidato con el discurso y prácticas más radicales, Chávez Frías. Aquel 52,41% del electorado que en 1993 votó a favor de los candidatos anti-sistema, en 1998 se volcó hacia Chávez, quien obtuvo el 56,2% de los votos, proveniente de 3.673.685 electores, equivalente al 33,43% de los electores inscritos.⁴

Frente a estos resultados electorales caben varias consideraciones. Una de ellas es preguntarse si la estrategia diseñada por los partidos tradicionales de separar las elecciones colocando en primer lugar los

4 Luego de estas elecciones y las del año 2000 se transmitió, nacional e internacionalmente, la impresión de que se trataba de la votación más alta obtenida por candidato presidencial alguno en el país. En honor a la verdad y sin pretender subestimar la importancia del caudal electoral obtenido por Chávez en los comicios de 1998 y 2000, cabe destacar que la votación obtenida por Jaime Lusinchi en 1983 llegó a 3.773.731 equivalentes al 56,72% de los sufragios con una abstención del 12,25%. Por su parte, la votación obtenida por Carlos Andrés Pérez en 1988 alcanzó 3.868.843 votos equivalentes al 52,89% con una abstención del 18,08%. En términos relativos y por efecto de la alta abstención, los votos absolutos obtenidos por Chávez eran equivalentes al 33,43% del total de los electores inscritos, a diferencia del 49,77% y del 43,32% obtenidos por Lusinchi y Pérez respectivamente.

comicios parlamentarios y regionales produjo los efectos esperados. El objetivo de preservar la autonomía de las elecciones regionales y parlamentarias y promover de ese modo la votación a favor de los liderazgos, tradicionales o no, en dichos ámbitos, se logró. Probablemente, la polarización de las preferencias en torno a la elección presidencial sí hubiese desdibujado la naturaleza de los comicios regionales y reducido las oportunidades de los líderes regionales asociados con organizaciones tradicionales, de modo que aunque el clima político general influyó sobre los resultados electorales, no los desnaturalizó por completo. No obstante, la estrategia adoptada no fue eficaz para detener el avance de la candidatura de Chávez, menos aún luego del confuso episodio del retiro del apoyo partidista a las candidaturas de Alfaro Uceró y de Irene Sáez.

La realidad sociológica del cambio de las preferencias electorales, la nueva volatilidad del electorado y el desplazamiento del apoyo al binomio AD-COPEI, el surgimiento de nuevos actores y del atractivo generado por opciones enfrentadas al *status quo* eran rasgos que estaban firmemente arraigados en el nuevo comportamiento electoral del venezolano, y venían expresándose consistentemente a lo largo de los años 90. En ese contexto, las maniobras político-electorales de última hora tuvieron un alcance limitado, e incluso un efecto contraproducente.

3. La “refundación de la República” y el proceso constituyente⁵

El claro triunfo electoral de Chávez y de sus aliados trajo cambios rápidos en la dinámica sociopolítica. Las fuerzas emergentes accedieron al gobierno con un proyecto de poder madurado durante varios lustros, desde sus tiempos conspirativos dentro de las Fuerzas Armadas. La realización de una Asamblea Constituyente para “refundar la República” fue la principal promesa electoral de Chávez y de su coalición, y apenas llegados al poder se activaron los mecanismos para su convocatoria. Ya para el 19 de enero de 1999, en respuesta a dos re-

5 La “refundación de la República” fue un tema de la campaña electoral, con el que se sintetizó la idea de transformar las bases de ordenación de la sociedad venezolana. En la Constitución vigente se consagró esta idea en el Preámbulo afirmando: “El pueblo de Venezuela, ... con el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, ... decreta la siguiente Constitución” (énfasis mío).

cursos de interpretación, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se había pronunciado favorablemente en torno a la posibilidad de utilizar el referendo consultivo previsto en la ley del sufragio vigente para convocar una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), aun cuando dicha figura no existía en la Constitución de 1961. El mismo día de la toma de posesión, el 2 de febrero de 1999, el recién proclamado presidente emitió un decreto solicitando la consulta popular acerca de la convocatoria de una Asamblea Constituyente, horas después de haber aceptado las obligaciones inherentes a su cargo jurando sobre la “moribunda” Constitución de 1961. Con estos eventos se inició el proceso constituyente venezolano, que marcó la dinámica sociopolítica del año 1999, y más allá.

3.1 Los comicios del proceso constituyente

El proceso constituyente se realizó en tres fases comiciales. El referendo del 25 de abril de 1999 para consultar al electorado acerca de la convocatoria de una ANC; la elección de los representantes a la ANC el 25 de julio de 1999 y el referendo del 15 de diciembre de 1999 para aprobar el proyecto de Constitución elaborado por la ANC. Cada proceso comicial tuvo sus particularidades y aportó su especificidad a la dinámica sociopolítica del país, pero como balance general se puede afirmar que en cada uno de ellos se fue afianzando el apoyo a Chávez y a su proyecto, al tiempo que la dinámica de las fuerzas que se le oponían también fue adquiriendo nuevos matices.

Luego de superar diversos obstáculos jurídicos, el 25 de abril de 1999 tuvo lugar el referendo para consultar al electorado acerca de la convocatoria de una ANC. Los votantes debieron responder 2 preguntas: La primera

¿Convoca usted una Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de transformar el estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que permita el funcionamiento efectivo de una democracia social y participativa?

Y la segunda referida a la aprobación de las bases comiciales para la elección de los miembros de la ANC. Este fue el primer referendo consultivo de carácter nacional convocado y realizado en el país. Los resultados del referendo mostraron aspectos relevantes de la nueva dinámica sociopolítica. La abstención llegó al 62,3%, el mayor nivel

de la historia comicial del país hasta ese momento, no obstante la baja participación no deslegitimó ni obstruyó la marcha del proceso constituyente. Los resultados por el “Sí” ratificaron la votación obtenida por Chávez en diciembre de 1998, llegando a 3.630.666 en la primera pregunta y 3.275.716 en la segunda, mientras que el “No” obtuvo 300.233 votos en la primera pregunta y 512.967 votos en la segunda. Los sectores que se oponían a Chávez se encontraban en su menor nivel de articulación y muy desmoralizados frente a los resultados de diciembre, en su mayoría optaron por abstenerse y no se estructuraron en una campaña a favor del rechazo a la convocatoria de una ANC.

Ni en este proceso ni en los siguientes que tuvieron lugar en 1999 y 2000 los sectores opositores a Chávez y su proyecto lograron igualar o superar el caudal de votos obtenidos por la candidatura de Salas Romer o mantener todas las votaciones importantes en el ámbito regional logradas en noviembre de 1998, aunque en los siguientes episodios comiciales fue mejorando su desempeño. Ello evidenció que el triunfo electoral de Chávez y del Polo Patriótico no era un fenómeno efímero o un producto circunstancial de equivocados cálculos coyunturales, sino que se enlazaba sustancialmente con las diversas expresiones de búsqueda de cambio que venían ocurriendo desde finales de los años 80 y que tuvieron consistentes expresiones electorales.

El 25 de julio de 1999 tuvo lugar la elección de los representantes a la ANC. Este proceso se salió de los patrones convencionales por diversas razones. El aspecto más importante fue el relacionado con el sistema electoral adoptado para seleccionar a los representantes, aprobado en el referendo de abril de 1999. Se trataba de un sistema mayoritario, basado en una circunscripción nacional de 24 candidatos y 24 circunscripciones regionales con un número variable de candidatos dependiendo de la población de cada entidad, junto con la designación de 3 representantes indígenas de acuerdo con sus “usos y costumbres ancestrales”. Este esquema se alejaba drásticamente de las fórmulas empleadas para elegir los representantes a los cuerpos colegiados desde 1958, basadas en el principio de la representación proporcional y que estaban consagradas en la Constitución y la ley del sufragio vigentes. El resultado fue una exagerada sobrerrepresentación de la mayoría, lo que significó que los candidatos del Polo Patriótico obtuvieron el 95% de los miembros a la ANC a partir de una votación que rondaba el 65% del total. Así, de los 131 miembros de la ANC,

122 provenían de la lista del Polo Patriótico y 3 eran diputados indígenas (que también estaban identificados con el Polo Patriótico). En este proceso la abstención alcanzó el 54%.

Para llegar a este resultado influyeron importantes circunstancias. Por un lado, no se examinaron a fondo las implicaciones y consecuencias del sistema electoral adoptado, de modo que importantes sectores de la opinión pública, incluidos los de oposición, lo apoyaron entusiastamente. Desde mediados de los años 80, la llamada uninominalidad y la personalización del voto, en contraposición a la representación proporcional con listas bloqueadas y cerradas, habían sido propuestas enarboladas por diferentes sectores sociales y políticos como banderas de lucha en contra del bipartidismo y sus desviaciones. No obstante, debido a la falta de experiencia y escasa comprensión del sistema electoral adoptado, diversos grupos e individualidades asociados a la oposición apoyaron las nuevas reglas, pero actuaron como si la regla vigente aun era la de la representación proporcional. Se presentaron de manera dispersa cerca de 1.000 candidatos de oposición, la mayoría de los cuales se postularon por “iniciativa propia” aun cuando tenían activos vínculos partidistas y la mayor parte de estos candidatos compitieron entre sí para captar el voto del mismo electorado.

Por el contrario, el oficialismo actuó con extrema eficacia maximizando sus posibilidades electorales al presentar una lista única de 124 candidatos distribuidos a lo largo del territorio en zonas electorales, los llamados “Kinos Chávez”. Esta estrategia le permitió obtener el máximo provecho del sistema electoral y colocar una mayoría absoluta de sus representantes en la ANC. Con esta adecuada estrategia, el oficialismo aprovechó eficazmente la alta aceptación que aun tenía entre la población y potenció sus oportunidades electorales. No obstante, también hay que destacar que las autoridades públicas identificadas con el oficialismo actuaron de manera abiertamente parcializada, participaron en actos proselitistas y utilizaron recursos e instalaciones públicas para promover sus candidatos a la ANC, en contravención evidente de las normas electorales y las referidas al manejo de la administración pública.⁶

6 La situación llegó a tales extremos que el CNE resolvió sancionar al presidente de la República con la multa correspondiente, por contravenir la ley del sufragio

Lograr el control político de la ANC a través de la presencia de una representación abrumadoramente mayoritaria lució como un triunfo de la coalición gobernante, y le garantizó gran holgura para consagrar un texto constitucional acorde con su proyecto político. No obstante ese control hegemónico generó consecuencias negativas sobre las relaciones internas del bloque oficialista y sobre la posterior aceptación del texto resultante. La propia dinámica de las deliberaciones hizo que afloraran o que se evidenciaran desavenencias importantes al interior del Polo Patriótico, más que diferencias entre oficialismo y la mínima bancada opositora (Viciano Pastor/Martínez Dalmau 2001). Por otro lado, el déficit de representación de amplios sectores redundó en que el texto resultante fuera percibido como la expresión del proyecto político del presidente Chávez y de su coalición, y no como el reflejo de las aspiraciones del conjunto de la sociedad. A diferencia de la Constitución de 1961, la de mayor duración en nuestra historia republicana, que fue el resultado de un amplio consenso entre sectores divergentes y que comenzó a ser cuestionada luego cerca de tres décadas de vigencia, la duración y aceptación de la de 1999 pareciera estar asociada a las vicisitudes y estabilidad del gobierno de Chávez.

Una vez instalada la ANC a inicios de agosto de 1999, al discutir su reglamento interno se autodefinió como “originaria”. Desde la campaña electoral, el proceso constituyente estuvo signado por la discusión acerca de los límites y alcances de la ANC, de su carácter originario o derivado, y por la definición de las competencias de los poderes constituidos frente al poder constituyente. Aun cuando en sucesivas decisiones la CSJ estableció los límites de la ANC, después de instalarse se declaró originaria y, por tanto, libre de las ataduras que le imponía la Constitución de 1961 y el entramado institucional existente.⁷

que prohíbe la participación de funcionarios públicos en la realización de campañas proselitistas en el ejercicio de sus cargos.

- 7 El artículo 1 del Estatuto de Funcionamiento de la ANC establecía: “La ANC es la depositaria de la voluntad popular y expresión de su soberanía con las atribuciones del poder originario para reorganizar el Estado venezolano y crear un nuevo ordenamiento jurídico democrático. La Asamblea, en uso de las atribuciones que le son inherentes, podrá limitar o decidir la cesación de las actividades de las autoridades que conforman el Poder Público. [...] Todos los organismos del Poder Público quedan subordinados a la ANC [...] La Constitución de 1961 y el resto del ordenamiento jurídico imperante, mantendrán su vigencia en todo aquello

La ANC asumió radicalmente su carácter originario. En su primer mes de actividad, la ANC centró su atención en la discusión del reglamento interno, en la organización de sus actividades, y en la evaluación de la posibilidad de intervenir o disolver los poderes judicial y legislativo. Desde temprano también se evidenció que el proceso constituyente y la ANC fueron concebidos como fórmulas para producir rápida y eficazmente cambios en la correlación de fuerzas existente derivada de las elecciones de noviembre de 1998, a fin de trascender esos resultados y profundizar los de diciembre de 1998. Igualmente, a través de la ANC se promovieron nuevas figuras, hasta ese momento desconocidas para el amplio público, y que comenzaron a formar parte de la nueva clase política.⁸ De este modo la ANC también le otorgó visibilidad y protagonismo a un nuevo liderazgo, opacando a la dirigencia tradicional.

La ANC fue utilizada como una poderosa herramienta política. Tuvo varias funciones, hábilmente concebidas y empleadas por la nueva coalición gobernante en función de sus objetivos de poder: fue un instrumento para reordenar jurídica e institucionalmente el Estado aun antes de promulgada la Constitución; sirvió para trastocar la correlación de fuerzas existente y fortalecer a los sectores emergentes; se usó para promover nuevos líderes políticos y desplazar a los existentes, y –casi secundariamente– redactar una nueva Constitución, con el propósito de generar un nuevo conjunto de reglas, valores, actores e instituciones para trastocar las bases tradicionales de ordenación de la sociedad venezolana. La función de elaboración constitucional propiamente dicha fue abordada de forma apresurada, sacrificando la discusión sistemática y la consistencia del texto, al punto que se publicaron varias versiones de la Constitución en diferentes fechas, cada una con cambios de forma y de fondo (Combellas 2001).

En el ejercicio de la función política, una de las decisiones más discutibles y que generó una fuerte reacción nacional e internacional fue el intento de disolver el poder legislativo. Luego de una transacción entre sectores oficialistas y de oposición se mantuvo el funcionamiento de la Comisión Delegada y otras comisiones del Congreso,

que no colida o sea contradictorio con los actos jurídicos y demás decisiones de la ANC”.

8 Un examen de algunos rasgos de esta nueva clase política en Martínez Barahona (2002).

lo que redujo esa instancia a una mínima expresión. Esta decisión de la ANC fue respaldada por una polémica sentencia de la Sala Plena de la CSJ, a través de la cual se consagró la llamada *supraconstitucionalidad* de las decisiones y actuaciones de la ANC, como respuesta al intento de impugnar la decisión de la ANC (TSJ 2000). Esta polémica decisión de la CSJ sirvió para legitimar desde el poder judicial las actuaciones ya emprendidas por el cuerpo constituyente, en ámbitos distintos a los de la estricta elaboración constitucional, como fueron la intervención en los poderes públicos y la destitución y designación de los titulares de los mismos.

El tercer episodio comicial del proceso constituyente tuvo lugar el 15 de diciembre de 1999, coincidiendo con el trágico deslave del estado de Vargas y las torrenciales lluvias de otros estados del país. Los resultados nuevamente favorecieron ampliamente al oficialismo, pero esta vez la oposición se estructuró con cierta eficacia alrededor del “No”, mejorando su desempeño respecto del referendo de abril. La pregunta sometida a la consideración del electorado fue: “¿Aprueba usted el proyecto de Constitución elaborado por la Asamblea Nacional Constituyente?” la respuesta favorable obtuvo 3.301.475 votos, equivalente al 71,78% del total de votos válidos y el “No” obtuvo 1.298.105 votos, equivalentes al 28,22% de los votos válidos. La abstención se ubicó en un 56%.

El remate de la operación de ocupación de los poderes públicos a través del proceso constituyente se produjo en las semanas finales de diciembre de 1999, durante el aparente limbo jurídico producido después de la aprobación popular de la nueva Constitución, pero antes de su entrada en vigencia al publicarse en la Gaceta Oficial. En esos días, la ANC destituyó a todos los titulares de los poderes públicos (a excepción del presidente de la República), incluyendo al Fiscal, Contralor, Poder Legislativo, Poder Judicial, Consejo Nacional Electoral y los sustituyó por nuevas autoridades identificadas con el oficialismo y designó a la titular de la recién creada Defensoría del Pueblo.

La sentencia sobre la *supraconstitucionalidad* liberaba a la ANC de las ataduras impuestas por el orden político-institucional existente, a su vez el proyecto de Constitución aprobado el 15 de diciembre de 1999 establecía que la nueva Constitución entraba en vigencia el día de su publicación en la Gaceta Oficial. Así, en medio del estupor nacional que produjo la devastación ocasionada por el deslave natural en

el estado Vargas, se retrasó intencionalmente la publicación en Gaceta Oficial de la nueva Constitución hasta el día 29 de diciembre de 1999, y en esos días se decidió la destitución y designación de los ocupantes de los poderes públicos, al margen de las disposiciones contenidas tanto en la Constitución de 1961, como en la recién refrendada. Así, amparados en la llamada *supraconstitucionalidad* de sus actuaciones, desde la ANC se completó la redefinición de la correlación de fuerzas en los poderes públicos, acomodándola a favor del oficialismo.

Al efectuar el balance de estos tres procesos comiciales y teniendo como referencia los del año 1998, destacan nuevas características de la dinámica sociopolítica venezolana. Las fuerzas emergentes se impusieron con fuerza y rapidez en el escenario político y aprovecharon el inicial apoyo popular para profundizar y potenciar su capacidad de ocupar posiciones de poder, más allá de lo que derivaba naturalmente del cuadro electoral resultante de las elecciones de noviembre y diciembre. En apenas un año habían aprobado una nueva Constitución y en el transcurso del proceso constituyente desplazaron a los sectores políticos tradicionales y se conformaron como una nueva clase política. Lo que el Polo Patriótico no logró a través de los comicios de 1998, lo obtuvo a través del proceso constituyente, como la casi inhabilitación del Congreso y la intervención del Poder Judicial. La otra cara de esta realidad era el estado de desarticulación, zozobra y desconcierto en que estaban sumidos los actores tradicionales, que quedaron duramente golpeados frente a los resultados electorales de 1998 y avasallados por el empuje de las nuevas fuerzas en el poder.

La audacia, novedad y discutible legalidad de muchas de estas acciones desconcertaron a los actores tradicionales, lo que sumado al atractivo que aun ejercía el nuevo presidente y sus aliados desencadenó una dinámica sociopolítica marcada por la confrontación y el acorralamiento de los sectores enfrentados a los nuevos ocupantes del poder. La alineación de los poderes públicos en función de los intereses del proyecto político de la “quinta república” y de sus promotores, produjo decisiones favorables a la implantación del nuevo proyecto. La dinámica del consenso característica de la llamada “democracia puntofijista” fue sustituida por la exacerbación de las diferencias, la exclusión política y el deslinde radical entre las fuerzas asociadas a los sectores emergentes vinculados con el nuevo proyecto político y el

liderazgo tradicional, no sólo en el ámbito político, sino en las esferas económica, eclesiástica, militar, sindical, educativa, mediática, etc.

La vía electoral resultó altamente eficaz para legitimar en su origen a los nuevos ocupantes del poder, y el apoyo de la población actuó como pretexto para traspasar las barreras discursivas e institucionales habituales y para forzar las barreras legales. En este año se implantaron los cimientos de un proyecto sociopolítico con aspiraciones de largo plazo, que se basó en la expectativa de cambio presente en la población durante al menos una década y que permitió la aceptación desprevenida de muchos excesos y distorsiones, no necesariamente incluidas en la agenda de las aspiraciones populares. No obstante, la reacción en contra de las rupturas, desviaciones y vicios no deseados tardó en consolidarse y en expresarse como sentimiento mayoritario; más bien predominaba en amplios sectores la impresión de la existencia de una adecuada relación entre sus preferencias y votos y el esquema de poder resultante de los procesos comiciales de 1998 y 1999.

4. El año 2000: la relegitimación de los poderes públicos

La idea de convocar nuevas elecciones estaba presente en el ambiente oficialista aun antes de aprobarse la nueva Constitución. Esta decisión planteó un conjunto de interrogantes: ¿por qué si acababan de tener lugar elecciones en 1998 se requería elegir nuevamente a las mismas autoridades?, ¿por qué las decisiones asociadas con la puesta en marcha del nuevo proceso comicial se tomaron de manera tan apresurada, y contraviniendo disposiciones legales y acuerdos societales existentes?, ¿por qué las fuerzas de la coalición gobernante adoptaron una estrategia relativamente riesgosa, de someterse nuevamente a la prueba del favor popular, cuando ya tenían aseguradas importantes posiciones de poder, como la presidencia de la República?.

Desde el punto de vista legal y constitucional se justificó esta decisión argumentando que se debían adecuar los períodos y funciones de las autoridades electas a las nuevas disposiciones del texto. Por ejemplo que se debía cambiar la estructura parlamentaria, que pasó de ser bicameral a ser unicameral, y garantizar la inclusión de la representación indígena. Una consideración que ejerció un gran peso en la decisión de convocar nuevas elecciones fue la posibilidad de alargar el período presidencial, con lo cual el presidente Chávez tendría la oportu-

tunidad de iniciar un nuevo período de 6 años, que no se sumaría al tiempo de mandato que ya llevaba.

Otras consideraciones de mucho peso estaban asociadas con las realidades políticas del momento y las posibilidades de implantación del nuevo proyecto sociopolítico. Como sabemos, las elecciones de diciembre de 1998 habían producido un poder ejecutivo dominado por Chávez y su coalición, mientras que como resultado de las elecciones de noviembre de 1998 en el parlamento y en el ámbito regional el Polo Patriótico no había resultado el boque mayoritario y las fuerzas tradicionales aun conservaban importantes cuotas de poder. Por otro lado, la estructura de poder a nivel municipal, alcaldías y concejos municipales, estaba más desfasada aun, puesto que derivaba de las elecciones de 1995. Así, la nueva convocatoria a elecciones generales o la llamada “relegitimación de poderes” se justificó y por la necesidad de alinear y sintonizar la correlación de fuerzas en los poderes públicos y en la estructura político-administrativa central, regional y local, asegurando el predominio del Polo Patriótico a lo largo y ancho de dicha estructura y para consolidar el desplazamiento de las fuerzas contrarias.

Otro aspecto relevante se refería al apoyo electoral con que contaba el oficialismo. A pesar de las apariencias, el caudal electoral del gobierno era limitado. En todos los procesos efectuados en 1998 y 1999 la votación a favor del presidente y de las fuerzas vinculadas al Polo Patriótico se ubicaba en alrededor de un tercio del electorado. Así, la votación obtenida por Chávez, los 3.673.685 votos equivalían al 33,43% del electorado total, y en diciembre de 1999 los votos a favor del “sí” (asimilable al voto oficialista) representaba el 30,18% del total de electores inscritos. Si bien se trataba de una votación superior a la del resto de los factores, lucía escasa frente al ambicioso propósito de “refundar la república” y de trastocar las bases de ordenación de la sociedad venezolana. Ello llevaba a la necesidad de maximizar las potencialidades de esos votos, transformando el 33% del apoyo electoral en un volumen próximo al 100% de los cargos en los poderes públicos. Desde la óptica de los nuevos ocupantes del poder se requería actuar con rapidez para aprovechar el soporte popular que, aunque se mantenía firme, era relativamente modesto respecto a la magnitud del proyecto planteado, a sabiendas que las vicisitudes del ejercicio gubernamental podía erosionar ese soporte, y fomentar el

fortalecimiento de la oposición. Por su parte, la seguridad de contar con ese apoyo popular en esas circunstancias apuntaló la decisión de convocar las elecciones, más allá de los riesgos propios de cualquier proceso comicial.

Para promover una transformación radical de la sociedad era necesario controlar las palancas fundamentales de toma de decisiones en la estructura horizontal del poder, copando los poderes públicos, y en la estructura vertical de poder, mediante la alineación adecuada de las autoridades electas. La primera fase la cumplió la ANC con el nombramiento en diciembre de 1999 de todos los cargos no electivos (Fiscal, Contralor, Defensor del Pueblo, Tribunal Supremo de Justicia y Consejo Nacional Electoral). Con las nuevas elecciones se entraba en la fase de copar los cargos electivos, completando o superando los resultados de 1998. Para ese propósito se promovió la llamada relegitimación de los poderes.

La organización del proceso electoral bajo estas premisas se inició tempranamente a finales de diciembre de 1999 con el nombramiento por parte de la ANC de las autoridades del CNE, todas afectas al oficialismo.⁹ Fue seguido por la promulgación el 3 de febrero de 2000 del Estatuto Electoral de los Poderes Públicos y la fijación de la fecha de las nuevas elecciones por parte de la ANC. Con estas decisiones se concretó la convocatoria de las llamadas “megaelecciones” –elección de todos los cargos de representación popular– para el 28 de mayo de 2000, fecha en la que escogerían simultáneamente 6.241 cargos ejecutivos y legislativos nacionales y locales. En el Estatuto Electoral se modificaron las reglas de votación vigentes y se adoptó un sistema electoral mixto para la composición de los cuerpos colegiados, en el que el 60% de los cargos provenían del voto mayoritario y el 40%, del voto proporcional; con ello se procuraba obtener el efecto de sobrerrepresentación de la mayoría, aunque en proporciones mucho menores a lo ocurrido en la ANC y a la propuesta inicial de aprobar un esquema del 80% mayoritario-20% proporcional.

La preocupación por maximizar el apoyo electoral del oficialismo también privó en el momento de proponer y aprobar la convocatoria

9 De los 10 directivos que conformaron el CNE, 6 pertenecían a la Dirección Nacional de Política Electoral (DINAPE) del MVR y 4 estaban directamente vinculados a alguno de los partidos de Polo Patriótico.

de una “megaelección”, soslayando importantes consensos societales existentes desde finales de los años 80 y que se ratificaron durante el debate electoral de 1998, acerca de la necesidad de diferenciar las elecciones regionales y locales de las nacionales, a fin de preservar la autonomía y visibilidad de las primeras.

Estas decisiones fueron impugnadas por diversas individualidades y agrupaciones ante el Tribunal Supremo Electoral (TSJ), alegando la ilegalidad e inconstitucionalidad de las más importantes. Entre ellas destacaba la supuesta violación del artículo 298 de la nueva constitución que prohibía la modificación de la legislación electoral a menos de 6 meses de fecha de los comicios. Las argumentaciones fueron rebatidas por el TSJ apelando al controversial argumento de la “transitoriedad”, según el cual debía preverse un lapso –la transición– para ajustar el entramado institucional a las disposiciones de la nueva Constitución, por lo que la plena vigencia de las normas que regían la organización de los comicios y de los poderes públicos debía esperar la instalación de la Asamblea Nacional (TSJ 2000).¹⁰ La “transitoriedad”, como antes la “supraconstitucionalidad” de la ANC, sirvió de fórmula justificadora para justificar decisiones afines a los intereses políticos de los nuevos ocupantes del poder, en detrimento de la equidad e imparcialidad, en este caso del proceso comicial.

El oficialismo participó confiadamente en estas elecciones, aun cuando las mismas estuvieron marcadas por riesgos y problemas. Se produjeron importantes rupturas al interior del bloque en el poder, como la separación de Arias Cárdenas, Urdaneta Hernández y Joel Acosta Chirinos (3 de los 4 comandantes que junto con Chávez habían liderado el intento de golpe de febrero de 1992) y el lanzamiento de la candidatura presidencial de Arias Cárdenas, así como el alejamiento temporal del partido PPT de la coalición de gobierno. Fue una oportunidad para la articulación del esfuerzo opositor, el cual no fue plenamente aprovechado por sus principales actores, aún débiles después de sus recientes derrotas electorales. Y el evento más dramático fue la

10 En TSJ (2000) sobre la supuesta violación del artículo 298 de la Constitución, la sentencia de Cabrera Romero afirma “El Estatuto Electoral del Poder Público es una ley electoral distinta, que responde a la transitoriedad, que no está modificando una ley; sino que está naciendo para un fin único y extraordinario, y por ello, a una ley de esa naturaleza, no está dirigida la prohibición del artículo 298 ejusdem, y así se declara” (TSJ 2000: 75).

suspensión de las elecciones 3 días antes de la fecha prevista para su realización.

La organización de las “megaelecciones” estuvo marcada por la improvisación y el conflicto. La combinación entre la complejidad intrínseca de los comicios propuestos, la incapacidad gerencial de la directiva del CNE y la intervención política oficialista llevaron el proceso al colapso. Cuando era evidente que los comicios eran irrealizables, dos agrupaciones de la sociedad civil, “Cofavic” y “Queremos Elegir”, introdujeron un amparo oral ante el TSJ solicitando su suspensión. El 25 de mayo, a sólo 3 días de la fecha prevista, el TSJ ordenó detener íntegramente el acto electoral y convocar nuevos comicios en un plazo perentorio. Nunca antes en la historia electoral venezolana había ocurrido semejante desastre.

La Comisión Legislativa Nacional, el llamado “Congresillo”, cuerpo legislativo nombrado por la ANC que sustituyó al Congreso suspendido por decisión de la ANC y que continuó sus labores, seleccionó una nueva Junta Directiva del CNE. Esta vez se resolvió separar los comicios. Primero vino la elección presidencial, parlamentaria, de gobernadores, concejos legislativos estatales, alcaldes, alcalde mayor y concejo metropolitano el 30 de julio de 2000. Los demás cargos se eligieron el 3 de diciembre de 2000.

4.1 Las elecciones del 30 de julio de 2000

Los resultados de estas elecciones favorecieron ampliamente a los candidatos del gobierno, tanto en los que se refiere a los cargos unipersonales como a la representación en los cuerpos colegiados. A la elección presidencial sólo se presentaron tres candidatos: Chávez apoyado por nueve organizaciones, Arias por seis y Claudio Fermín por una. Se trató de la elección presidencial en la que participó el menor número de candidatos y agrupaciones desde 1958. Chávez obtuvo 3.757.773 votos, 2,2% más que en los comicios de 1998, equivalentes al 59,8% de los votos válidos y el 32,06% del total de electores. Arias obtuvo 2.359.459, equivalente al 37,5% de los votos válidos y Fermín 171.346 votos. La abstención se elevó al 43,7% y el número de electores inscritos fue 11.720.971. El presidente mantuvo aproximadamente igual su votación en términos absolutos y relativos, mientras que la

oposición no logró igualar las cifras alcanzadas en 1998, pero superó los bajos niveles de 1999.

Los cambios más importantes en la correlación de fuerzas resultantes ocurrieron a propósito de la elección parlamentaria y de los gobernadores de estado, principal objetivo procurado por el Polo Patriótico al promover estos comicios. Como resultado de las elecciones de 2000 el Polo Patriótico obtuvo una amplia mayoría en la Asamblea Nacional (AN), y dentro de la coalición oficialista predominó el partido MVR, convirtiéndose en la fuerza individual mayoritaria al interior de la AN. Los partidos tradicionales, AD y COPEI sufrieron una nueva reducción significativa de su representación, al igual que partidos emergentes como PV. El MAS obtuvo una importante representación, producto de su hábil negociación dentro de la coalición de gobierno más que de su figuración electoral.

La sumatoria de los representantes de los partidos MVR, MAS y de los representantes indígenas llegó a 102 escaños dentro de la asamblea nacional, cifra superior a la mayoría simple, aunque inferior a los dos tercios requeridos (equivalente a 110 votos) para algunas decisiones trascendentes, como el nombramiento de los titulares de los poderes públicos. La coalición de gobierno utilizó sistemáticamente esa mayoría parlamentaria para promover su proyecto político. En las etapas iniciales el oficialismo logró con facilidad generar las alianzas y acuerdos necesarios para completar los votos requeridos para obtener decisiones por mayoría calificada, y tenía garantizadas las decisiones por mayoría simple. No obstante, los cambios en la dinámica política, como la separación de buena parte del MAS y de un grupo de parlamentarios del MVR de la coalición gobernante, redujo significativamente el tamaño de la bancada oficialista en el parlamento, al punto que para algunas decisiones incluso se le dificultaba reunir los 83 votos necesarios para asegurar la mayoría simple.¹¹

11 El cambio de la correlación de fuerzas al interior de la Asamblea Nacional dificultó los acuerdos y el control oficialista de esa instancia. Un caso emblemático fue el de la imposibilidad de lograr los dos tercios necesarios para la designación de los miembros del CNE en 2003 en el parlamento, lo que ocasionó su designación temporal por parte del TSJ (Kornblith 2003a). Otro caso relevante fue el de las dificultades experimentadas por el oficialismo a finales de 2003 en su empeño por modificar la Ley Orgánica del TSJ y que acarreó modificaciones sucesivas del Reglamento Interno y de Debates de la AN a fin de lograr decisiones mediante mayoría simple.

En el ámbito regional las elecciones también favorecieron al oficialismo y produjeron un cambio en la correlación de fuerzas, con el claro predominio del MVR, que triunfó en once gobernaciones. En las gobernaciones de los estados Bolívar, Cojedes, Mérida, Nueva Esparta, Táchira, Trujillo los candidatos del MVR obtuvieron la victoria desalojando a gobernadores de AD o de COPEI, en algunos casos con márgenes electorales mínimos y en medio de controversias acerca de la pulcritud del proceso comicial. El único estado en el que prosperó una impugnación postelectoral fue en Amazonas, con lo que el partido PPT obtuvo la victoria frente al inicialmente proclamado gobernador de AD. El MVR también desplazó al MAS en los estados Lara y Portuguesa y al PPT en Vargas. El MAS obtuvo la victoria en los estados Anzoátegui, Aragua, Delta Amacuro y Sucre. Proyecto Venezuela volvió a triunfar en el estado Carabobo, COPEI en el estado Miranda y Convergencia en el estado Yaracuy. En el Zulia se impuso una nueva organización regional, Un Nuevo Tiempo (UNT).

En definitiva, el objetivo procurado por el oficialismo se logró plenamente con estas elecciones. Los partidos tradicionales quedaron debilitados al perder importantes posiciones dentro del parlamento y en un amplio número de gobernaciones, generándose una nueva correlación de fuerzas, claramente favorable al Polo Patriótico y al proyecto político del presidente Chávez.

4.2 Las elecciones de concejos municipales y juntas parroquiales y el referendo sindical del 3 de diciembre de 2000

Para completar el proceso electoral previsto para mayo de 2000 faltaba la elección de los concejos municipales y las juntas parroquiales, que tuvieron lugar el 3 de diciembre de 2000. Es fácil entender que estos comicios fueran recibidos por la población con muy poco entusiasmo. Se trataba del séptimo proceso electoral en tres años, las autoridades a ser escogidas no son consideradas de gran importancia para la población, y las organizaciones y los candidatos carecían de recursos para promoverse, puesto que sus finanzas se habían agotado en el primer intento electoral de mayo, de modo que apenas hubo campaña electoral. El resultado fue una abstención del 76%, la mayor de toda nuestra historia electoral y el 35,5% de los concejales electos correspondieron al partido MVR.

En esa fecha también se convocó el llamado referendo sindical.¹² A los factores antes señalados que influyeron sobre la alta abstención se le sumó el rechazo a dicho referendo, cuyo propósito era forzar la renovación de la dirigencia sindical a lo largo y ancho del país, con la expectativa de generar una correlación de fuerzas favorable al oficialismo. Se introdujeron recursos ante el TSJ en contra de esta convocatoria alegando, entre otras cuestiones, que la materia sindical no era “de alcance nacional” y por lo tanto no correspondía a un referendo consultivo. Por decisión de la Sala Constitucional del TSJ, no sólo se consideró que era pertinente el uso de esa figura, sino que se le otorgó carácter vinculante a los resultados del referendo.¹³ En esta ocasión el “Sí” obtuvo 1.632.750 votos, el 62,02% de los votos válidos y el “No”, 719.771 votos, el 27,34% de los votos válidos, los votos nulos sumaron el 10,64%. Aun cuando triunfó el “Sí”, la escasa participación del electorado fue interpretado como una merma de la capacidad de convocatoria del oficialismo y en particular del presidente, quien se vinculó directamente con la campaña de promoción del referendo y del voto afirmativo.

Durante la segunda mitad de 2001 tuvieron lugar las elecciones sindicales a lo largo de todo el país, desde la base hasta la cúpula del sector. Si bien el oficialismo logró el objetivo de desplazar a los líderes existentes a través del referendo, los resultados de las elecciones sindicales favorecieron ampliamente a la oposición, constituyéndose en el primer evento político electoral en el que las fuerzas contrarias al

12 La pregunta en este referendo fue: “¿Está usted de acuerdo con la renovación total de la dirigencia sindical, bajo estatuto especial elaborado por el poder electoral, conforme a los principios de alternabilidad y elección universal, directa y secreta, consagrados en el artículo 95 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y que se suspendan los directivos de centrales, federaciones y confederaciones sindicales establecidas en el país?”.

13 La ponencia aprobada elaborada por el magistrado Delgado Ocando afirmaba: “El referendo versa sobre una materia de especial trascendencia nacional, dado que la relación de trabajo es un hecho social que goza de la protección del Estado conforme lo dispone el artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) y las normas imperativas que regulan dicha relación. [...] “La decisión soberana, en sentido afirmativo o negativo, sería un mandato constitucional del pueblo venezolano, titular de la soberanía, mandato que por su origen, integraría el sistema constitucional y no podría asimilarse, en caso afirmativo, a una intervención, suspensión o disolución administrativa, que es lo que prohíbe el artículo 95 de la CRBV” (TSJ-Sala Constitucional, 28.11.2000).

Polo Patriótico pudieron articularse exitosamente en torno a un evento comicial desde diciembre de 1998.

4.3 Balance de la relegitimación de los poderes

La relegitimación de los poderes satisfizo plenamente los objetivos del Polo Patriótico. A pesar de las tensiones y fracturas sufridas por el nuevo bloque en el poder a raíz de estos comicios, el balance neto le resultó claramente favorable. Lograron alinear armónicamente la correlación de fuerzas a lo largo de la estructura político-administrativa de poder a través de las elecciones. A su vez, una vez instalada la Asamblea Nacional a finales de año designaron a los titulares de los poderes Ciudadano y Judicial aprovechando su holgada mayoría y su capacidad de lograr acuerdos en dicha instancia. También en dichos poderes se aseguraron una mayoría favorable al proyecto político emergente. Al finalizar estas elecciones culminó la fase político-electoral de la “refundación de la República”. En esa etapa los ocupantes del poder contaron con una importante base de apoyo popular, que se mantuvo estable a lo largo de los comicios de 1998, 1999 y 2000. Aun cuando, como sabemos, se trataba de un tercio del electorado, fue crucial y suficiente para provocar cambios drásticos en la correlación de poder existente, dada la debilidad y desarticulación de las fuerzas opositoras.

Superada esta etapa, el gobierno entró en una fase de desarrollo de su acción de gobierno y la población comenzó a evaluar su desempeño en función de su capacidad de resolver los problemas socioeconómicos claves. En esa nueva etapa que se inició con la nueva presidencia de Chávez, el ánimo colectivo comenzó a cambiar progresivamente. Así, hacia el tercer trimestre de 2001 el agrado hacia Chávez se ubicaba en el 46% mientras que en el primer trimestre de ese año se ubicaba en el 68% (Keller 2003). La correlación de fuerzas resultante de las elecciones del 2000 dejó de representar adecuadamente las expectativas y preferencias colectivas, y la dinámica sociopolítica se tornó crecientemente adversa a la coalición gobernante, y en especial al presidente de la República.

5. Un nuevo ajuste entre aspiraciones y representación: la difícil ruta de la salida electoral

Desde la implantación de la descentralización y como producto de la profusión de comicios convocados entre los años 1998 y 2000, en el país se produjo un progresivo y adecuado ajuste entre las preferencias político-electorales de la población y el esquema de representación y la correlación de fuerzas resultante en las distintas instancias de poder, por el otro.

Luego de los avances y triunfos electorales del presidente Chávez y de sus aliados desde los comicios de noviembre de 1998 hasta los de diciembre de 2000, la dinámica sociopolítica fue cambiando. En las diversas encuestas y sondeos de opinión, fueron apareciendo signos de desafección de la población respecto del presidente y una evaluación crecientemente negativa de su gestión de gobierno. Desde el segundo semestre de 2001, coincidente con el fallido intento oficialista de asegurar una mayoría en el ámbito sindical, se fue estructurando un movimiento opositor a la presidencia de Chávez y a su proyecto sociopolítico. No obstante, después de los comicios de diciembre de 2000, estos cambios en el ánimo colectivo no han podido canalizarse ni expresarse a través de procesos electorales y por lo tanto no se han materializado en nuevas correlaciones de fuerzas más cónsonas con dichos cambios.

La estructura de poder emergente de los procesos del año 2000, a pesar de la ocurrencia de cambios importantes, como la reducción de la mayoría parlamentaria del oficialismo en el parlamento, luce desfada y detenida respecto a la magnitud del cambio operado en el ánimo colectivo. Buena parte de las luchas sociales y políticas acaecidas en el país desde el segundo semestre de 2001 han procurado cambiar esa realidad, en la búsqueda de un esquema de representación y poder en mayor sintonía con las nuevas aspiraciones colectivas. La mayor presión se ha ejercido en contra de la permanencia de Chávez en el poder, apelando a intensas movilizaciones masivas de protesta ciudadana y vías no electorales como paros cívicos y golpes de Estado, y a vías electorales como el frustrado referendo consultivo de febrero de 2003 y la activación del referendo revocatorio presidencial, que de acuerdo con las disposiciones constitucionales, sólo puede hacerse

efectivo después de la mitad del período de gobierno, es decir a partir del 19 de agosto de 2003.

5.1 La tortuosa vía de los referendos

En noviembre de 2002 los diversos sectores de oposición agrupados en la llamada Coordinadora Democrática reunieron cerca de 2 millones de firmas para solicitar la convocatoria de un referendo consultivo acerca de la renuncia presidencial. El CNE fijó como fecha para la realización de ese referendo el 2 de febrero de 2003. El 22 de enero de 2003 la Sala Electoral del TSJ bloqueó esta iniciativa basándose en las irregularidades en la conformación de la Junta Directiva del CNE, mientras que la Sala Constitucional del mismo tribunal consideró legal y constitucional apelar a esa figura para consultar la opinión del “soberano”.¹⁴

En la fecha prevista para el referendo se organizó el llamado “Firmazo”, actividad a través de la cual nuevamente las diversas agrupaciones de la oposición reunidas en la Coordinadora Democrática y la organización civil “Súmate” organizaron la recolección de firmas necesarias para la promoción por vía refrendaria de diversas iniciativas, como una enmienda a la Constitución, un referendo abrogatorio de un paquete legislativo de más de 40 leyes, el referendo revocatorio presidencial, entre otros. El 20 de agosto de 2003 nuevamente las diversas agrupaciones del ámbito opositor presentaron ante el CNE las planillas contentivas de la manifestación de voluntad de más de 3,2 millones de electores (el mínimo requerido era 2,4 millones, equivalente al 20% de los electores inscritos en el registro electoral), soli-

14 Llama la atención que en este caso, a diferencia del referendo consultivo sindical, el pronunciamiento de la Sala Constitucional frente a las impugnaciones ejercidas en contra de la convocatoria del referendo consultivo acerca de la renuncia presidencial, hiciera énfasis en el carácter no vinculante de resultado del mismo. La diferencia de criterio expresada entre ésta y la antes mencionada ponencia resalta más aun al constatar que se trata del mismo ponente en ambos casos, el magistrado Delgado Ocando. En el texto se afirma “En virtud de los razonamientos expuestos, esta Sala Constitucional declara que el referendo consultivo previsto en el artículo 71 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, carece del carácter decisorio que el Texto Fundamental atribuye a los otros referendos populares. Ello significa que el referendo consultivo no es vinculante, es decir, que su resultado no sustituye la potestad decisoria de los órganos del Poder Público ni genera obligación alguna para que éstos las adopten. Así se declara” (TSJ-Sala Constitucional, 22.01.2003).

citando la convocatoria de un referendo revocatorio del mandato presidencial. Esta iniciativa tampoco prosperó, puesto que en una decisión dividida (3 a favor y 2 en contra) adoptada el 12 de septiembre de 2003 por la Junta Directiva del CNE, el ente comicial rechazó la solicitud refrendaria, aduciendo el incumplimiento de “formalidades esenciales”, como la extemporaneidad de la recolección de las firmas y la falta de mención al CNE en el encabezado de las planillas contentivas de las firmas de los electores (CNE 2003a).

No obstante, los reveses vividos por la oposición en sus intentos por activar algún tipo de mecanismo comicial para producir una nueva correlación de fuerzas mediante el desplazamiento electoral del presidente de la República, la vía del referendo revocatorio siguió siendo la principal ruta escogida para desalojar al presidente Chávez del poder. El 26 de septiembre de 2003 el CNE aprobó las normas referidas a la celebración de los referendos (CNE 2003b). Para muchos analistas, políticos y juristas se trata de un reglamento que se aparta del espíritu de la Constitución, limita la participación, impone obstáculos artificiales a la realización de la consulta popular, extiende injustificadamente los lapsos y consagra una intervención indebida del CNE en fases pre-electorales, como la recolección de firmas para la solicitud del referendo. No obstante, estas reglas fueron acatadas por la oposición y sirvieron de pauta para articular un nuevo episodio en la búsqueda de una salida electoral a la conflictividad que caracteriza al país.

A inicios de octubre, nuevamente la Coordinadora Democrática solicitó ante el CNE la convocatoria de un referendo revocatorio en contra del presidente de la República, y de un grupo de más 30 diputados del oficialismo. El organismo comicial estableció como fecha para la recolección de las firmas los días 28 de noviembre hasta el 1. de diciembre, en una jornada denominada por la oposición como el “Reafirmazo”. Esta jornada fue precedida por la iniciativa promovida por el oficialismo de recolección de firmas para solicitar la revocatoria de mandato de más de 30 diputados de oposición. Ambas jornadas contaron con la presencia de numerosos enviados de los medios de comunicación internacionales, y por representantes del Centro Carter y de la Organización de Estados Americanos (OEA), incluyendo a César Gaviria, secretario general del organismo hemisférico, en el evento opositor.

El 19 de septiembre de 2003 los sectores de oposición que promovieron la convocatoria de un referendo revocatorio en contra del presidente de la República, consignaron ante el CNE la cifra de 3.467.050 firmas. De acuerdo con la Constitución la cifra mínima requerida es el 20% de los votantes inscritos en el registro electoral, equivalente a 2.452.179 electores. Luego de la verificación de las firmas recabadas, el CNE tuvo que pronunciarse acerca de la validez o no de la convocatoria del referendo revocatorio presidencial. Ya que la iniciativa prosperó, el CNE fijó la fecha del referendo que tendrá lugar en agosto de 2004.¹⁵

No obstante, el camino aun no está despejado, algunas reglas claves de este juego no están claramente definidas, como la participación de un presidente revocado o renunciante en un proceso comicial convocado para completar su período de gobierno y aun se debaten criterios para la verificación de firmas. Por otro lado, se prevé que durante el año 2004 deberán realizarse elecciones de gobernadores, acaldes y sus respectivas instancias legislativas, lo que podría complicar el cronograma electoral y afectar la realización oportuna del referendo. Los lapsos son estrechos, las condiciones sociopolíticas son complejas y aun se mantiene un fuerte control político del oficialismo sobre centros fundamentales de toma de decisiones como el TSJ y el CNE. Todo ello pudiera afectar la fluidez y oportunidad de la realización del referendo revocatorio, incluso habiéndose producido su convocatoria.

Por su parte el oficialismo ha manifestado claramente su falta de disposición a aceptar respetuosamente la decisión del organismo electoral, si la misma le resultara desfavorable. Aun antes de culminar la recolección de firmas ya anunciaban estruendosamente la ocurrencia de un “megafraude” durante esas jornadas, lo que prefigura una de las estrategias orientadas a bloquear el proceso introduciendo recursos y alegatos acerca de la supuesta distorsión de proceso.

Cabe destacar que los tres episodios de recaudación de firmas se convirtieron en importante estímulo a la articulación del esfuerzo opositor, al incremento de su capacidad organizativa y a la solidificación de su perfil democrático, en tanto se asociaban directamente a la búsqueda de vías electorales para cambiar la correlación de fuerzas exis-

¹⁵ El presente documento fue terminado antes del proceso comicial del referéndum revocatorio (El editor).

tentes. Los volúmenes de firmas recogidos durante los llamados “Firmazo” (2.02.2003) y “Reafirmazo” (28 de noviembre-1 de diciembre 2003) superaron los límites de votación obtenidos por la oposición desde diciembre de 1998. Si bien no se trata de cifras que puedan ser tomadas como valores absolutos, tanto porque no corresponden a una elección ni a un voto secreto y por tanto sub-representan el potencial de votación, como porque los datos brutos no incluyen la necesaria depuración de esas manifestaciones de voluntad, en la que puede haber solicitudes inválidas, revelan en otro plano el antes mencionado cambio en las preferencias colectivas y el incremento de la capacidad de convocatoria del liderazgo opositor.

5.2 Cambios en el ánimo colectivo y salida electoral

En la actualidad, los sondeos de opinión muestran que alrededor del 65-70% de la población evalúa negativamente la gestión del presidente, mientras que cerca de un 30-35% la apoya. Estos porcentajes se mantienen cuando la pregunta se refiere a la disposición de los electores a procurar la salida del presidente mediante un referendo revocatorio, donde aproximadamente un 70% se manifiesta a favor y un 30% en contra. Los mismos sondeos indican que la vía refrendaria es la preferida por aproximadamente el 80% de los electores, lo que incluye a una importante porción de quienes apoyan al gobierno actual.

La variada y exitosa experiencia electoral venezolana de las últimas décadas ha generado una expectativa colectiva acerca del uso del mecanismo electoral, en este caso del referendo revocatorio consagrado en el artículo 72 de la Constitución, para nuevamente adecuar las aspiraciones colectivas a la estructuración del poder político. Sin embargo, hay que destacar que la mayor parte de esa experiencia electoral transcurrió en el contexto de la llamada “democracia puntofijista”, que con todas sus limitaciones, funcionó sobre la base del respeto de las reglas del juego democrático y de la valoración del mecanismo electoral como fórmula privilegiada para dirimir las controversias societales. A su vez la experiencia comicial reciente de 1998 al año 2000 tuvo lugar en un ambiente favorable a los actuales ocupantes del poder, que hicieron un uso intensivo del mismo, cuando el ánimo colectivo le era abiertamente propicio. En ese sentido, llama la atención el contraste entre las enormes dificultades confrontadas hasta el pre-

sente y que presumiblemente podrán encontrarse en la ruta hacia el referendo revocatorio, y la relativa facilidad con la que se convocaron los 5 procesos comiciales ocurridos en el país entre 1999 y 2000.

Dado el carácter del proyecto político promovido por el presidente Chávez y sus aliados, y la evaluación de su estilo político y de gobierno después de cerca de 5 años de gobierno, luce improbable que estén dispuestos a abandonar el poder de manera pacífica, legal y democrática, como consecuencia de una nueva medición del ánimo colectivo mediante un próximo proceso comicial. Cuando el ánimo colectivo se tornó desfavorable a los actuales ocupantes del poder, las iniciativas electorales han sido sistemáticamente bloqueadas, contando con el control que aun ejercen sobre las palancas fundamentales de toma de decisiones en los poderes públicos. Se trata de unos actores políticos y de un proyecto cualitativamente diferentes a aquellos que guiaron la democracia venezolana desde 1958 hasta 1998. Para los actuales ocupantes del poder el compromiso con la democracia luce circunstancial y asociado a sus posibilidades de mantenerse en el poder.

5.3 Gobierno por y para el soberano o gobierno versus el soberano

Desde el intento de golpe del 4 de febrero de 1992 se retomó la posibilidad de apelar al golpe de Estado para generar cambios rápidos y drásticos en la correlación de fuerzas, tal como se ha evidenciado con la glorificación oficialista de esa fecha, o con el rumbo que tomó la protesta cívica del 11 de abril de 2002 y que derivó en la usurpación del poder por parte de un pequeño grupo de civiles y militares. Pero también se ha materializado en algunos sectores en una visión utilitaria de los procesos electorales, que consideran que pueden ser una vía más eficaz para lograr lo que no puede obtenerse mediante un golpe, sin asumir un compromiso cabal con la democracia, sus procesos y sus instituciones.

La reciente dinámica sociopolítica del país, caracterizada por la confrontación y la tensión, ha estado marcada por esas tres tendencias:

- 1) la búsqueda de una adecuada correspondencia entre las preferencias colectivas y los esquemas de representación, a partir del compromiso sincero con las reglas del juego democrático y la promoción de procesos electorales confiables y equitativos;

- 2) el uso acomodaticio del mecanismo electoral, activado acomodaticamente según las circunstancias, para promover cambios o para proteger posiciones de poder;
- 3) la búsqueda del cambio de las correlaciones de fuerza existentes a través del recurso del golpe de Estado y la violación del estado de derecho.

Visto en una perspectiva de mediano plazo, la primera opción es claramente preferible a las otras y esa es la que sistemáticamente ha escogido la sociedad venezolana, aun en las condiciones adversas de Venezuela en las últimas décadas. No obstante, el proyecto sociopolítico que se ha intentado implantar en el país a partir del ascenso de Hugo Chávez al poder, nació a partir de una intentona golpista y con una visión utilitaria de la vía electoral. Ante el fracaso de la vía golpista, las elecciones surgieron como un camino posible y conveniente, pero asumido sin el consecuente compromiso con las reglas del juego democrático y el respeto al pluralismo y al estado de derecho. Esa apelación a las elecciones no supuso la renuncia sincera a la posibilidad de acudir a fórmulas autoritarias y antidemocráticas para garantizar la permanencia en el poder, sobre todo cuando el ánimo colectivo se torna desfavorable. Del amor al soberano y sus expresiones electorales, parece haberse pasado al temor al soberano y a sus expresiones electorales.

En el desenvolvimiento de este nuevo capítulo del drama refrendario, sólo queda esperar que la coyuntura crítica que se avecina pueda ser abordada mediante prácticas democráticas y electorales, y que se produzca el ajuste deseado entre el ánimo colectivo y las autoridades y correlaciones de fuerzas desde donde se producen las decisiones que afectan al colectivo. Aun cuando el camino luce arduo, a lo largo de los años de la presidencia de Chávez se han fortalecido las barreras democráticas en contra de los intentos autoritarios de los actuales ocupantes del poder. En la solución que la sociedad venezolano logre para superar su intensa crisis política y de gobernabilidad, se pondrá a prueba el talante y la densidad democrática de la sociedad venezolana, y del carácter democrático de los actuales ocupantes del poder. Incluso será una oportunidad para poner a prueba la eficacia de la comunidad internacional para contener gobiernos autoritarios y para promover sociedades democráticas.

Bibliografía

- Álvarez, Ángel (ed.) (1996): *El sistema político venezolano: crisis y transformaciones*. Caracas: Universidad Central de Venezuela/Instituto de Estudios Políticos.
- Blanco Muñoz, Agustín (1998): *Habla el comandante*. Caracas: Universidad Central de Venezuela/Fundación Cátedra Pío Tamayo, 3ra. Ed.
- Carrasquero, José Vicente/Maingon, Thais/Welsch, Friedrich (eds.) (2001): *Venezuela en transición: elecciones y democracia 1998-2000*. Caracas: CDB Publicaciones/RedPol.
- Combellas, Ricardo (2001): *Derecho constitucional. Una introducción al estudio de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela*. Caracas: McGraw-Hill Interamericana.
- CNE (Consejo Nacional Electoral), *Estadísticas electorales*, Varios años.
- (2003a): *Resolución No. 030912-461 Mediante la cual se declaró inadmisibile la solicitud de referendo revocatorio en contra del presidente de la República Hugo Chávez Frías*. Caracas: CNE, 12.09.2003.
- (2003b): *Resolución No. 030925-465 Normas para regular los procesos de referendos revocatorios de mandatos de cargos de elección popular*. Caracas: CNE, 26.09.2003.
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela* (1999).
- Garrido, Alberto (1999): *Guerrilla y conspiración militar en Venezuela. Testimonios de Douglas Bravo, William Izarra, Francisco Prada*. Caracas: Fondo Editorial Nacional José Agustín Catalá.
- (2000): *Historia secreta de la revolución bolivariana. Conversaciones con Harold, Puerta Aponte y Camilo*. Mérida: Editorial Venezolana C. A.
- Hidalgo Trenado, Manuel (2002): “Liderazgo, reforma económica y cambio político en Venezuela, 1989-1998”. En: Ramos Jiménez, Alfredo (ed.): *La transición venezolana. Aproximación al fenómeno Chávez*. Mérida: Centro de Investigaciones de Política Comparada, pp. 77-129.
- Keller, Alfred (2003): *Condiciones del escenario político de Venezuela*. Caracas: Alfredo Keller y Asociados (mimeo).
- Kornblith, Miriam (1998): *Venezuela en los noventa. Las crisis de la democracia*. Caracas: Ediciones IESA-UCV.
- (2001): “Confiabilidad y transparencia de las elecciones en Venezuela: examen de los comicios del 30 de julio de 2000”. En: Carrasquero, José Vicente/Maingon, Thais/Welsch, Friedrich (eds.): *Venezuela en transición: elecciones y democracia 1998-2000*. Caracas: CDB Publicaciones-RedPol, pp. 133-163.
- (2003a): “La tortuosa designación de los miembros del CNE”. En: *Debates IESA*, vol. 8, no. 4, pp. 49-56.
- (2003b): “Elecciones y representación en tiempos turbulentos”. En: Márquez, Patricia/Piñango, Ramón (eds.): *En esta Venezuela. Realidades y nuevos caminos*. Caracas: Ediciones IESA, pp. 375-402.

- (2003c): “Del *Puntofijismo* a la *Quinta República*: elecciones y democracia en Venezuela”. En: *Revista Colombia Internacional*. Santafé de Bogotá: Departamento de Ciencia Política, Universidad de los Andes No. 58 (julio-diciembre).
- Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política* (1998), República de Venezuela.
- Martínez Barahona, Elena (2002): “La formación de una nueva clase política en Venezuela: ¿un cambio para seguir igual?”. En: Ramos Jiménez, Alfredo (ed.): *La transición venezolana. Aproximación al fenómeno Chávez*. Mérida: Centro de Investigaciones de Política Comparada, pp. 131-162.
- Molina Vega, José E. (2001): “Comportamiento electoral en Venezuela 1998-2000: cambio y continuidad”. En: Carrasquero, José Vicente/Maingon, Thais/Welsch, Friedrich (eds.): *Venezuela en transición: elecciones y democracia 1998-2000*. Caracas: CDB Publicaciones-RedPol, pp. 188-213.
- Molina Vega, José E./Pérez Baralt, Carmen (1996): “Los procesos electorales y la evolución del sistema de partidos”. En: Álvarez, Ángel (ed.): *El sistema político venezolano: crisis y transformaciones*. Venezuela: Universidad Central de Venezuela/Instituto de Estudios Políticos, pp. 193-238.
- Ramos Jiménez, Alfredo (ed.) (2002): *La transición venezolana. Aproximación al fenómeno Chávez*. Mérida: Centro de Investigaciones de Política Comparada.
- Ramos Rollón, Marisa (ed.) (2002): *Venezuela: Rupturas y continuidades del sistema político (1999-2001)*. Salamanca: PDVSA/Universidad de Salamanca.
- Rey, Juan Carlos (1989): *El futuro de la democracia en Venezuela*. Caracas: Colección IDEA.
- TSJ (Tribunal Suprema de Justicia) (2000): *Bases jurisprudenciales de la supraconstitucionalidad*. Caracas: Colección de Estudios Jurídicos TSJ.
- Viciano Pastor, Roberto/Martínez Dalmau, Rubén (2001): *Cambio político y proceso constituyente en Venezuela*. Caracas/Valencia: Vadell Hermanos Editores.

Akilah Jenga/Russell Crandall

**El colapso de la revolución bolivariana:
el deterioro del régimen de Chávez y
sus implicaciones para la democracia venezolana
(1998-2002)**

En un artículo editorial aparecido en *The New York Times*, un prominente analista político venezolano señalaba: “Venezuela ya no se aburre más” (Naim 2003). Y, en verdad, lo que fuera alguna vez considerado en los años 60 –aunque, de alguna manera, incorrectamente también– un país relativamente estable y próspero, ha venido experimentando un deterioro continuo y precipitándose a un caos político y económico. La violencia política, antes prácticamente desconocida, resulta hoy día cotidiana. Los delitos con violencia se han multiplicado en todo el territorio nacional, transformando Venezuela en el segundo país más peligroso en el hemisferio occidental, después de Colombia (Robberson 2003a). La inesperada y tremendamente exitosa candidatura de Hugo Chávez en 1998 había sido así, en muchos sentidos, un síntoma de una sociedad política enferma, que se desesperaba por encontrar una figura política que pudiera encarar los problemas sociales que no se habían resuelto en las últimas dos décadas.

Antes, Venezuela había sido considerada como democracia modelo en América Latina, pero la aparente estabilidad gubernamental sólo enmascaraba las estructuras clientelares dependientes del petróleo, que permitió que se desarrollaran instituciones políticas débiles e hizo que los problemas de falta de justicia y de exclusión política quedaran sin solución. Las rentas provenientes del petróleo decrecieron en la década de 1980 y cuando las políticas distributivas se volvieron insostenibles, el sistema empezó a resquebrajarse. La incapacidad para crear riqueza económica y la inclusión política que la gente anhelaba, condujo al quiebre de los partidos políticos tradicionales, y los venezolanos comenzaron a buscar un líder que les trajera prosperidad (Coronil 1997: 1-18, 367-394; Weyland 2002; Naim 1993). Sin embargo, des-

graciadamente, a casi 4 años de presidencia de Chávez y de “revolución bolivariana” (fase que estamos revisando en este artículo) y la situación ha empeorado aún más para la gran mayoría de los venezolanos.

Desde que Chávez ascendiera al poder, más de un millón de venezolanos han pasado de la “pobreza” a la “pobreza extrema”. Aproximadamente el 68% de los venezolanos vive hoy en pobreza, un 10% más que en 1998 (Forero 2003). La economía venezolana se contrajo en 2003 y la inflación permanece en niveles elevados. (Robberson 2003). En su historia política reciente, después de la caída de la dictadura de Pérez Jiménez en 1958, la sociedad política venezolana no había vivido nunca una polarización tan pronunciada. (Lugo Galicia 2003). Si Chávez contaba con el apoyo de cerca del 80% de la población al inicio de su mandato (Weyland 2001: 82), actualmente esta base ha caído al 30% (Robles 2003). El apoyo proviene fundamentalmente de los sectores marginales que le siguen siendo leales, a pesar de su política generadora de pobreza, pues creen que representa su única esperanza de prosperidad en el futuro (Naim 2002).

La confrontación política entre el presidente populista Hugo Chávez y sus opositores continúa. Habiendo sobrevivido un intento de golpe de Estado en abril del año 2002, Chávez permanece firmemente decidido a conservar el poder. Aquel fracaso hace improbable un golpe de Estado tradicional contra Chávez. En consecuencia, la frustrada pero resistente oposición se resignó a usar medios electorales para lograr su remoción. La huelga general declarada en noviembre de 2002 y continuada hasta febrero de 2003 paralizó temporalmente la economía, pero no logró su objetivo de forzar la renuncia de Chávez. La oposición reunió suficientes firmas para solicitar un referendo revocatorio contra Chávez y cree que puede removerlo e incluso ganarle en elecciones democráticas.

El impacto económico de la crisis política aumenta la probabilidad de este escenario, más que la oposición como tal. Si la situación económica de Venezuela sigue empeorando, es posible que el descontento hacia Chávez aumente, en particular, al momento que su capacidad para implementar políticas sociales redistributivas se debilite. Por otra parte, los venezolanos que apoyan a Chávez, lo hacen en forma extremadamente leal, lo cual no es el caso de la oposición, como el fallido intento de golpe de Estado demostró claramente. Los partidarios de

Chávez se mantienen unidos por la fuerza que emana de sus promesas, mientras la oposición es una coalición débil, sustentada sólo en el desencanto con Chávez. Si la oposición fracasa en sus proyectos electorales, la estabilización política del país se alejará aún más.

En este artículo ofrecemos una crónica de los acontecimientos del año 2002.

El poder de Hugo Chávez empezó a debilitarse a principios de 2002 cuando, el 5 de enero, la oposición casi logró destituir al presidente de la Asamblea Nacional y aliado de Chávez, Willian Lara. El rechazo visceral de Chávez es el único cemento aglutinador de los distintos sectores de la oposición, a la que se unieron algunos diputados del movimiento chavista. La votación demostró que Chávez no podía contar con una mayoría automática en el poder legislativo que había apoyado su agenda política y económica y, más importante aún, que le había permitido sostener, que su gestión tenía un respaldo democrático (Crandall 2003: 82-83).

La crisis económica estalló a principios de abril de 2002, cuando los trabajadores de la corporación petrolera estatal PDVSA (Petróleos de Venezuela, SA) se declararon en huelga para protestar por los intentos de Chávez de instalar aliados políticos en posiciones administrativas claves de aquélla. PDVSA está integrada por una nómina de aproximadamente 40 mil empleados y genera 50 billones de dólares al año en ingresos (Fleisher 2003). Del petróleo proviene la mitad del ingreso fiscal de Venezuela y cerca del 80% de sus ingresos por exportaciones (Robles 2003a). PDVSA era considerada como empresa bien gerenciada y mediterránea que rechazaba los intentos de politización de Chávez. También existían posiciones críticas frente al suministro de 50 mil barriles de petróleo diarios a Cuba, en condiciones preferenciales (Easton 2003).

La huelga del petróleo dio más fuerza a una huelga general organizada por la principal central sindical (Confederación de Trabajadores de Venezuela) y apoyada por Fedecámaras (Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela), la más importante asociación empresarial. Cuando la protesta alcanzó su auge, estos sectores insistían en que Chávez debía renunciar. Según estimaciones, la marcha del 10 de abril de 2002 contó con la participación de 250 a 350 mil personas. Aunque los detalles acerca de los culpables no han salido a la luz, 17 personas murieron a consecuencia

de disparos contra los manifestantes y las noticias de la masacre profundizaron el sentimiento anti-Chávez en todo el país (Ellner/Rosen 2002: 11).

La secuencia de eventos se aceleró una vez conocidas las noticias de que manifestantes pacíficos habían sido asesinados por tropas leales a Chávez. El comandante del Ejército, general Efraín Vásquez Velasco, emitió un ultimátum para exigir la renuncia de Chávez. El presidente se negó, pero señaló que “abandonaría sus funciones” si lo pedía la Asamblea Nacional, donde mantenía una precaria mayoría. Chávez nunca renunció oficialmente y fue recluido en un recinto militar. Según informaciones, se estaba preparando su salida al exilio en Cuba. El comandante de las Fuerzas Armadas, general Lucas Rincón Romero, anunció que Chávez había renunciado y, 90 minutos más tarde, Pedro Carmona Estanga, el presidente de Fedecámaras, fue nombrado jefe de un gobierno de transición. Carmona disolvió la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia, dejó sin efecto una serie de reformas sociales y declaró abolida la Constitución de Chávez, que había sido ratificada por referendo a fines de 1999 (Crandall 2003: 83-84). Además ordenó allanamientos contra partidarios de Chávez, y se desató una ola de persecuciones que produjeron la muerte de alrededor de veinte o treinta personas (Ellner/Rosen 2002: 11).

La coalición de amplia base que había salido a la calle pidiendo la salida de Chávez se dispersó rápidamente. Sectores importantes de los sindicatos, partidos de oposición y las Fuerzas Armadas, no estuvieron de acuerdo con la decisión de Carmona en disolver los poderes constituidos. Más aún, el gabinete designado para la transición, no incluía líderes de los trabajadores y esto representó, para amplios sectores de la oposición, el triunfo de la elite oligárquica. Carmona cometió otro error nombrando al Almirante Héctor Ramírez Pérez como ministro de Defensa, por encima del general Vásquez. El Ejército es la fuerza más importante y Vásquez no estaba dispuesto a aceptar un ministro proveniente de la Marina. En consecuencia, retiró su apoyo al golpe, lo que marcó el fin de la efímera presidencia de Carmona, quien renunció en la noche del 13 de abril de 2002, 36 horas después de asumir el poder. Chávez fue traído de vuelta desde su sitio de detención en la isla caribeña de la Orchilla (Crandall 2003: 84).

Con sus decretos inconsultos e impopulares, Carmona perdió rápidamente el respaldo de quienes lo habían instalado en el poder. Subes-

timó también la fuerza de los partidarios de Chávez, organizados en los Círculos Bolivarianos, células paramilitares que habían sido creadas con asistencia de Cuba el año anterior. Se cree que aproximadamente 500 mil ciudadanos forman parte de 30 mil Círculos Bolivarianos. Estas células, bien organizadas, dieron un apoyo logístico crucial a Chávez en las áreas marginales de Caracas y fueron el instrumento para hacer presión de calle contra el gobierno de Carmona. Cuando Chávez retornó al palacio presidencial a las 3 de la tarde del 14 de abril del 2002, tropas leales y miembros de los Círculos Bolivarianos se encontraban presentes para recibirlo. Después del fallido golpe de Estado, Chávez adoptó un discurso más moderado. Sorprendido por el nivel de oposición en su contra, Chávez se dispuso a gobernar como si fuera presidente sin mayoría parlamentaria; una política distinta a su estilo anterior. Ante todo había que depurar la Fuerza Armada Nacional (FAN). Había quedado demostrado que no tenía el respaldo sólido de la FAN, razón por la cual decidió cambiar el alto mando.

Poco después del fallido golpe, Chávez también desistió de su plan de control político de PDVSA. En una medida diseñada para aplacar la corporación petrolera, Chávez nombró presidente a Ali Rodríguez, secretario general de la OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries). Una de las primeras medidas de Rodríguez fue nombrar un comité de directores que incluía ejecutivos opuestos a Chávez y que habían permanecido en la empresa a pesar del intento de Chávez de hacerse con el control político de la empresa. Hacia verano de 2002, la reconciliación parecía al menos posible.

Era evidente que el apoyo popular de Chávez había mermado, e incluso la amplia mayoría parlamentaria –casi dos tercios– estaba quedando reducida a una precaria mayoría simple. Sin embargo, mientras muchos observadores creían que Chávez se vería obligado a negociar más seriamente y llegar a compromisos con la oposición, los hechos fueron diferentes. Hacia otoño de 2002, el presidente Chávez ya había dejado de lado su actitud conciliadora hacia la oposición (S.N. 2002).

A finales de octubre de 2002, catorce generales y almirantes, muchos de los cuales habían participado en el intento de golpe de abril, se declararon en rebeldía, junto con otros 140 oficiales de la FAN, en La Plaza Altamira de Caracas. Si bien en aquel momento Chávez contaba

con un amplio apoyo de la Fuerza Armada, la protesta indicó que había mucha tensión en los mandos militares.

Las relaciones entre el gobierno y la oposición sufrieron un giro negativo el 16 de noviembre de 2002, cuando Chávez ordenó la intervención de la Policía Metropolitana, una fuerza de 8.000 integrantes. La medida se tomó en respuesta a una huelga de un sector de esa fuerza policial que ya había durado varias semanas. Después de la acción militar, incidentes y protestas callejeras dirigidas por figuras de la oposición, como Peña, se distribuyeron por toda la ciudad de Caracas, incluyendo la explosión de una bomba en el centro, que causó la muerte de tres personas (Webb-Vidal 2002).

La creciente tensión culminó en la huelga nacional indefinida del 1º de diciembre de 2002 convocada por la oposición. El grupo más representado entre los huelguistas era el de los trabajadores del petróleo, que con su acción interrumpieron la producción de 3 millones de barriles de petróleo por día, causando una pérdida de ingresos de 50 millones de dólares diarios al gobierno.

Chávez, demostrando su notable capacidad de supervivencia, respondió con iniciativas destinadas a recuperar la producción de petróleo y la capacidad de exportación. Hacia fines de diciembre de 2002 acrecentó su control de PDVSA, despidiendo cerca de 100 ejecutivos acusados de apoyar el paro. La totalidad de los despidos alcanzó finalmente a la mitad de la nómina fija de la compañía. A comienzos de febrero de 2003, la huelga había fracasado. Desde diciembre de 2002, se perdieron ingresos de alrededor de 4 billones de dólares. Sin embargo, hacia agosto de 2003, la producción supuestamente retornó a los niveles que había tenido antes del paro.

El 17 de diciembre de 2002, el Consejo Permanente de la OEA (Organización de Estados Americanos) aprobó una resolución que reclamaba una solución pacífica, democrática, constitucional y electoral de la crisis política. El gobierno norteamericano respaldó la resolución, lo que fue visto por muchos como un cambio del planteamiento anterior de Washington en apoyo a elecciones anticipadas en Venezuela. En enero de 2003, la comunidad internacional formó un Grupo de “Amigos de Venezuela” –que incluye a los Estados Unidos, Brasil, México, España, Portugal y Chile– y cuyo propósito ha sido promover una solución pacífica a la crisis. Chávez aceptó la iniciativa, pero exi-

gió que otros países debían sumarse a ella, entre otros Cuba (Castañeda 2003).

Después de reunirse con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 16 de enero de 2003, Chávez dijo a un grupo de periodistas: “Yo no tengo la más ligera duda de nuestro triunfo. Estamos ganando esta batalla y la vamos a ganar” (Álvarez 2003; S.N. 2003). También aceptó la realización de un referendo sobre su presidencia si se obtenía el número requerido de firmas para solicitarlo; esto es, la oposición debe reunir 2,4 millones de firmas, correspondientes al 20% del electorado (“Venezuela: Chávez 2003). En mayo de 2003, previa mediación de la OEA, el Centro Carter y el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), las partes firmaron un acuerdo relativo a la solución pacífica, constitucional y electoral de la crisis (Forero 2003a).

El 20 de agosto de 2003, los grupos de oposición llevaron las 2 millones 400 mil firmas requeridas al Consejo Nacional Electoral (CNE) (Forero 2003b). Sin embargo, dichas firmas fueron rechazadas con el argumento de que habían sido recogidas con anterioridad a la fecha en que Chávez había cumplido la mitad de su período electoral. A pesar del revés, la oposición decidió no claudicar en su empeño; superando todos los obstáculos, entre ellos la designación de un nuevo CNE mayoritariamente prochavecista, logró reunir las firmas y la correspondiente convocatoria del referendo para el mes de agosto de 2004.

El futuro de Venezuela se perfila en varios escenarios posibles que implican una serie de desafíos. Aunque encuestas recientes indican que es improbable que Chávez gane el referendo revocatorio, no se puede descartar esa posibilidad.

Bibliografía

- Álvarez, Irma (2003): “Está Prohibido Equivocarse”. En: *El Nacional*, 8/28/03.
- Castañeda, Jorge G. (2003): “The Forgotten Relationship”. En: *Foreign Affairs*, vol. 82, no. 3, p. 67.
- Coronil, Fernando (1997): *The Magical State: Nature, Money, and Modernity in Venezuela*. Chicago: University of Chicago Press.

- Crandall, Russell (2003): "Continuing Insecurity in the Northern Andes". En: *Strategic Survey 2002/3: An Evaluation and Forecast of World Affairs*. Oxford: Oxford University Press for The International Institute for Strategic Studies, pp. 76-89.
- Easton, Adam (2003): "Venezuela Leader Rules Out Early Poll". En: *BBC World News*, 9/8/03.
- Ellner, Steve/Rosen, Fred (2002): "The Remarkable Rise and Fall of Hugo Chávez". En: *NACLA*, vol. 36, no. 1, pp. 9-16.
- Fleisher, Lowell R. (2003): "Economic and Political Troubles Plague Venezuela". En: *American Diplomacy*, vol. 8, Nn. 1. <https://www.ciaonet.org/olj/ad/ad_v8_1/fil01.html> (3/8/04).
- Forero, Juan (2003): "As Venezuela Slides, the Poor Stand by Their Man". En: *The New York Times*, 4/30/03.
- (2003a): "Chávez and Foes Agree to a Referendum". En: *The New York Times*, 5/24/03.
- (2003b): "Venezuela Council Rejects Petition to Recall Chávez". En: *The New York Times*, 9/13/03.
- Lugo Galicia, Hernán (2003): "El MVR Peleará por Anular la Pregunta si Validan las Rúbricas". En: *El Nacional*, 9/10/03.
- Naim, Moisés (1993): *Paper Tigers and Minotaurs: The Politics of Venezuela's Economic Reforms*. Washington: The Carnegie Endowment for International Peace.
- (2002): "Poor but Fervently Loyal". En: *Economist*, 8/31/02.
- (2003): "Hugo Chávez and the Limits of Democracy". En: *The New York Times*, 3/5/03.
- Robberson, Tod (2003): "Venezuela Oil Crisis Spills Into U.S.". En: *The Dallas Morning News*, 3/9/03.
- (2003a): "Venezuelan Crime Explodes, Rated Hemisphere's Second Most Dangerous". En: *The Dallas Morning News*, 3/13/03.
- Robles, Frances (2003): "Recall Vote in Venezuela Stalls". En: *The Miami Herald*, 8/3/03.
- (2003a): "Venezuela Could Ease Exchange Controls After Foreign Reserves Surpass US\$ 18 Billion". En: *Associated Press Worldstream*, 5/14/03.
- S.N. [Sin Nombre] (2002): "A Tragic and Dangerous Stalemate". En: *Economist*, vol. 365, no. 8294, p. 33.
- (2003): "Minuto a Minuto". En: *El Nacional*, 8/31/03.
- Webb-Vidal, Andy (2002): "Troops Seize Police HQ for Chávez". En: *Financial Times*, 11/18/02. London.
- Weyland, Kurt (2001): "Will Chávez Lose His Luster?". En: *Foreign Affairs*, vol. 80, no. 6, pp. 73-87.
- (2002): *The Politics of Market Reform in Fragile Democracies: Argentina, Brazil, Peru, and Venezuela*. Princeton: Princeton University Press.

Pedro Díaz Blum

Perspectivas y condiciones para una solución pacífica de la crisis en Venezuela

Deseo comenzar agradeciendo al Instituto Iberoamericano esta invitación, así como por el interés que han tenido en hacer este simposio sobre mi país. No es muy fácil resumir en pocas palabras el problema político venezolano, y menos cómo superarlo; sin embargo, trataré de dar mi opinión en esa dirección.

Venezuela atraviesa una de sus crisis más profundas de los últimos 100 años. Para algunos es un ciclo histórico, para otros es la imposición de un sector social apoyado por el gobierno; es decir, pareciera estarse produciendo una lucha de clases, no como la explicaron los teóricos del marxismo, sino como un experimento novedoso, el único en el mundo con forma y fondo. El problema de fondo es la exclusión con la que una parte del país olvidó a la otra y esto desde el Pacto de Punto Fijo, en que la izquierda venezolana quedó excluida del mismo. Al paso del tiempo, la falta de competencia y contrapeso entre un sector, es decir la derecha y el otro, la izquierda, trajo como consecuencia el descalabro, que se profundizó desde los años setenta. En este lapso de tiempo, entre otras cosas se fueron deteriorando todas las instituciones y la pobreza fue aumentando vertiginosamente. Como consecuencia de ese proceso surge la elección del presidente Chávez, quien ahora comete el mismo error de los que firmaron el Pacto de Punto Fijo y hace un gobierno, como él dice, para los pobres, pero excluyendo a las otras clases sociales venezolanas y, más grave aún, haciendo que la peor parte la esté llevando la clase media. Por esta razón el proceso que lidera el presidente Chávez no tendrá otro final que el de fracasar, así como le pasó a los firmantes del Pacto de Punto Fijo.

Otro punto muy importante que me gustaría ahondar es el problema de los partidos políticos en Venezuela y además quisiera hacer algunos aportes que desde mi punto de vista muestran el cómo salir de la crisis, sobre todo para evitar mayores conflictos en Venezuela.

Es inconcebible la democracia sin partidos políticos, pareciera ser un criterio unánime en el mundo de hoy.

Las discusiones sobre los partidos políticos van desde la redefinición de sus funciones, pasando por la necesidad de recuperación de la credibilidad de los mismos, hasta el terrenal problema del financiamiento para su funcionamiento.

Pero quisiera ir más allá del tratamiento taxativo del funcionamiento organizacional y del marco normativo que debe ser propio de los partidos políticos. Porque para hablar de los partidos políticos en Venezuela hay que hablar indefectiblemente de lo que significan para una democracia los valores y principios que identifican a una nación; hay que hablar de la importancia del ejercicio del liderazgo, de las responsabilidades que tenemos los individuos y de la necesidad de rescatar los valores éticos y morales de los que convivimos en Venezuela, para que de esa manera podamos clarificarnos en las funciones de los partidos políticos.

Lo primero que tenemos que hacer en Venezuela es enfrentar el mito del Salvador, del Mesías político, en sus más profundas raíces.

Debemos romper con la dependencia en la creencia de que tiene que venir un hombre o una mujer a solucionarlo todo y lo de todos: el empleo que necesito, la casa que me hace falta, los créditos para mi empresa y lo que es peor, el estímulo para invertir, la educación, la cura para las enfermedades, etc.

Un Mesías político aparece de tanto invocarlo. Peor aún, se nutre de tanto necesitarlo. Las carencias de un pueblo son el abono perfecto para que una persona carismática o disciplinada en el quehacer político se sienta en el inmenso deber de salvar a la patria del caos.

Y si hay algo, que nos pueda ayudar a terminar ese mito del Mesías político, es la búsqueda sensata, práctica y realista de nuestra identidad como nación, a través de un plan de país, que es muy diferente a un plan de gobierno. Los venezolanos vivimos el drama de no saber lo que queremos ser. El maestro Cabrujas decía, y cito: “que Venezuela es un país no posesionado, nadie en el mundo sabe qué quiere Venezuela, qué proyectos, qué ambiciones, qué deseamos ... Venezuela ni quiere, ni busca, ni anda”.

No sabemos qué somos como nación porque estamos absolutamente dedicados al inmediateismo, a la ciencia de salir del paso; resolver el hoy y luego veremos; Venezuela es un país de coyunturas. Sólo

un proyecto colectivo que nos una, algo en lo que todos podamos estar de acuerdo y se parezca a lo que somos, puede librarnos hoy y en el futuro de seguir en el círculo vicioso de esperar que el Mesías político nos toque la flauta.

Ahora bien, ¿cómo elaboramos un proyecto de país?, y sobre todo, ¿quién lo hace? Es inobjetable que todos los venezolanos debemos sentirnos responsables en la elaboración del proyecto de país y en la búsqueda de la identidad como nación.

Pero son los partidos políticos quienes deben asumir la conducción y el liderazgo de ésta.

Esa es una función clara de los partidos políticos, y no estar tratando de ganar las elecciones en la Federación Médica, o en la Federación de Centros Universitarios, o en el Sindicato de la Construcción, o en una Asociación de Vecinos; es decir, ocupando los espacios de la sociedad civil. En Venezuela hemos vivido una aparente sustitución de las funciones de los partidos políticos por parte de otras instituciones y de la misma sociedad.

Hay que reconocer el hecho de que en medio de todo este clima de agitación política actual, muchos sectores de la sociedad, ciudadanos comunes, han logrado organizarse para defender sus intereses y luchar por una serie de consignas. Y eso es positivo, pero con lo que no estoy de acuerdo es que ahora algunos sectores de la sociedad civil venezolanos quieran ocupar el papel de los partidos políticos y eso hay que corregirlo desde ya.

Vemos cómo organizaciones civiles han estado de moda en la credibilidad de la opinión pública. Los medios de comunicación social, las fuerzas armadas, los sindicatos, gremios empresariales y profesionales.

Las organizaciones de la sociedad civil deben ser precisamente organizaciones dedicadas a la defensa y promoción de los derechos ciudadanos, y no pueden, mediante la excusa de que los partidos políticos están desprestigiados, pretender ocuparse también de las tareas del Estado.

Pero el drama tiene muchas interpretaciones y análisis, casi todos coyunturales, y que tratan de justificar un momento histórico del país.

Porque si bien es cierto que en el encumbramiento de estas instituciones y de la sociedad civil en el escenario político de Venezuela tienen mucha culpa los partidos políticos (los viejos y los actuales),

también es cierto, que no hemos internalizado en nosotros la convicción de que son los partidos políticos y nadie más a quienes corresponde el ejercicio de las funciones públicas.

Pero hay que estar conscientes que los partidos políticos venezolanos también han sufrido del mal del Mesías. Algunos dirán que allí está su origen, porque nuestros partidos políticos han nacido como expresión de un liderazgo particular y algunos de ellos no han podido superar la figura que los creó.

Para la mayoría de los venezolanos hoy día, da lo mismo ser de un partido que de otro, porque sienten que lo único que los diferencia, son sus líderes y la relativa posición de poder que les otorga el manejo momentáneo del gobierno nacional, de alguna gobernación o de algunas alcaldías.

Y es que a falta de propuestas colectivas, se imponen los criterios particulares, y han convertido a los partidos políticos solamente en plataformas de lanzamiento de candidaturas. Por otra parte, también se ha sustituido la formación de los militantes de los partidos políticos para la gerencia pública por el manejo de la palestra pública, es decir, la “habladera” o “los pico de plata”.

Y no se ha hecho nada o muy poco por formar a ese político, futuro funcionario público, para que sea capaz de ejercer funciones administrativas de gobierno, más que con un criterio gerencial, con el oficio y la condición de servicio público que es la esencia de la función de gobierno, como por ejemplo, la Escuela Nacional de Administración, la ENA, que fue y es un proyecto del Estado francés para la formación de funcionarios de alto nivel que se dedican a la administración del gobierno moderno o los institutos de formación políticos, Demócratas o Republicanos de los Estados Unidos.

Así creo que tenemos un silogismo que lo forman estos aspectos anteriormente tratados, los que deben abordarse a la hora de reflexionar sobre los partidos políticos: 1. organización autónoma de la sociedad civil, que pasa por 2. la redefinición de la misión de los partidos políticos, los cuales deben 3. abocarse a la estructuración de un plan de país que nos una y nos dé valor como nación, 4. para enterrar de una vez por todas el mito del Mesías.

Es menester hacer hincapié tanto en el fortalecimiento como en el nacimiento de nuevas organizaciones políticas. En mi país existe un viejo dicho que reza: “zapatero a su zapato”. Ahora está suficiente-

mente demostrado que el Estado es una tarea de todos, pero debe ser presidido por políticos, gente que sepa manejar el difícil arte de lograr lo imposible a través del diálogo y el consenso. Ahí esta parte importante de la solución.

En el inmediato plazo sería recomendable crear una Mesa de Conversaciones en donde los sectores más ponderados de ambos bandos tengan encuentros permanentes, a fin de discutir asuntos de política cotidiana con el objetivo de avanzar en temas de interés común, en especial para abordar el clima de paz, los referendos revocatorios pedidos por ambos sectores y encontrar vías de entendimiento, así como ir resolviendo problemas, aunque sean insignificantes. Esto, porque el diálogo debe mantenerse y ese contacto, estoy seguro que en algún momento generará puntos de encuentro. En tal sentido, en el parlamento hemos creado el grupo Boston constituido por 30 diputados de ambos sectores por igual. Este grupo apoyado por el Congreso estadounidense, ha sido una instancia que a pesar de su bajo perfil, contribuye de manera permanente a la búsqueda de encuentros en pro de una salida a la crisis. Sus aportes tienen hoy día una relevancia, como la paralización de la aprobación de la Ley de responsabilidad social de la Radio y la Televisión, también denominada por la oposición como la ley de contenido.

Finalmente

Particularmente creo en la necesidad de una unidad superior entre los venezolanos, reconociendo las distintas formas del pensamiento para enfrentar el reto de lograr el progreso de nuestro país.

Buscar acuerdos, llegar a entendimientos y trabajar por aquellos temas de interés para la nación aun cuando estoy consciente de que para muchas personas el conflicto político actual nos ha llevado a situaciones irreconciliables.

Pero éste es el momento de tomar conciencia sobre la inmensidad de nuestra responsabilidad como dirigentes y líderes de un país que valientemente, sin miedo, está dispuesto a luchar por el bienestar. Por el bien común. Éste es el momento, para que, como dice Vaclav Havel, intentemos liberarnos, por fin, no sólo de nuestros temores a la mentira, sino también de nuestros temores a la verdad.

Bibliografía

Drucker, Peter F. (2002): *La Nuevas Realidades*. Buenos Aires: Ed. Sudamericana.

Gooding, Robert/Klingemann, Hans-Dieter (2001): *Nuevo Manual de Ciencias Políticas*. Madrid: Istmo.

Matus Carlos (1994): *Adiós, Señor Presidente*. Caracas: Fundación Altadir.

Rial, Alberto (1997): *La variable Independiente. La Idiosincrasia y los Sistemas de Valores en el Desarrollo de Venezuela*. Caracas: Editorial Galac.

3. El populismo y la reacción internacional

Marianne Braig

¿La *longue dureé* del populismo o el populismo como sombra de la democracia?

1. Algunas recomendaciones

Un fantasma merodea no solamente a América Latina. A pesar de los numerosos réquiems, el populismo declarado periódicamente muerto en América Latina, o por lo menos estilizado como “el concepto infeliz de una época”, que en vista a la democratización nadie quería volver a usar, pareciera volver a resucitar.

No solamente en América Latina, donde en la actualidad el venezolano Hugo Chávez es el más conocido de una larga lista de líderes populistas, sino que también en las democracias liberales estables coexisten junto a figuras de la derecha radical como Silvio Berlusconi o Jörg Haider, políticos más serios, en cuyas formas de actuar también se percibe un estilo populista de hacer política. La vaguedad parece ventajosa para la popularidad del concepto. Cuanto mayor es el nivel de popularidad tanto menor es la capacidad explicativa y analítica. Pero limitar el concepto al contexto latinoamericano no ayuda mucho. Allí no existe país que no haya experimentado con fenómenos populistas desde comienzos del siglo XX, independientemente de cuán autoritario o cuán democrático haya sido el régimen del que se trate. Por esta razón carece de sentido hablar de populismo en singular, ya sea como régimen político o como movimiento social.

Para entender las condiciones de posibilidad del populismo en América Latina y para iluminar su consabida capacidad de renovar su atracción, me parece conveniente considerar algunas recomendaciones (Puhle 2003) para no atascarse en la maraña de sus distintas formas de aparición:

1. No deben confundirse con una escenificación populista de la política ni con los movimientos sociales que organizan distintas clases en torno a la cuestión de la representación política y del bienestar social; ni a los regímenes políticos o los gobiernos que recomien-

dan determinados planes sociales y económico-políticos, que se espera contribuyan con el bienestar de vastas capas de la población, y que suelen denominarse populistas (nacional-revolucionarios o socialdemócratas). Esta escenificación puede relacionarse con cada forma de la economía política y con cada forma de la dominación política. Así, determinados instrumentos y estilos políticos pueden ser combinados con distintas políticas.

2. Especialmente deberíamos evitar igualar los regímenes populistas a un modelo de desarrollo económico específico; para Latinoamérica el modelo de la sustitución de importaciones. Varios historiadores (Collier 1979; Knight 1998) han mostrado que no existe una conexión evidente entre industrialización incipiente y regímenes populistas en los años treinta. Asimismo muchos de los “populismos clásicos” no se ven afectados por la crítica que iguala populismo con errores macroeconómicos o que los trata como puros populismos económicos (Dornbusch/Edwards 1991).
3. No deberíamos concebir al populismo como la antítesis de la modernización –como un asunto específico de caudillos, héroes y machos– sino como íntimamente relacionado a su crisis. Aquí deben considerarse distintas constelaciones históricas. Es útil diferenciar fases y formas “clásicas del populismo” (de los años 30 y de los años 60 del siglo XX) de los “neo populismos” recientes (años 1990), especialmente como consecuencia de la restricción de recursos, funciones y posibilidades de acción del Estado en tanto ejecutor de metas económicas y sociales.
4. Al mismo tiempo y dado que los estilos populistas no desaparecen con la formación y la estabilización de regímenes democráticamente elegidos, no deberíamos concebir al populismo y a la democracia como contrapuestos. Para Margaret Canovan el populismo es la sombra que siempre acompañará a la democracia. Asimismo éste se fundamenta en las dos caras de la democracia. Para ella:

... democracy presents two faces, one redemptive, the other pragmatic; that although these are opposed, they are also interdependent; and that between them lies a gap in which populism is liable to appear (Canovan 1999: 9).

5. El populismo no representa una tentación popular, sino la “apelación al pueblo”. La escenificación pública del “pueblo” recuerda a las repúblicas liberales de comienzos del siglo XX y en las democracias defectuosas de finales del mismo siglo, donde el poder político se fundamenta en la soberanía popular, pero al mismo tiempo a las posibilidades de acceso a los logros de la modernidad, es decir, de la democracia liberal, son limitadas para las masas populares. El pueblo abstracto, o el “nosotros, el pueblo” mencionado en todas las actas republicanas (Benhabib 1993: 101ss.), y que en tanto soberano tiene competencia legislativa, no es idéntico al pueblo concreto que debe atenerse a las leyes. La lógica de la identidad atenta contra quienes, a causa de su alteridad, se encuentran más allá de la lógica de igualación del “nosotros”. Esta violencia originaria, esta exclusión violenta, está oculta en el origen de cada república y vuelve en la forma de un hiato entre quienes nuevamente hablan en nombre de “nosotros” y sobre quienes se habla y se decide en su nombre (Benhabib 1993: 104).
6. El populismo es entonces un fenómeno no tanto vinculado a una época histórica específica, sino que el mismo puede reaparecer permanentemente, independientemente de un proyecto económico o político. Canovan (1981) habla de “un momento populista” para designar las condiciones afectivas de los grupos populares a quienes el nuevo orden social les mueve el piso. La pérdida de confianza aplasta a la sociedad política, que en América Latina está débilmente desarrollada.

2. El populismo como sombra de la democracia

Con la transición en las últimas décadas se ha establecido una nueva generación política en América Latina, que en primer lugar no está a favor de una democracia representativa, sino que practica aquello que se designa como democracia selectiva, reducida o defectuosa. Ésta está determinada sobre todo por el estilo político de sus figuras líderes y por la vinculación de la legitimación del sistema político a la persona del presidente y a la posición preponderante de poder que le fija la constitución. Independiente de cuán “limpiamente” se desarrollen los comicios, con los cuales esta nueva generación alcanza el poder, las elecciones no les impiden cultivar un estilo despótico, arbitrario,

cuando no autocrático de gobierno. Como sus antecesores “del populismo clásico” esperan personificar a la nación y al pueblo, sin otorgarle espacio a las instituciones democráticas de control del poder. Bajo estas limitaciones padecen tanto la independencia del poder judicial como el parlamento y los partidos, e incluso la totalidad de lo público político, dado que llegado el caso las mismas podrían impedir al poder presidencial introducir las “reformas” de fundamental importancia (O'Donnell 1994: 55-69).

3. El problema de lo público

Los repudios sociales —consecuencia de los programas de ajuste estructural de los años ochenta y noventa del siglo pasado— producen nuevas formas de desarraigo y de exclusión, que son tratadas recurriendo a un estilo de acción y a una retórica política populista. Al igual que sus odiados antecesores populistas, este nuevo tipo político se refiere al pueblo para imponer las “reformas necesarias”, que en la mayoría de los casos, se ejecutan a costa de ese mismo pueblo. Frecuentemente aparecen políticos con un pasado corrupto y con un estilo populista prometiendo romper con las políticas del estatus quo y ofrecen alternativas nuevas y modernas, incluso muchas de ellas de tipo comunitario y orientado hacia la sociedad civil (Braig 1999).

Como en otros momentos históricos del siglo pasado la disputa discursiva tiene lugar en torno a la carga imaginaria de los conceptos de progreso, modernización, reforma, revolución y sobre todo solidaridad y comunidad. Pero el espacio público en el cual se produce esta disputa está cambiando. Junto a los canales de comunicación clásicos, discursos frente a una audiencia masiva en las plazas o la comunicación directa con el pueblo en las calles, los medios masivos juegan un papel central. Mientras que la radio ya había abierto posibilidades que fueron utilizadas por virtuosas como Evita Perón, los nuevos medios permiten —al estilo de la producción de telenovelas— una adaptación permanente de las imágenes de los políticos a las circunstancias actuales, reescribir y cambiar el reparto de roles así como reinventar escenas útiles para un populismo “comunicativo” (Sarlo 1993). Nuevamente se ubica la comunicación entre el pueblo y el líder en el centro; sólo que la forma en la cual se comunica es diferente. Aun cuando la forma clásica de la aclamación, el líder en el balcón del palacio de

gobierno y el pueblo en masa delante del lugar central pierde significación, la misma no es abandonada (Eickhoff 1999; Hofmeister 2002). A la par de ésta surgen otras formas de escenificación de la comunicación directa cuyo potencial se ve amplificado por los nuevos medios.

A esto se le suma además –orientado hacia los EEUU– un nuevo fenómeno para América Latina: las encuestas de opinión. Para todo y a todos se les pregunta de forma directa e inmediata la opinión del pueblo. Sin embargo, al pueblo no se lo consulta en su carácter de soberano, sino en su carácter de consumidor a quien se le pide que opine sobre un jabón para lavar la ropa igual que sobre una política para reformar el seguro social. De este modo se constituye una democracia medial plebiscitaria, que no está asociada a una democracia representativa, pero que tampoco fomenta la participación política directa. No se trata de cogestionar o de cooperar, sino que las encuestas de opinión sirven para comprobar o para fortalecer la popularidad del presidente y para conectarla con la percepción de determinados políticos. Esta forma moderna de la aclamación pública se adapta muy bien a la revolución neoliberal, en tanto sirve a las antípodas de las formas políticas de representación, la cual se dirige a legitimar a la figura del líder, tratando a los ciudadanos como consumidores en lugar de tratarlos como sujetos del derecho y como actores sociales con derechos políticos. No solamente los medios y las encuestas juegan un papel en el propio país, sino que en un mundo descrito como global la resonancia internacional creciente produce un efecto de legitimación o la destruye.

Una lectura como la propuesta otorga mayor peso a los estilos políticos, a la retórica, a la escenificación y a la *performance* de la relación entre el pueblo y la figura del líder para entender al populismo que a otros factores, como por ejemplo, el modelo económico y las alianzas de clase. Seguramente se corre el riesgo de desarrollar una definición demasiado amplia del populismo. Canovan tiene razón en afirmar que hay un exceso cuando el hecho simple de referir al pueblo constituye prueba suficiente de su existencia (Canovan 1981). Si la confianza de las personas no se basa o sólo se basa parcialmente en las instituciones y en el respeto por los procedimientos, es decir, en la parte pragmática de la democracia, entonces la esperanza se concentra en las promesas de salvación de los Salvadores escénicos (*sic*), quienes sin duda pueden ser democráticamente elegidos.

Sin embargo, si las promesas de salvación no están asociadas a prácticas, como la gestión del bienestar social así como el reconocimiento o la promesa de respeto, entonces las figuras mediales del populismo comunicativo corren peligro de perder al pueblo y la legitimación de su poder. Hoy en día, si la comunicación entre el pueblo y el líder no incluye el reconocimiento, incluso jerárquicamente estructurado, se atorará menos en aclamaciones controladas y tenderá a caer en la despolitización de las encuestas de opinión y de los barómetros del *rating*.

Bibliografía

- Benhabib, Seyla (1993): "Demokratie und Differenz. Betrachtungen über Rationalität, Demokratie und Postmoderne". En: Brumlik, Micha/Brunkhorst, Hauke (eds.): *Gemeinschaft und Gerechtigkeit*. Frankfurt/Main: Fischer, pp. 97-116.
- Braig, Marianne (1999): *Sehnsucht nach Legitimation. Zum Wandel populistischer Politik in Mexiko*. Berlin: Freie Universität Berlin (Habilitationsschrift).
- Canovan, Margaret (1981): *Populism*. London: Janovich.
- (1999): "Trust the People! Populism and the Two Faces of Democracy". En: *Political Studies*, XLVII: 2-16. Oxford.
- (2002): "Populism, the Democratic Question, and Contemporary Governance". En: Mény, Yves/Yves, Surel: *Democracies and the Populist Challenge*. Basingstoke: Palgrave, pp. 25-44.
- Collier, David (1979): "The Bureaucratic-Authoritarian Model: Synthesis and Priorities for Future Research". En: Collier, David (ed.): *The New Authoritarianism in Latin America*. Princeton: Princeton University Press, pp. 363-398.
- Dornbusch, Rudiger/Edwards, Sebastian (eds.) (1991): *The Macroeconomics of Populism in Latin America*. Chicago/London: University of Chicago Press.
- Eickhoff, Georg (1999): *Das Charisma der Caudillos: Cárdenas, Franco, Perón*. Frankfurt/Main: Vervuert.
- Hofmeister, Wilhelm (ed.) (2002): "*Geht mir einen Balkon und das Land ist mein*". *Politische Führung in Lateinamerika*. Frankfurt/Main: Vervuert.
- Knight, Alan (1998): "Populism and Neo-populism in Latin America". En: *Journal of Latin American Studies*, 30: 223-248. Cambridge.
- O'Donnell, Guillermo (1994): "Delegative Democracy". En: *Journal of Democracy* 5, 1: 55-69.
- Puhle, Hans-Jürgen (2003): "Zwischen Protest und Politikstil: Populismus, Neo-Populismus und Demokratie" (unveröffentlichtes Manuskript).
- Sarlo, Beatriz (1993): "Aesthetics and Post-Politics: From Fujimori to the Gulf War". En: Beverley, John/Aronna, Michael/Oviedo, José (eds.): *The Postmodernism Debate in Latin America*. Durham: Duke University Press, pp. 180-193.
- Werz, Nikolaus (2003): *Populismus. Populisten in Übersee und Europa*. Opladen.

Nikolaus Werz/Simone Winkens

El populismo de Chávez y el rol de los medios

La relación entre el presidente Chávez y los medios privados tanto nacionales como internacionales es conflictiva. Sin embargo, esto no siempre fue así. Se puede afirmar que Chávez llegó a la presidencia gracias a su uso de los medios de comunicación y al hecho de ser una figura carismática, emisora de mensajes. Entonces cuando hablamos del populismo de Chávez y del rol de los medios, no sólo hay que tener en cuenta el conflicto actual, sino también sus cualidades de emisor de mensajes y el uso que él hace de ellos tanto en los medios tradicionales de comunicación social como en los medios alternativos (*graffiti*), en incontables mítines, siempre usando la simbología del movimiento centrado en su persona (Benshimol R.: 2003).

Como es sabido por los estudiosos de la historia en América Latina, el surgimiento del populismo tuvo que ver con el uso de la radio. Eva Perón y el peronismo se valieron de la radio para difundir su mensaje político y para crear una base de apoyo dentro de la población. Al lado de la persona real se creó otra imagen simbólica –la imagen de Evita/Madonna constituye un ejemplo para ello y demuestra que los populistas pueden convertirse en figuras mundiales–. Existen otras figuras menos exitosas dentro del así llamado nuevo o neopopulismo. Abdalá Bucaram, quien participó en los juegos olímpicos de Munich, ofreció pan y juego durante la campaña electoral ecuatoriana de 1996. En sus presentaciones bailaba al ritmo del grupo pop uruguayo “Los Iracundos”, usando además símbolos religiosos y predicando como los nuevos evangelistas (Werz 2003: 60). Su carrera política fue corta, ya en febrero de 1997 una muchedumbre de más de un millón de personas pidió con éxito su renuncia. Sin embargo, Bucaram mantuvo cierta celebridad latinoamericana. En 1997 habló en Caracas en el seminario internacional “Política y antipolítica” junto con Antanas Mockus, alcalde de Bogotá y el cantante Ramón (Palito) Ortega, ex-gobernador de la provincia de Tucumán, y en aquel entonces calificado como precandidato presidencial en la Argentina.

En casi todos los estudios sobre el desarrollo político actual en Venezuela se señala el rol de los medios de comunicación. Sin embargo, llama la atención que en los no pocos libros publicados recientemente sobre la era Chávez no existe casi ningún estudio sobre la función de los medios y su actuación en la crisis actual (Petkoff 2002). Una excepción constituyen varios números de la revista *Comunicación* y el libro editado por Marinellys Tremamunno “Chávez y los medios de comunicación social” (2002), que a su vez refleja las posiciones corrientes que existen sobre el tema.

El análisis de esta difícil relación puede ser interesante más allá del caso venezolano. El presidente Chávez gobierna después de una victoria electoral con el apoyo de una parte de la población, de los militares y parte de la izquierda; sin embargo, tiene la mayoría de los medios de comunicación privados en su contra. Una parte de los medios a su vez –después de la implosión del sistema partidista– ha asumido el rol que antes tenían los partidos políticos, es decir se convirtieron en actores políticos. Esto y su actuar durante el golpe de Estado entre el 11 y 13 de abril de 2002 ha llevado, incluso, a algunos autores a cuestionar el rol de los medios en el país.

La siguiente ponencia es una aproximación a la compleja relación entre Hugo Chávez y los medios en Venezuela. Se trata de un estudio preliminar debido al hecho de que los autores no viven normalmente en Venezuela y cuando se encuentran allá se dedican más al estudio de los periódicos que a mirar televisión. Algunas conclusiones pueden ser útiles más allá del caso venezolano, ya que en parte reflejan también los cambios que se pueden observar en la relación de los medios con la política a nivel mundial.

1. Los medios y la política

La importancia de los medios de comunicación ha aumentado en todos los países. En las sociedades industrializadas, donde hasta la década de los ochenta existían *cleavages* políticos bastante bien marcados, como resultado del cambio social se dio un proceso de fragmentación y de individualización. Los partidos populares perdieron fuerza en la constelación posmoderna y surgieron nuevas figuras antipolíticas.

Lo que llama la atención es la creciente mezcla entre información y entretenimiento:

- La política aparece como un proceso exclusivamente guiado por personas.
- La televisión sirve al entretenimiento (*politainment*).
- Hay una competencia fuerte por el ranking y la cuota también en los formatos informativos.
- Los medios de comunicación imponen en cierta forma los temas de la agenda política.
- Ellos juegan un rol importante en la construcción de liderazgos públicos.
- Sin embargo, resulta difícil medir el impacto de los medios en cambios políticos.

Los políticos y los partidos a su vez tienen que reaccionar ante esta situación. El nuevo esquema les brinda amplias posibilidades a los anti-políticos. Como ellos argumentan de manera simplista se les facilita el acceso a los medios de comunicación. Los mejores amigos de los populistas son los periodistas, escribió un periodista alemán (de Weck 2002) lo que no quiere decir que esos mismos periodistas no sean muy críticos con los populistas una vez que éstos hayan asumido el poder. Pero en su ascenso los populistas son noticia y reciben una gran atención y gozan de una amplia cobertura.

2. Estructura y características de los medios en Venezuela

La planta Televisora Nacional comenzó con transmisiones regulares el 1 de enero de 1953. Al lado de la estatal Televisora Nacional se establecieron prácticamente desde el comienzo Venevisión (hasta 1964 con el nombre Televisa) y RCTV (Radio Caracas Televisión). Ya a mediados de la década del sesenta un tercio de los hogares tenían TV. Existen once emisoras televisas en Venezuela, la mitad de ellas en Caracas. Las emisoras más importantes son Venevisión y RCTV.

Los canales comerciales de TV juegan un rol destacado en Venezuela, ya que la población es muy adicta a la televisión. Casi el 87% de los venezolanos vive en zonas urbanas.

Televen, Cisneros y Phelps reciben el 70% de los fondos comerciales (Mayorbe 2002: 182). El grupo Cisneros en 2000 trasladó su sede principal a Miami. Cisneros es a la vez accionista mayoritario de Univisión, la cadena de televisión más vista por la minoría más grande de Estados Unidos. Detrás de Televisa (México) y TV Globo (Brasil)

el Grupo Cisneros constituye el tercer gigante televisivo en América Latina.

Con 75 periódicos, Venezuela publica el 7,4% de la producción por día de periódicos que salen diariamente en América Latina. La tirada promedio se calcula en casi 29.000 por periódico. Calculando que un periódico es leído por tres personas, los periódicos llegaban en 1990 a un 40% de la población alfabetizada de Venezuela. Según datos del Grupo de Diarios de América (GDA) en los años 2000/2001 la tirada llegaba a 5 millones ejemplares, una cifra calificada por el presidente del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela (CNP) como exagerada para impresionar a clientes publicitarios (Benshimol R. 2003). La producción debe estar debajo de los 2 millones al día. Cuatro familias o empresas la dominan: La familia Núñez, socio principal de Editorial Ambos Mundos C. A. que edita *El Universal*, la Editora El Nacional de la familia Otero, el Bloque de Armas y la familia Capriles. *El Universal*, *El Nacional* (100.000) y *Últimas Noticias* (150.000) tienen las tiradas más altas. Al grupo “Capriles” pertenecen *El Mundo* y el vespertino *Últimas Noticias*.

Tirada de periódicos 1990

	Población		número de periódicos	tirada total	tirada por 1.000 habitantes	tirada medio por periódico
	total	urbano en %				
Venezuela	18.272.000	78,5	75,0	2.164.800	119	28.862

Fuente: López Arjona (1993: 55).

Comparación de los medios de masas en Venezuela 1990 y 2000

Periódicos				radio				televisión			
número		ejemplares por 1.000 habitantes		emisoras		radios por 1.000 habitantes		emisoras		televisores por 1.000 habitantes	
1990	2000	1990	2000	1990	2000	1990	2000	1990	2000	1990	2000
75	75	119	k.A.	163	344	413	450	11	27	137	171

Fuentes: Benshimol R., Correo electrónico (23.05.2003); López Arjona (1993: 540); <http://www.gda.com>.

Comparación de periódicos según cobertura 1990

	cobertura nacional	cobertura regional	cobertura local	total
Venezuela	12	58	5	75

Fuente: López Arjona (1993: 64 ss.).

Comparación de emisoras de radio según cobertura 1990

	cobertura nacional	cobertura regional	cobertura local	total¹
Venezuela	3	77	80	163

Fuente: López Arjona (1993: 267 ss.).

Comparación de emisoras televisas según cobertura 1990

	cobertura nacional	cobertura regional	cobertura local	total
Venezuela	4	1	6	11

Fuente: López Arjona (1993: 441 ss.).

Los medios fueron controlados durante la dictadura de Pérez Jiménez (1948-1958). En la era democrática hubo ciertas limitaciones o presiones a principios de la década del sesenta, la así llamada década violenta, y bajo el gobierno de Jaime Lusinchi (Díaz Rangel 2002: 27). El presidente Lusinchi (1984-1989) inició la liberalización de los medios de comunicación facilitando el acceso a ciertos grupos. Un papel importante jugó en este proceso su secretaria privada, Blanca Ibáñez, la cual fue locutora radiofónica y autodeclarada experta para asuntos de comunicación. Como consecuencia del proceso de liberalización se dificultó el control de los medios de comunicación por el Estado.

La importancia de los medios de comunicación y especialmente de la televisión para la política en momentos cruciales se desprende por ejemplo del hecho de que Carlos Andrés Pérez durante el intento de golpe de 1992 logró huir a los estudios de Venevisión, lo cual le permitió aparecer a nivel nacional y de esta forma desmentir las informaciones de los golpistas.

3. La relación de Chávez con los medios

Gran parte de su éxito Chávez se lo debe a los mismos medios y el “por ahora televisivo” del 4 de febrero de 1992. Con 75 segundos en la televisión el líder golpista pasó de “una notoriedad pública de 0 a 100 por ciento”. En una encuesta realizada en 1994 en Caracas se preguntó, a cuál medio se le podía atribuir la imagen de Chávez. La gran mayoría respondió que la televisión (78,9%) sobrepasando periódicos y revistas (63%) y la radio (40,7%) (Abreu 2000: 7). Gracias a su corta aparición, él pudo introducirse ante la población como persona carismática y como un posible transformador del sistema de partidos altamente cuestionado por gran parte de la población y los mismos medios. Es decir, Chávez comienza su ascenso político con un acto político-militar y mediático.

Durante la campaña electoral de 1998 recibió un trato bastante generoso de los medios, tanto de los periodistas como de los propietarios. *El Nacional* incluso fue considerado “prochavista” y Alfredo Peña, un ex-director del periódico, se fue a trabajar con el gobierno y actualmente se desempeña como alcalde mayor de Caracas. La prensa fue más crítica que los medios audiovisuales. Gustavo Cisneros, propietario de Venevisión, estuvo entre los que le daban cierto apoyo en aquel entonces, cuatro años más tarde se le encuentra entre los que se habían acercado a los golpistas del 12 de abril 2002. Parte de la victoria de Chávez en 1998 se explica por su presencia en los medios de comunicación. Los medios en la década del noventa habían criticado fuertemente a los partidos políticos y las deformaciones del sistema político. Chávez aparecía como una posible alternativa a esta situación de bloqueo. En la prensa su imagen era menos positiva. Entre los comentaristas había algunos que ya en aquel entonces lo comparaban con un dictador y su victoria electoral con una suerte de *Machtergreifung*. Ningún primer mandatario en Venezuela ha sido tan criticado por los medios escritos y más tarde también por los medios audiovisuales como Chávez.

Las relaciones relativamente buenas con los medios siguieron incluso durante el proceso de la Asamblea Constituyente y hasta su reelección en el año 2000. Al principio “sus maneras poco protocolares y campechanas” (Azuaje 2002: 8) fueron vistas por el público con interés. Las clases populares perciben a Chávez –escribe Levy Ben-

shimol— como un “hombre llano y sencillo, fisonómicamente igual a ellos” (2003: 18). Fue sobre todo la reacción del gobierno a críticas de corrupción en la prensa a finales de 1999 la cual provocó un alejamiento de los medios de comunicación de Chávez. El gobierno reaccionó dura y agresivamente contra algunos periodistas y propietarios de periódicos. Hay que tener en cuenta que Chávez no se considera como “un gobernante convencional, sino uno que se define a sí mismo como *revolucionario*” (Petkoff 2002: 91). Sus opositores son entonces enemigos, una actitud que también es transmitida a las críticas en los medios.

El primer mandatario instaló su propia estructura mediática tratando de aprovecharse del carisma del presidente. El gobierno usa mucho la Radio Nacional de Venezuela (fundada en 1936). Un periódico fundado en 1999 con el título *El Correo del Presidente* dejó de existir después de poco tiempo, la tirada según declaraciones del propio Chávez era de 20.000.¹ Con Venpres —Agencia Oficial de Noticias de Venezuela— el gobierno dispone de la agencia de prensa más grande del país con alrededor de 70 periodistas y corresponsales.

Mención especial merece *Aló Presidente* originalmente un programa de radio que ahora sale en VTV, canal 8. El programa fue creado en 1999, su antecesor era *De Frente con el Presidente*, que se emitía todos los jueves en vivo. Durante un tiempo el presidente tenía dos programas en la radio a su disposición. Al comienzo se producía la edición del domingo en la sede de Radio Nacional de Venezuela en Caracas. En medio del mismo programa había lo que Chávez llamó “La hora del plomo” durante la cual se atacaba fuertemente “a la oposición, a los medios, a alguien en particular que dijo tal cosa. Era bien animado ese programa” (Chávez Frías 2002: 146). El intento de pasar el programa al sábado, que mientras tanto se transmitía de diferentes sitios del país, fue de corta duración porque la audiencia cayó considerablemente. Desde que se combina el programa con la televisión la cantidad de llamadas telefónicas ha disminuido. Hay una parte que se llama “Agenda Nacional” y otra sección que se llama “Noticias Posi-

1 En el exterior en 2002 apareció la publicación “El pueblo que participa y protagoniza”. En Internet aparecen “Correos de la emancipación” editadas en la Argentina por Fernando Bossi que informan regularmente sobre Venezuela.

tivas”. Todos los domingos de 11 a 17 horas esta reservado el tiempo en VTV. En una descripción del programa dice:

Durante el programa el Primer Mandatario explica en detalle los avances económicos, sociales, culturales de su gobierno. Además recibe y responde cualquier interrogante que tengan los ciudadanos a través de las llamadas telefónicas durante el espacio televisivo.

El público puede llamar durante el programa y tratar de presentar peticiones. A su vez ministros y altos representantes del gobierno tienen que asistir a la programación, ya que el presidente suele hacer anuncios y declaraciones durante sus conversaciones ante el público. *Aló Presidente* en cierta manera refleja un rasgo del populismo de Chávez. Busca la alocución directa con la población y trata de esquivar las instituciones y los medios establecidos. La frase “Yo creo en Chávez” puede tener su fundamento también en la esperanza del público que sus peticiones se cumplen directamente por el presidente.

El primer mandatario usa el canal estatal para dar a conocer la política del Estado, incluso se ha dicho que nada es definitivo en el gobierno hasta que Chávez lo confirme por radio o televisión. Hasta anunció el despido de personal de la PDVSA usando un pito, una actitud considerada luego por él mismo como un error (Chávez Frías 2002: 149). Frecuentemente usa los canales para criticar los medios comerciales. Las fuerzas sociales y los medios de comunicación a su vez no resisten la tentación de responder a estas declaraciones.

En marzo de 2002 Chávez habló siete horas en *Aló Presidente*, estableciendo un récord por el cual recibió las congratulaciones de Fidel Castro y de los presidentes Hipólito Mejía (República Dominicana) y Alfonso Portillo (Guatemala) durante la misma edición (*FAZ*, 19.3.2002). Su estilo de hablar tiene similitudes a una oratoria sagrada, se hacen referencias a los padres de la Independencia, a Dios y la Biblia. Aquí existe una similitud con Fidel Castro.²

En este programa muchas veces los medios comerciales han sido criticados y atacados. Poco a poco la batalla mediática entre el presidente Chávez y los medios se convirtió en parte de su presentación política. Es parte de la polarización, la cual es consustancial en su discurso matizado de anécdotas, citas bíblicas y bolivarianas y un tono conversacional donde usa el “nosotros” en contraposición a un “ellos”.

2 Le agradezco a Diony Durán la referencia.

La disputa con los medios de comunicación se enmarca en esta polarización. En la edición del 27 de febrero 2001 el responsabilizó a los medios de reflejar los intereses de los enemigos del pueblo y aconsejó al pueblo que se deshiciera de esta dictadura; en la versión del 14 de enero 2001 acusó a los medios de manejar la opinión pública de manera perversa y anti-ética. Y en la edición del 10 de diciembre del mismo año amenazó de apretar “las tuercas a quienes se nieguen a acatar las leyes” haciendo especial referencia a *El Nacional*, *El Universal* y “casi todas las plantas de televisión”. Más adelante afirmó que habría que discutir sobre el tema de los medios de comunicación y agregó:

les he dado instrucciones al titular de la secretaría y al presidente de CONATEL para que me pasen hoy mismo el proyecto de ley de contenido de los medios de comunicación ... porque le vamos a dar más rápido a esa ley (Zago 2002: 71).

El tono ha ido subiendo aún más: En una alocución respecto a la muerte de dos simpatizantes del gobierno el 5 de enero 2003 el presidente dijo:

No hay precedentes en la historia venezolana de una operación mediática, de terrorismo y de violencia, de manipulación, tan grande como la que estamos resistiendo heroicamente los venezolanos (Chávez Frías 2003: 30).

Y en un discurso pocos días más tarde llamó a Gustavo Cisneros un “fascista y golpista” (Chávez Frías 2003: 105).

La presentación de Chávez sigue la tradición del “Presidencialismo Comunicativo”, pero va mucho más allá que sus predecesores. La concentración en su persona se debe también a la falta de una política informativa coherente. Durante los primeros tres años pasaron siete directores por la Oficina de Información Presidencial (OIP). Venezolana de Televisión tuvo tres presidentes, la agencia de noticias Venpres tuvo cinco directores. Entre los que asesoran al presidente se encuentra Juan Barreto, miembro de la Dirección Nacional del MVR y Ex-Director del periódico *Correo del Presidente*, autor de libros sobre los medios. Ya en 1995 escribió: “La ‘democracia plebiscitaria del líder’ va quedando reducida a mera técnica massmediática. La guerra del terreno político pasa a ser escenario y espectáculo” (Barreto 1995: 249). No hay un equipo sólido para el manejo de la comunicación, las estrategias están signadas por el estilo del presidente de la República (Morales/Pereira 2003: 54). El mismo presidente hizo referencia a esta

situación en el juramento de Nora Uribe como titular del Ministerio de Comunicación e Información:

Hay que reconocer que una de las fallas de este gobierno revolucionario, es que nunca ha contado con una estrategia comunicacional bien diseñada, precisa y contundente... (*El Nacional*, 22.8.2002).

Desde el principio las cadenas de radio y televisión fueron usadas como uno de los principales instrumentos informativos del gobierno. 344 emisoras radiales privadas y 28 estaciones de televisión comerciales se ven obligadas por las cadenas audiovisuales a sincronizarse y transmitir el discurso del presidente. La regularidad del uso de este recurso llevó al rechazo por medio de la audiencia. Según cálculos, esto le costó “a las televisoras comerciales un promedio de 16 millones de bolívares el minuto, por el tiempo publicitario perdido que luego debían reprogramar” (Morales/Pereira 2003: 56). La alta audiencia sólo se mantuvo en los primeros dos meses, para luego disminuir progresivamente a 9% ó 10%. Según un estudio de Koenke entre el 2 de febrero de 1999 y el 24 de febrero de 2002 el presidente “encadenó” en total 377 veces a los medios audiovisuales para un total de 311 horas de transmisión sin interrupción. Si a esto se suman los 100 programas de *Aló Presidente* Chávez llega a 611 horas de transmisión en poco más de tres años. Para comparar: Rafael Caldera usó 113 horas en su primera presidencia (1969-1974) y Franklin Delano Roosevelt (1932-1945) usó sólo 499 horas en sus 12 años de gobierno en sus conocidos *fireside chats* (Koenke 2002: 6).

Número de horas de cadenas audiovisuales desde 1998

Año	horas	Programas
1998	11h 11' 14''	31
1999	76h 43' 35''	89
2000	109h 36' 35''	155
2001	118h 04' 09''	188
2002	75h 17' 19''	164

Fuente: Morela Colina/RCTV, Caracas (2003).

A pesar de esta fuerte presencia en la pantalla la política gubernamental solo logra fijar la agenda en el primer año de gobierno. La mayoría de los hitos son reactivos, es decir el gobierno tiene que reaccionar. A

esto se suma el uso excesivo de declaraciones, convirtiéndose el presidente en principal portavoz del gobierno. Al lado de él sólo José Vicente Rangel y Luis Alfonso Dávila tuvieron cierta importancia.

4. Los medios y el golpe 2002

Bastante queda por investigar sobre el papel de los medios en los días de abril de 2002. Las tendencias informativas en los principales medios fueron negativas para el gobierno. Según un estudio tanto *El Universal* como *El Nacional* hicieron énfasis en el paro registrándose un 74% de noticias adversas a la administración de Chávez. El periódico *Últimas Noticias* le dedicó más espacio a la difusión de mensajes favorables para el gobierno (37%) (Villamediana 2002: 62).

El 11 de abril muestra el grado de conflictividad no sólo en la sociedad venezolana sino también en la relación entre el gobierno y los medios de comunicación. Cuando las fuerzas de seguridad interceptaron la marcha hasta ese momento pacífica, el presidente ordenó la interrupción de todas las transmisiones y empezó con un discurso declarando que no había pasado nada especial. Los canales mostraban en el lado izquierdo de la pantalla el discurso del presidente y en el lado derecho la agudización de la situación en la calle. El presidente ordenó que se sacaran los cuatro canales de la red (Globovisión, Televen, RCTV, Venevisión), sin embargo, ellos siguieron transmitiendo en parte vía satélite. Después de haberle brindado una amplia cobertura al paro nacional, a la marcha de protesta y al golpe contra Chávez, los medios comerciales prácticamente dejaron de transmitir noticias sobre lo que estaba pasando los días siguientes. La explicación dada por los canales era la de la inseguridad, que impediría el trabajo de los periodistas. En vez de esto se transmitieron dibujos animados. Según Andrés Izarra, hasta el 13 de abril gerente de producción de RCTV, el viernes 12 de abril en una reunión editorial se dio la instrucción de “cero chavismo en pantalla”, lo que equivalía a un *blackout* informativo. A pesar de tener información sobre el paradero de Chávez y otros acontecimientos, el canal no transmitió estas noticias debido a la línea señalada por los dueños. Tampoco se informó sobre las protestas populares que se estaban articulando en varias partes de la capital y en el país a favor del presidente destituido.

Por causa de los acontecimientos del 11 de abril algunas sedes de medios de comunicación fueron atacadas por partidarios del gobierno. Contra la sede de *Así es la Noticia* se lanzaron explosivos. Las manifestaciones “populares” contra algunos canales y periódicos se interpretaron como una forma de intimidación. También aparecieron consignas como “No compres *El Nacional*”.

En 2002 las cadenas de televisión y periódicos privados se convirtieron en el hilo conductor de la huelga general. Dado el alto grado de antagonismo en la sociedad venezolana los dueños y colaboradores de los medios de comunicación llegaron a la conclusión que “la neutralidad es *chavismo* o complicidad” (Aznárez 2003). Los medios renunciaron durante la huelga parcialmente a las normas de origen tomando una posición opositora e incluso guiando el proceso opositor. De esa manera había una libertad de prensa pero faltaba el periodismo debido a la militancia de muchos periodistas.

Durante la huelga en algunos canales incluso desaparecieron los comerciales. Las cifras de los participantes en las manifestaciones se veían magnificadas por la forma de presentación en los canales comerciales. En el transcurso de la huelga todos los canales comerciales transmitían a las seis de la tarde las declaraciones de la oposición (es decir del presidente de la Confederación de Trabajadores, el presidente de la Cámara empresarial y representantes de la industria petrolera).

Grupos de la oposición podían contar con el apoyo de los medios de comunicación privados. Esto fue así con los 14 oficiales que se instalaron en Octubre de 2002 en la Plaza Francia para una protesta cívica. En pocos días y gracias a su presencia en la televisión, el grupo creció a cien personas.

5. La evolución reciente³

El artículo 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 despertó cierto temor por la inclusión de la frase “Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial...”. Desde 2000 hubo algunos incidentes entre el gobierno y los medios de comunicación, algunos serán nombrados a continuación (Venezuela 2003: 1079):

³ El presente documento fue terminado en 2004, por lo tanto no incluye referencias al caso reciente de RCTV (El editor).

- En 2000 se le niega a Elías Santana, columnista de *El Nacional*, la posibilidad de responder a los ataques de Chávez en su programa radial; una decisión de la corte en 2001 iba en la misma dirección.
- Enero 2002: se organizan manifestaciones “espontáneas” contra periódicos que critican al presidente.
- Marzo 2002: Venpres acusa a tres periodistas de haber recibido dinero de carteles de droga.
- Abril 2002: Manifestaciones en favor de los medios fueron criticadas por fuerzas cercanas al gobierno.
- 2003: Anteproyecto de Ley de Responsabilidad de Radio y Televisión o Ley de Contenido.

En octubre de 2000 el *Internacional Press Institute* incluyó a Venezuela en su *Watch List*. En un informe del 2002 sobre la “Situación del Derecho a la Libertad de Expresión e Información” en Venezuela se registraron 142 eventos, actos o casos de agresiones o inhibitorios de la acción periodística.

El rol de los canales comerciales no fue bien visto por el gobierno. El ministro de planificación Felipe Pérez declaró el 21 de diciembre de 2002, que después de que el pueblo haya tomado a PDVSA habría que pensar cómo tomar también el poder en los medios de comunicación.

A finales de junio de 2003 el Presidente Chávez denunció un presunto sabotaje durante la transmisión de los actos conmemorativos al 182. Aniversario de la Batalla de Carabobo y Día del Ejército en la cadena nacional de radio y televisión. Advirtió que la señal se fue en medio de la transmisión y que la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) detuvo en Caracas a algunos técnicos de un canal privado de televisión por el presunto sabotaje. Ante estos hechos, el presidente ordenó hacer una edición especial de todo este programa para transmitirlo el 24 de junio por la cadena nacional de radio y televisión y al día siguiente repetir el desfile de Carabobo por la misma cadena.

A principios de octubre de 2003 una representación de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) incautó el equipo de microondas de la estación de transmisión de Globovisión en la Alta Florida, sin respetar el procedimiento administrativo que prevee la normativa legal. Revisaron las frecuencias y se retiraron en la tarde mientras que grupos de la sociedad civil protestaban delante del edifi-

cio. A comienzos del año 2003 CONATEL instruyó una causa administrativa contra Globovisión, Venevisión, Radio Caracas y Televen por violar la ley que regula el sector.

6. Resumen

“Una democracia sin partidos es una democracia altamente caótica”, la validez de este comentario de Giovanni Sartori puede observarse en Venezuela (Sartori 1997: 316). Después de la implosión de los partidos políticos surgió Chávez como una alternativa populista. Algunos comunicadores asumieron a su vez el rol de actores políticos y ya no actuaron como mediadores. De aquí surge un problema: Los medios son un poder en cualquier sociedad abierta, pero siempre en conjunto con otras fuerzas políticas. No pueden pretender reemplazar los otros actores políticos.

Chávez a su vez trató de instrumentalizar los medios oficiales para su causa. Su política comunicacional no ha sido la mejor y se caracterizó por muchos cambios de personal, formato y contenido. El éxito de sus programas se reduce a ciertas capas de la población. Parece que el efecto se debe al uso de una cierta simbología y a la activación de aspectos de la cultura e historia popular. Un ejemplo es el uso de *graffiti*. Constituye un caso singular porque hay pocos ejemplos en los cuales se usa el *graffiti* a favor de políticos en el poder.

Los análisis sobre el papel de los medios en Venezuela contienen posiciones muy corrientes. Algunos autores opinan “que los medios contribuyeron en buena medida a producir la actual fractura de la sociedad venezolana” (Dragnic 2002: 77), lo que equivale a una sobrevaloración de la prensa. Según otras opiniones los medios críticos le impiden a Chávez ocultar más atropellos ante el público nacional e internacional (Tablante 2003: 115s.). La confrontación con los medios por el presidente es parte de su discurso polarizante. Los medios no son un actor político autónomo. Lo que se ha visto en el último año es una decreciente influencia de los medios y un creciente desinterés del público por informaciones emitidas por las emisoras oficiales nacionales.

La imagen más bien crítica del Presidente Chávez en la prensa internacional no parece impresionar su gobierno (Werz 2001). Los comentarios en el exterior se centraban durante bastante tiempo en la

figura del presidente y hacían referencias a sus viajes y a las personas con las cuales andaba —entre ellos Saddam Hussein y Fidel Castro—. Con la huelga y el golpe de Estado la información aumentó y se publicaron artículos sobre su perfil personal. Sin embargo, después de haber llamado bastante la atención durante la huelga, Venezuela desapareció de nuevo en la prensa internacional.

Parece que Chávez logra mantenerse en el poder a pesar de que la mayoría de los medios y muchos intelectuales estén en contra de él. Hablar de los medios en Venezuela significaría entonces hablar de su impacto en algunos momentos cruciales, pero también de sus límites. Por último, el poder político no radica en los medios, sino en otros actores.

Bibliografía

- Abreu, Sojo (2000): "Evaluación postelectoral de la propaganda electoral televisada venezolana de las campañas de 1998". En: *Revista Latina de Comunicación Social*, No. 32, pp. 3-9.
- Aguirre, Jesús María (2002): "Periodismo para la paz". En: *SIC* 646, pp. 293-295.
- Aznárez, Juan Jesús (2003): "La prensa contra Chávez". En: *El País*, 12.1.2003.
- Azuaje, Lucía (2002): "Crónicas desde lo visible, lo simbólico y lo político". En: *Comunicación* 119, pp. 4-15.
- Barreto, Juan (1995): *Los medios de los medios. Campos culturales y dispositivos massmediáticos de subjetividad en la crisis de lo político*. Caracas: Editorial Planeta.
- Benshimol R., Levy (2003): *Hugo Chávez Frías, un comunicador por excelencia. Análisis de su rol como emisor político*. Caracas (mimeo).
- Cañizález, Andrés (2003): "Venezuela, crisis y medios". En: *Dossier SIC* 653, pp. 120-125.
- Chávez Frías, Hugo (2002): *Un hombre, un pueblo. Entrevista de Marta Harnecker*. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales.
- (2003): *El golpe fascista contra Venezuela*. La Habana: Ediciones Plaza.
- Díaz Rangel, Eleazar (2002): *Chávez y los medios de comunicación social*. Caracas: Alfadil Editores.
- Dragnic, Olga (2002): "Los periodistas: ¿Víctimas o victimarios?". En: *Comunicación* 119, pp. 72-81.
- Ellner, Steve/Hellinger, Daniel (eds.) (2002): *Venezuelan Politics in the Chávez Era*. Boulder: Rienner.

- Koeneke, Herbert (2002): "Rol, estilo presidencial y tolerancia cívica en la Venezuela de Hugo Chávez Frías". En: *XI Jornadas Venezolanas de Psicología Social*, pp. 1-16.
- Linnarz, Paul (2003): "Zur Sicherheit Pistolen. Wenn Journalisten in Peru und Venezuela kritisch berichten". En: *einblicke* 2, pp. 8-11.
- López Arjona, Ana (1993): *Inventario de medios de comunicación en América Latina*. Quito: Ediciones CIESPAL Serie: Comunicación en América Latina.
- Luyken, Reiner (2002): "Der Narziss von Caracas". En: *Die Zeit*, 43/2002.
- Mayorbe, José Antonio (2002): "Venezuela and the Media: The New Paradigm". En: Fox, Elizabeth/Waisbord, Silvio (eds.): *Latin politics, global media*. Austin: University of Texas Press, pp. 176-195.
- Morales, Mirelis/Pereira, Javier (2003): "La política informativa del gobierno de Hugo Chávez. Un acercamiento a sus tres primeros años de gestión". En: *Comunicación*, 121, pp. 52-63.
- Oehrlein, Josef (2002): "In seinen Händen wiegt er ein Jesuspüppchen". En: *Frankfurter Allgemeine Zeitung*, 12.12.2002.
- Petkoff, Teodoro (2002): "Chávez y los medios". En: Francés, Antonio/Machado Allison, Carlos (eds.): *Venezuela: la crisis de abril*. Caracas: Ediciones IESA, pp. 89-98.
- Sartori, Giovanni (1997): "Hay que terminar con las ideas sobre la democracia que primaron en 1968". En: Achard, Diego/Flores, Manuel (eds.): *Gobernabilidad: Un reportaje de América Latina*. México, D.F.: PNUD/Fondo de Cultura Económica.
- Tablante, Carlos (2003): *Venezuela Herida. Pacto por la democracia del futuro*. Caracas: En Cambio.
- Tremamunno, Marinellys (ed.) (2002): *Chávez y los medios de comunicación social*. Caracas: Alfadil Ediciones.
- Venezuela (2003). En: *World Press Encyclopedia*, pp. 1069-1080.
- Villamediana, Carla (2002): "La prensa y el golpe. ¿Conspiración militar o mediática?". En: *Comunicación* 119, pp. 58-63.
- Weck, Roger de (2002): "Die wahren Populisten sind die Journalisten". En: *Frankfurter Allgemeine Zeitung*, 15.6.2002.
- Werz, Nikolaus (2001): "Chávez en la prensa europea y estadounidense". En: *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, 7/2, pp. 147-155.
- (2003): "Alte und neue Populisten in Lateinamerika". En: Werz, Nikolaus (ed.): *Populismus. Populisten in Übersee und Europa*. Opladen: Leske + Budrich, pp. 45-64.
- Winkens, Simone (2003): "Massenmedien und politische Regime in Lateinamerika am Beispiel Peru und Venezuela". Rostock: Universität Rostock, Institut für Politik- und Verwaltungswissenschaften (unveröffentlichte Magisterarbeit).
- Zago, Ángela (2002): "Chávez y los medios de comunicación venezolanos". En: Tremamunno, Marinellys (ed.): *Chávez y los medios de comunicación social*. Caracas: Alfadil Ediciones, pp. 61-80.

Demetrio Boersner

Dimensión internacional de la crisis venezolana

En el año 1999 se produjo en Venezuela un acontecimiento que, sin duda, constituye un hito en la historia contemporánea del país. Luego de cuarenta años de un régimen democrático, al final incapaz de responder a los retos sociales, ascendió al poder un régimen nuevo, electo sobre la base de promesas de cambio hacia una mayor equidad social y hacia una política exterior más auténticamente soberana y vinculada a la defensa de los intereses populares.

La tesis que defendemos en esta ponencia es la de que el régimen autocalificado de revolucionario, que dirige a la nación desde hace cinco años, ha mostrado en sus relaciones con el mundo exterior una profunda contradicción entre su discurso teórico y su ejecutoria práctica. El discurso es de contenido autonomista y solidario, en términos acordes con los intereses históricos de un país en vías de desarrollo y que marcaría la continuación de pasadas iniciativas de corte democrático y defensoras de la identidad nacional. La actuación práctica del régimen, empero, ha constituido frecuentemente una negación de los principios del discurso oficial, y está conduciendo a los venezolanos hacia un creciente aislamiento y debilitamiento dentro de la comunidad internacional.

Utilizaremos el método del historiador de las relaciones internacionales contemporáneas, y dividiremos nuestro trabajo en cuatro secciones: 1) La herencia diplomática del pasado; 2) el anuncio de una política exterior nueva; 3) tres años de ofensiva diplomática; 4) dos años de “repliegue agresivo”.

1. La herencia diplomática del pasado

Predispuesta por su localización y configuración geográfica a ser un país abierto a contactos e intercambios con el mundo exterior, Venezuela fue durante su era prehispánica una tierra de migraciones y de encuentro y mezcla de culturas (Strauss K. 1993).

Durante su época colonial, junto con la formación de una identidad criolla (afectada internamente por conflictos entre clases y castas), Venezuela vivió la continuación de contactos con el mundo exterior a través del Mar Caribe, esta vez con las potencias nuevas deseosas de romper el monopolio colonial español. Junto con el contrabando de mercancías, los venezolanos practicaron la importación clandestina de ideas revolucionarias que contribuyeron a hacer de ellos un pueblo pionero de la emancipación latinoamericana (Salcedo-Bastardo 1977: 165, 184-197).

La Revolución Independentista de 1810 a 1825 transitoriamente elevó al pueblo venezolano a una condición histórica de excepción y sembró en su subconsciente colectivo una semilla de mesianismo latinoamericanista muy identificado con el recuerdo y la veneración de la extraordinaria figura histórica del Libertador Simón Bolívar (Salcedo-Bastardo 1977: 213-321; Toro Hardy 1993: 276).

En contraste con aquella hora estelar, el largo período de la República de los caudillos (1830-1935) significó la recaída del país en la dependencia y el desprecio. La revolución emancipadora no había cambiado las estructuras de la sociedad colonial, y no había generado ninguna burguesía nacional emprendedora y dinámica. Ese factor aunado a otros, tales como las luchas civiles, el endeudamiento y la torpeza diplomática, hicieron que Venezuela pasara de la dominación colonial clásica por España a una dependencia neocolonial ante las potencias anglosajonas (Salcedo-Bastardo 1977: 323-470).

Muerto el último caudillo tradicional y efectuada la transición de una economía agraria a otra petrolera, Venezuela entró desde 1936 en la era moderna de su historia. Ello conllevó la ampliación y la paulatina profesionalización de su política exterior. Durante la Segunda Guerra Mundial, su importancia estratégica como país petrolero le permitió incrementar su soberanía en el trato con la comunidad internacional. El conflicto mundial favoreció, además, su desarrollo socioeconómico y su concientización política, y abrió el camino a iniciativas autonomistas y de protagonismo democrático en los años de posguerra (Calvani 1979: 445-457).

Luego de la década dictatorial (1948-1958) que significó un retroceso pasajero hacia una política exterior conformista, marcada por la Guerra Fría, se estableció el régimen democrático que durante cuarenta años orientó un importante proceso de modernización nacional.

Durante estas cuatro décadas se renovó la diplomacia venezolana y, aunque no se alcanzó la meta de crear una verdadera política exterior de Estado, independiente de los cambios de gobierno (Toro Hardy 1993: 253), sí se establecieron ciertos grandes objetivos internacionales, implícitamente reconocidos por todos los bandos políticos. Estos objetivos eran: a) la promoción y defensa internacional de la **democracia**, b) la búsqueda de una creciente **autonomía** del país en el escenario político y económico regional y mundial, en solidaridad con América Latina y el llamado Tercer Mundo, y c) la **seguridad** e integridad del territorio nacional.

Durante los años 1958-1968, se enfatizó particularmente el objetivo de defender y fortalecer la democracia a nivel regional y hemisférico, con el fin de crear una base de legitimación y sustentación internacional para nuestro sistema democrático interno, todavía frágil y cuestionado desde posiciones de extrema derecha y de extrema izquierda.

De 1969 a 1978, los esfuerzos por alcanzar una mayor autonomía y soberanía efectivas, en alianza y cooperación con los hermanos pueblos latinoamericanos y del Caribe y con los países en vías de desarrollo a escala mundial, tuvieron prioridad resaltante en la política exterior venezolana. Internamente, el sistema democrático estaba consolidado y por ello era posible una actuación externa más audaz.

Del año 1979 en adelante se entró en una etapa de marchas y contramarchas, con diversos cambios del orden de prioridades diplomáticas. Ello reflejaba el hecho de que Venezuela, junto con toda la región latinoamericana y caribeña, había entrado en la era de las dificultades: deuda externa, contracción económica, agravación de problemas sociales, parámetros neoconservadores predominantes en el mundo.

Cabe destacar el hecho, sin embargo, de que durante todos los cuarenta años de la democracia basada en la alternabilidad entre gobiernos socialdemócratas y demócrata-cristianos, ningún presidente ni canciller dejó de tener conciencia de la existencia de los tres grandes objetivos señalados, aunque por su parte diera preferencia a uno de ellos por encima de los demás. Es así que durante la primera etapa se dieron importantes avances en el terreno de la autonomía y soberanía económicas y sobre todo petroleras, no obstante la atención prioritaria dada al tema de la democracia. Asimismo, durante la etapa “autonomista” no se descuidó la promoción de la democracia a nivel interna-

cional. Y en todo momento, el tema de la seguridad y la integridad del territorio recibió la debida atención.

Entre los logros importantes de la democracia venezolana en sus relaciones con el mundo exterior entre los años 1958 y 1998, pueden señalarse los siguientes:

- Venezuela fue pionera en América de la lucha por el aislamiento de los regímenes autoritarios y la afirmación del carácter supranacional de los valores de la democracia y los derechos humanos.
- Venezuela fue protagonista de la estrategia reivindicativa de los países exportadores de petróleo a través de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) y las políticas de control y nacionalización de sus respectivas industrias de hidrocarburos.
- Venezuela desempeñó un papel destacado en la promoción, durante la década de los años setenta, del Diálogo Norte-Sur en búsqueda de un Nuevo Orden Económico Internacional (Calvani 1979: 457-511; Boersner 1982; 1983a: 163-187; 1983b: 397-415; 1983c: 91-105; 1984: 245-260; Toro Hardy 1993: 249-322).

2. El anuncio de una política exterior nueva

El presidente electo en diciembre de 1998 estuvo empeñado desde hacía años en lanzar una “revolución” en lugar de efectuar cambios reformistas en el régimen constitucional establecido. En conformidad con ello, negó cualquier posible continuidad entre la política de las cuatro décadas anteriores y la que en el futuro emprendería su propio equipo “revolucionario”, “patriótico” y “popular”.

En una publicación emitida por la Cancillería venezolana en los primeros meses de 1999, se afirma que la política exterior pasada no respondió a los intereses del pueblo venezolano sino que tuvo un carácter elitista y además vacilante. Ahora vendría la transición hacia una diplomacia nueva, eminentemente soberana y solidaria, extensión de la transformación de las estructuras internas del país en beneficio de los sectores populares (MRE, Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela 1999).

Con el fin de adecuar el servicio exterior venezolano a su nueva misión “revolucionaria”, el gobierno ordenó, en abril de 1999, un gigantesco movimiento de personal diplomático y consular del exterior hacia el servicio interno del despacho, junto con múltiples “remocio-

nes” definitivas (MRE Venezuela 1999). Esa operación, que teóricamente debía iniciar una rotación entre las ramas externa e interna del Servicio Exterior y que por dicha intención rotatoria fue bautizada con el nombre de “Galileo”, en la práctica resultó tener carácter de movimiento en un solo sentido: medio centenar de misiones diplomáticas quedaron acéfalas durante largo rato por el brusco traslado o remoción de sus respectivos jefes.

Sin embargo, la Constitución Bolivariana aprobada en diciembre de 1999, en sus artículos 152 y 153 de hecho ratifica, en lenguaje novedoso, las mismas bases de política exterior que se derivan de la Constitución de 1961 y de la praxis de los gobiernos democráticos de la etapa 1958-1998. La carta magna del 61 se había limitado a hacer referencia a la política exterior en su preámbulo, expresando que su propósito debe ser el de

cooperar con las demás naciones y, de modo especial, con las repúblicas hermanas del continente, en los fines de la comunidad internacional, sobre la base del recíproco respeto de las soberanías, la autodeterminación de los pueblos, la garantía universal de los derechos individuales y sociales de la persona humana, y el repudio de la guerra, de la conquista y del predominio económico como instrumento de política internacional (*Constitución de la República de Venezuela*, 1961: 4).

Posteriormente, los gobiernos democráticos en su ejercicio diplomático efectivo definieron en forma tácita los grandes objetivos de democracia, autonomía y seguridad arriba descritos y comentados. El nuevo texto “bolivariano” en el fondo se limita a reiterar esas tradiciones y realidades ya establecidas, al determinar que:

Art. 152.- Las relaciones internacionales de la República responden a los fines del Estado en función del ejercicio de la soberanía y de los intereses del pueblo; ellas se rigen por los principios de independencia, igualdad entre los Estados, libre determinación y no intervención en sus asuntos internos, solución pacífica de los conflictos internacionales, cooperación, respeto a los derechos humanos y solidaridad entre los pueblos en su lucha por su emancipación y el bienestar de la humanidad... Art. 153.- La República promoverá y favorecerá la integración latinoamericana y caribeña... (y) privilegiará relaciones con Iberoamérica... (*Constitución de la República Bolivariana de Venezuela*, 1999: 130).

3. 1999-2001: Tres años de ofensiva protagonista

Desde el comienzo de su ejercicio en febrero de 1999, los pronunciamientos del presidente Chávez y de su gobierno, así como sus princi-

pales iniciativas prácticas, tuvieron el objetivo fundamental de asignar a Venezuela un papel de protagonista de cambios radicales en la estructura del sistema internacional. Muchos de estos pronunciamientos e iniciativas suscitaron ciertos apoyos, pero también serias preocupaciones y resistencias en el mundo exterior, tanto en el plano regional como en el global.

3.1 Relaciones con Colombia y el área andina

Desde los comienzos del año 1999, el nuevo gobierno de Venezuela adoptó una posición en principio favorable a la renovación del ideal grancolombiano, y por ello inclinada a observar con gran interés la problemática interna de las hermanas repúblicas de Colombia y de Ecuador. Al mismo tiempo, su ideología revolucionaria lo impulsó a mirar con simpatía a las fuerzas de izquierda en el seno de dichos países. Esa simpatía hacia fuerzas que en el caso colombiano se encuentran en rebelión armada contra el gobierno legítimo, necesariamente tuvo que provocar roces entre Caracas y Bogotá.

Con motivo de una reunión entre representantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Alto Comisionado por la Paz de Colombia, celebrada en territorio venezolano con el consentimiento del presidente Pastrana en el mes de febrero, el gobernante venezolano tuvo la ocurrencia de proclamar su “neutralidad” entre los dos bandos. Enojado, el mandatario colombiano suspendió la cumbre binacional que debía celebrarse en Ureña. En el mes de abril el presidente Chávez se ofreció como mediador entre el gobierno y las guerrillas colombianas, dando a entender que consideraba a esas dos entidades como dignas de igual consideración y reconocimiento (*El País*, 19.04.1999). En Colombia causó profundo desagrado la aparente simpatía del régimen venezolano hacia los rebeldes de extrema izquierda y hacia sus principales comandantes, en particular “Tirofijo” (Manuel Marulanda), jefe máximo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Aunque la proyectada cumbre de Ureña terminó por efectuarse a comienzos de mayo y los presidentes Chávez y Pastrana emitieron una declaración aparentemente amistosa (*El Nacional*, 05.05.1999), muy pronto se produjeron nuevos malentendidos. El 26 de mayo en la Cumbre Andina de Cartagena, Chávez manifestó a Pastrana su anhelo de reunirse con Tirofijo, para que no hubiese “reu-

nión unilateral con ninguno de los actores” (*EN*, 27.05.1999). Aún más ofensiva para la sensibilidad del gobierno colombiano fue una nueva declaración de “neutralidad” (luego enmendada con el término más aceptable de “imparcialidad”) emitida por Hugo Chávez Frías el día 30 de mayo (*EN*, 31.05.1999).

(Es interesante destacar que este espíritu de imparcialidad no es compartido por influyentes elementos de la alta oficialidad militar venezolana. El 7 de septiembre de 1999, al asumir el mando de la Cuarta División Blindada del Ejército junto con el de la 42ª Brigada de Paracaidistas, el general Raúl Isaías Baduel (posteriormente considerado como el principal soporte castrense del presidente Chávez), declaró que “haré la guerra a las guerrillas colombianas bajo tres consignas: ‘negar, desarmar y defender’”, *EU*, 08.09.1999).

A esas disputas políticas colombo-venezolanas se agregaron otras de carácter económico. No obstante sus reiteradas afirmaciones integracionistas y propiciadoras de una resucitación de la Gran Colombia bolivariana, el gobierno de Caracas cedió con facilidad ante presiones internas proteccionistas, y a mediados de mayo impuso el obligatorio trasbordo en la frontera de las mercancías transportadas hacia Venezuela por camiones colombianos (*EN*, 14.05.1999). Posteriormente surgirían disputas comerciales entre Venezuela y otros Estados miembros de la Comunidad Andina –Ecuador y Perú–, por disposiciones proteccionistas dictadas en Caracas en violación de obligaciones asumidas en el pasado, pero denunciadas por Hugo Chávez como “neoliberales” (*EN*, 24.10.2001).

A partir de agosto de 1999, el gobierno estadounidense comenzó a activar el Plan Colombia, amplio programa de cooperación militar, política y social entre Norteamérica y la nación sudamericana, con el apoyo parcial de la Unión Europea, para combatir al narcotráfico y eliminar paulatinamente los desajustes estructurales que lo engendran o lo alientan. En lugar de tratar de contrarrestar la tendencia hacia el bilateralismo colombo-estadounidense y hacia un desmedido énfasis en el aspecto militar, mediante una estrategia diplomática hábil, orientada hacia la multilateralización del Plan Colombia (para transformarlo en un “Plan Andino”, como lo sugirió en noviembre de 2000 la embajadora norteamericana en Caracas, Donna Hrinak), el presidente venezolano arremetió hostilmente contra el proyecto. Burlonamente, advirtió a Estados Unidos y al gobierno de Bogotá que, por el apoyo

militar norteamericano, Colombia se podría convertir en un “Vietnamcito” (*El Universal*, 15.08.1999) Pocos días después irritó a su colega neogranadino al proponer unilateralmente, sin consulta previa, una “Conferencia de Paz” para Colombia, a la vez que reiteró su deseo de conversar con el bando rebelde del vecino país (*EU*, 21. y 22.08.1999).

Tedioso sería narrar en todos sus detalles los incidentes diplomáticos y sobre todo la “guerra de micrófonos” que se llevó a cabo entre los gobiernos de Caracas y de Bogotá, así como el creciente enfrentamiento crítico u hostil de los medios de comunicación social colombianos al presidente Chávez y a su política exterior. Sintomático es el hecho de que no sólo los grandes diarios moderados, tales como *El Tiempo* y *El Espectador*, sino también una revista como *Cambio*, vinculada al nombre de Gabriel García Márquez, tradicional amigo de la izquierda venezolana, se convirtió en uno de sus críticos más severos. Un tema central en esas expresiones críticas fue siempre el de la aparente colusión entre el aparato de seguridad e información “chavista” y las fuerzas subversivas de izquierda en Colombia (*EN*, 03.12.2000).

En la medida en que también Estados Unidos, principal aliada del gobierno de Bogotá contra la guerrilla y el narcotráfico a través del Plan Colombia, acogió estas preocupaciones con respecto al papel del gobierno venezolano, más marcada se hizo la determinación de la Casa Blanca y del Pentágono a contribuir a que el balance de fuerza militar entre las dos repúblicas vecinas se inclinase netamente a favor de la parte colombiana.

(Como la mayoría de los países latinoamericanos, Colombia y Venezuela, no obstante sus consensos, tienen viejas controversias territoriales y de otra índole. En 1987, un serio incidente provocó movilizaciones de parte y otra, quedando demostrado el alto nivel del potencial militar y la preparación defensiva de Venezuela. Hoy, en cambio, por la torpe diplomacia venezolana y los efectos del Plan Colombia, la correlación de fuerzas disuasivas parece haber cambiado drásticamente).

En sus relaciones con Ecuador y con Colombia, el actual gobierno venezolano también adoptó actitudes controvertidas. Ante el conato de golpe de estado ocurrido en Ecuador en enero de 2000, Venezuela “lamentó” pero no “condenó” los hechos. Por su parte, los militares

alzados, Lucio Gutiérrez, Mendoza y otros, se declararon admiradores del comandante Hugo Chávez Frías (*EU, EP*, 25.01.2000). Según el señor Peter Romero, secretario adjunto para asuntos hemisféricos del Departamento de Estado norteamericano, el gobernante venezolano ayudaba activamente a la guerrilla colombiana y también a “movimientos indígenas violentos” en Ecuador y en Bolivia (*EU*, 07.12.2000). Esta denuncia guardaba relación con el hecho de que el aparato de seguridad interamericano había detectado operaciones de financiamiento secreto a fuerzas subversivas a través de un hombre de confianza del presidente Chávez (*La Razón*, 15.01.2001; *EU*, 31.01.2001).

Las relaciones venezolanas con Perú fueron afectadas por la clara simpatía política y personal que el presidente Chávez mostró hacia su colega Fujimori, y por el asilo secreto que Venezuela brindó durante cierto tiempo al señor Vladimiro Montesinos, hombre de confianza del mencionado mandatario peruano. El presidente Alejandro Toledo, electo después de la renuncia y el destierro de Fujimori, ha tenido reacciones de desconfianza hacia su colega venezolano, quien además es repudiado tajantemente por los partidos políticos tradicionales de Perú.

En términos generales, la propuesta teórica de recrear las bases del esquema internacional de la época de Simón Bolívar –unión fraterna entre la Gran Colombia (formada de Nueva Granada, Venezuela y Quito), Perú y Bolivia– no fue promovida por la praxis diplomática venezolana de los años 1999-2001, que más bien introdujo elementos de división y de conflicto en el seno de la Comunidad Andina, sucesora auténtica del viejo proyecto bolivariano.

3.2 Relaciones con el Caribe y América Central

Durante la época 1958-1998, Venezuela llegó a desempeñar un papel significativo en el área caribeño-centroamericana. Desde 1969 en adelante tuvo un acercamiento significativo a los nuevos Estados independientes del Caribe de habla inglesa y a su organización subregional, Caricom, con programas de asistencia técnica por parte de Venezuela. Desde 1961 en adelante privilegió sus relaciones con la República Dominicana. Después de la etapa de conflicto político con el régimen cubano en los años sesenta, estableció una convivencia

correcta y por momentos hasta cordial con el gobierno de ese país. En América Central, Venezuela, junto con los demás Estados integrantes del Grupo de Contadora (Colombia, México y Panamá) desempeñó un papel destacado en la solución pacífica de conflictos políticos de la subregión. En 1980, por el Acuerdo de San José, México y Venezuela establecieron un generoso programa de suministro de petróleo bajo condiciones ventajosas a los países de Centroamérica y el Caribe. A comienzos de la década de los noventa, el Grupo de los Tres (Colombia, México y Venezuela) tomó parte activa en la creación de la Asociación de los Estados del Caribe (AEC), y un ciudadano venezolano desempeñó la secretaría general de ese organismo de concertación subregional.

Para 1999 existía, pues, un historial de presencia activa de Venezuela en Centroamérica y el Caribe, pero el nuevo gobierno, en conformidad con su orientación general ya descrita, deseó dar a esa presencia un mayor relieve.

Un tema de importancia fundamental para el presidente Chávez fue el de una alianza estratégica con Cuba y con el régimen del presidente Fidel Castro Ruz. Desde la época en que Hugo Chávez Frías era candidato presidencial, el mandatario cubano le había brindado su amistad y su respaldo ideológico. Ya en la presidencia de Venezuela, Chávez agradeció con creces esa actitud solidaria. Aunque en diversas ocasiones afirmó que el movimiento bolivariano no es marxista (*EN*, 23.09.1999), en otros momentos expresó su admiración por el modelo socialista autoritario de Cuba en lenguaje casi lírico: “La revolución en Venezuela va hacia el mismo mar donde va el pueblo cubano, mar de felicidad, de verdadera justicia social, de paz... ¡Aquí estamos, más vivos que nunca, Fidel y Hugo!” (*EN*, 28.11.1999). Obviamente, amplios sectores venezolanos se espantaron ante la perspectiva de tal “mar de felicidad”.

Desde julio de 1999, el entonces canciller de Venezuela, José Vicente Rangel, anunciaba que se suministraría petróleo venezolano bajo condiciones preferenciales a Cuba, “con visión estratégica” (*EU*, 14.07.1999). Pocos días antes, el presidente Chávez había prometido públicamente, en la Cumbre de Caricom celebrada en Trinidad y Tobago, que muy pronto la facilidad petrolera ofrecida al Caribe y Centroamérica por el Acuerdo de San José del 3 de agosto de 1980 entre México y Venezuela sería ampliada para incluir a Cuba que no figura-

ba en la lista de los países beneficiarios. El presidente mexicano, Ernesto Zedillo, reaccionó con cierta irritación ante tal anuncio unilateral e inconsulto, y rechazó la sugerencia de extensión de los términos del acuerdo a Cuba. Desde entonces, Venezuela y México han seguido renovando y cumpliendo de año en año el Acuerdo de San José, pero al mismo tiempo el gobierno venezolano preparó y puso en ejecución un programa paralelo de cooperación petrolera venezolana unilateral con los países caribeños y centroamericanos, y otro programa de suministro de petróleo a la República de Cuba por acuerdo bilateral de cooperación entre Caracas y La Habana. El primero de estos programas nuevos fue formalizado por el Acuerdo Energético multilateral de Caracas, del 18 de octubre de 2000, y el segundo forma parte del Acuerdo Bilateral de Cooperación suscrito por los presidentes Fidel Castro y Hugo Chávez en Venezuela, el día 30 de octubre de 2001. Forma parte de dicho acuerdo, el compromiso venezolano de suministrar petróleo a Cuba, bajo condiciones ventajosas, por valor de unos 600 millones de dólares anuales (*EU*, 31.10.2000).

Posteriormente, el presidente Castro envió a Venezuela, en señal de retribución por los envíos de petróleo, diversos servicios de utilidad social: atención a venezolanos enfermos en centros hospitalarios cubanos; médicos y paramédicos cubanos a Venezuela para tratar a pacientes en barrios populares presuntamente desatendidos por la medicina “oligárquica” venezolana. Asimismo se hizo presente en Venezuela en visitas personales en las que elogió a su anfitrión y denunció a los adversarios del mismo. Desde su propia isla, no escatimó oportunidades para asesorar a su amigo venezolano y para prestarle apoyo propagandístico. No cabe duda de que esas muestras de solicitud responden en gran medida a la asistencia petrolera realmente valiosa que Cuba recibe por parte de Venezuela.

Seguramente, el gobernante venezolano también espera de los demás países caribeños y centroamericanos beneficiarios de un trato petrolero favorable, que respondan a esa cooperación con muestras de apoyo político o diplomático. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que los Estados del Caribe no están dispuestos a sacrificar sus intereses bien ponderados para complacer a un amigo propugnador de tesis cuestionables. En la tercera Cumbre de la Asociación de Estados del Caribe celebrada en la isla venezolana de Margarita en diciembre de 2001, el presidente Chávez arremetió frontalmente contra el pro-

yecto del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y aparentemente esperaba un rechazo de ese proyecto por la cumbre macrocaribeña. Sin embargo, ésta se limitó prudente y realistamente a afirmar que la versión del ALCA defendida por Estados Unidos sufría de imperfecciones y debía ser mejorada y condicionada (EU, 13.12. 2001).

3.3 Relaciones Latino- e Interamericanas

En medio de errores e improvisaciones que han caracterizado la política exterior venezolana en los últimos tiempos, sin duda merecen ser señalados como logros positivos algunas acciones y medidas que representan la continuación de orientaciones convenientes para el interés nacional, ya iniciadas antes del cambio de régimen ocurrido en 1999. Una de esas políticas positivas es la de acercamiento y de creciente cooperación con Brasil.

Durante largo tiempo Brasil y Venezuela, a pesar de su vecindad directa y su larga frontera común, habían convivido pasivamente, prácticamente sin prestarse mutua atención. El tradicional atraso y aislamiento de la región amazónica común a ambos países los había inducido a un amistoso desinterés recíproco. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo veinte Brasil inició grandes programas de desarrollo y de poblamiento sistemático de todas las zonas de su vasto interior y de sus periferias territoriales y reflexionó en términos geopolíticos sobre sus relaciones con los países vecinos (Couto e Silva 1978). Aún pasaron varias décadas antes de que Venezuela reaccionara positivamente ante ese movimiento: no fue sino en 1994, que finalmente los presidentes Rafael Caldera e Itamar Franco suscribieran los acuerdos de La Guzmanía, que echaron las bases para una prometedora política de cooperación y de integración bilateral entre las dos naciones.

El presidente Chávez y su colega brasileño Fernando Henrique Cardoso continuaron esa política y le imprimieron mayor dinamismo. En materia energética, industrial y comercial se establecieron vínculos de intercambio y de cooperación fecundos y provechosos para ambos socios. Por otra parte, tanto Cardoso como su sucesor Luiz Inácio “Lula” da Silva son voceros de un nacionalismo pan-sudamericano

que coincide con el pensamiento del gobernante venezolano, aunque este último tiende a expresarlo en forma más radical y controvertida.

Atraído por la geopolítica de identidad sudamericana de los brasileños y repelido por lo que él considera como el “neoliberalismo” de la Comunidad Andina (CAN), el presidente Chávez ha expresado en diversas ocasiones su anhelo de efectuar una rápida adhesión de Venezuela a Mercosur. No parece haber comprendido que tal adhesión no representa una mera decisión política sino que presupone negociaciones económicas largas y espinosas, y que además, de intentarse unilateralmente, constituiría una grave violación de los compromisos de negociación conjunta entre la CAN y el Mercosur (EU, 02.03.2000; 24.06.2001).

Ha sido un tema constante del discurso de Hugo Chávez Frías la idea de que la integración latinoamericana, y sobre todo suramericana, debe ser ante todo **política y militar**, dejando el aspecto económico y social para una segunda etapa (EU, 26.05.1999; 29.06.1999; 02.11.1999; 08.11.1999; 24.06.2001). Esta idea está relacionada con la estrategia de desafío verbal radical que el actual presidente de Venezuela ha llevado adelante en el plano de sus relaciones globales con las potencias y estructuras internacionales.

3.4 Relaciones internacionales globales

Durante los años 1999-2001, el gobierno “revolucionario” venezolano se enfrentó mediante discursos y gestos al sistema internacional establecido, manifestando su inconformidad ideológica con los paradigmas de la globalización, del neoliberalismo y de la democracia representativa, rechazando el predominio unipolar de la primera potencia y procurando la creación de una nueva correlación de fuerzas en el mundo. Dentro de esa estrategia radical, desempeñó un importante papel el factor petrolero.

3.4.1 Ideología

La ideología del movimiento “bolivariano” dirigido por Hugo Chávez Frías constituye en sus orígenes una mezcla de elementos de extrema izquierda y de extrema derecha. La influencia de extrema izquierda proviene históricamente de la voluntad, manifestada desde 1957 en adelante en el seno del Partido Comunista de Venezuela

(PCV), de penetrar en las Fuerzas Armadas del país y tratar de enrostrarlas en el bando de la revolución. En la década de los años sesenta, la extrema izquierda logró captar la adhesión de ciertos elementos de la oficialidad militar, que se unieron a ella en acciones subversivas contra el régimen democrático representativo. En 1966, el dirigente de extrema izquierda Douglas Bravo, luego de ser expulsado del PCV y de haber fundado el disidente Partido de la Revolución Venezolana (PRV), retomó la idea de infiltrar y adoctrinar a las Fuerzas Armadas Nacionales. A partir del año 1977 se fueron creando núcleos de extrema izquierda en el seno de la oficialidad activa. Para alcanzar éxitos en la captación de los militares —profundamente nacionalistas y generalmente religiosos, reacios a la ideología marxista-leninista clásica— Douglas Bravo y sus seguidores “nacionalizaron” el pensamiento revolucionario, diluyendo las distinciones teóricas entre clases sociales y enfatizando los aspectos específicamente venezolanos y latinoamericanos de la lucha liberadora. Se puso énfasis en el “continentalismo nacionalista” y en las tradiciones emancipadoras históricas con sus próceres y héroes (Bolívar a la cabeza, junto con el líder agrarista Ezequiel Zamora y el pensador y educador rousseauiano Simón Rodríguez). Al concepto de la liberación social y la superación de las relaciones estrictamente capitalistas se les agregaron elementos tales como el indigenismo, el ecologismo, el nacionalismo cultural y “la creación de una religión popular sincrética que incorporaba el culto a Bolívar”, a la vez que en materia internacional se evitaba la alianza con el bloque soviético y se pregonaba la “tercera posición”. Hugo Chávez Frías se incorporó a esta tendencia militar denominada “bolivariana” (en una etapa anterior, Bravo y el PRV la llamaban “marxista-leninista-bolivariana”), y durante la década de los ochenta llegó a ocupar una posición de líder entre sus compañeros de armas (Garrido 2003: 5-20).

Por otra parte, desde la década de los años ochenta, cuando se originó el movimiento de jóvenes oficiales militares rebeldes contra el sistema de “conciliación de élites” que regía la vida política venezolana, fue importante la influencia que ejercieron sobre ellos las ideas de corte fascista o semifascista provenientes de las logias militares de Argentina y otros países del Cono Sur; ideas afines a las que sustentarían en el Río de la Plata los “carapintadas” insurgentes contra el proceso de democratización posterior a la Guerra de las Malvinas. Varios

de los militares golpistas venezolanos del año 1992 –sobre todo los de la insurgencia de noviembre– habían tenido contactos con ese militarismo sureño de extrema derecha y algunos, que posteriormente ocuparían altísimas posiciones en el gobierno “bolivariano”, incluso se habían vuelto adeptos del neonazismo y ávidos lectores de *Mein Kampf*. El propio Chávez sólo parece haber entrado al mundo del fascismo rioplatense a partir de 1992 cuando, después del fracaso de su aventura golpista se encontraba en la prisión de Yare. Los “carapintadas” argentinos le escribieron y le manifestaron su simpatía. Posteriormente, cuando Chávez salió en libertad en 1994, lo invitaron a Buenos Aires. Allí quedó parcialmente convencido por sus ideas de ultraderecha, y sobre todo cayó bajo la influencia del sociólogo e ideólogo argentino Norberto Ceresole, recientemente fallecido. Ceresole, quien fue trotskista, peronista de izquierda y asesor de Juan Velasco Alvarado antes de convertirse en neonazi, sostuvo la tesis de que el factor militar es crucial en cualquier proceso de cambio nacionalista y social en América Latina y en el mundo, y que en nuestros países la democracia debe ser sustituida por el poder vertical e incuestionable de la tríada caudillo-Ejército-Pueblo. Este último delegaría su soberanía de manera radical y definitiva en el caudillo, quien dirigiría la transformación nacional con el apoyo decisivo de las Fuerzas Armadas. Al mismo tiempo Ceresole predicaba una geopolítica radical, encaminada a socavar la hegemonía norteamericana a través de un nuevo sistema de alianzas estratégicas internacionales. Admiraba el ejemplo de la Alemania nacionalsocialista y lamentaba que ésta haya perdido la Segunda Guerra Mundial. Sentía cálida simpatía y brindaba apoyo activo a las corrientes más radicales del nacionalismo islámico. Junto con ello, lo caracterizaba un vehemente antisemitismo: negaba hechos históricos como el Holocausto (“Holocuento” según él), acusaba a la comunidad hebrea argentina de grotescas manipulaciones antinacionales y antimilitares, y afirmaba que los judíos dominan al mundo en alianza con Estados Unidos (Garrido 2003: 20-25; *EN*, 02.08.1999; *LR*, 13.02.2000; *EU*, 20., 23. y 26.03.2000; 03. y 29.04.2000; 11.02.2001; *EN*, 11.11.2001).

Debe reconocerse que gradualmente, en el seno del movimiento oficialista venezolano, las tendencias ideológicas de izquierda fueron desplazando y venciendo a las de extrema derecha. Desde fines del año 2000, Ceresole se quejó repetidas veces de que Chávez parecía

ceder ante tentaciones “socialdemócratas” y “judaizantes” (*LR*, 13.02.2000; *EU*, 24.03.2000; 26.03.2000; 03.04.2000).

En el plano internacional, el régimen venezolano actual realizó una campaña muy exitosa de captación de simpatías en círculos políticos, intelectuales y periodísticos de tendencia izquierdista radical o pronunciadamente antinorteamericana. En agosto de 2000 fue publicado el libro del escritor británico, especialista en rebeliones guerrilleras y políticas latinoamericanas (Gott 2000). En la misma época, Ignacio Ramonet, Maurice Lemoine y Bernard Cassen, de *Le Monde Diplomatique* de París se convirtieron en partidarios decididos del presidente venezolano y del “proceso” político que encabeza. En Suiza, hizo lo mismo el socialista de izquierda Jean Ziegler. En Estados Unidos, Noam Chomsky, James Petras y otros representantes del pensamiento radical igualmente manifestaron su respaldo. Por lo general, también aquellos partidos de izquierda que todavía se denominan “comunistas” o que se apegan a las tradiciones revolucionarias del tiempo de la Guerra Fría, simpatizan con el actual régimen venezolano y han puesto sus eficientes aparatos de propaganda a la disposición del mismo, y han colaborado en la creación de “Círculos Bolivarianos” en el exterior, y en la organización de foros y congresos internacionales sobre el tema de la “revolución” venezolana.

3.4.2 Geopolítica

Inspirado por los elementos ideológicos radicales arriba expuestos, el gobierno venezolano adoptó, en sus discursos y sus gestos diplomáticos, una línea desafiante ante la estructura internacional que rigen los paradigmas del llamado “Consenso de Washington”. Mostró su voluntad de independencia ante los dictados de la primera potencia al decidir, en 1999, que votaría a favor de Cuba, China e Irán en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en vez de simplemente abstenerse, como lo había hecho en años anteriores. Así pasó a ser el único país de América, excepto Cuba misma, en adoptar esa posición (*EN*, 23.04.1999).

En el planteamiento de la “multipolaridad”, enfrentada a la “unipolaridad” norteamericana, el presidente Chávez fue locuaz en múltiples ocasiones. En su viaje a China en octubre de 1999, además de afirmar que era “muy maoísta”, se pronunció a favor de un mundo

multipolar, enfrentado a la unipolaridad. Habló acerca de una afinidad “estratégica con China en ese sentido (*EU* 13.10.1999). Poco después, reunido con el presidente Chirac en París, se pronunció en el mismo sentido de una “relación estratégica” en pro de la multipolaridad (*EFE*, 28.10.1999). Unos meses después, después de que Venezuela sufriera la catastrófica inundación de su litoral central que costó miles de muertos y desaparecidos y enormes pérdidas materiales, el presidente Chávez agradeció la ayuda prestada por diversos países, con mención especial de Francia, cuya política exterior elogió grandemente. El mismo día, insistió en la conveniencia de una unión militar latinoamericana que garantizase la independencia de la región frente a posibles injerencias externas. Por otra parte, pocos días después, rechazó una operación (ya lanzada) de ayuda de emergencia con unidades de ingeniería militar norteamericana. El desembarco de soldados estadounidenses, aun en misión samaritana, le parecía inapropiado. Norteamérica reaccionó con “sorpresa”: inicialmente, la asistencia humanitaria del Pentágono había sido solicitada por el ministro de la defensa venezolano, general Raúl Salazar! (*EN, EU y Primicia*, 07. a 15.01.2000).

Por otra parte, en ese mismo lapso, el gobierno venezolano se negaba tenazmente a permitir que aviones anti-drogas de los Estados Unidos sobrevolaran su territorio. Irritado por la combinación de “multipolaridad”, rechazo a la ayuda del Pentágono y negativa a permitir el acceso al espacio aéreo, el señor Peter Romero, secretario de Estado adjunto para asuntos hemisféricos, se permitió advertir: “¡Los gringos no somos conocidos por nuestra paciencia!” Sin embargo, otros representantes oficiales de Estados Unidos tomaron una posición de defensa y de justificación a las actitudes del gobernante venezolano. El embajador norteamericano en Caracas, John Maisto, afirmó insistentemente que a Chávez había que tomarlo con “sentido de humor”, y que convenía “fijarse, no en lo que dice, sino en lo que hace”. Opinó que el gobierno venezolano actual era preferible a la democracia “vacía y formalista” que le había precedido (*EN*, 13.05.2000).

En sus múltiples giras por Latinoamérica, Europa, Asia y África, el presidente Chávez insistió incansablemente, entre 1999 y 2001, en sus ataques contra la “unipolaridad” y además contra el “neoliberalismo salvaje” y la “globalización neoliberal”. Habló de sus “alianzas

estratégicas” con los pueblos en vías de desarrollo, los países petroleros del Medio Oriente. Asia y África, con Francia, Rusia y China. En reuniones con gobernantes latinoamericanos regularmente volvía sobre el tema de una integración regional ante todo política y militar que contribuyese a una redistribución del poder en el mundo. Típica en ese sentido fue su propuesta de creación de una “OTAN del Caribe y del Atlántico Sur” (discurso ante el Parlamento Andino reunido en Caracas, *EU*, 02.11.1999).

Otro plano en el que Hugo Chávez Frías desafió continuamente al sistema interamericano e internacional establecido, ha sido su insistencia en que la democracia representativa debe ser sustituida por una nueva “forma superior”: la “democracia participativa”. En sucesivas reuniones latino- e interamericanas, la diplomacia del actual régimen venezolano ha venido defendiendo esa tesis en términos radicales. Rechazando la tesis –aceptable para demócratas moderados– de que la democracia representativa debería ser ampliada y profundizada paulatinamente para abrir un mayor espacio a la participación ciudadana efectiva, los voceros venezolanos contraponían tajantemente los dos “tipos” de democracia y los presentaban como incompatibles. Particularmente dramático fueron los enfrentamientos a ese respecto en la Tercera Cumbre de las Américas (Québec, abril de 2001), donde Venezuela presentó una reserva formal a la resolución sobre democracia representativa (ANSA, 22.04.2001), y en la Asamblea General de la OEA (Organización de Estados Americanos) celebrada en Lima en septiembre de 2001, con motivo del debate sobre la Carta Democrática Interamericana, que el canciller venezolano aceptó a regañadientes (Reuter, 10.09.2001).

3.4.3 *Petróleo*

Desde el momento de su elección a la presidencia, Hugo Chávez Frías y sus asesores en materia petrolera tuvieron la idea de fortalecer la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y convertirla en un instrumento para la transformación del orden mundial, no sólo en el plano económico (visión clásica de los fundadores de la organización), sino también en el político (visión geoestratégica nueva).

El ascenso de Hugo Chávez a la presidencia coincidió con un comienzo de aumento de los precios petroleros, en buena parte debido a que la OPEP, ya en la segunda mitad de 1998, había decidido reducir sus cuotas de producción. Ya instalado en el poder, el nuevo gobierno venezolano desarrolló una diplomacia petrolera tendiente a alentar el mantenimiento de la política de defensa de los precios, reiniciada por la organización de países exportadores. Sin duda, el nuevo ministro de energía venezolano, Alí Rodríguez Araque, desempeñó un papel destacado en ese sentido, y fue elegido secretario general de la OPEP en el año 2000.

Por otra parte, el gobierno de Venezuela se empeñó en invitar a todos los soberanos y jefes de Estado de la OPEP a una Cumbre de la organización, para la primera mitad del año 2000. El gobernante venezolano y sus asesores miraban esa Cumbre como oportunidad para tratar de fortalecer la cooperación entre los países miembros de la OPEP en todos los planos, incluido el político, para dar a la organización un carácter de bloque estratégico dentro de un nuevo orden multipolar.

El primer gobernante de la OPEP en aceptar la invitación venezolana fue el presidente Abdel Aziz Bouteflika, de Argelia, el 26 de junio de 1999. El 10 de julio, una misión venezolana inició una gira por todos los países miembros de la organización, para hacer entrega formal de las invitaciones y tratar de persuadir a los respectivos gobiernos. La tarea no fue fácil. Aunque ningún gobernante oficialmente rechazó la idea de la Cumbre, algunos de ellos la miraban con honda desconfianza y secreta antipatía. Tal fue el caso de Arabia Saudita, conservadora y opuesta a todo evento que pudiese dar lugar a discursos radicales y perturbadores del orden establecido. Los sagaces gobernantes de Riad sabían que los éxitos cosechados en el pasado por la OPEP se debían mayormente a su carácter de organización pragmática, guiada exclusivamente por criterios económicos, y capaz de reunir en una misma mesa aun a representantes de países en guerra. La fogosidad y el radicalismo del régimen venezolano los preocupaba (Conversación del autor, Viena, 31.08.1999).

La catástrofe natural que afectó la zona costera de Venezuela el 15 de diciembre de 1999 (el mismo día en que la población por gran mayoría aprobó la nueva Constitución “bolivariana”) obligó al gobierno de Caracas a solicitar el aplazamiento de la Cumbre de la OPEP

para la segunda mitad del 2000. En agosto de ese año, el propio presidente Chávez realizó un viaje para tratar de persuadir a algunos mandatarios recalcitrantes a que asistiesen personalmente a la Cumbre. Después de haber visitado al presidente Jatami en Irán, entró por vía terrestre a Irak, donde fue recibido con grandes gestos de cordialidad por el presidente Sadam Hussein. Desde hacía años, era el primer gobernante occidental que se acercaba al execrado y sancionado dictador iraquí, y lo hizo con toda la intención de mostrarse desafiante ante Estados Unidos y el orden mundial existente. Hussein le manifestó su aprecio y su apoyo, pero se excusó de acudir a Caracas, por obvias razones de seguridad (DPA, EFE, 10.08.2000).

La Cumbre de la OPEP finalmente se celebró en Caracas del 27 al 28 de septiembre de 2000, con la mayoría de los países miembros representados, no por el Jefe de Estado sino por un representante del mismo. Los temores de politización sentidos por las monarquías conservadoras del Golfo, e incluso por gobernantes aparentemente más radicales, hicieron que la reunión tuviese un carácter mucho más apacible del que algunos observadores habían pronosticado. La Declaración de Caracas suscrita el 28.09.2000 tuvo como puntos fundamentales: la promoción del diálogo entre países productores y consumidores; el desarrollo de una política de precios estables; el apoyo a la celebración en Riad, en el venidero mes de noviembre, del VII Foro Internacional de Energía; la preocupación por el hecho de que el impuesto sobre los productos elaborados sea el componente decisivo del precio final; la decisión de institucionalizar las Cumbres de la OPEP y celebrarlas a intervalos regulares; la preocupación por la protección del medio ambiente, y la preocupación por la pobreza en los países en desarrollo (*Agencias de prensa*, 28.09.2000). Pero al margen de resultados aparentemente tan banales, el gobierno venezolano había logrado su propósito esencial, de aparecer ante el mundo como “líder” de un bloque de países emergentes petroleros y expresar tajantemente su rechazo doctrinario a la hegemonía unipolar.

3.4.4 Movimiento obrero

Durante estos tres años de ofensiva “revolucionaria”, el gobierno del presidente Chávez se esforzó por arrebatar la dirección del movimiento obrero venezolano a la corriente socialdemócrata predominante en

el seno de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), y con ese fin aplicó medidas encaminadas a someter al control del Estado las elecciones internas de los sindicatos. Dichas medidas provocaron denuncias internacionales, declaraciones de solidaridad del sindicalismo democrático internacional con la CTV, acuerdos condenatorios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y derrotas contundentes del “chavismo” en las principales elecciones sindicales internas de Venezuela. La derrota más grave sufrida por el régimen fue el fracaso del referendo sobre el status jurídico de los sindicatos, que se celebró el 3 de diciembre de 2000: el 90% de los votantes rechazó la posición oficialista. Igualmente han fracasado los intentos de desarrollar un fuerte movimiento obrero oficialista paralelo, que desplace a la vieja confederación del puesto de central sindical más representativa: hoy como ayer, la OIT reconoce a la CTV como la representante legítima y democrática de los trabajadores venezolanos (*EU*, 18.01.2000; *EN* y *EU*, 01.02.2000; 03. y 04.03.2000; *Agencias de prensa*, 11.03.2000; *EU*, 26.04.2000; *EN* y *EU*, 10 a 16.10.2000; *Zeta*, 16.11.2000, pp. 10-11; *EU*, 02. y 04.12.2000; 11.02.2001; 16.03.2001; *EN* y *EU*, 06. y 08.05.2001; *EN*, 14.06.2001; *EG*, 06.10.2001; *EN* y *EU*, 26.10.2001; *EU*, 31.10.2001; *EN* y *EU*, 05.11.2001).

Se puede afirmar, pues, que en el terreno de la lucha por el control del movimiento obrero, la ofensiva “revolucionaria” venezolana se saldó en repetidas y graves derrotas nacionales e internacionales.

3.4.5 Terrorismo

El área de enfrentamiento más peligrosa que escogió la “revolución bolivariana”, fue el de determinadas complacencias, o actitudes ambivalentes, ante el terrorismo y todo lo que fuese definido como tal por las hegemonías establecidas.

En su segundo mes en el poder, el presidente Hugo Chávez concertó a la opinión pública venezolana y foránea al dirigir una carta personal, pero divulgada públicamente, al notorio terrorista de nacionalidad venezolana “Carlos” (Ilich Ramírez Sánchez), actualmente preso en Francia, convicto de asesinatos, y confeso o acusado de otros crímenes que son de conocimiento mundial (Follain 1998). El gobernante se dirige al terrorista como “Distinguido compatriota” y le expresa su solidaridad y apoyo “con profunda fe en la causa y la mi-

sión... ¡por ahora y para siempre!” (*EN*, 21.04.1999). Un grupo de seguidores del presidente Chávez se ha vuelto desde entonces apasionado defensor del terrorista, en ciertos casos por amistad personal con la familia Ramírez Sánchez, y en otros por confusión ideológica y moral, olvidando la severa distinción que Marx y otros clásicos del socialismo siempre hacían entre revolución y terrorismo. El gobierno venezolano efectuó gestiones diplomáticas ante el de Francia, encaminadas a lograr que “Carlos” sea trasladado para pagar su pena en su país de origen. Como era de esperarse, el gobierno francés ha rechazado tal pretensión, e incluso ha indicado que consideraría perjudicial para las buenas relaciones entre los dos países que se insistiese en este tema (*EN*, 14.05.1999; *Tal Cual*, 09.11.2000; *EU*, 21.11.2000; *EN*, 10.10.2001).

El más profundo choque entre la sensibilidad norteamericana (e internacional) y la del régimen venezolano se produjo a raíz del ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono en Washington. Casi todos los jefes de Estado del mundo, incluido Fidel Castro, lanzaron un grito espontáneo e inmediato de horror y de solidaridad con el pueblo norteamericano. En el caso de Venezuela, empero, la reacción fue más matizada y ambigua. Aunque el ministro secretario de la presidencia, Diosdado Cabello, emitió una inmediata declaración correcta de “profunda solidaridad”, el propio Chávez no habló sino el día siguiente y matizó la solidaridad: aunque consideraba que el ataque había sido “diabólico y abominable”, proponía orar por la paz y por las almas de los muertos, incluidos los terroristas suicidas (*EU*, 13.09.2001). Pese a que el vicepresidente José Vicente Rangel afirmaba que Venezuela “está alineada con Estados Unidos”, el jefe de Estado se preocupó sobre todo por el peligro de una “escalada” de retaliaciones y clamó por la paz (*EU*, 15.09.2001). El día siguiente, un grupo extremista del partido de gobierno dio vivas a los terroristas y quemó una bandera estadounidense. El 22 de septiembre, la oposición pidió al gobierno que definiera claramente su posición ante el terrorismo y los hechos del día 11. Ante los pedidos de apoyo del gobierno norteamericano en una acción anti-terrorista, el gobierno de Caracas respondió, el 2 de octubre, que enviaría una misión humanitaria a Afganistán para ayudar a refugiados locales. El mismo día, el intelectual disidente norteamericano Noam

Chomsky elogió al régimen venezolano: era “el primer gobierno nacionalista en mucho tiempo” (*EN*, 03.10.2001).

El gobernante venezolano no cesó en sus expresiones de oposición a una acción armada norteamericana contra Afganistán u otras posibles bases del terrorismo islamista. “La guerra no es el camino”, dijo en Ginebra ante la 5ª Conferencia de la ONU sobre Desertificación y Sequía. En el mismo momento, en Caracas, el vicepresidente Rangel pedía “ponderación” (*EU*, 09.10.2001). Hugo Chávez Frías se encontraba en una gira por Europa y a Argelia; desde allí súbitamente decidió desviar su itinerario hacia Libia, Arabia Saudita e Irán. Presuntamente su intención era la de coordinar una actitud común de los países de la OPEP ante la crisis mundial resultante del ataque terrorista del 11 de septiembre.

Al mismo tiempo, el gobierno venezolano causó sorpresa y desagrado internacional al negarse oficialmente a considerar a “Carlos” como terrorista. En ese sentido, el inexperto viceministro de relaciones exteriores (militar súbitamente trasladado a la diplomacia) expresó que “Venezuela no puede considerar terrorista a quien no haya cometido actos delictivos de ese tipo en su territorio” (¡sic!) (*EN* y *EU*, 10.10.2001).

El propio “Carlos” se encargó de clarificar su condición pocos días después, rindiendo un flaco servicio al gobierno venezolano y a su propia causa, al declarar: “La guerra santa de Bin Laden también es la mía...Soy totalmente solidario de nuestra Revolución Bolivariana” (*EN*, 21.10.2001).

Como lo señaló Peter Hakim, director del Diálogo Interamericano en Washington, la modificación del itinerario presidencial, la visita a Kadhafi en Libia y el pronunciamiento sobre “Carlos” fortalecieron en Estados Unidos “la percepción de Venezuela como país no confiable” (*EN*, 16.10.2001). Esa “percepción” se hizo aún más marcada dos semanas después, ya iniciadas las operaciones bélicas en Afganistán, cuando el presidente Chávez, en un diálogo con la nación, censuró de frente a los Estados Unidos por dichas operaciones y mostró acusadoramente la foto de una niña afgana herida en un bombardeo. El Departamento de Estado inmediatamente exigió explicaciones al embajador de Venezuela, y llamó a Washington para consultas a la embajadora norteamericana en Caracas. Esa iniciativa provocó una inmediata reacción apologetica venezolana. “I want to be your friend”, dijo el pre-

sidente Chávez a los norteamericanos el día 3 de noviembre (*EN* y *EU*, 31.10.2001 a 04.11.2001).

4. 2002-2003: Dos años de “repliegue agresivo”

La ofensiva diplomática arriba descrita fue seriamente afectada e interrumpida por el fenómeno de la pérdida de popularidad del presidente Chávez y de su gobierno a partir del año 2001. En grado creciente, la población venezolana se fue dividiendo entre dos bandos cada vez más irreconciliables: una minoría que mantiene su fe en el “proceso bolivariano”, y una mayoría que lo adversa.

En los años 1999 y 2000, la aceptación pública del presidente Chávez y de su gobierno había sido grande. El 25 de abril de 1999 se celebró un referendo sobre la idea de convocar una Asamblea Constituyente y la respuesta fue abrumadoramente afirmativa (aunque más de la mitad de los electores no acudieron a las urnas). El 25 de julio del mismo año se realizó la elección de la Constituyente, y el “Polo Patriótico” (partidarios del presidente Chávez) ganó el 94% de los escaños. En noviembre estuvo listo el proyecto de Constitución Bolivariana, y el 15 de diciembre (mismo día de las catastróficas inundaciones del litoral central) quedó aprobada triunfalmente esa nueva carta magna. El 30 de julio de 2000, luego de que la Asamblea Constituyente y un “Congresillo” transitorio ejercieran el poder legislativo y designaran a las autoridades judiciales, electorales y “ciudadanas”, se efectuaron las elecciones generales (“megaelección”), en las cuales Hugo Chávez Frías fue electo Presidente de la República por seis años a partir de esa fecha (los dos años de transición de la vieja Constitución a la nueva se le agregaron para darle, de hecho, un mandato de ocho años, con posibilidad de reelección por seis años más). Chávez recibió el 60% de los votos, contra un 40% a su competidor Francisco Arias Cárdenas. La coalición oficialista ganó el 60% de los escaños en la Asamblea Nacional, y una mayoría de gobernadores regionales y alcaldes.

Desde comienzos del año 2001, sin embargo, decayó la aceptación del gobernante y de su régimen. Gran parte de la población percibió un clima de militarización, de concentración indebida del poder, de discursos radicales y divisionistas (“pueblo contra oligarquía”), y de notable deterioro económico y ocupacional debido a la creciente des-

confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros (las inversiones norteamericanas en Venezuela, que habían sumado US\$ 1.551 millones en 1998, bajaron a US\$ 294 millones en 2000 y seguían disminuyendo, según información de *EU* del 13.08.2000). El presidente solicitó, y obtuvo, una Ley Habilitante que le permitía imponer ejecutivamente una serie de disposiciones legales que, al modo de ver de los empresarios, afectaba la propiedad privada y la libre iniciativa. Al mismo tiempo se desató la virulenta contienda entre el régimen y la confederación sindical, ya narrada en una sección anterior. A ritmo creciente, la oposición, integrada tanto por las clases media y alta, como por la clase trabajadora organizada y un creciente número de trabajadores informales y gente pobre (inicialmente pro-régimen) lanzó paros, huelgas y marchas de protesta contra la política oficial. Según la mayoría de los sondeos de opinión, para fines de 2001 la popularidad del gobernante había bajado del 80% inicial a menos del 40%, frente a un 60% cada vez más vehemente y activo en sus manifestaciones opositoras.

En el año 2002, la nueva situación venezolana –un gobierno de vocación “revolucionaria” y sin aptitud para el diálogo, a la defensiva contra una oposición democrática que persistía en calificar de “oligarca” o de “fascista”– comenzó a reflejarse en una política exterior que ya no estaría marcada por un optimismo protagonista y triunfal, sino por una suerte de “agresividad defensiva”, basada en el mito de que la “revolución bolivariana” se encuentra asediada por una conspiración nacional y mundial de extrema derecha, y necesita de la solidaridad combativa de fuerzas solidarias internacionales para salvar su existencia.

Se desarrolló una creciente hostilidad entre el régimen venezolano y la jerarquía de la Iglesia Católica, reflejada en un incidente conflictivo entre el presidente Chávez y el nuncio apostólico, Monseñor André Dupuy, en el saludo ceremonial del cuerpo diplomático al jefe de Estado, el 24 de enero de 2002. Aparte de la jerarquía eclesiástica, ya la Internacional de los partidos demócrata cristianos o populares había adoptado una actitud opuesta al gobernante “bolivariano” (*EG*, 27.09.1999; *EU*, 11.06.2001). Junto con la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), la Internacional Socialista también se tornó en contra del ensayo “chavista”, denunciándolo por

su carácter autoritario y su negación de las libertades sindicales (*EU*, 21.07.2002, pp. 1-6).

En enero, febrero y marzo del 2002 se incrementó enormemente la tensión interna en Venezuela. El 4 de abril se declaró un paro petrolero nacional que seis días después se convirtió en huelga general indefinida, patrocinada tanto por la CTV como por la central empresarial, Fedecámaras. El día 11, una multitud opositora estimada en un millón de personas marchó sobre el palacio presidencial de Miraflores y se desencadenaron los violentos sucesos que condujeron a la renuncia del presidente Chávez, a la instalación de un equipo gobernante ilegítimo y al retorno de Chávez a la presidencia el día 13.

Las reacciones internacionales oficiales todas saludaban el mantenimiento de la constitucionalidad en Venezuela. Sin embargo, se supo que algunas reacciones extraoficiales habían sido de alivio y satisfacción ante la renuncia de un gobernante turbulento y controvertido. Algunos importantes órganos de prensa internacionales coincidieron en señalar que, si bien Chávez había recuperado la presidencia, su poder se encontraba disminuido y, sobre todo, dependía más que antes del apoyo y beneplácito de la Fuerza Armada Nacional (*The Economist*, 21.04.2002, pp. 34-35; *Der Spiegel*, 22.04.2002, pp. 154-156). Los amigos ideológicos del “proceso” venezolano denunciaron el “golpe” del 11 de abril como producto de una presunta conspiración de extrema derecha, en la que jugarían un papel decisivo los grandes “medios” (Ignacio Ramonet, “Crime parfait”, MD, junio, p. 1; Maurice Lemoine, “Dans les laboratoires du mensonge au Venezuela”, MD, agosto, pp. 16-17). Richard Gott, por su parte, afirmaría que en Venezuela existía una “guerra racial” y una oposición “estilo Pinochet” (*The Guardian*, citado en *Zeta*, 13.12.2002, pp. 62-65).

En el plano diplomático, la OEA mostró su preocupación por la crisis política venezolana, y algunos gobiernos opinaron que la organización regional debía tomar cartas activas en el problema. Se habló de aplicar a Venezuela la recientemente aprobada Carta Democrática interamericana, que permite acciones multilaterales para resolver crisis en los países de la región (*EU*, 19.04.2002). Para contrarrestar esa corriente “intervencionista”, el presidente Chávez designó como ministro de relaciones exteriores al experimentado diplomático profesional Roy Chaderton Matos, quien asumió sus funciones el 1º de junio de 2002. Dos días después, en la 32ª Asamblea General de la OEA, en

Barbados, Chaderton logró impedir que se aplicara la Carta Democrática al caso venezolano (*EN*, 04.06.2002). En otras ocasiones posteriores, el nuevo jefe de la diplomacia venezolana defendió con gran elocuencia las versiones del gobierno venezolano y denunció “conspiraciones” internas e internacionales (*EU*, 20-08-02).

A pesar de estos esfuerzos por impedir iniciativas externas, en el mes de julio llegó a Caracas una misión de buenos oficios integrada por representantes de la OEA, del Centro Carter y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para sostener conversaciones con el gobierno y la oposición (*EU*, 26.07.2002). El secretario general César Gaviria logró la aceptación, por ambas partes, de tres temas para ser debatidos en una mesa de negociaciones, a saber: el fortalecimiento del sistema electoral, la investigación de la matanza ocurrida el 11 de abril, y el desarme de la población civil (*EU*, 05.09.2002).

Pero la situación venezolana interna se agravó inconteniblemente. Continuaron las gigantescas marchas de protesta. Se agudizó la disputa entre el gobierno y los gerentes y trabajadores de la empresa petrolera estatal PDVSA (Petróleos de Venezuela, SA), cuya autonomía de gestión se pretendía eliminar. En octubre ocurrió un paro cívico y un grupo de oficiales activos se declaró en desobediencia ante el régimen. Este contraatacó con diversas medidas de represión y de militarización de las fuerzas de orden. Después de vanos esfuerzos de conciliación, el 2 de diciembre la oposición liderada por la CTV y Fedecámaras inició un gigantesco “paro cívico nacional” que paralizó la industria petrolera y la economía nacional en su conjunto durante dos meses y medio, prolongándose hasta el 18 de febrero de 2003.

La interrupción del flujo petrolero venezolano hacia los países industrializados, precisamente en un momento de creciente tensión mundial (Estados Unidos-Irak), sacudió a la comunidad internacional y la impulsó a redoblar sus esfuerzos para aplicar remedios a la crisis de una nación de tanta importancia estratégica. El ex presidente norteamericano Jimmy Carter, después de recibir el “Premio Nobel de la Paz” en diciembre de 2002, lanzó un llamado al presidente Chávez para que dejara que el pueblo venezolano decida su destino en una consulta democrática (*EN*, 10.12.2002). Por su parte, el nuevo presidente del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien asumió el mando el 1 de enero de 2003, propuso la constitución de un Grupo de Amigos

de Venezuela, integrado por Brasil, Chile, México, España, Portugal y Estados Unidos. Ambas iniciativas prosperaron. Carter llegó a Venezuela en enero y propuso dos fórmulas democráticas para la solución de la crisis: un referendo revocatorio acorde con las disposiciones de la Constitución Bolivariana, o una enmienda constitucional que permita recortar el mandato presidencial. El Grupo de Amigos (inicialmente protestado y finalmente aceptado por el presidente Chávez), por su parte se hizo presente en Venezuela y contribuyó a encaminar al país hacia un entendimiento en la vía indicada por Jimmy Carter. El 24 de marzo de 2003 se firmó un acuerdo gobierno-oposición para tomar la vía del referendo revocatorio.

Pese a la continuada agresividad del discurso oficialista venezolano, y de la campaña que realizan internacionalmente los amigos del “proceso bolivariano” para denunciar a la oposición como presuntamente “golpista” y “fascista”, ha continuado el avance hacia una solución pacífica y democrática. Luego de un primer “firmazo” cuestionado en el mes de febrero, finalmente entre el 25 y el 28 de noviembre de 2003 se pudo realizar el proceso legal de recolección de firmas para pedir la celebración de un referendo revocatorio. En ese proceso, la discreta presión de la comunidad interamericana, y sobre todo los incansables esfuerzos del secretario general Gárriga, tuvieron importancia decisiva.

Por otra parte el gobierno venezolano, no obstante la continuada violencia de su discurso “revolucionario”, ha retrocedido enormemente en el terreno práctico y ha multiplicado sus complacencias hacia Estados Unidos y el mundo industrializado occidental sobre todo en el terreno económico. En parte, las concesiones al capital extranjero han aumentado por efecto de la creciente fuga de capitales y cerebros del sector privado venezolano: una burguesía nacional intimidada por las agresiones verbales “revolucionarias” ha sido reemplazada parcialmente por inversionistas y técnicos foráneos. En octubre de 2002, antes de despedirse, el entonces embajador de Francia en Caracas, Laurent Aublin, declaró que entre 1999 y 2002 las inversiones francesas en Venezuela se habían sextuplicado (*EN*, 23.10.2002). En la misma época, fuentes suizas y alemanas revelaron al autor que las inversiones y/o volumen de negocios de sus respectivos países se habían triplicado desde 1999. Fue sólo en 2003, por efecto de la huelga general, que los negocios europeos sufrieron pérdidas y algunos

optaron por irse del país. De manera general, el presidente Chávez dio a los intereses económicos extranjeros un trato deferente, mientras atacaba al empresariado venezolano.

En el plano petrolero, el trato dado por el “chavismo” a los intereses extranjeros, incluidos los norteamericanos tan cercanos al presidente George W. Bush, ha sido igualmente complaciente. El desmantelamiento de la vieja plana ejecutiva de PDVSA abrió un vacío en materia de conocimientos tecnológicos y organizativos, necesariamente llenado por expertos y empresas del exterior. El gobierno venezolano ha sido, también, sumamente flexible en la asignación de contratos a compañías petroleras internacionales, sin licitaciones engorrosas.

Desde la crisis de abril de 2002, el silencioso acercamiento venezolano-norteamericano en materia petrolera y estratégica se ha intensificado por motivos políticos. La actitud ambigua de Chávez ante el terrorismo a raíz del 11.09.2001, y sus provocadoras giras internacionales a países marcadamente anti-norteamericanos había causado en Estados Unidos un alto grado de desconfianza y de hostilidad hacia el presidente venezolano. Según el periodista británico Greg Palast, Chávez fue advertido de fuente muy confiable a comienzos de 2002, de que Estados Unidos apoyaría un golpe de fuerza para derrocarlo, si Venezuela ofrecía el menor respaldo a un plan de Irak y Libia para un embargo petrolero contra la potencia nortea. Ante este peligro, el presidente venezolano prometió solemnemente al gobierno estadounidense: a) abstenerse de cualquier participación en maniobras hostiles, y b) garantizar a Estados Unidos el suministro estable y confiable de petróleo venezolano en cualquier contingencia (*The Guardian*, 01.05.2002).

Durante el paro cívico nacional de diciembre 2002 a febrero 2003, el gobierno venezolano no pudo cumplir ese compromiso de “suministro confiable”. Tal vez sea por ello que en mayo de 2003 haya surgido una iniciativa según la cual PDVSA vendería a Estados Unidos, en condiciones ventajosas, petróleo destinado a la Reserva Estratégica de esa potencia. La operación se realizaría a través de una compañía privada llamada Free Market Petroleum, aparentemente apoyada por el influyente “lobbyista” y ex legislador norteamericano Jack Kemp (*EU*, 03.05.2003; *The Wall Street Journal*, 03.06.2003).

Sea ello como fuere, no cabe duda de que la política exterior venezolana ha llegado a combinar un discurso teórico agresivamente revo-

lucionario, con una conducta que complace y reasegura a los grandes intereses económicos y estratégicos del mundo desarrollado.

Bibliografía

- Area, Leandro/Márquez, Pompeyo (1994): *Venezuela y Colombia; política e integración*. Caracas: Panapo.
- Betancourt, Rómulo (1967a): *Venezuela, Política y Petróleo* (segunda edición). Caracas: Ed. Senderos.
- (1967b): *Hacia América Latina Democrática e Integrada* (Prólogo de Mariano Picón-Salas). Caracas: Ed. Senderos.
- Boersner, Demetrio (1982): *Venezuela y el Caribe; Presencia Cambiante*. Caracas: Monte Ávila.
- (1983a): “Centroamérica y el Caribe como Zona de Presencia Venezolana”. En: *La Agenda de la Política Exterior de Venezuela*. Caracas: Instituto de Estudios Políticos, UCV, pp. 163-187.
- (1983b): “Venezuela”. En: Drekonja K., Gerhard/Tokatlian, Juan G. (eds.): *Teoría y Práctica de la Política Exterior Latinoamericana*. Bogotá: Fescol/CEREC, pp. 397-415.
- (1983c): “Cuba and Venezuela: Liberal and Conservative Possibilities”. En: Levine, Barry B. (ed.): *The New Cuban Presence in the Caribbean*. Boulder, Colorado: Westview Press, pp. 91-105.
- (1984): “Venezuelan Policies Toward Central America”. En: Grabendorff, Wolf/Krumwiede, Heinrich-W./Todt, Joerg (eds.): *Political Change in Central America; Internal and External Dimensions*. Boulder/London: Westview Press, pp. 245-260.
- (1996): *Relaciones Internacionales de América Latina; breve historia* (quinta edición, revisada y actualizada). Caracas: Nueva Sociedad.
- Bond, Robert D. (ed.) (1977): *Contemporary Venezuela and its Role in International Affairs*. New York: Council of Foreign Relations, New York University Press.
- Caballero, Manuel (2000): *La Gestación de Hugo Chávez; cuarenta años de luces y sombras en la democracia venezolana*. Madrid: Libros de la Catarata.
- Caldera, Rafael (1973): *La Solidaridad Pluralista de América Latina*. Caracas: Oficina Central de Información (OCI).
- Calvani, Arístides (1979): “Política Internacional en el Último Medio Siglo”. En: Velásquez, Ramón J., et al.: *Venezuela Moderna. Medio siglo de historia 1926-1976*. Caracas: Fundación Eugenio Mendoza/Ed. Ariel, pp. 435-531.
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999*. Caracas: Asamblea Nacional Constituyente.
- Constitución de la República de Venezuela y Disposiciones Transitorias, promulgada por el Congreso Nacional el 23 de enero de 1961*. Caracas: Distribuidora Escolar, S.A.

- Couto e Silva, Golbery do aviones anti-drogas de los Estados Unidos 1978): *Geopolítica del Brasil*. México, D.F.: El Cid Ed.
- Follain, John (1998): *Jackal; the Secret Wars of Carlos the Jackal*. London: Orion Books.
- Frankel, Benjamin A. (1977): *Venezuela y los Estados Unidos 1810-1888*. Caracas: Fundación John Boulton.
- Garrido, Alberto (2000): *La Historia Secreta de la Revolución Bolivariana*. Caracas: Ediciones del Autor.
- (2003): *Guerrilla y Revolución Bolivariana. Documentos*. Caracas: Ediciones del Autor.
- Ghanem, Shukri M. (1986): *OPEC, the Rise and Fall of an Exclusive Club*. London/New York/Sydney: KPI.
- Gott, Richard (2000): *In the Shadow of the Liberator: Chávez and the Transformation of Venezuela*. London/New York: Verso.
- Instituto de Estudios Internacionales (ed.) (1986): *Venezuela en las Naciones Unidas 1945-1985*. Caracas: MRE.
- Lemoine, Maurice (2002): “Dans les laboratoires du mensonge au Venezuela”. En: *Le Monde Diplomatique*. Aout, pp. 16-17.
- Lista de Cancilleres de la República de Venezuela 1830-1992* (1993). Caracas: MRE.
- OPEP, Veinte Años de Soberanía* (1981). Caracas: Ministerio de Energía y Minas (MEM).
- Petkoff, Teodoro (2000): *La Venezuela de Chávez, Una Segunda Opinión*. Caracas: Grijalbo.
- Picón, Delia (1995): *Acuerdos Bilaterales de Venezuela*. Caracas: Editorial Arte.
- Pifano, Álvarez (ed.) (1973): *Manual de los Tratados Bilaterales de Venezuela 1811-1972*. Caracas: Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE).
- Portillo, Julio (1983): *Venezuela-Brasil, Relaciones Diplomáticas 1842-1982*. Caracas: Editorial Arte.
- Ramonet, Ignacio (2002): “Crime parfait”. En: *Monde diplomatique*, Juin, p. 1.
- Rojas, Armando (1965): *Los Creadores de la Diplomacia Venezolana*. Caracas: Editorial Arte.
- (1979): *Historia de las Relaciones Diplomáticas entre Venezuela y los Estados Unidos: I: 1810-1899*. Caracas: Ediciones de la Presidencia de la República.
- Salcedo-Bastardo, José Luis (1977): *Historia Fundamental de Venezuela*. Caracas: Fundación Gran Mariscal de Ayacucho.
- Serbín, Andrés (1983): *Geopolítica de las Relaciones de Venezuela con el Caribe*. Caracas: Asovac.
- (ed.) (1987): *Venezuela y las Relaciones Internacionales en la Cuenca del Caribe*. Caracas: ILDIS/Aveca.
- Strauss K., Rafael A. (1993): *El Tiempo Prehispánico de Venezuela*. Caracas: Grijalbo S.A.
- Toro Hardy, Alfredo (1984): *¿Para Qué Una Política Exterior?* Caracas: Ediciones Ateneo.

- (1993): “La política exterior durante los últimos quince años”. En: Cunill Grau, Pedro, et al.: *Venezuela Contemporánea 1974-1989*. Caracas: Grijalbo S.A., pp. 249-322.

Periódicos, revistas y agencias noticiosas citadas

Agencias noticiosas

ANSA

DPA

EFE

Reuter

Revistas

Der Spiegel, Hamburg

Le Monde diplomatique, Paris

The Economist, London

Zeta, Caracas

Diarios

El Globo (EG), Caracas

El Nacional (EN), Caracas

El País (EP), Madrid

El Universal (EU), Caracas

La Razón (LR), Caracas

Primicia, Caracas

The Guardian, London

The Wall Street Journal, New York

Sobre los autores

Andreas Boeckh es profesor de Ciencias Políticas con un enfoque en Latinoamérica en la Universidad de Tübingen, Alemania.

Demetrio Boersner ha sido profesor de Historia de las Relaciones Internacionales de la Universidad Central de Venezuela, asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores y embajador de su país en Rumania, Suecia y Austria.

Marianne Braig es profesora de Ciencias Políticas en el Instituto Latinoamericano de la Universidad Libre de Berlín, Alemania.

María del Pilar Camprubí estudió Ingeniería de Materiales y tiene una especialización en Gerencia de Empresa y una maestría en Ciencias Políticas. Actualmente vive en España.

Ricardo Combellas es abogado y doctor en Ciencias Políticas; profesor titular de la Universidad Central de Venezuela; ex presidente de la Copre; ex director ejecutivo de la Comisión Presidencial Constituyente.

Javier Corrales es profesor adjunto de Ciencias Políticas en el Amherst College, Massachusetts, Estados Unidos.

Russell Crandall es profesor asistente en el Departamento de Ciencias Políticas del Davidson College, Estados Unidos.

Pedro Díaz Blum es abogado y diputado de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.

Steve Ellner es profesor de Historia Económica en la Universidad de Oriente, Venezuela.

Patricia Graf es asistente científica en el Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de Tübingen, Alemania.

Akilah Jenga es asistente en el Departamento de Ciencias Políticas del Davidson College, Estados Unidos

Miriam Kornblith es profesora e investigadora del Instituto de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela.

Margarita López Maya es historiadora, profesora de la Universidad Central de Venezuela y directora de la *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*.

Günther Maihold es doctor en Ciencias Políticas y director adjunto del Instituto Alemán para la Política Internacional y Seguridad (SWP).

Thais Maingon es profesora-investigadora del Centro de Estudios del Desarrollo, Universidad Central de Venezuela, Venezuela.

John Peeler es profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Bucknell, Lewisburg, PA, Estados Unidos.

Nikolaus Werz es profesor de Ciencias Políticas Comparadas de la Universidad de Rostock, Alemania.

Friedrich Welsch es profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela.

Simone Winkens estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Rostock, Alemania.